

LA CONSTRUCCIÓN **DARÍO AZELLINI** **DE LOS LADOS:** poder constituido y poder constituyente en Venezuela Vol. 1

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Editorial

elperroylarana

BIBLIOTECA
ROJA



LA CONSTRUCCIÓN **DARÍO AZZELLINI**
DE SOLADOS: poder constituido y poder
constituyente en Venezuela
Vol. 1

BIBLIOTECA
ROJA

© Darío Azzellini
© Fundación Editorial El **perro** y la **rana**, 2012
Centro Simón Bolívar.
Torre Norte, piso 21, El Silencio.
Caracas - Venezuela, 1010
Teléfonos: (0212) 7688300 - 7688399

Correos electrónicos
comunicaciones@fepr.gob.ve
editorialelperroylarana@fepr.gob.ve

Páginas web
www.elperroylarana.gob.ve
www.mincultura.gob.ve/mppc/

Diseño de colección: Aarón Mundo / Mary Rada

Diseño de portada: Carina Falcone

Edición: Orión Hernández

Corrección: Francisco Romero / Zorayda Coello

Diagramación: Hernán Rivera / Armando Rodríguez

Hecho el depósito de ley
ISBN: 978-980-14-1927-3
Depósito legal: If 40220143203999

IMPRESO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



Biblioteca Roja

La *Biblioteca Roja* presenta una apuesta por la formación política entendida en dos sentidos. Por una parte potenciar la praxis política del poder popular poniendo a su disposición herramientas para el análisis y la observación que permitan no solo el conocimiento y la crítica de las formas actuales de la dominación capitalista, sino además la elaboración de una perspectiva desde la cual situarse para transformar el actual estado de cosas. En la medida en que una herramienta tal es un arma, la *Biblioteca Roja* quiere ser un arsenal compuesto por las experiencias, ideas, luchas y proyectos de la historia de los oprimidos. Por otra parte se espera que este esfuerzo contribuya a la conformación y articulación del poder popular, bien se trate de sindicatos, movimientos sociales, cooperativas y organizaciones socioproductivas, colectivos culturales, grupos de artistas o intelectuales. Se espera que la serie de textos aquí reunidos sirva a su articulación como una potencia política mediante ejercicio del pensamiento, la palabra y la participación. Ambas metas parten de la premisa de que en la actualidad hacer la revolución implica la creación y el fortalecimiento de un poder popular que decida y gobierne, sí, pero que fundamentalmente llegue a ser la concreción, siempre inacabada, de nuevas relaciones de producción de lo común.

En la medida en que la *Biblioteca Roja* se enmarca en la tradición de lucha de los oprimidos, su color no representa una

ideología o movimiento político en particular. Se dirá incluso que el negro, que representa el anarquismo; el verde, que representa el ecologismo; el violeta del feminismo, las banderas multicolores de la diversidad sexual y la *whipala* del movimiento indígena, y también aquellas bajo las cuales se dieron y aún continúan dándose las luchas por las independencias nacionales, son a su vez rojas, siempre y cuando expresen —no a pesar de sus desencuentros, sino contando con ellos— el deseo de superación de las condiciones actuales de existencia, esto es, del capitalismo, y a su vez el anhelo de una comunidad de iguales que puede ser preliminarmente descrita con la máxima: “A cada cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad”.

Quiero agradecer de manera especial a todas las personas que a lo largo de esta investigación me apoyaron en diferentes aspectos. Principalmente agradezco a todas las personas, organizaciones e instituciones en Venezuela con las cuales trabajé. Este estudio no hubiera sido posible sin el extenso intercambio y las extensas discusiones, experiencias, comentarios y críticas. Espero que a través del presente trabajo de investigación pueda regresar tanto como recibí.

DARÍO AZZELLINI

PRÓLOGO

Estamos frente a cambios de gran dinamismo y complejidad, discontinuos en el territorio y en el tiempo, que abren opciones inéditas para el desarrollo, la democracia y la participación a la vez que generan una fuerte conflictividad política y social.

LACABANA/CARIOLA, 2005 b: 21

Se trata de concebir la política como apuesta y renunciar a la política como saber previo, externo, objetivado. Una política que nos exige la construcción ininterrumpida de síntesis provisionales y de nuevas relaciones sociales que anticipen la sociedad socialista venidera. La elaboración de una estrategia donde no se renuncie a la posibilidad de resignificar el Estado, para lograr que este al menos, no contribuya tanto con el “ecosistema hostil” que es el capitalismo y desarrolle políticas que apuntalen a los movimientos sociales, pero donde a su vez estos no sean subsumidos en la maquinaria estatal. Una política que sintetice las dinámicas de soberanía y autonomía pero que mantenga la tensión-contradicción con el Estado porque su fin último debe ser la sociedad sin clases.

NICANOFF 2007: 11

A la llegada a la presidencia del exteniente coronel de las Fuerzas Armadas, Hugo Chávez Frías, a comienzos de 1999, se puso en marcha un proceso de transformación social profundo en Venezuela, que ha obligado a las fuerzas de izquierda a

repensar conceptos tradicionales y no tan tradicionales. Este proceso es muy diferente de otros procesos históricos de transformación social, incluso pareciera contradecir todas las teorías y planteamientos de la izquierda. No fue liderado ni influenciado por una organización obrera, un partido o una alianza partidista; no hubo siquiera un periódico (medio de comunicación) importante de izquierda; tampoco siguió ni sigue una ideología firme, se nutre más bien de un amplio espectro de grupos y organizaciones de diferente trayectoria y referencia histórica; con diferencias políticas sociales y estructurales y diferentes trasfondos históricos. En su totalidad son identificados como *Movimiento Bolivariano*¹. El “bolivarianismo” representa más un conjunto de valores y prácticas concretas que una ideología elaborada.

La particularidad del proceso bolivariano radica en que la transformación social y la resignificación del Estado se dan como construcción de “dos lados” (Zibechi, 2006): por un lado el Estado, las instituciones y las organizaciones de izquierda tradicionales, y, por el otro lado, los movimientos y la sociedad organizada. Es una construcción “desde arriba” y “desde abajo”. En esa participan tanto las organizaciones y movimientos antisistémicos, así como miembros de organizaciones de carácter tradicional y estadocéntrico (por ejemplo, sindicatos y partidos). Es inusual que movimientos antisistémicos, que existían desde hace varios años, tomaran un camino fuertemente institucional y permanecieran en él, no obstante la oposición no respete el marco institucional. También es

¹ En referencia a Simón Bolívar.

contradictoria la centralidad de Chávez que, como militar, está en contraste con las experiencias recientes en América Latina y, en general, en relación con los sectores sociales con mayores tendencias progresistas.

Desde 2006, el proceso de transformación venezolano se ubica explícitamente en la línea de tradición socialista consejista. Con el comienzo del nuevo período presidencial de Chávez se ampliaron y se reforzaron las posibilidades de participación y la estructura de consejos, creándose nuevos. Las “estructuras consejistas”, en diferentes sectores de la sociedad, son entendidas como el fundamento del anhelado socialismo venezolano: deben cooperar y coordinarse a nivel superior, para que, de esa manera, puedan llegar a sustituir al Estado burgués por un “Estado comunal”. En el centro de este proceso, y como la iniciativa más avanzada, se encuentran los Consejos Comunales (CC). Junto a esto se han puesto en marcha una serie de diferentes medidas para encaminar cambios estructurales en la economía y para impulsar la democratización de las relaciones de propiedad, de trabajo y de producción (Azzellini/Ressler, 2006; Azzellini, 2007 a). Algunas de estas medidas están dirigidas a reducir, con tendencia a superar, la división entre lo económico, lo político y lo social. La visión de la sociedad (lo social) y la política como dos esferas diferentes, separadas la una de la otra, es un fundamento básico del capitalismo y del Estado burgués. El capital la reproduce constantemente mientras el Estado regula estas divisiones (Holloway, 2004 b: 94). No por casualidad ese concepto aparece por primera vez en *El príncipe* de Nicolás Maquiavelo (1467-1527), una guía para los

nuevos poderes de las nuevas ciudades-repúblicas en los principios históricos del capitalismo.

Así que la superación de estas divisiones es una cuestión fundamental, desde una perspectiva emancipadora, aunque no había sido abordada en la mayoría de los procesos de transformación hasta hoy en día. Por esto no se trata de un libro para especialistas de América Latina o Venezuela. El análisis crítico del proceso de transformación en Venezuela y de las relaciones entre el Estado y los movimientos es importante para el desarrollo ulterior de los conocimientos sobre teoría de la democracia, la construcción del socialismo, y también para proporcionar resultados y sugerencias que sean de suma importancia a nivel internacional, en el marco de la búsqueda de alternativas democráticas y socialistas y de la posibilidad de pensar un cambio radical, es decir, fundamental.

En la política de la praxis venezolana –que no niega ni la teoría ni su significado–, el gran reto radica en reinventar, constantemente, relaciones y mecanismos sociales, instituciones y estrategias para la transición al “socialismo”; observando y aprendiendo de experiencias pasadas, pero sin una línea o saber objetivados.

En relación con la Comuna de París, Marx estipuló:

Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantar *par decret du peuple* [por decreto del pueblo]. Saben que para conseguir su propia emancipación (...) tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos, que transformarán las circunstancias y los hombres. Ellos no tienen que reeditar ningunos ideales, sino simplemente liberar los elementos

de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno (Marx, 1973: 343).

Y Rosa Luxemburgo anexa:

El sistema social socialista solo deberá ser, y solo puede ser, un producto histórico, surgido de sus propias experiencias, en el curso de su concreción, como resultado del desarrollo de la historia viva, la que (al igual que la naturaleza orgánica, de la que, en última instancia, forma parte) tiene el saludable hábito de producir siempre junto con la necesidad social real los medios de satisfacerla, junto con el objetivo simultáneamente la solución. Sin embargo, si tal es el caso, es evidente que no se puede decretar el socialismo, por su misma naturaleza, ni introducirlo por un cause. Exige como requisito una cantidad de medidas de fuerza (contra la propiedad, etcétera). Lo negativo, la destrucción, puede decretarse; lo constructivo, lo positivo no. Territorio nuevo. Miles de problemas. Solo la experiencia puede corregir y abrir nuevos caminos. Solo la vida sin obstáculos, efervescente, lleva a miles de formas nuevas e improvisaciones, saca a luz la fuerza creadora, corrige por su cuenta todos los intentos equivocados (...) Toda la masa del pueblo debe participar. De otra manera, el socialismo será decretado desde unos cuantos escritorios oficiales por una docena de intelectuales (Luxemburgo, 1975: 210-211).

En Venezuela eso es parte del fundamento del proceso de transformación y se encuentra fuertemente reflejado en las famosas palabras del filósofo y educador Simón Rodríguez,

maestro de Simón Bolívar y referencia central del bolivarianismo, el cual a comienzos del siglo XIX constató: “¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su Gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos” (Rodríguez citado según Contreras, 1999: 112).

De esta manera el mismo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Minci, 2007) recalca la importancia central de los valores y contiene más orientaciones éticas que normas a seguir. La “Nueva Ética Socialista”:

Propone la refundación de la nación venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del Socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar (MinCI, 2007: 5).

El ejercicio constante de “reinventar” se refleja también en la práctica. Nuevas formas, iniciativas e instituciones varias se cruzan al mismo tiempo que son propagadas y nuevamente desechadas. Lo que para numerosos analistas liberales parece ser una incongruencia o falta de claridad, es más bien la expresión de una apertura y una búsqueda de nuevos caminos. Esto, naturalmente, no es garantía de éxito. La construcción de dos lados está llena de contradicciones y conflictos, y no lleva a resolver todas las problemáticas; sin embargo, sí se presentan de manera diferente en el proceso venezolano. Es así que el proceso en Venezuela obliga a la izquierda a repensar varias categorías. Entre estas se encuentran las evaluaciones sobre el

Estado, la economía, la participación, la democracia y las estrategias y los caminos de la transformación social.

EL CAMINO ESPECÍFICO VENEZOLANO

Venezuela se encontraba en una grave crisis económica desde comienzos de los años ochenta. La crisis económica se transformó en una crisis del sistema político. El Caracazo –levantamiento popular en contra de las medidas neoliberales de ajuste estructural de 1989– y los dos levantamientos cívico-militares de izquierda de 1992 encabezados por militares, tuvieron un efecto constituyente para el movimiento bolivariano. En medio de la crisis del poder tradicional los movimientos populares adoptaron, cada vez más, posturas autónomas: las demandas específicas (como pedir la solución a problemas concretos), pasaron paulatinamente a demandas de autocontrol, autodeterminación, autogestión y poder constituyente.²

La creciente polarización social y el desmoronamiento del cuadro representativo existente favoreció la elección de Chávez en diciembre de 1998, que ya había encabezado el primer levantamiento. Su candidatura a la presidencia de la República fue apoyada por numerosos partidos de izquierda, organizaciones y particulares. Después de las elecciones, Chávez encaminó un proceso constituyente. Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente y se elaboró una nueva Constitución que fue aceptada a través de referéndum en diciembre de 1999, con

2 El poder constituyente se refiere a la fuerza colectiva legítima que posee el ser humano para producir algo nuevo, de pensarlo y modelarlo sin tener que derivarlo de lo existente o someterse a él (véase cap. 2.2.2).

una fuerte participación directa. La Constitución postula una “democracia protagónica y participativa”, basada en una concepción amplia de participación que, más allá de una también redefinida participación política, abarca derechos sociales, económicos, culturales y derechos colectivos para grupos específicos. Chávez fue electo nuevamente presidente en diciembre del año 2000, en elecciones realizadas conforme a la nueva Constitución, poniendo en práctica la reivindicación de dicha participación. A partir del 2003, comenzó la construcción de estructuras paralelas al Gobierno con una fuerte participación “desde abajo” (sobre todo en los programas sociales llamados “Misiones”); esto después de que el gobierno se topara en todos los niveles con dificultades de reorientar las políticas públicas, especialmente en el área de política social (Lander, 2007 a: 71).

La participación, en un principio, se enmarcaba en un discurso democrático, que más allá del capitalismo y el socialismo, postuló un “tercer camino”. Este camino se inclinó hacia la izquierda; y, a partir de 2005, Chávez calificó al “socialismo” como la única alternativa en el contexto de una superación necesaria del capitalismo. Esta radicalización se dio después de las movilizaciones populares sumamente exitosas en contra del golpe de Estado, en abril del 2002, y en contra del “paro empresarial”, entre 2002-2003 (Lander, 2009).

A partir de 2007, la participación dentro de la política oficial del Gobierno se situó cada vez más en un contexto de “poder popular”, democracia revolucionaria y socialismo. Dado que en las circunstancias actuales nadie puede afirmar que conoce el camino hacia el socialismo, ni la forma detallada del mismo, en

Venezuela es definida como “socialismo en desarrollo” y se le llama “socialismo del siglo xxi”, para diferenciarlo de los antiguos socialismos de Estado.

Venezuela está en un proceso de búsqueda, que durante los últimos años ha sido compartido por varios actores político-sociales a nivel global. En las Américas se encuentran, por ejemplo, el *presupuesto participativo* de Porto Alegre (Brasil), la *autonomía* planteada por el movimiento zapatista en Chiapas (México), las organizaciones de piqueteros en Argentina, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil. Estos y otros movimientos comparten el rechazo a los mecanismos de la democracia representativa. Así que el afán de medir a Venezuela con categorías democrático-liberales para exigir la implementación de las mismas, no tiene cabida. Ha sido, justamente, el fracaso que ha tenido el modelo de democracia liberal para satisfacer las necesidades materiales de la población y la posibilidad de participación política, lo que ha producido en Venezuela el rechazo de la lógica de la representación y la exigencia de una democracia directa, plasmada en la Constitución como “Democracia participativa y protagónica”. Es necesario pensar la democracia de otra manera. Sabiendo ya la falta de posibilidades de participación en regímenes liberal-democráticos, el análisis del proceso de transformación en Venezuela asume una gran importancia.

EL DILEMA DEL ESTADO

Hasta la mitad de los años ochenta, en América Latina dominaron los conceptos de “liberación nacional” que, por lo general, preveían un partido fuertemente institucionalizado en la conducción del Estado, respaldado por una gran central sindical, y por otras organizaciones de masas (por ejemplo, de campesinos o mujeres), estructuralmente ligadas al gobierno y/o al partido. Ellas actuaban como un “brazo prolongado” del partido.³ Junto a una “burguesía nacional”, a la que se le atribuía un interés en el desarrollo interno, el Estado emprendía intervenciones dirigidas a la economía y a la sociedad para impulsar un desarrollo y una transformación nacional, orientándose hacia la soberanía frente a los países del norte (particularmente de EE.UU.). Se postularon posiciones anti-imperialistas y se buscaron alianzas con otros Estados del “Tercer Mundo”.

La idea de la centralidad de la toma del Estado, de la utilización del mismo para dirigir el proceso de transformación social y la idea de la construcción de una economía socialista por medio de la estatización, remonta a Lenin. En los escritos de Marx no se encuentra un análisis complejo del Estado burgués. Al seguir las afirmaciones puntuales durante el curso de los años, se puede ver claramente un desarrollo hacia una postura que descarta la simple toma del Estado. Marx y Engels, después de un detenido análisis de la Comuna de París, en un nuevo prefacio para la edición alemana del *Manifiesto Comunista* de 1872, afirman que el manifiesto había “envejecido en algunos

3 Según la división tradicional entre lo social y lo político, lo último queda como exclusividad del Estado y del partido.

de sus puntos” (Marx/Engels, 2003: 95) y aclaran: “La comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines” (Marx/Engels, 2003: 96).

Engels más tarde, en el *Antidühring* y en *El origen de la familia*, opina con más claridad que Marx acerca del Estado. Ahí se encuentra también el origen de las simplificaciones y los conceptos reducidos de Lenin sobre el Estado y el socialismo. En tales reducciones, el Estado es sencillamente visto como un instrumento de la clase económicamente poderosa para la sumisión y la explotación de la clase oprimida: “El proletariado toma el poder del Estado y transforma primero los medios de producción en propiedad estatal” (Engels, 1962: 261). Engels no elabora más allá de eso las ideas de la superación del Estado. Para Engels, con la desaparición de las clases el Estado desaparecería (Engels, 1962: 262).

En *El Estado y la Revolución*, Lenin celebra el análisis de Marx y Engels con respecto a la Comuna de París, lo mismo que la necesidad de la destrucción del Estado; sin embargo, emprende al mismo tiempo una simplificación de consecuencias trascendentales para el movimiento comunista.⁴

El proletariado necesita el poder estatal, organización centralizada de la fuerza, organización de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la

⁴ *El Estado y la Revolución* se escribió como obra práctica-propagandística para preparar la toma de poder de los bolcheviques. Lenin era primordialmente un teórico de la revolución y solo se ocupó del Estado por una necesidad práctica.

enorme masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiproletarios, en la obra de “poner en marcha” la economía socialista (Lenin, 1961: 157).

La idea de que la toma del Estado era la tarea central de los revolucionarios, para después conducir por medio del Estado a las masas en la construcción del socialismo, se abrió camino en el movimiento comunista (y muchos movimientos revolucionarios influenciados por el marxismo-leninismo). Al igual que los partidarios de la socialdemocracia, también los partidarios (conscientes o inconscientes) de la línea tradicional leninista piensan que la transformación social es organizada por el Estado por medio de una política de reformas. A diferencia de la socialdemocracia⁵, que por medio del Estado pretende solamente “humanizar” al capitalismo, los comunistas querían superarlo. En el centro de la avidez comunista, a partir de esa época, se encontraba la toma del Estado para después efectuar su propia transformación.

El filósofo italiano Antonio Gramsci observó que las sociedades modernas funcionan de manera más compleja que Rusia durante el feudalismo, y que estas no se basaban solamente en el uso de la represión, sino también, en la creación de un consenso activo entre los gobernados. Este se crea en la sociedad civil, que forma también parte del *Estado integral* (véase cap. 2.1.3). De esa manera, Gramsci analiza con agudeza el funcionamiento de Estados modernos; aunque al final, en su

⁵ Las corrientes socialdemócratas en la tradición de Hegel y Max Weber interpretan al Estado como sujeto e instrumento neutral, le adjudican una autonomía del poder; por ende el Estado, según esta concepción, puede simplemente ser usado “de otra manera”.

contraestrategia, es también el partido el que, a través de un reforzamiento de la propia organización y la obtención de la hegemonía, conduce a los diferentes sectores de la sociedad civil a una larga guerra de posiciones para la toma del Estado, para después transformarlo en el “Estado ético” de una “sociedad regulada”.⁶

El hecho de que el Estado en los países del “socialismo real” no hizo nada que lo llevase a morir o desaparecer y que, por el contrario, asumiera más bien la forma de un Estado represivo para sobrevivir, llevó otra vez a un análisis más intenso en los años sesenta y setenta del siglo xx. Los enfoques neomarxistas analizan al Estado como “Estado burgués”, parte estructural del capitalismo, y no como algo externo. Esto implica que el Estado no es un instrumento neutral en el proceso de transformación y su posesión no significa necesariamente una transformación social hacia la superación de las relaciones capitalistas, ya que es un producto de esas mismas relaciones.

Louis Althusser lleva a cabo la diferenciación entre “aparatos ideológicos” y “aparatos represivos” del Estado, cuestiona la división entre “estatal” y “privado” y hace una diferencia entre “aparato” y “poder” de Estado. Mientras que el “poder de Estado” puede ser ocupado por fuerzas políticas alternas, el “aparato de Estado” persistiría como tal; por esta razón tiene que ser destruido (Althusser, 1977). Nicos Poulantzas diferencia, de manera parecida a Althusser, entre “aparato de Estado” y “poder de Estado”:

6 La utopía de Gramsci es problemática también, dado que está ligada al fordismo, como se puede ver en *Americanismo y fordismo* (Gramsci, 1984: Tomo VI, cuaderno 22).

Un cambio del poder del Estado no basta nunca para transformar la materialidad del aparato del Estado (Poulantzas, 1979: 157).

En su análisis, el Estado no es ni un instrumento neutral, ni un sujeto, sino más bien una relación social y por ende un campo de batalla. El Estado capitalista no debe ser:

...considerado como una entidad intrínseca, sino –al igual que sucede, por lo demás, con el “capital”– como una relación, más exactamente como la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica, en el seno del Estado (Poulantzas, 1979: 154).

Es indiscutible: un proceso de transformación emancipador no puede ser llevado a cabo por medio del aparato de Estado. El Estado no es un simple instrumento de los que detentan su poder; es mucho más que solo el poder del Estado o las instituciones. Aquí, las teorías de izquierda se confrontan, especialmente por la cuestión de las relaciones con el Estado: ¿hay que luchar en contra o tomarlo?, ¿hasta qué punto la izquierda debe inmiscuirse con el Estado? Los seguidores de conceptos como “toma del poder del Estado” consideran que es, a pesar de toda la complejidad, la instancia central, reguladora y conductora, capaz de guiar una transformación. Los adversarios de la “toma del poder”, de una participación o cooperación con el Estado, lo consideran estructuralmente opuesto a una transformación revolucionaria, que corrompe y coopta todas las fuerzas que se le relacionan. Estos solo confían a los

movimientos político-sociales la capacidad de transformación. Entre estas dos posiciones polarizadas existe una gran variedad de matices.

Con el reforzamiento de los procesos de globalización y el fracaso de los conceptos de liberación nacional (desde el punto de vista económico, y desde una perspectiva emancipadora), se ha fortalecido, entre los intelectuales y las organizaciones políticas, la idea de que es imposible para los países del “Tercer Mundo” un actuar propio e independiente en un mundo globalizado. Esto ha llevado a negar las posibilidades de cambios radicales y condujo la “socialdemocratización” de muchos exrevolucionarios, que mantuvieron su estadocentrismo.

En los años ochenta, bajo una fuerte influencia, especialmente de teóricos franceses⁷, varios intelectuales e investigadores sociales latinoamericanos empezaron a poner en el centro el potencial transformador de los movimientos independientes y los segmentos de población movilizada “desde abajo”. Al mismo tiempo, esta perspectiva se acompañó por la interpretación de que el *radius* de acción de los movimientos estaba reducido a la esfera de lo social. El horizonte de una transformación social profunda, característico del “movimiento obrero”, le fue negado a los “nuevos” movimientos.

Los movimientos –todavía antisistémicos–, en cambio, rechazaron, en su gran mayoría, modelos de organización tradicional y el camino hacia la emancipación a través del

⁷ Un papel central en este contexto lo juega Alain Touraine (1971) con su concepto de los “nuevos movimientos sociales”, que definió como momento más importante de la resistencia en sistemas capitalistas.

Estado. El problema es que el Estado permite la construcción de estructuras paralelas solo cuando no aspiran a la autogestión o a la autonomía, y cuando no le disputan sus competencias. Mientras que si la autoorganización es considerada cuestionamiento real o potencial del poder del Estado –así lo demuestra la experiencia histórica– será sometida a la represión estatal masiva y al aniquilamiento.

LA CONSTRUCCIÓN DE DOS LADOS

Los acontecimientos de los últimos diez años, la elección de gobiernos –con todas sus diferencias– izquierdistas y progresistas (aunque haya sido solo la expectativa popular), han obligado a la izquierda en América Latina –estadocéntrica o no–, y sobre todo a los movimientos, a redefinir su relación con el Estado y sus instituciones (Denis, 2001, 2005; Mazzeo, 2007 a; Rauber, 2003, 2006; Wainwright, 2003):

... amplios sectores de nuestras sociedades parecen estar comprendiendo que el mejor escenario posible consiste en la continuidad de administraciones progresistas a las que siempre es necesario presionar para que no se limiten a administrar la situación heredada (Zibechi, 2006: 227).

Paralelamente, se puede observar en América Latina, principalmente en Venezuela, que se está conformando una izquierda que, retomando las palabras de Ernst Bloch, entiende la política como un reto de la praxis. El proceso de constitución de una nueva izquierda emancipadora en muchas partes

de América Latina está acompañado por las exigencias y experiencias de la praxis. Es: “Una combinación de experiencias históricas, de prácticas de lucha, de teorización sobre esas prácticas, de saberes, que anuncia y porta en sí misma el alumbramiento de una ‘nueva-nueva izquierda’” (Nicanoff, 2007: 12).

El proceso de transformación en Venezuela, construido por “dos lados”, contradice muchas de las posturas expresadas por teorías actuales, en relación con lo que concierne al papel del Estado y su interrelación con los movimientos (Hardt/Negri, 2001, 2004; Holloway, 2010). Por otro lado, la orientación normativa que le atribuye un papel central a los movimientos populares y la autoorganización en Venezuela contradice las posturas de la izquierda estadocéntrica.

Se trata de un nuevo camino, insólito para luchas y estrategias de transformación social. Combinando conceptos “desde arriba” y “desde abajo”, se persigue una política antiimperialista de soberanía nacional. El Estado y las instituciones son reforzados y siguen una estrategia de regulación activa de los procesos económicos en una economía (capitalista) mixta. Por otra parte, según la orientación normativa declarada, los movimientos deben asumir el papel central en el proceso de cambio y tener autonomía. El rol sobresaliente de los movimientos populares se puso en evidencia con las movilizaciones convocadas desde abajo, que fueron decisivas en contra del golpe de Estado en 2002, durante el “paro empresarial” en 2002/2003 y en el referéndum revocatorio en contra de Chávez, en el 2004.

Ese “desde abajo” es fortalecido a través de estructuras de autogestión y con la descentralización de la toma de decisiones del Estado, convirtiéndose en parte activa de la construcción de

un nuevo Estado y de una nueva sociedad en la que se pretende reducir, buscando desaparecer, la división entre sociedad política y sociedad civil.

La construcción de “ambos lados” mueve el antagonismo social hacia el interior del Estado. Se van originando nuevas instituciones, redireccionadas a la tarea de acompañar, apoyar a las bases y a los movimientos en la construcción de estructuras que buscan suplantar al Estado y a sus instituciones. Al mismo tiempo, existen también, dentro del Estado, resistencias institucionales y estructurales en contra de esa construcción. Estas tensiones son reforzadas por la centralidad que tiene el petróleo para la economía venezolana, que fomenta el estadocentrismo, la centralización del poder y las estructuras verticales (Coronil, 1988; Lander, 2009). Esta distorsión de la economía engendra también otra particularidad venezolana: la economía rentista⁸ desplazó la lucha de clases de manera tal, que se realiza en el Estado; o mejor dicho, está alrededor del acceso de los recursos administrados, en el supuesto de que es el que reparte la riqueza social.

Los diferentes momentos de la lucha de clases —resistencia, insurrección y poder constituyente, parecido a la lucha dentro de las relaciones capitalistas, en contra y más allá de las mismas, tal y como lo formula el marxismo crítico⁹— no están netamente separados, como en el pensa-

8 Una economía que en vez de ser productiva vive principalmente de la renta de recursos o capital.

9 “Poder constituyente” incluye de manera más explícita el elemento de la creación de lo nuevo, que no tiene que fundarse en lo existente, mientras el “más allá” del marxismo crítico,

miento de las revoluciones y movimientos clásicos del siglo XIX y XX, y como lo siguen postulando la mayoría de las corrientes de las ciencias sociales hasta hoy día, que separan los tres elementos, y los colocan en orden cronológico (Hardt/Negri, 2002 a: 29).

En contraposición a las ideas comunes de transformación social, el proceso venezolano intenta inventar un nuevo camino mediante el cual se logre una resignificación del Estado y de la sociedad, resultado de la interrelación entre arriba y abajo, abriendo una posibilidad para la superación de las relaciones capitalistas. El gran desafío está en mantener abierto este proceso y desarrollar un *modus operandi* “desde arriba” que apoye, acompañe y refuerce al “desde abajo”, sin cooptarlo o limitarlo. Al mismo tiempo, se trata de crear estrategias “desde abajo” que hagan posible ser parte activa de la construcción de lo nuevo sin ser absorbido “desde arriba” o perder la iniciativa frente al Estado o sus instituciones. Se trata entonces de una relación entre el *poder constituyente* y *poder constituido*, en la cual el poder constituyente sigue siendo la fuerza impulsora y creadora. Aunque continúan las interrogantes sobre si es posible y cómo el Estado, con sus instituciones, puede superarse actuando en interrelación con los movimientos.

En este contexto es necesario preguntar: ¿hasta qué punto los mecanismos de autoorganización de base, iniciados y fomentados por el Estado, pueden desarrollar realmente una relativa autonomía? Autonomía es la condición para que

aunque también se refiera a una discontinuidad, bien puede ser interpretado como continuidad y no como ruptura.

puedan transformar el Estado. Ese potencial lo perderían si estuvieran reproduciendo las estructuras y los mecanismos estatales. Esas cuestiones son analizadas de manera empírica en los CC, que juegan el papel central para la construcción del poder popular y para la superación del Estado burgués. Los CC surgieron desde abajo, como forma revolucionaria, como expresión sui géneris de la lucha de clases (parecidos a los soviets en la Revolución rusa). Luego, el modelo fue retomado por el Estado y propagado y fomentado masivamente. Esto llevó, por un lado, hacia una enorme difusión y fortalecimiento de los CC; pero, por el otro lado, se interfirió también en su crecimiento orgánico. Los CC oscilan entre ser una forma autónoma, plural y local de organización para la autogestión y la tendencia de ser entendidos como un tipo de organización de base chavista o brazo prolongado de las instituciones.

LA INVESTIGACIÓN

Como suele ser, los procesos de transformación social no se detuvieron a esperar la teoría. Hoy por hoy no existe una teoría capaz de explicar lo que sucede en Venezuela, ni en el continente entero. Y nadie en las Ciencias Sociales anticipó, ni como posibilidad, el hecho de que de la crisis del modelo venezolano surgiera un sistema con las características del gobierno de Chávez. Esto “sugiere la necesidad de cuestionar los supuestos con que trabajan” dichas Ciencias Sociales (Parker, 2001: 13).

Son pocas las investigaciones a fondo del proceso de transformación en Venezuela que se concentran en la democratización y participación, que han sido publicadas desde el 1999. La

mayoría de los análisis del proceso venezolano escapan a la esencia del mismo debido a que se mueven en el marco exclusivo de categorías liberal-democráticas, o siguen solamente cuestiones específicas, como por ejemplo, cómo están siendo satisfechas ciertas necesidades materiales, o bien caen en estereotipos imaginarios. Son muy pocos los análisis que se ocupan explícitamente de la problemática de la construcción de dos lados (por ejemplo: Ellner, 2006 a). En la mayoría de los casos, la relación de tensión entre el Estado y los movimientos, o no es tomada en consideración o se intenta resolver de manera armónica.

No existe un trabajo de investigación amplio y profundo sobre los procesos de participación en Venezuela, que enfoque al proceso como construcción de dos lados, prestando atención especial a las contradicciones y conflictos existentes, y sostenido en una base consolidada de estudios empíricos. Las investigadoras Buxton y McCoy observaron en 2008 que la

... tendencia elitista y personalista de enfocar a Chávez (...) ha distraído nuestra atención de los cambios y desarrollos complejos que se han producido en la sociedad venezolana durante la última década en las bases.

Y luego constatan:

Una segunda característica de los usuales análisis contemporáneos sobre Venezuela es la ausencia de investigación de campo seria y de calidad. Los juicios expresados en un momento determinado suelen reflejar posturas, actitudes y opiniones típicas

mente formuladas a una gran distancia (geográfica o metafísica) de lo que pasa en el “terreno mismo” (Buxton/McCoy, 2008: 183).

El presente libro, al contrario, se basa en el estudio de investigaciones existentes como también en el trabajo concreto en los procesos sociales en Venezuela durante años. Desde el 2004 paso alrededor de la mitad del año en Venezuela, donde he trabajado con activistas de Consejos Comunales y de fábricas. Para la presente investigación hice más de 60 entrevistas con macroactores, obreros industriales y activistas de ocho Consejos Comunales. Las entrevistas con los actores concretos fueron llevadas a cabo con el método de la “co-investigación” (Panzieri, 1965), surgida en los años sesenta del operaiismo italiano, que considera que los “expertos” no son los investigadores si no más bien los que están en los procesos concretos. Sin embargo, por la misma modalidad del capitalismo de dividir y crear esferas diferentes, los actores concretos en su mayoría no disponen de los instrumentos de sistematizar y contextualizar sus conocimientos. El entrevistador tiene que intentar darle ese instrumento a los entrevistados.

El presente libro trata principalmente de la efectividad, el alcance y los problemas en la realización práctica de enfoques participativos en la sociedad venezolana, las contradicciones y los conflictos en este proceso (por ejemplo entre el Estado y los movimientos, la burocracia y la base) y si es una vía que lleve a la reducción progresiva de la división entre lo político, lo económico y lo social. El interés central de la investigación está en las formas colectivas de participación política y en el contenido emancipador que pueda tener para la población, y se

concentra específicamente en los Consejos Comunales como forma más importante y avanzada de organización territorial local. Resumiendo, se trata de cómo el proceso venezolano se desarrolla como proceso de construcción de dos lados y cuál es su potencial emancipador. ¿Puede el poder constituyente actuar creativamente y encaminar una nueva institucionalidad con base en la autogestión comunitaria?

El trabajo se concentra en tres enfoques principales. El primero son los desarrollos históricos, partiendo de que el conocimiento del pasado es indispensable para una comprensión compleja del presente (Bloch, 2001: 50). Sirve para facilitar la comprensión del contexto a partir del que se desarrollaron las fuerzas políticas que llevan el proceso de transformación venezolano, así como del surgimiento de distintas posiciones determinantes para el movimiento bolivariano. Se tratan el origen y el ocaso del sistema tradicional de partidos en relación con los movimientos populares, y el rol de los militares en la democracia formal de Venezuela en relación recíproca con la izquierda armada, el “bolivarianismo”, el análisis crítico del proceso constituyente de 1999 y la rechazada reforma constitucional de 2007.

Para la exposición histórica y su comprensión, me orienté con el enfoque de historiadores marxistas ingleses como Eric J. Hobsbawm, George Rudé y Edward Thompson o el historiador estadounidense Howard Zinn, que hacen visible una “historia de abajo” y adjudican una clara racionalidad a los movimientos. El hilo conductor está en la *corriente histórica por el cambio* (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 104), formada a partir de las corrientes de la izquierda que desembocan en el proceso

bolivariano para abordar la transformación del aún no (Bloch, 1973) de la utopía en la realidad.

El segundo enfoque principal consiste en discutir y comparar con la realidad venezolana distintas aproximaciones teóricas de importancia para el proceso de transformación venezolano y su comprensión. Esto incluye un esclarecimiento de los conceptos de democracia, sociedad civil y populismo. Empezando por una crítica de la democracia liberal y la teoría de la transición, discutiendo diferentes conceptos de sociedad civil y populismo, pasando a debatir de manera crítica distintas nociones de participación y democracia directa y radical, para llegar al concepto de “poder constituyente” y la idea del “poder popular” como práctica de construcción del socialismo, y el “Estado comunal”. En el análisis de los conceptos de “clase”, “multitud” y “pueblo soberano” se ubica el portador y actor del proceso de transformación venezolano. Finalmente se discute y rechaza el concepto de movimientos sociales, entendiendo a los movimientos en Venezuela siguiendo la perspectiva de autores como Walter Benjamin (1973), Ernst Bloch (1973), Miguel Mazzeo (2007 a) y Karl Marx, como un conjunto de aspiraciones de emancipación y libertad con raíces históricas.

El tercer enfoque se concentra en la participación. Primero analizando importantes mecanismos y los resultados más importantes de la participación social y política, se delinean los rasgos característicos de la política social del gobierno de Chávez y se analizan los programas sociales llamados “Misiones”, concentrándose en los programas de mayor efecto sobre el total de la población. Sigue el análisis de algunas formas importantes de participación política protagónica,

entre las que se encuentran: la participación local en mejorar el sistema de agua potable y aguas servidas por medio de las Mesas Técnicas de Agua (MTA), los Comités de Tierra Urbana (CTU), el acompañamiento y control de parte de la base organizada, a través de la Contraloría Social, de medidas institucionales y el debate público sobre las iniciativas de ley. Se discuten críticamente diferentes mecanismos de democratización de la propiedad y de la gestión de medios de producción y se presentan los resultados de una investigación empírica en dos fábricas. Posteriormente, se observan diversos indicadores estadísticos y cuantitativos referentes al desarrollo económico y social de Venezuela, para completar el capítulo.

El tema central del tercer enfoque y de la investigación son los Consejos Comunales, el instrumento más importante para la construcción de una autogestión de las comunidades y del poder popular. Primero se analizan críticamente formas de participación local anteriores a los Consejos Comunales. Luego se pasa al surgimiento, estructura, financiamiento y modo de trabajo de los Consejos Comunales. Se abordan los niveles superiores de la coordinación de los Consejos Comunales: las comunas y las ciudades comunales, aunque estas, durante el período de investigación, no jugaban todavía un rol importante. Para mediados del 2009, la construcción de comunas ya estaba en plena marcha. Sigue un análisis crítico del desarrollo, situación, contradicciones y problemas de los Consejos Comunales. El análisis se centra en los aspectos que permiten evaluar la medida en que nace una nueva institucionalidad y autogestión de abajo, que redefine el Estado, que cambia sustancialmente la relación entre Estado y sociedad. La relación entre los Consejos

Comunales y las instituciones se analiza bajo los aspectos de autonomía/dependencia y conflicto/cooperación. Se examina la relación entre los Consejos Comunales y los movimientos populares, los Consejos Comunales y el Estado, así como la relación entre los Consejos Comunales y las comunidades. El capítulo sobre los Consejos Comunales culmina en una exposición y el análisis de los resultados de la investigación de campo de siete Consejos Comunales en la Gran Caracas. Los Consejos Comunales se analizaron en cuanto a sus funciones, como instancia de autogestión, observando su origen, los proyectos, la participación como proceso de desarrollo y reconocimiento social, las experiencias con instituciones y la relación con otros Consejos Comunales. Adicionalmente, también se analizaron la participación y el protagonismo de los activistas: en qué medida la participación surte un efecto democratizador y produce colectividad o en qué medida es excluyente, y cómo el trabajo comunitario repercute en la comunidad y en los activistas entrevistados. Para terminar, los resultados se analizan en una síntesis: cuán participativos son los Consejos Comunales efectivamente, cuánto fomentan la participación, cómo es la relación entre la base y las instituciones, cuán real es la posibilidad de una cooptación, se dan tendencias marginales de fundamento político o por otros motivos, y si son o no los Consejos Comunales una institución del poder constituyente. Finalmente se resumen los resultados de la investigación, dando una apreciación de la democracia participativa y protagónica de Venezuela.

* * *

“La historia (escrita) de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” (Marx/Engels, 1989: 22), afirman Karl Marx y Friedrich Engels en el *Manifiesto del Partido Comunista*. Sin embargo, el marxismo tradicional colocó al capital al centro de su análisis. “El objeto de la historia es, por naturaleza, el hombre. Mejor dicho los hombres”, escribió Marc Bloch (2001: 56-57). La presente investigación, en concordancia con las corrientes del marxismo crítico y del operaísmo, coloca a los seres humanos y sus luchas en el centro. Solo así puede ser analizado y percibido el potencial emancipador del proceso bolivariano.

“Los filósofos no han hecho más que *interpretar* de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de *transformarlo*”, escribió Marx (Marx, 1973: 229). Este es también mi interés, así que mi dedicación está dirigida hacia los caminos para superar las relaciones capitalistas y aportar a la emancipación de los seres humanos. Esto no es un estudio neutral.

Nota aclaratoria:

El trabajo de investigación del presente libro fue terminado en 2010.

Como consecuencia, no se incluyen el ulterior desarrollo de las comunas ni la situación PosChávez.

1. EL CONTEXTO VENEZOLANO: DE LA DEMOCRACIA EXCLUYENTE A LA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA

La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero quizá es igualmente vano esforzarse por comprender el pasado, si no se sabe nada del presente.

BLOCH, 2001: 70

El siguiente capítulo se ocupa del contexto histórico venezolano que llevó al surgimiento de las ideas de una democracia participativa y directa. El apartado 1.1 trata al modelo político de la democracia representativa excluyente, en relación recíproca con las fuerzas de izquierda. En el apartado 1.2 se expone el desarrollo de la corriente progresista de las Fuerzas Armadas y de la lucha armada de izquierda, para entender mejor la especificidad venezolana de la orientación progresista de parte de los militares. En el apartado 1.3 se describen las diferentes corrientes, elementos y acontecimientos en los que se sustenta el bolivarianismo. Finalmente, el apartado 1.4 aborda el proceso constituyente de 1999, en el que se sentaron las bases constitucionales del proceso y la rechazada reforma constitucional de 2007, en la que se formulaba una orientación que, hasta hoy día, continúa en el centro del debate. Otros desarrollos y sucesos entre 2000 y 2009 se abordan dentro de los capítulos restantes, de acuerdo a la relevancia y puntualidad

del tema. Una elaboración sistemática y cronológica completa excedería el marco de este trabajo.¹⁰

Los acontecimientos descritos son, en diversos grados, precursores o constituyentes del proceso de transformación social del país. Como se pudo observar en las entrevistas, estos acontecimientos son parte de una memoria colectiva. La expresión, subterránea y fragmentada, de las rebeliones militares y la guerrilla, a principios de los años sesenta, está en una línea familiar con varios de los encuestados. Otros acontecimientos, como la caída de la dictadura, las experiencias con la democracia represiva, el Caracazo de 1989, las rebeliones cívico-militares de 1992 y el proceso constituyente, también tienen un arraigo en la memoria colectiva.

Puede que algunos de los acontecimientos parezcan insignificantes; sin embargo, “nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia” (Benjamin, 1973: 179). O como explica Marc Bloch:

Hay quienes representan la corriente de la evolución humana formada por una serie de breves y profundas sacudidas, cada una de las cuales no duraría sino el término de unas cuantas vidas. Por el contrario, la observación prueba que en este inmenso continuo, las más grandes conmociones son perfectamente capaces de propagarse desde las moléculas más distantes hasta las más cercanas. ¿Qué diríamos de un geofísico que, conforme con contar los miriámetros, consideraría que la acción de la Luna sobre nuestro globo es mucho más importante que la del Sol? [En

10 Véase al respecto: Azzellini, 2007 b; Holm /Bernt, 2007; Twickel, 2006; Wilpert, 2007.

la duración como en el cielo, la eficacia de una fuerza no se mide exactamente por la distancia.] (Bloch, 2001: 69).

Un ejemplo de eso se encuentra en el apartado 1.3, respecto a los orígenes del bolivarianismo y la influencia de la guerrilla PRV-FALN.¹¹

1.1 Nacimiento y caída del sistema tradicional de partidos y surgimiento del “bolivarianismo” en el contexto de la crisis de la democracia representativa

Venezuela es un país petrolero. El Oro Negro fue descubierto a principios del siglo xx. En 1920, Venezuela pasó de ser un país agrícola a ser el mayor exportador de petróleo del mundo. La producción agropecuaria cayó de un 33% del PIB en los años veinte a un 10% en los años cincuenta y en 1998 llegaba a su valor más bajo con un 6% del PIB, representando el porcentaje más bajo de toda Latinoamérica (Wilpert, 2007: 10). Junto al petróleo, el comercio y la prestación de servicios se convertían en sectores dominantes. Al mismo tiempo, disminuía la importancia de la oligarquía agrícola y comenzaba un proceso de urbanización. Gran parte de los ingresos del país procedían de los recursos petroleros que regulaba el Estado, nacionalizados en 1974. En el Estado yacía el centro del poder de decisión, apropiado por las élites del país.

11 Partido Revolucionario Venezolano. Escisión del Partido Comunista Venezolano (PCV) en el 1965. El nombre hace referencia al PRV, precursor del PCV, fundado por marxistas venezolanos en México (Farías, 2006: 157).

En este “modelo burocrático-populista de administración del aparato estatal” (Ochoa/Rodríguez, 2003: 117), o “sistema populista de conciliación” de “élites” (Rey, 1991), se dividían el poder dos partidos: Acción Democrática (AD), formalmente socialdemócrata, y el partido socialcristiano Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Hasta 1999, los dos partidos ocuparon todo el espacio institucional de interacción con el Estado y la vida social (García-Guadilla, 2003: 231; Medina, 2001: 63; Molina, 2001: 4; Ochoa/Rodríguez, 2003: 119). Las bases para este modelo se habían asentado durante la fase de apertura democrática, de 1936 a 1945, selladas en el Pacto de Punto Fijo (PPF), tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Hasta 1989, Venezuela era considerada una de las democracias ejemplares de Latinoamérica. Los criterios que los analistas liberales entienden comúnmente por indicadores de una democracia estable —elecciones regulares, posibilidad de alternabilidad de los partidos en el poder, ciertos derechos ciudadanos, etc.— se consideraban cumplidos (Coronil, 1988: 7; Ellner, 2003 a: 19; Lander, 2007 b: 21). Las primeras grietas en esta imagen aparecieron con el Caracazo, rebelión cargada de significación simbólica contra la política estructural neoliberal del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, en 1989. No obstante, las ciencias políticas burguesas establecidas continuaron entonando, durante algún tiempo, elogios al modelo venezolano. Así, Kornblith y Levine escribían en 1993:

Creemos que la experiencia de sistema de partidos de Venezuela es instructiva explorando la cuestión de cómo se pueden construir

partidos políticos competitivos, efectivos y duraderos, y cómo volverlos centrales en respecto a la construcción y la sobrevivencia de la democracia (pág. 3).

Hoy, casi todos coinciden –desde Chávez hasta los investigadores de ciencias políticas que alguna vez alabaron al PPF– en que el Pacto de Punto Fijo estableció los criterios para la marginación y exclusión de todo actor fuera del círculo de quienes sostuvieron el pacto (Ellner, 2000: 2).

El derrumbe del sistema de PPF comenzó a principios de los años ochenta. La crisis de legitimación del modelo –específicamente venezolano– de democracia parlamentaria se expresó en una abstención electoral que siguió creciendo y, a partir de 1993, se hacía visible el desmoronamiento de AD y Copei. Uno de los factores que influyó seguramente en esto fue que, prácticamente, desaparecieron las diferencias ideológicas entre AD y Copei (Molina, 2001: 1). La experiencia venezolana contradice las teorías de la democracia liberal del supuesto aumento de calidad y estabilidad democrática, debido a menos partidos compitiendo entre sí, con menores diferencias ideológicas (Sartori, 1976).

1.1.1 Democratización, golpe de Estado democrático y dictadura (1936-1958)

Después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, en 1935, que había gobernado el país desde 1908, tras un golpe de Estado, se dio una “apertura democrática” limitada. El exministro de Guerra y Marina, general Eleazar López Contreras

(1936-1941), nombrado sucesor de Gómez por el Congreso Nacional, ordenó la liberación de los prisioneros políticos y restableció la libertad de prensa y de organización; pero también prohibió la ideología comunista por decreto de ley, expulsando del país a gran cantidad de opositores, acusándolos de comunistas. Después su sucesor, exministro de Guerra y Marina de su gobierno, el general Isaías Medina Angarita (1941-1945), liberalizó la fundación y registro de partidos y sindicatos. Gran parte de la población ejerció presión con manifestaciones y huelgas, exigiendo más libertades (Coronil, 1988: 6; Kornblith/Levine, 1993: 7).

Debido al descontento por una democratización vacilante, el 18 de octubre de 1945 AD (surgida en 1941), junto a jóvenes oficiales de las FFAA, realizó un golpe de Estado, iniciando la primera fase real de una democratización, en el sentido liberal; es decir, la transición a una democracia electoral. Rómulo Betancourt, fundador de AD, dirigía la Junta. Se introdujeron elecciones directas en todos los niveles y el derecho de voto universal para todas las personas mayores de 18 años que fueran “ciudadanos”. Con esto, el porcentaje de votantes subía de un 5% a un 36% de la población total (Coronil 1988: 6; Kornblith/Levine, 1993: 8). Sin embargo, gran parte de la población pobre, sobre todo rural, continuó excluida de la participación en los sufragios, por no poseer derechos ciudadanos. Durante este tiempo, AD gobernó excluyendo a los demás partidos de la participación en el gobierno e impidiendo, mediante la intervención estatal, su influencia sobre las organizaciones obreras y campesinas (Coronil, 1988: 12).

AD ganó todas las elecciones de los tres años siguientes (Asamblea Constituyente, elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales) con más del 70% de los votos (Molina, 2001: 2). Rómulo Gallegos (AD), ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1947, con un 75% de los votos. Copei (fundado en 1946) y la liberal Unión Republicana Democrática (URD) (fundada en 1945) también lograron una representación parlamentaria. AD se apoderó del aparato de Estado y lo usó para excluir a todas las demás fuerzas políticas (Coronil, 1988: 11). Esto, sumado a las políticas sociales y el arraigo en la población, generó fuerte crítica de los militares, la Iglesia y la oposición. En noviembre de 1948, las FFAA, con un golpe de Estado, pusieron fin a esta fase democrática, que había durado tres años (conocida en Venezuela como *trienio*).

En la política de AD durante el trienio se reflejaba un tipo de relación con el Estado que quedaría marcado en Venezuela durante varias décadas: la riqueza petrolera dio al Estado independencia de actores internos, volviendo a estos dependientes del Estado. Detrás de la fachada de una democracia representativa y una sociedad civil activa, el Estado no tenía un apoyo de las bases, sino que la situación era más bien al revés y el Estado apoyaba a las bases, por lo que el golpe de Estado no encontró resistencia. AD tenía la idea de que, para permitir el desarrollo económico nacional, había que eliminar el conflicto social. Así, no llamó a la movilización en contra del golpe de Estado, sino que intentó evitarlo a través de contactos con los militares. Una vez que la Junta controló al Estado, su poder ya no era cuestionado (Coronil, 1988: 13-16).

El golpe fue apoyado por los EE.UU. Con la guerra fría en ciernes, la importancia de Venezuela como proveedor de materias primas –sobre todo de petróleo– y su importante posición geoestratégica, los EE.UU. veían en los altos rangos militares, cercanos a Washington, un garante de sus intereses; desconfiaban de un gobierno que no tuviera el pleno apoyo de estos militares (Coronil, 1988: 27; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 25-27). Los partidos burgueses fueron incapaces, frente a la dictadura, de desarrollar un compromiso de clases que garantizara el modelo de reproducción capitalista debido a disputas, riñas por el liderazgo y otros conflictos personales. Escasamente lograron construir instancias de mediación política en la sociedad civil.

AD asumió el liderazgo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en 1947, aunque dentro de la CTV persistía gran influencia del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fundado en 1931 (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 25-27). AD disponía de una fuerte ala de izquierda¹², y los partidos burgueses hacían constantes y puntuales alianzas con el PCV por la defensa de la democracia. Los EE.UU. temían un giro del gobierno hacia la izquierda.

La junta militar prohibió AD y disolvió, paulatinamente, al Congreso, las instancias de administración local y el Consejo Electoral Nacional; y prohibió también la CTV (1949), al PCV y a la mayoría de los sindicatos (Coronil, 1988: 20). Creyendo contar con el apoyo de la mayoría de la población, la junta organizó elecciones en 1952, pero la victoria electoral fue de la

12 Así, por ejemplo, la denominación usual venezolana para los seguidores de AD es “adecos”, palabra que remite a la combinación AD-comunistas.

URD (Unión Republicana Democrática). La Junta desconoció el triunfo, quedándose en el poder. El director de la junta electoral, que no quiso confirmar el fraudulento resultado, tuvo que dimitir. Copei y URD, negándose a reconocer el resultado del fraude, fueron prohibidos (Coronil, 1988: 21-24).

En 1952 se impuso Marcos Pérez Jiménez entre los mandos militares golpistas. Su gobierno se caracterizó por la brutal represión de adversarios políticos, desbordante corrupción, una política de desarrollo orientada a la construcción de infraestructura y una subordinación y adhesión incondicional a los EE.UU. (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 28).

1.1.2 El Pacto de Punto Fijo: del pacto al sistema

La dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue derrocada el 23 de enero de 1958, por una alianza entre URD, Copei, AD y PCV (la Junta Patriótica), representantes empresariales, sindicatos e importantes fracciones de las FFAA, con el apoyo de un movimiento de masas orientado fuertemente hacia los partidos de izquierda y los sindicatos (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 15; Molina, 2001: 2). El comandante de la Marina, Wolfgang Larrazábal, presidía la nueva Junta de Gobierno para organizar la transición a la democracia y elecciones libres. También fueron integrados representantes de las fuerzas burguesas. Durante su breve período de gobierno, Larrazábal alcanzó gran popularidad a través de la ejecución de programas sociales y de infraestructura. Sin embargo, su postura también le proporcionó muchos enemigos. En los once meses de su gobierno fueron perpetrados varios atentados contra su

persona. Los ejecutores provenían de círculos que apoyaban a Pérez Jiménez.

En 1958 una visita del vicepresidente de EE.UU., Richard Nixon, a Caracas, terminó en caos: intensas protestas antiimperialistas sacudieron la ciudad. En aquel entonces, Larrazábal criticaba fuertemente al PCV. En la visita de Nixon se hicieron públicos los planes de EE.UU. de intervenir militarmente en Venezuela sino se lograba contener, de manera más efectiva, la influencia de fuerzas de izquierda (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 33-34).

El 14 de noviembre de 1958, Larrazábal dimitió para participar, dos semanas más tarde, en las elecciones presidenciales como candidato conjunto de una amplia alianza de URD, PCV y Movimiento Electoral Nacional Independiente (MENI). Llegó segundo con 903.479 votos; Rómulo Betancourt, de AD, fue el ganador con 1.284.092 votos (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 304).

A partir del 1958, los cinco actores sociales principales –los partidos políticos burgueses, las organizaciones empresariales, la alta jerarquía eclesiástica y militar, y el movimiento sindical– fueron pactando una serie de acuerdos que dieron continuidad al modelo de desarrollo anterior y establecieron las reglas de la democracia liberal (López Maya/Gómez Calcaño/Maingón, 1989: 98).

Previo a las elecciones de 1958, el 31 de octubre, los presidentes de los tres partidos burgueses, Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (Copei) y Jóvito Villalba (URD), firmaron el Pacto de Punto Fijo (PPF) como acuerdo para la instauración de la gobernabilidad, en el marco de una democracia representativa.

Los tres líderes habían participado, unos días antes de la caída de la dictadura, en un encuentro secreto con los empresarios venezolanos más importantes y representantes del gobierno de EE.UU. La cita tuvo lugar en Nueva York y se acordaron los lineamientos básicos para la política posdictatorial.

El PCV, que había tenido un papel importante en la Junta Patriótica, fue excluido de estos convenios y del PPF (Loyo, 2002: 23; Munoz, 2005: 14; Molina, 2001: 3). A pesar de esto, apoyó el contenido del PPF y la construcción de “instituciones democráticas”. Siguió, dogmáticamente, un modelo de etapas, en el que según lo primero en el camino hacia el socialismo es una revolución democrático-burguesa. Proponía una línea de “unidad nacional”, de candidato único, para las elecciones presidenciales (Heydra, 1981: 142). Así, enfocado con el proyecto de modernización de la burguesía, frenó el movimiento de masas que, durante la caída de la dictadura, experimentó una gran participación en asambleas, aspirando a una transformación más profunda. Mientras Betancourt anunció combatir al PCV, en su discurso inaugural, en febrero de 1959, consciente de la posible fuerza de atracción de un proyecto de sociedad alternativo (Aguirre, 2007; Coronil, 1988: 70; Farías, 2006: 159-165).¹³

En el PPF, AD, Copei y URD se comprometieron a respetar y defender los resultados de las elecciones previstas para diciembre de 1958. Ninguno de los partidos del pacto gobernaría solo, aun si obtenía una mayoría electoral. De las elecciones debía

13 Según Bonilla-Molina y El Troudi (2004: 45), Betancourt se dedicó en los años siguientes a provocar, sistemáticamente, a los izquierdistas para obligarlos a entrar en la ilegalidad (estrategia que finalmente tuvo éxito).

surgir un “Gobierno de Unidad Nacional”, en el que participarían las tres fuerzas. Con este fin, se acordó un programa mínimo común, no contenido en el pacto, que se firmó el 6 de diciembre de 1958. En el PPF se comprometieron a no incluir en sus programas “puntos contrarios a los comunes del programa mínimo” consensual (PPF, 1958). El PPF no solo buscaba prevenir un golpe de Estado militar, sino también marginar al PCV, como lo exigían los EE.UU. (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 15).

En el programa mínimo común se acordaron, entre otras cuestiones, una economía mixta, un plan de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, la elaboración de una nueva Constitución y una legislación social; así como la vinculación política con los EE.UU. (Ellner, 2000: 2). El papel de las fuerzas militares se definió como un “cuerpo apolítico, obediente y no deliberante”, que garantizara la paz pública. A cambio de esto, el Estado se comprometía a mejorar y modernizar continuamente la calidad técnica y el armamento de las fuerzas militares, junto con garantizar la calidad de vida de sus miembros. Estos lineamientos también ingresaron a la Constitución de 1961 (Ochoa/Rodríguez, 2003: 119).

A partir de 1958, AD y Copei se repartieron el poder político del Estado. En 1960, la URD, de tendencia liberal de izquierda, dejó de participar en el gobierno para ser, cada vez, más excluida. El ala izquierda de AD, constituida principalmente por la organización juvenil de orientación marxista, fue excluida también en 1960 y, haciendo referencia a la Revolución cubana, se reorganizó como Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En la Caracas de 1960, la URD, el MIR y, sobre todo, el

PCV contaban con dos tercios en representaciones sindicales y escuelas (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 305-306).

El modelo del PPF adquirió una base sólida, principalmente a través de la integración de la CTV, que firmó el Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal con los representantes empresariales. En él, la CTV, como única confederación sindical, se comprometía a defender la democracia, a satisfacer las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores mediante la negociación y el consenso, evitando huelgas o interrupciones laborales (Loyo, 2002: 23; Manrique, 2001: 5). El presidente Betancourt y su gobierno tomaron el control de la CTV institucionalizándola como mediadora entre gobierno-empresarios y gobierno-asalariados (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 26-27). La CTV surgió en 1936, de los sectores que luchaban activamente contra la dictadura. Con el Pacto Obrero-Patronal, AD demostró lo fuerte de su control sobre la CTV. En el IV congreso de la CTV en 1961, se desterró definitivamente a la disidencia política de sus filas: los tres representantes del PCV, los dos representantes de la URD y los dos representantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de ARS¹⁴, instaurándose una dirección constituida solo por AD y Copei.¹⁵

14 Corriente interna de AD que fuera bautizada de este modo haciendo alusión al nombre de una agencia de publicidad en Caracas, en la cual trabajaba uno de sus principales exponentes. Esta corriente luchaba por un sistema federalista. Hasta finales de 1961 la mayoría del comité ejecutivo de AD pertenecía a ARS.

15 Acto seguido, en 1963, los sindicatos de orientación comunista fundaban la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), y en 1964 nacía Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos) como asociación sindical independiente de izquierda. Sin embargo, ninguna de estas dos organizaciones pudo desarrollar una fuerza significativa (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 40).

Pero la democracia formal pactada no pudo desaparecer la difundida esperanza en una transformación mayor. El ambiente en Venezuela, a principios de los años sesenta, estaba impregnado por el triunfo de la Revolución cubana. El 19 de octubre de 1960 comenzó un movimiento de protesta en las universidades que se extendió rápidamente por todo el país, tomando tintes de rebelión, tras la detención de tres profesores de izquierda y estudiantes cercanos al MIR, acusados a causa de un editorial que habían publicado en un semanario considerado de actividades subversivas contra el gobierno. Para el 21 de noviembre se produjeron enfrentamientos masivos entre los estudiantes y la policía. A esto le siguieron huelgas. El movimiento fue aplastado el 29 de noviembre, con el asalto de la policía a la Universidad Central de Venezuela, con más de 4.000 detenciones (Heydra, 1981: 170).

En los años 1960-1961 ocurrieron dos escisiones de izquierda a causa de la metamorfosis de AD hacia la derecha. En abril de 1960 nació el MIR, y a finales de 1961 se fundaba el Partido Revolucionario Nacional (PRN). El PCV y el MIR comenzaron a preparar la lucha armada y fueron prohibidos por Betancourt el 9 de mayo de 1961, después de una rebelión militar en la que participaron. Sus diputados, sin embargo, siguieron en el parlamento hasta finales de 1963.

Con el paso de los años, el “Sistema puntofijista” se especificó más a detalle a través de nuevos pactos. Un acuerdo entre AD y Copei estableció un sistema electoral para partidos de buenas finanzas y gran influencia a nivel nacional. En las boletas electorales no figuraban candidatos, sino solo los partidos a votar. Los candidatos eran elegidos por los círculos directivos

de los partidos, los llamados “cogollos”. No se realizaban las elecciones directas de alcaldes y gobernadores de los estados, fijadas en la constitución de 1961. El presidente nombraba los gobernadores, y estos nombraban a los alcaldes en los estados correspondientes. Hasta la reforma de la legislación electoral de 1989, la falta de transparencia del sistema electoral era extensa y hacía prácticamente imposible el triunfo electoral de partidos pequeños o candidatos independientes (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 102; Loyo, 2002: 24; Ramírez Roa, 2003: 141).

La Constitución diseñada y aprobada por el Congreso de la República en 1961 fortaleció al gobierno central frente a la estructura federal y fijó a los partidos como instrumento exclusivo de la democracia representativa. Condujo a un “Estado rígidamente representativo y fuertemente centralizado” (Fernández Toro, 2005: 306).

El 6 de marzo de 1964, el nuncio apostólico de Venezuela y el ministro de Asuntos Exteriores de Betancourt firmaron un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno venezolano. En él, el gobierno se comprometía a responder por el sustento de obispos, vicarios e instalaciones eclesiásticas. A cambio de ello, la Iglesia católica le otorgó al gobierno el derecho de vetar cualquier nombramiento de arzobispos, obispos o preladados (López Maya/Gómez Calcaño/Maingón, 1989: 122). De este modo, el sistema bipartidario continuaba extendiendo su control social, que ahora, junto al poder judicial y legislativo, también abarcaba la influencia social de la Iglesia católica (Loyo, 2002: 24).

En 1970, la práctica de repartir los cargos públicos entre AD y Copei quedó fijada en el Pacto Institucional. Los puestos de la

directiva del Congreso de la República, del procurador general, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial y de la dirección del Consejo Supremo Electoral, se repartían al inicio de cada período presidencial entre AD y Copei (Loyo, 2002: 24).

La URD pudo alcanzar un último éxito en las elecciones presidenciales de 1968, cuando su candidato, Miguel Ángel Burelli Rivas, reunió un 22,2% de los votos. Tras esto, el peso político de la URD disminuyó, hasta desaparecer casi completamente de la vida política. Las elecciones de diciembre de 1968 también fueron interesantes porque con un 96,7% de participación (el más alto de la historia venezolana), AD y Copei obtuvieron solo el 57,37% de los votos en conjunto.

El MEP (Movimiento Electoral del Pueblo) se había separado de AD en 1967, luego de que se le negara a Luis Beltrán Prieto Figueroa (antiguo líder de la Federación Venezolana de Maestros) la posibilidad de presentarse como su candidato en las elecciones presidenciales de 1968. El MEP surgió como plataforma electoral para su candidatura, a través de la iniciativa de maestros, sindicalistas y líderes comunitarios. Se consideraba a sí mismo un “partido progresista” y desarrolló una posición socialdemócrata de izquierda¹⁶. El candidato del MEP de 1968 también fue apoyado por el PCV, que poco antes había fundado la Unión Para Avanzar (UPA), para participar en las elecciones (Medina, 1999: 292). A raíz del fraccionamiento de los votos de la izquierda, Rafael Caldera, de Copei, pudo

16 El MEP, de tamaño muy reducido, apoyó a partir de 1998 a Chávez. Desde el 2007, después de que la mayoría de sus antiguos militantes se había unido a otros partidos del proceso, el MEP –ya prácticamente insignificante– tiene una posición poco clara y errática.

ganar las elecciones presidenciales contra Gonzalo Barrios, de AD (28,24%) con apenas el 29,13% de los votos.

Ya que ninguno de los dos candidatos “alternativos” consiguió quebrar la supremacía de AD y Copei, en las elecciones siguientes sus partidos perdieron votos masivamente. Así, se puede considerar consolidado el sistema bipartidario a partir de 1968 (Moncada, 2000). En las elecciones de 1973 ganó el candidato de AD, Carlos Andrés Pérez, con un 48,7%; mientras que los tres candidatos de la izquierda fragmentada sumaron apenas un 12,4%.

AD y Copei se convirtieron en organizaciones de masas a escala nacional (Molina, 2001: 3). De 1973 a 1988 obtuvieron el 80% de los votos en los distintos comicios, y un 90% en las elecciones presidenciales. Todas las decisiones importantes de gobierno se tomaban a través del consenso entre los directivos –cogollos– de los dos partidos, principalmente en lo que se refería a la política de defensa, exterior y petrolera. Los diputados tenían que aprobar las decisiones en bloque si no querían arriesgar su carrera. En Venezuela, al modelo resultante del PPF se le llamó *partidocracia*.

Ambos partidos habían penetrado numerosas organizaciones e instituciones sociales –de empresas estatales y sindicatos, pasando por asociaciones vecinales, organizaciones campesinas y estudiantiles, cámaras de las diversas profesiones y hasta fundaciones– cooptándolas y poniéndolas al servicio de sus políticas. Además tenían buenas y estrechas relaciones con las FFAA y con el sector capitalista privado, a los que se les concedían enormes ventajas y beneficios (dineros, formación, subvenciones, privilegios fiscales, protección,

encargos de comisiones etc.) a cambio de una no intromisión en asuntos políticos (Coppedge, 2002: 9-10).

El creciente consumo –fundamento del nuevo modelo económico– se basaba en una política de sustitución de importaciones y en políticas sociales estatales institucionalizadas (Ochoa/Rodríguez, 2003: 119). El ingreso petrolero fomentaba el cese paulatino de otras actividades económicas (productivas), fortaleciendo al modelo rentista y llevando a que los esfuerzos de los principales actores políticos y económicos se concentraran en el ingreso petrolero (Karl, 1997).¹⁷

El sistema completo de acuerdos y pactos informales e institucionalizados del PPF o “sistema puntofijista” representaban un corporativo que unía las fuerzas que garantizaban un sistema democrático formal al servicio de los intereses de EE.UU., de las transnacionales (sobre todo petroleras) y de la burguesía venezolana. A todas las fuerzas que se subordinaban, se les concedía acceso a recursos y reconocimiento; a las que no, se las excluía, “si existe descontento, todos los esfuerzos se dirigen a suprimirlo dejándolo fuera de la agenda política” (Crisp, 1997: 9). La articulación completa de las demandas y la toma decisiones, tenían que realizarse por las

17 Una economía rentista es una economía que se basa principalmente en la renta, o sea en las regalías de recursos extraídos y exportados, y para la que las actividades e inversiones productivas son de menor importancia. Un Estado rentista absorbe las rentas, o sea capital desde el circuito internacional del capital. Desde el punto de vista económico es problemático, no solo por el freno que significa para un desarrollo interno, sino también porque crea una fuerte dependencia de las exportaciones de recursos (y con eso del mercado global), grandes fluctuaciones en las ganancias y favorece a las importaciones frente a la producción interna. Además, en los Estados rentistas se da fácilmente un nexo entre poder político y posibilidades financieras. Sobre la economía rentista en Venezuela y sus consecuencias para el Estado y la sociedad véase Coronil, 2002. No obstante los esfuerzos del gobierno de Chávez de superar la economía rentista mediante la diversificación productiva, Venezuela sigue marcada por una economía rentista.

vías preestablecidas por el sistema de partidos y la densa red de estructuras corporativas y clientelares creadas alrededor de este (Loyo, 2002: 24; Ramírez Roa, 2003: 138).

En consecuencia, se rechazaba la protesta callejera como instrumento democrático de lucha. En las décadas de los sesenta y setenta, se la equiparaba con el “comunismo” y la guerrilla. También la protesta callejera pacífica fue enfrentada, hasta 1994, con una represión brutal que, una y otra vez, costó numerosas vidas, siendo más fuerte de 1989 a 1993, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (López Maya, 2003 b: 217).

1.1.3 Venezuela Saudita y la izquierda reformista

De 1925 y 1986, Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo, viviendo sus años dorados durante el *boom* petrolero, de 1974 a 1983. Con los petrodólares se invirtió y se construyó. En esta fase, muchos llamaban al país (en alusión a Arabia Saudita) *Venezuela Saudita*. Altas tasas de crecimiento y precios petroleros elevados llevaron a una ampliación del sistema social y educativo. En el imaginario común se proyectaba la excepción venezolana hacia el futuro y todos creían posible alcanzar una sociedad capitalista moderna y armónica (Lander, 2007 b: 21-22).

El 29 de agosto de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez (1973-1978) firmó la Ley de Nacionalización de la Industria y del Comercio de Hidrocarburos en Venezuela. El 1 de enero de 1976, pasaban a ser propiedad del Estado los bienes, las instalaciones y las maquinarias de las empresas extranjeras y de

algunas empresas venezolanas. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de una participación privada y se pagó una indemnización desmesurada a las empresas expropiadas. Luego de la nacionalización del petróleo, las élites económicas y las nuevas clases que ascendieron con el sistema de partidos, se establecieron en las empresas estatales para sacar provecho en beneficio propio, usando al Estado para garantizar, también en la economía privada, un máximo de ganancias al más bajo riesgo. Con la creencia de que los precios del petróleo permanecerían altos, el Estado venezolano se endeudó con instituciones financieras internacionales.

Los últimos años de la década de los 60 y la década de los 70 (especialmente en su primera mitad), estaban marcados por fuertes movimientos sociales, sobre todo obreros y estudiantiles (López Maya, 1995)¹⁸. No obstante la corrupción generalizada y la conciencia de la población en cuanto a las excrecencias de la democracia pactada, la práctica distributiva del Estado venezolano y las despertadas esperanzas de una mejora y ascenso social pudieron evitar el rechazo masivo.

En 1970, como consecuencia de los debates sobre las enseñanzas de la derrota de la lucha armada y la invasión de la República Checa por la Unión Soviética, se produjo una división importante en el PCV (que apenas había vuelto a ser legal). Bajo la dirección de Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Eloy Torres y otros líderes importantes se creó, a principios de 1971, el Movimiento al Socialismo (MAS), de orientación reformista.

18 También aumentó la abstención electoral en los sufragios nacionales: mientras que entre 1958 y 1973 registraba de un 3,48 a 7,79%, ascendió a un 12,43% en el año 1978, manteniendo en adelante una tendencia al crecimiento.

Pero, el excomandante guerrillero Alfredo Maneiro, rompió con el MAS, por adoptar las corrientes menos críticas y más conservadoras del PCV. Un grupo pequeño de unos diez activistas, cercanos a Maneiro, decidieron concentrar sus actividades políticas en tres áreas: 1) la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas; 2) los obreros de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Ciudad Guayana, estado Bolívar, donde una gran huelga fue derrotada con el despido de 514 obreros; 3) la comunidad de Catia en Caracas (una zona marginalizada). Al inicio, el grupo actuaba bajo el nombre Venezuela 83 y, luego, a partir de 1973, como La Causa Radical (LCR), nombre del periódico que editaban (Azzellini, 2009 a; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 50-51; López Maya, 1995).

Hasta principios de los años noventa, el MAS, que en las elecciones de 1973 presentó a José Vicente Rangel como su candidato, periodista que no claudicaba en la defensa de los derechos humanos, se transformó en la principal opción electoral de izquierdas. Mientras, LCR apostaba a la construcción de sindicatos independientes. Con la escisión del MAS del PCV, también se dividía la CUTV: el sector sindical del MAS, luego de negociaciones para lograr cuotas de poder, se adhirió de vuelta a la CTV en 1975, recibiendo tres cargos en su dirección (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 49-50). En el curso de los años ochenta, el MAS asumió posiciones crecientemente socialdemócratas y consolidó su presencia institucional. En las elecciones de 1983 obtuvo un 5,74% de votos, diez escaños en el Congreso de la República y dos en el Senado, y en 1988 un 10,2% (18 diputados y tres senadores) (López-Maya, 1995). Con participación en el gobierno de Caldera (1994-1998) el MAS sufrió

una fuerte pérdida de credibilidad y votos (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 80-81).¹⁹

Por su parte, la organización de LCR, que siempre tomaba sus distancias con MAS y PCV, era de tipo informal: no había tenido lugar ningún congreso fundacional y el grupo no poseía ni estatutos ni un programa o estructuras establecidas para la toma de decisiones. Intentaba ser una mezcla de movimiento y partido, pues la toma de decisiones le concernía solo a un reducido círculo directivo. Y aunque su base de análisis era marxista, LCR se resistía al encasillamiento como marxista, socialista o comunista y se refería sencillamente a “los pobres” (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 99; López Maya, 1995).

LCR registró sus mayores éxitos organizativos y políticos en Sidor. En 1979, con el líder obrero Andrés Velásquez, alcanzó la mayoría en las elecciones internas de Sutiss, sindicato de trabajadores de la empresa. La reacción de AD no se hizo esperar. En 1981, la Federación de Trabajadores Metalúrgicos (Fetrametal), bajo el control de AD, intervino Sutiss. Se despidieron a algunos activistas sindicales y se ocuparon sus puestos con sindicalistas pertenecientes a AD. Pero, en 1988, en las primeras elecciones internas libres después de la intervención, la corriente de LCR volvió a ganar la mayoría. Ese mismo año también tuvo, por primera vez, un éxito electoral, ingresando

19 En protesta por la decisión del MAS de apoyar la candidatura de Chávez en 1998, Teodoro Petkoff y Pompeo Márquez abandonaron el partido. En 2002, el MAS se volvió a dividir. La mayoría de los diputados se unía a la oposición y el MAS casi pasó a la insignificancia. Bajo la dirección de Didalco Bolívar e Ismael García, la mayoría de la base del MAS fundó el partido Podemos, que apoyaría a Chávez. En 2007 Podemos rompió con Chávez, pero la mayoría de sus miembros y gran parte de sus cargos se unieron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Podemos apoyó al candidato opositor en las elecciones presidenciales y obtuvo un 0,61% de los votos.

con tres diputados al Congreso. De 1989 a 1993, LCR fue vista por el electorado como una alternativa a los partidos establecidos, debido a su proximidad con los movimientos (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 99).

En las elecciones generales de 1993, LCR sobrepasó, por primera vez, al MAS (10,81%: 24 diputados y 5 senadores) obteniendo un 20,68% (40 diputados y 9 senadores). Un año antes, LCR pudo registrar algunos éxitos electorales regionales y locales importantes. En Bolívar había sido reelegido Velásquez con el 63,36%, y además LCR ganó, por segunda vez, diversas administraciones municipales en el estado. A estas pertenecía también el municipio Caroní (la zona industrial de Ciudad Guayana), en el que Clemente Scotto (más adelante alcalde de las fuerzas bolivarianas) recibiría un 68,36%. En el municipio Libertador, el más grande de Caracas, Aristóbulo Istúriz (más tarde ministro de Educación en el gobierno de Chávez) ganó las elecciones como candidato de LCR con un 34,45%. Como en las elecciones de 1989, el reconocimiento de las victorias electorales de LCR se logró a través de una movilización masiva de las bases (López Maya, 1995). Así, LCR pasó a ser la tercera gran fuerza política.

Pero pronto, en las siguientes elecciones de 1995, LCR afrontó grandes pérdidas, como la gobernación de Bolívar. La base, y sobre todo los cuadros medios, veían consumado un fraude electoral y comenzaron a movilizarse para defender el triunfo electoral. Sin embargo, gran parte de la dirección del partido y el candidato a la gobernación, Víctor Moreno, frenaron la movilización y negociaron con AD. A cambio del cese de la movilización, AD reconoció la victoria de LCR en las elecciones

a la alcaldía de Caroní (Medina, 1999: 51-52), pero LCR tuvo que dar por perdidos todos los demás municipios.

En general LCR, al igual que el MAS, comenzó a percibirse como uno más entre “el común” de los partidos. Así, Istúriz perdía las elecciones en el municipio Libertador de Caracas porque la participación electoral en los barrios pobres, en los cuales LCR obtenía la mayor parte de sus votos, no alcanzaba siquiera un 30% (Ramírez Roa, 2003: 147). Según López Maya (1996: 142), las causas de la derrota de LCR serían que, durante el lapso 1993-1995, LCR no acompañó a los diferentes movimientos y tampoco estuvo presente el movimiento que originalmente conformaba la base de LCR: los sindicatos independientes.

LCR tampoco logró adaptar sus estructuras de organización y decisión a las nuevas circunstancias (tamaño de la organización, trabajo concreto, puntos centrales). Por ejemplo, no existía ni una estructura de organización clara ni vías transparentes para la toma de decisiones. Luego de que, ya no fuera posible tomar decisiones consensuales en un círculo pequeño como anteriormente, era cada vez más frecuente que tomara las decisiones un círculo reducido de líderes históricos del partido. En 1997, LCR se dividió. Aproximadamente 80% de los activistas y la gran parte de los dirigentes de todo el país se adhirieron a la recién fundada Patria Para Todos (PPT) (Medina, 1999: 32). El núcleo del PPT se encontraba en la antigua organización de LCR en Catia y en la UCV (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 51).²⁰

20 En 1998 el PPT apoyó la candidatura de Chávez, logró consolidarse política y organizativamente y fue parte de la coalición de gobierno hasta principios del 2010. De LCR, en 2008, no

Algo similar ocurrió con el MAS en la década de los ochenta. Así que las causas de los fracasos radican más en las limitaciones sistémicas de la democracia representativa, que en una incapacidad individual de diputados o del partido. La lógica parlamentaria puso límites a la relación orgánica entre los movimientos organizados y la representación institucional de los partidos de izquierda. Los interminables debates y las negociaciones en el Parlamento condujeron a la autoreferencialidad y a la entropía institucional como características estructurales del sistema (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 81). Los partidos de izquierda también cayeron en las lógicas de negociación y en el objetivo de asegurar la presencia parlamentaria. Muy pronto esto condujo a que la población cuestionara la legitimidad de la representación de los partidos, tanto de derecha como de izquierda, tanto viejos como nuevos, poniéndose en duda la totalidad del sistema parlamentario de la democracia representativa. Ni los partidos burgueses ni los de izquierda pusieron consideración a este fenómeno (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 80-81).

1.1.4 La década de 1980: crisis y protesta

Los años dorados de Venezuela tuvieron su abrupto final en la presidencia de Luis Herrera Campins (Copei, 1979-1984). Con la caída de los precios del petróleo se iniciaba una fase de 20 años de caída económica del país. El breve auge del precio del petróleo, durante la Revolución iraní (1979-1980) y la Guerra

quedaba mucho más que su nombre. Con la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el 2007, la mayoría de los cargos electos del PPT y de la base pasa al PSUV. El PPT rompió con el gobierno en 2010 y ganó el 3,14% de los votos en las elecciones generales de 2010.

del Golfo Pérsico (1991), no pudo reducir el agujero financiero (Azzellini/Wilpert, 2009 b). A causa de la reducción de ingresos y de los pagos de la deuda, entró en crisis el modelo de acumulación y desarrollo basado en la renta petrolera. Junto con una creciente ineficiencia expresada en el clientelismo y la corrupción, se empeoró drásticamente la situación de la mayoría de la población (Contreras Nateras, 2004: 112; Lander, 2007: 67), debido a que en décadas anteriores se había dejado pasar la oportunidad de emprender cambios estructurales en el aparato productivo del país. Los ingresos petroleros se usaban para mantener la estructura clientelar. La deuda externa de Venezuela, de 1970 a 1994, creció de un 9% a un 53% del PIB (Azzellini/Wilpert, 2009 b). Se recortaron los gastos sociales y se agudizó la desigualdad en la distribución de los ingresos. Como consecuencia hubo un alto desempleo, salarios bajos, un empeoramiento del sistema de salud, de la alimentación y de la situación habitacional (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 85).

De 1978 a 1989, el PIB per cápita caía en un 29%²¹. Venezuela fue, en los años noventa, el país con el aumento de desigualdad más significativo a escala mundial. La población pobre pasó del 36% en 1984 al 66% en 1995. En el mismo período, el porcentaje de quienes vivían en pobreza extrema se triplicó de un 11 a un 36% (Roberts, 2003: 80). Pero las élites, directamente conectadas al Estado y al sector petrolero, no se vieron afectadas por esta situación, reforzando la impresión de ser un sector preocupado solo por sus propios intereses. Los partidos y los

21 Maddison, Angus. (1995). *Monitoring the World Economy, 1820-1992* (Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Cooperation and Development). Tabla D-1d. pág. 203. En: Coppedge, 2002: pág. 10.

sindicatos se desacreditaban cada vez más. En 1982, quebró el Banco de los Trabajadores de Venezuela, perteneciente a la CTV, debido a prácticas y negocios oscuros. AD le había posibilitado a la CTV ser propietaria de uno de los mayores bancos del país.

Los decrecientes ingresos petroleros y el aumento de la deuda causaron una fuga masiva de capital. En 1982 dicha fuga alcanzó los ocho mil millones de dólares, aproximadamente un 13% del PIB (Azzellini/Wilpert, 2009 b). En febrero de 1983, el presidente Luis Herrera Campins reaccionaba a esto con la primera devaluación del bolívar, desde hacía 20 años. La consecuencia fue un drástico descenso de los salarios reales y una nueva alza de precios. Los cinturones de miseria alrededor de las ciudades crecían con rapidez (López Maya, 1995; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 94). Sin embargo, hasta mediados de la década de 1980, la crisis aún no se expresaba en el comportamiento electoral de la población (Coppedge, 2002: 10; Molina, 2001: 4; Medina, 1999: 190). La izquierda ya no despertaba confianza; se presentaba a las elecciones presidenciales con cuatro diferentes candidatos, debido a su fragmentación.

Conscientes de la pérdida paulatina de su poder, AD y Copei intentaron ampliar su base integrando a parte de la clase media, de descendencia europea, en las relaciones clientelares; esto se denominó “apertura a la sociedad civil” (véase cap. 2.1.3). Como lo había prometido durante la campaña electoral, el presidente Jaime Lusinchi (AD, 1984-1989) instauró la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copro). Compuesta por representantes de las élites políticas, realizó la redacción de un informe, en el que recomendó una serie de

reformas para la descentralización del sistema, la reducción de la burocracia, la elección directa de los alcaldes en los municipios y de los gobernadores de los estados. Muchas de las propuestas de reforma encontraron un fuerte rechazo de parte de Lusinchi y AD (López Maya, 1995). Las elecciones de 1988 y el Caracazo de 1989 obligaron a algunas reformas, tardías y vacilantes, que no desaparecieron el rechazo de la población al modelo.

Los movimientos populares crecieron y se convirtieron en un factor importante. En las universidades del país surgió un fuerte movimiento estudiantil, sin vinculación política a partidos. Así, se desarrollaron alianzas y nuevas formas de lucha con los estudiantes de las escuelas y la población marginada de los barrios de Caracas y otras ciudades en conjunto. De una de estas alianzas surgió una importante organización del movimiento Desobediencia, donde estaban reunidos exmiembros de la guerrilla de PRV, OR y BR. Este movimiento apoyó las luchas obreras, magisteriales y por los derechos humanos (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 71). A finales de los años ochenta, los movimientos ya habían adoptado formas de protesta violentas. En 1987, y semanas antes del Caracazo, el movimiento estudiantil fue el más importante de la confrontación violenta (López Maya, 2003 b: 213; 2001: 14).

El Estado reaccionó a las protestas con una brutal represión. El 8 de mayo de 1986, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) perpetró la “masacre de Yumare” (estado Yaracuy). Nueve activistas políticos locales fueron detenidos, torturados y luego ejecutados. La Disip los hizo pasar por combatientes de la guerrilla que habrían muerto

en una confrontación armada (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 96). En octubre de 1988, un comando especial, integrado por miembros de distintas fuerzas represivas, asesinó a 15 pescadores en El Amparo, estado Apure, y afirmó que los cadáveres pertenecían a guerrilleros colombianos. Ante una represión extendida, la lucha por el respeto de los derechos humanos se convirtió en un campo de acción importante para la izquierda revolucionaria, con lo que recibió un nuevo impulso.

Mientras que en otros países de Latinoamérica las dictaduras militares se encargaban de la imposición de un modelo económico y social neoliberal, en Venezuela lo hacían gobiernos socialdemócratas. En diciembre de 1988, Carlos Andrés Pérez, de AD, fue electo presidente por segunda vez, con la promesa de un nuevo auge económico y una política antineoliberal. Durando poco la promesa, en el pomposo festejo de su toma de posesión, a principios de 1989, anunció un drástico programa de ajuste estructural, acomodado a las recetas del FMI, que disminuiría el gasto social y reduciría el tamaño del aparato estatal. Las medidas dispararon la inflación a más de un 80% y condujeron a un crecimiento negativo récord del PIB de un 8,3% (Coppedge, 2002: 10-11; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 92-94).

1.1.5 La rebelión antineoliberal del Caracazo

Tanto la población de Venezuela como numerosos autores, concuerdan en que el año de 1989 fue un punto álgido de cambio, una ruptura en la historia de Venezuela (Ellner, 2003 a:19; López Maya, 2003 a: 102). Haciendo referencia a

la concepción de Foucault de la historia “efectiva” (1992: 20), Reinaldo Iturriza explica:

Si el 27F guarda alguna relación de familiaridad con junio de 1848, la Comuna de París, el Mayo Francés o el Cordobazo argentino, es en tanto sucesos que, habiendo trastocado drásticamente las relaciones de fuerza existentes, modificaron el curso de los acontecimientos históricos (2007: 5).

Comenzaba la caída imparable del sistema puntofijista. A finales de 1988, la alta inflación, las dificultades de abastecimiento y un alto índice de encarecimiento, habían conducido a un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez anunció que suspendería las subvenciones y el control de precios para numerosos servicios públicos y mercancías; se liberalizó la paridad monetaria y las tasas de interés, se eliminaron las barreras comerciales, se liberaron los mecanismos para el control de inversiones extranjeras y se dio inicio a un amplio programa de privatización (Roberts, 2003: 85).

El 27 de febrero de 1989 comenzaron protestas espontáneas en Caracas, debido a un aumento de precios del 30% en el transporte público. Un día más tarde, las protestas se extendían a casi todas las ciudades medianas y grandes del país. Caracas está ubicada en un valle largo y estrecho. Mientras que el centro urbano, por falta de espacio, puede crecer solo hacia arriba, las montañas que la rodean, cubiertas de barrios, forman una especie de corona. El 27 de febrero de 1989 bajaban unidos hacia el centro de la ciudad cientos de miles desde los barrios,

en las montañas de Caracas. En el camino hubo saqueos. En la tarde del 28 de febrero, se declaró estado de emergencia y se decretó el toque de queda. Hasta el 4 de marzo, la rebelión fue reprimida brutalmente por el Ejército y la Guardia Nacional. Según informaciones oficiales fueron asesinadas 380 personas, pero las organizaciones de derechos humanos y fuentes no estatales hablan de 1.000 a 10.000 muertos durante la rebelión y los días posteriores. Semanas más tarde, las organizaciones de derechos humanos descubrieron fosas comunes en los barrios (Azzellini/Wilpert, 2009 b; Denis, 2001: 16).

El filósofo y activista político Roland Denis describe la sublevación del siguiente modo:

Su signo fundamental era la de la movilización masiva de los sectores más empobrecidos y la protesta violenta, hecho que rápidamente evolucionó hacia la quema de unidades de transporte, la formación de barricadas y el saqueo de locales comerciales (...) De pronto el cansancio frente al puro desorden motivado por la euforia expropiadora, estimuló la reunión de pequeños grupos que en minutos escogían un determinado proceder para encaminar de forma más contundente y eficiente la acción de la multitud (...) Se convocaba a la acción de solidaridad con el herido, a la distribución equitativa de lo expropiado guiando la movilización hacia un destino sobradamente político (2001: 16-17).

El Caracazo era una rebelión contra las condiciones de vida impuestas por el neoliberalismo. Se reflejaban también los principios del nuevo socialdarwinismo que el paradigma neoliberal propaga en lo sociocultural. Era una “revuelta de

hambrientos” que en el camino se fue organizando y desarrolló modos de acción colectivos y solidarios. En la población se propagaba la conciencia sobre la propia fuerza transformadora. Se puede decir que el Caracazo es el constituyente para los movimientos transformadores que desembocaron en el proceso bolivariano. No obstante, el proceso y sus acontecimientos constitutivos (como por ejemplo las rebeliones cívico-militares de 1992 o la elección de Chávez en 1998) no son consecuencia inevitable del Caracazo, sino que corresponden más bien a una interpretación específica de la coyuntura política inaugurada por este.

Los poderosos estaban visiblemente consternados por la fuerza popular manifestada en la rebelión. El análisis dominante era una condena clasista de las fuerzas que participaron en la rebelión. Iturriza (2007: 6) enumera algunas características de la prensa e intelectuales para hacer referencia a la rebelión. Manuel Caballero las calificaba como “masas enardecidas, inconscientes y primitivas”²²; Luis Salamanca veía bandas “compuestas de delincuentes, malandros, narcotraficantes, ultraizquierdistas marginados”²³; Federico Álvarez veía una “masa informe, presa de un histerismo incontrolado (...) desbordadas hasta el atolondramiento”²⁴; Thamara Nieves “grupos demográficos inéditos”, que “no encajan en la

22 Caballero, Manuel. (1991). “Un lunes rojo y negro”. En: *El poder brujo*. Caracas, pág. 142. En: Iturriza, 2007: 6.

23 Salamanca, Luis. (1989). “27/2/1989: la política por otros medios”. *Politeia*, N° 13, 1989. Instituto de Estudios Políticos, UCV. Caracas. En: Iturriza, 2007: 6.

24 Álvarez, Federico. (1990). “Y de aquellas furias solo quedan palabras”. *Comunicación*, N° 70, segundo trimestre, 1990, Centro Gumilla, Caracas. En: Iturriza, 2007: 6.

clasificación socioeconómica D-E, más bien podrían ser Y-Z”, y “pertenecen al inframundo caraqueño”²⁵ (Iturriza, 2007: 6).

1.1.6 De la polarización social a la polarización política

A partir de 1989, la crisis económico-social devenía en una visible crisis política. El crecimiento económico entre 1990 y 1991 (4,4 y 9,2%), que provenía esencialmente de las privatizaciones masivas y el crecimiento de los precios del petróleo a causa de la Guerra del Golfo, no pudo refrenarla (Azzellini/Wilpert, 2009 b). El ajuste estructural continuó afectando profundamente a la mayoría pobre del país y, tras la breve recuperación, arremetió inmediatamente un fuerte decrecimiento. A la rebelión popular del Caracazo le siguieron dos intentos de golpe de Estado por parte de la izquierda (véase cap. 1.2.4). En 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez era destituido de su cargo, luego de que el Tribunal Superior encontrara indicios suficientes para acusarlo de mal uso de fondos del Estado; mientras, la corrupción tomaba dimensiones cada vez mayores (Loyo, 2002: 28; López Maya, 1995; Molina, 2001: 4). En el aparato jurídico, en las universidades y en todas las instituciones públicas se repartían los puestos según la afiliación partidaria. La práctica de la concertación política se traspasó a la corrupción, impidiendo la persecución penal de los miembros de AD y Copei (Coppedge, 2002: 12). En la opinión pública se presentaban las prácticas corruptas de aquellos que “robaban y dejaban robar a los demás” como “sinónimo de inteligencia y

25 Nieves, Thamara. “Del 27-F hay otra historia que contar”. *El Universal*, Caracas, 1/3/1999. En: Iturriza, 2007: 6.

adaptación” (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 84). AD y Copei ocupaban por completo el espacio público e institucional. Los grupos de interés económicamente poderosos podían comprar su sitio en las estructuras de toma de decisiones (Loyo, 2002: 30). Así, las grandes empresas, e incluso los medios privados, tenían sus “propios diputados”. Ambos partidos afrontaban su pérdida de legitimidad con una desbordante pretensión de controlar a todos los actores políticos y sociales. Los espacios de participación y de acción política fueron cerrados.

No existe un acuerdo en las opiniones sobre el fraude electoral de AD y Copei en Venezuela, hasta 1989. Según una opinión muy extendida, era frecuente que en los sitios de votación se repartieran los votos de los partidos más pequeños (sobre todo los de los partidos de izquierda) entre AD y Copei. Pero a partir de las elecciones de gobernadores y de alcaldes de 1989, no existe duda alguna sobre el fraude electoral. Frente a un engaño evidente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) tuvo que repetir o anular varias elecciones locales ganadas supuestamente por candidatos de AD (López Maya, 1995).

La movilización de las FFAA durante el Caracazo, fortaleció la organización clandestina fundada por Chávez al interior, el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). Dentro de algunos sectores de las FFAA crecía la convicción de que era necesario poner fin al sistema imperante. El 4 de febrero de 1992, jóvenes oficiales condujeron una asonada que no tuvo éxito, pero que otorgó popularidad a Chávez y al

Movimiento Bolivariano, convirtiéndolos en centro de las esperanzas en todo el país.²⁶

Seguido de movilizaciones más intensas, el 27 de noviembre de 1992 hubo una nueva asonada bolivariana en la que participaron organizaciones populares, incluyendo acciones de tipo armado, que también fue sofocada. Sin embargo, a partir del 4 de febrero de 1993, las protestas sociales se transformaron en políticas; es decir, no eran más protestas y exigencias de carácter social, en un sentido estrecho, sino que desarrollaron un sistema político y social alternativo (Denis, 2001: 32; I-AA, 2008).

Chávez y el movimiento bolivariano actuaron como catalizadores de unificación para la fragmentada izquierda y los dispersos movimientos populares. El “chavismo” aparece. En las movilizaciones posteriores se levanta el grito de: “¡Chávez, Chávez!”. El anhelo de un cambio fundamental tuvo nombre y rostro. Andrés Antillano resume la relación entre Chávez (o las rebeliones militares) y los movimientos con sus esperanzas de la siguiente manera:

Cuando entra en crisis el modelo rentista, la derecha intenta la salida neoliberal. Las luchas populares logran frenar esa salida. Sin embargo, los sectores populares eran inorgánicos, dispersos, despolitizados de algún modo, no tenían un proyecto político único, que permitiera plantear una alternativa distinta. Entonces se produce una situación de equilibrio inestable de todo el período que va del año 1989 al año 1998 (...) y fue resuelto

26 Véase los capítulos 2.2.3, 2.2.4, 2.3 y Azzellini/Wilpert, 2009 a; Ramírez Rojas, 2006 y Zago, 1998.

primero por la intervención de los militares patriotas en el 1992 y después por la victoria electoral de Chávez (...) estalla el conflicto y Chávez recupera de alguna manera la bandera del poder popular. Hay allí una deuda mutua donde la insurgencia de los militares y la historia electoral de Chávez no hubieran sido posibles nunca sin el proceso de acumulación y de lucha que se da desde el 1985 hasta el 1998. Por el otro lado a la movilización popular le habría ocurrido quizás como le pasó a la movilización de República Dominicana, que estaba también muy intensa en ese momento pero nunca fue opción de poder (I-AA, 2008).

Las fuerzas inmanentes al sistema no consiguieron imponer públicamente una interpretación negativa del Caracazo. Ante los ojos de la mayoría, sobre todo entre los pobres, la rebelión continuó teniendo justa razón. En el curso de la década de los noventa, las protestas sociales que comenzaron en los años ochenta (particularmente como luchas salariales) se tornaron cada vez más amplias y variadas (López Maya, 2003 b: 219; López Maya/Smilde/Stephany, 2002). Frente al paradigma neoliberal, que no incluía espacio alguno en sus planes para los derechos sociales, una multiplicidad de actores sociales y políticos luchaba por otorgarles un sitio central en la agenda política. Las luchas populares autónomas comenzaron a confluír en un nuevo proyecto político conjunto. De la resistencia iban transformándose en un poder constituyente.

La Asamblea de Barrios en Caracas, los movimientos pedagógicos, las redes culturales de base y de investigación-acción [parecida a la *Conricerca* del operaísmo. Nota del autor], el

cooperativismo alternativo, la violencia liceísta y universitaria, los intentos comunicacionales alternativos, las ofensivas pro derechos humanos, el movimiento indígena y minero, la protesta de los jubilados, la misma interacción de agrupaciones e individuos que supuso la constante actividad conspirativa, son tan solo algunos de los picos más simbólicos de una movilización que, al menos hasta el año 94, no en pocas oportunidades se tornó incontrolable (Denis, 2001: 22).

La Asamblea de Barrios, un foro de 700 u 800 líderes de movimiento en Caracas, jugó un papel fundamental. Era el “agente articulador de las luchas populares” (Denis, 2001: 22).

Para 1992, los movimientos sociales lograron incluir una reforma constitucional en la agenda política, pero AD volvió a truncaarla. Después del Caracazo, las protestas aumentaron en número, intensidad y además transformaron su carácter. Cerrar calles y autopistas con barricadas, tomar edificios públicos e incluso saqueos y quemas se volvieron formas de protestas difundidas.

... la generalización de formas extrainstitucionales de acción colectiva de naturaleza confrontacional y violenta obedece principalmente al vacío de canales de comunicación efectivos entre sociedad y Estado que se ha producido como resultado de la deslegitimación y desinstitucionalización de partidos del *establishment*, y gremios y sindicatos intrínsecamente vinculadas a ellos (López Maya, 2001: 1-2).

El modelo del PPF se agotó sin posibilidad de renovación, ni con las reformas que buscaban una vacilante descentralización de las estructuras políticas y de administración. En las elecciones de 1993, el ocaso del sistema bipartidista se hizo claramente visible en los resultados electorales. El candidato de AD recibió solo un 23,23% y el candidato de Copei 22,11%. Rafael Caldera (1994-1999), fue el primer presidente, desde 1958, que no era candidato de ninguno de los dos partidos tradicionales. Si bien Caldera, anteriormente presidente (1969-1974), fue fundador y dirigente de Copei (colaboró en la redacción del PPF y fue firmante por parte de su partido) ganó las elecciones con un discurso dirigido en contra del sistema, el consenso de Washington y las medidas neoliberales (Loyo, 2002: 28), prometiendo la instauración, vía sufragio, de una Asamblea Constituyente. Su comentario sobre el Caracazo y los levantamientos de 1992 fue: “no se le puede pedir a un pueblo hambreado que se inmole por la democracia que no ha sido capaz de darle de comer”. Su candidatura contó con el apoyo de la alianza electoral Convergencia, y del MAS, MEP y PCV. En diciembre de 1993, con una participación electoral de un 60% (1988: 82%) y bajo una legislación electoral que no preveía segundas vueltas, venció con solo el 30,46% de los votos. De estos, 17,03% correspondía a Convergencia y 10,59% al MAS, que también participó en el gobierno, a diferencia del MEP y el PCV.

Caldera no cumplió sus promesas electorales. Aunque concedió amnistía a los militares alzados en 1992 y difirió con cualquier aspiración de cambio en la sociedad (Fernández Toro, 2005: 307). En 1996, el gobierno de Caldera tomaba un curso

estrictamente neoliberal con la *Agenda Venezuela* (Ellner, 2006 b: 81). Uno de los arquitectos más importantes de tal agenda era Teodoro Petkoff (MAS) que dirigía entonces Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación) como ministro de Planificación (Ellner, 2003 a: 31). La *Agenda* era un programa de ajuste estructural que liberalizaba el tipo de cambio, iniciaba un proceso de privatización de las empresas estatales y de propiedad pública, deshacía el sistema de seguridad social y flexibilizaba la legislación laboral. El programa apuntaba a la recepción de créditos del FMI. Posteriormente, Petkoff fue el principal funcionario gubernamental en las negociaciones crediticias con el FMI. Pompeyo Márquez, antiguo miembro del comité central del PCV y exponente del MAS, trabajaba en el mismo gobierno como ministro de Fronteras. A raíz de su participación en el gobierno, el MAS continuó cayendo en descrédito (Azzellini, 2009 a). A este desprestigio se sumaban los tradicionales AD, Copei y CTV, a través del apoyo que otorgaban a las medidas de la *Agenda Venezuela*, siendo incluso parte de una comisión conjunta para el desmontaje del sistema social.

El sistema político se encontraba en un proceso de desintegración. La combinación de una depauperación de amplias capas de la población debido a la obstrucción del acceso a la participación, condujo a la ampliación de las protestas callejeras de los años noventa. Los sectores más débiles de la sociedad son los que hacen de la protesta callejera el vehículo de sus demandas en Latinoamérica –puesto que, a causa de su distancia a los centros de poder y la falta de mecanismos para la canalización de demandas y quejas, no tienen otros medios a disposición– (Eckstein, 1989: 28). Mientras que, en las décadas

de los setenta y ochenta, se difundía todavía la idea de que la pobreza y la marginación representarían fenómenos pasajeros que desaparecerían con el “desarrollo” progresivo de la sociedad, para los noventa, la mayoría de la población se hacía consciente de que la situación de crisis sería un estado permanente (Lander, 2007 b: 23). La esperanza de una vida mejor había desaparecido.

La conjunción de las experiencias del Caracazo y las rebeliones militares abrieron una perspectiva que fomentó una ruptura radical con el sistema imperante. Las dinámicas de los acontecimientos, las decisiones conscientes y las interpretaciones no ortodoxas de la realidad, contribuyeron a que, en la década de los ochenta y los noventa, sectores de las FFAA, guerrillas y exguerrillas, partidos de izquierda, movimientos y organizaciones de base desarrollaran contactos entre sí; una conspiración y acción conjunta –unas veces concreta y otras solo situándose en el mismo marco referencial imaginario–. De este modo, entre 1992 y 1998, el proyecto de una construcción desde dos lados fue tomando formas concretas en la práctica.²⁷

En la campaña electoral de 1998, Chávez entró en confrontación con las élites políticas tradicionales presentando el

27 Las corrientes científicas hegemónicas casi no perciben este desarrollo. Kornblith (1998) brinda un buen ejemplo de cómo un análisis que se limita a los actores institucionales y élites sociales es incapaz de comprender la realidad: no reconoce el alcance de los acontecimientos del Caracazo y de las asonadas cívico-militares de 1992. El Caracazo es presentado como acontecimiento delictivo espontáneo de las clases bajas (1998: 3) y las rebeliones militares como expresión antidemocrática (1998: 181). Pero incluso científicos que se ocuparon de manera intensiva de los movimientos, aún así, no pudieron percibir la formación de un proyecto alternativo desde abajo. Tal es el caso de Gastón Carvallo, que ve dos posibles salidas para la crisis política: a) régimen autoritario de las fuerzas políticas tradicionales, para lo cual se necesitaría una amenaza unificadora externa; b) la instalación de un régimen autoritario por parte de las élites económicas políticamente menos atadas al sistema (Carvallo, 1995: 142-143).

proyecto: “Una revolución democrática”, que ponía énfasis en cinco puntos:

1) Equilibrio político, cuya propuesta central fue una constituyente para una democracia participativa; 2) Equilibrio social para una sociedad justa; 3) Equilibrio económico basado en una economía humanista, autogestionaria y competitiva; 4) Equilibrio territorial cuyo norte sería la desconcentración para el desarrollo sustentable y 5) Equilibrio mundial que considere la relación entre soberanía y mundialización.

Se plantea el desarrollo social integrado a políticas públicas, globales y sectoriales, con la participación del capital privado y, coyunturalmente, atender la situación de pobreza utilizando “medidas de carácter urgente sustentadas en la red social de instituciones del Estado”.²⁸

Chávez sostenía un discurso antineoliberal, principalmente en contra de la privatización de la empresa petrolera estatal Pdvs (Petróleos de Venezuela S.A.), iniciada en 1997 con la “Ley de privatización” de empresas públicas. La ley obligaba al Estado a emplear “los ingresos netos provenientes de la privatización” en el “rescate de la Deuda Pública” (Ley N° 5199, cap. V, art. 18). Chávez prometió un proceso constituyente dirigido explícitamente a los marginados, a ese *pueblo* que invocaba (e invoca) una y otra vez, directamente. Los sectores adinerados del país lo rechazaban.

28 Chávez Frías, Hugo. (1998). *La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela*. Caracas. Folleto. Págs.6 y 15. En: Ochoa/Rodríguez, 2003: 127.

Para las elecciones el MBR-200 formó la alianza Movimiento V República (MVR), haciendo referencia a una necesaria refundación de la República²⁹. En la alianza participaban muchos izquierdistas que antes no habían tenido afiliación partidista y otras pequeñas organizaciones de izquierda. El MAS (del cual se retiraban Teodoro Petkoff y otros), el PPT, el PCV y algunos partidos más pequeños, apoyaban la candidatura de Chávez. Se unían a ellos muchos movimientos sociales y populares, organizaciones indígenas, de campesinos y de mujeres. Hasta esa fecha el MBR-200, fundado clandestinamente en 1982 como organización cívico-militar y activa como organización política pública a partir de 1994, había rechazado participar en elecciones (véase cap. 1.3.2).

Chávez avanzaba cada vez más en las encuestas electorales, en las que ocupaba lugares remotos a principios del año. Los comicios presidenciales de 1998 coincidían (por primera vez en la historia) con todas las demás elecciones (de Congreso y Senado, municipales y de gobernadores). AD y Copei temían una victoria de las fuerzas “chavistas” en todas. Pocas semanas después de que Chávez empezara a liderar las encuestas, AD y Copei aprovechaban su mayoría en el Congreso para adelantar las elecciones congresales y de gobernadores a noviembre y aplazar las elecciones municipales hasta una fecha no determinada del año siguiente (Parker, 2001: 14). La estrategia dio resultado: aunque la alianza electoral que apoyaba a Chávez registró éxitos importantes, no pudo alcanzar la mayoría en el

29 Sobre el desarrollo ulterior del MVR, que en 2007 fue disuelto para apoyar el naciente PSUV, véase Ellner, 2006 a.

Congreso ganando AD y Copei la mayoría en las elecciones de gobernadores.

AD y Copei, que en las elecciones parlamentarias de 1988 lograron reunir un 74% y en 1993 46% de los votos, para noviembre de 1998 apenas alcanzaron un 36,05%. El MVR, con un 19,88% de los votos, se convirtió en la segunda fuerza partidista. Sus socios MAS y PPT recibieron un 8,9 y 3,4%, respectivamente. Convergencia que en 1993 condujo a la victoria de Caldera, desapareció casi por completo recibiendo apenas un 2,47%. En 1998, la base de votantes de AD y Copei fue ocupada por nuevos partidos derechistas como Proyecto Venezuela (10,49%) (Molina, 2001: 4). La creciente polarización social, combinada con la simultánea desintegración de la estructura representativa tradicional, favoreció la elección de Chávez en diciembre de 1998. Con un abstencionismo electoral de 36,54% (1993: 39,84%), recibió un 56,2% de los votos. Con la toma de posesión del cargo, en febrero de 1999, Chávez puso fin a cuarenta años del dominio bipartidista de AD y Copei.

A partir del año 2000, AD empezó a descomponerse en partidos regionales, cada vez más pequeños, con los que los antiguos líderes partidistas intentaban salvar su poder e influencia. Lo mismo ocurrió con Copei. Que el gobierno de Chávez suprimiera el financiamiento público de los partidos aceleró el desmoronamiento de las viejas organizaciones partidarias. A partir de 1998 se produjeron incontables divisiones, nuevas fundaciones y fusiones en los círculos de oposición. Aquellos partidos que no desaparecieron apenas surgidos, pudieron solo desarrollar una fuerza regional, como el caso de Primero Justicia (PJ) en Caracas y Miranda; Un Nuevo Tiempo (UNT) en

Zulia y el Proyecto Venezuela en Carabobo (Molina, 2001: 4). Así que el gobierno de Chávez no destruyó los viejos partidos, sino que llenó un vacío político.

La causa principal del desvanecimiento de los partidos y sindicatos tradicionales está en factores socioeconómicos. En las décadas de los ochenta y noventa, Venezuela contaba con una de las tasas de crecimiento más bajas del continente (en el espectro negativo), una alta tasa de inflación (que en 1996 alcanzó un 100%) y, en 1990, con la tasa promedio de desempleo urbano más alta del continente, con un 30% (Ellner, 2003 a: 33-34). A finales de la década de los noventa la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza, excluida de la participación política y social, de la educación, la asistencia médica e incluso de un sustento material básico. AD y Copei representaban una porción cada vez más pequeña de la población: en primer término, a la clase alta y partes de la clase media que se venían empobreciendo desde los años ochenta, ambas unidas al modelo rentista del sector petrolero estatal. Así que la polarización social, contrariamente a una fórmula frecuente (Boeckh/Graf, 2003; Castañeda, 2006; Krennerich, 2003; Reul, 2003: 36, 69; Welsch/Werz, 2000; Zimmerling, 2005: 43), no fue resultado del discurso de Chávez. Con Chávez, la polarización social más bien recibió una expresión política.

Con el derrumbe de los partidos burgueses, sus funciones las asumieron otras instancias: los medios (sobre todo los canales privados de TV), la Iglesia y los empresarios (Ellner, 2000). Llenaron el vacío dejado por AD y Copei formulando contenidos y estrategias políticas, estableciendo directrices para el actuar práctico y organizando la movilización para

protestas y acciones (Azzellini, 2007 b: 220-227) e iniciando la campaña contra el proceso de transformación a finales de 1999, en el contexto del referéndum constitucional.

1.2 Los militares, la izquierda armada y el bolivarianismo

El historicismo se contenta con establecer un nexo causal de diversos momentos históricos. Pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. El historiador que parta de ello, dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época. Fundamenta así un concepto de presente como “tiempo-ahora” en el que se han metido esparciéndose astillas del mesiánico.

BENJAMIN, 1973: 191

Para la comprensión de los procesos en Venezuela, es indispensable considerar la historia de los militares, permeados por influencias de izquierda, y de las organizaciones guerrilleras que consideraban la penetración de las FFAA como estrategia hacia una “rebelión cívico-militar”. La organización político-militar que mantuvo más conexiones con las FFAA y desplegó las actividades políticas más poderosas entre los militares fue el PRV³⁰. Entre el (ex) PRV y el MBR-200 existieron estrechas

30 Partido Revolucionario Venezolano. Escindido del PCV en 1965, su nombre hacía referencia y era idéntico al del antecesor del PCV que fuera fundado por exiliados venezolanos marxistas en México en 1926 (Farías, 2006: 157).

conexiones. Numerosos funcionarios del gobierno de Chávez provienen de las estructuras del PRV.³¹

1.2.1 De 1958 a 1969: golpes de derecha, rebeliones militares de izquierda y guerrilla. Los militares como defensores de la democracia pactada

Tras la caída de la dictadura en 1958, la mayor parte de las FFAA se subordinó al poder político, recibiendo a cambio amplias concesiones. En los primeros años hubo aún diversos intentos de golpe de Estado. El primero en julio de 1958, el exministro de Defensa de Pérez Jiménez, general Jesús María Castro León, intentó dar un golpe de Estado en contra de la democratización desde el Ministerio de Defensa. En abril de 1960, con un grupo de hombres armados, ingresó desde Colombia al territorio venezolano y, tomando la capital regional San Cristóbal, intentó un nuevo golpe, pero fue abatido rápidamente. En ambas ocasiones, la población venezolana, encabezada por estudiantes y trabajadores, se manifestó en contra de estos golpes de derecha con paros y huelgas generales. Ante la fuerte resistencia, Castro León no tuvo más que intentar huir a Colombia, pero fue reconocido y retenido por campesinos, y entregado a las autoridades venezolanas (Trinkunas, 2005: 118-119).

31 A no ser que se mencione otra fuente, mucha de la siguiente información acerca de la lucha armada y las rebeliones militares provienen de entrevistas (abiertas) con personas pertenecientes o cercanas a los diferentes movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y 1980, a las que aseguré guardar el anonimato. Con el fin de proteger dichas fuentes, no se mencionarán sus nombres.

Al inicio de la década de los sesenta, Venezuela se caracterizaba por la aparición de la lucha armada y rebeliones militares de izquierda. Desde 1957, la izquierda revolucionaria había penetrado las FFAA (Garrido, 2000: 337-365). Los militares revolucionarios formaron el Frente Militar de Carrera. En 1960, surgieron las Unidades Tácticas de Combate (UTC), unidades de guerrilla urbana, de inspiración cubana. Surgieron de las filas del PCV, del MIR y de otras organizaciones de izquierda, tanto como aparato militar de las mismas, y también sin el conocimiento ni intervención de ellas. Aparecieron en público a partir de 1961, con atentados a empresas de EE.UU. e instalaciones estratégicas. El 8 de abril de 1960, jóvenes activistas de AD, que participaron en la lucha contra la dictadura, fundaron el MIR como partido marxista, con el objetivo de introducir el socialismo mediante una revolución. De 1958 a 1960, AD había excluido a muchos de los jóvenes miembros que se orientaban al socialismo y a la Revolución cubana, que exigían una extensa reforma agraria y criticaban la política interior, exterior, económica y financiera del partido. En marzo de 1961, el III Congreso del PCV, bajo la impresión de las fuertes protestas de octubre y noviembre de 1960 y las operaciones de grupos armados en aumento, decidía emprender la lucha armada para la toma del poder.

Entre 1961 y 1962, el MIR, con numerosos atentados, era la guerrilla más activa de Venezuela (Heydra, 1980: 167-184). Disponía de estructuras urbanas y un frente guerrillero campesino al este del país. El PCV, el MIR y disidentes de URD, cercanos a Fabricio Ojeda (diputado de la URD y expresidente de la Junta Patriótica), formaron juntos las Fuerzas de

Liberación Nacional (FLN), construyendo frentes guerrilleros en las regiones montañosas al este del país, en el estado Mérida (1960), en las montañas de Lara (1961), en las montañas de Falcón y Yaracuy (1962) y en los llanos de Apure (1965).

El 26 de junio de 1961 sucedió el Barcelonazo, un levantamiento en la ciudad de Barcelona, en la costa este del país. Muchos autores describen el acontecimiento como conspiración derechista contra el gobierno de Rómulo Betancourt y AD (Rincón/Fernández, 2006: 74). La versión que presentan Bonilla-Molina/El Troudi (2004) y numerosos testigos de la época, es totalmente distinta: los militares que encabezaron el Barcelonazo eran de orientación nacionalista y antiimperialista; aunque tenían contacto con la asociación de empresarios Fedecámaras y las viejas élites, también trabajaban con el MIR y sectores progresistas de la URD. Tomaron la ciudad y ocuparon un cuartel, pero ninguna otra unidad militar se unió al levantamiento. La rebelión fracasó porque las unidades rebeldes de la Guardia Nacional no pudieron controlar ni las instalaciones militares en La Guaira, ni el aeropuerto de Maiquetía cerca de Caracas. La rebelión estuvo infiltrada desde el momento de su planificación. Betancourt había sido advertido y esperó hasta el momento de su desarrollo (Trinkunas, 2005: 120).

En diciembre de 1961, AD se dividió una vez más y el gobierno AD-Copei perdió la mayoría en el Senado. El 18 de enero de 1962 comenzó una huelga de transporte que devino en una rebelión en todo el país, pero sofocada en dos semanas. El mismo año ocurrieron dos alzamientos militares de izquierda y otras tentativas, fracasadas desde sus inicios.

El 4 de mayo de 1962 tenía lugar el Carupanazo. El Batallón de Infantería de Marina N°3 y el Destacamento N°33 de la Guardia Nacional, ubicados en la ciudad de Carúpano, en Sucre, al este de Venezuela, ocuparon la ciudad haciendo público el manifiesto del Movimiento de Recuperación Democrática (MRD). La rebelión fue reprimida hasta desaparecer, el 6 de mayo. Fueron detenidas más de 400 personas, entre ellas el diputado del PCV, Eloy Torres, junto con otros miembros del PCV y del MIR (Blanco, 1994; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 42-43; Duarte, 2005; Heydra, 1981: 183-186; Trinkunas, 2005: 121-122). Ambas organizaciones participaron con sus unidades en el alzamiento. Estos acontecimientos sirvieron de pretexto a Betancourt para que el 9 de mayo de 1962 prohibiera al PCV y al MIR. Se desencadenó una ola de represión con miles de detenciones. Hasta finales de 1963 se mantuvo una fachada democrática y tanto el MIR como el PCV mantuvieron a sus diputados en el parlamento.

El 2 de junio de 1962, en la ciudad costeña de Puerto Cabello, estado Carabobo, hubo otro alzamiento, El Porteñazo. El batallón de Infantería de Marina, Rafael Urdaneta N°2, se alzó en coordinación con el PCV y su Juventud Comunista de Venezuela (JCV), detuvo a los militares leales al gobierno, ocupó el aeropuerto y gran parte de la ciudad, liberando a 50 guerrilleros detenidos que se unieron a la rebelión. Un día más tarde se sumó a los rebeldes el destructor *Zulia*, de la Marina. La sangrienta represión de las tropas leales al gobierno duró hasta el 4 de junio, bombardeando la ciudad desde mar y cielo. El número de los muertos se estima entre 300 y 400, el de los

heridos en más de 700 (Blanco, 1996; Heydra, 1981: 185; López, 2003; Trinkunas, 2005: 123).

Con este acontecimiento, la infiltración de la izquierda revolucionaria en las FFAA parecía llegar a un final. En los años siguientes, diversos militares de izquierda se unieron a los diferentes movimientos armados (Garrido, 2000: 337-365). Tras los dos alzamientos, el FLN acordó su conversión a Frente de Liberación Nacional-Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FLN-FALN), con la que se construiría un “ejército del pueblo” (Garrido, 2000: 337-365). El 30 de junio de 1962, Fabricio Ojeda anunció en una carta al Congreso la renuncia a su mandato y el ingreso a la lucha armada (Ojeda, 1962). Ojeda asumió el comando de un frente del FLN-FALN en los Andes. El 21 de junio de 1966 fue detenido, torturado y asesinado por el Servicio de Inteligencia de las FFAA (SIFA). La declaración oficial hablaba de un suicidio.

El FALN tuvo varias acciones de gran repercusión. El 18 de enero de 1963, un comando urbano robaba cinco cuadros de Van Gogh, Picasso, Cézanne, Braque y Gauguin en una exposición. El 18 de febrero de 1963, las fuerzas del FALN secuestraban el carguero venezolano *Anzoátegui*; tomando rumbo a Brasil, enviaron mensajes al mundo llamando la atención sobre la situación de los prisioneros políticos en Venezuela. El 24 de agosto, unidades del MIR secuestraron a Alfredo Di Stefano, estrella de fútbol argentino del Real Madrid, soltándolo 54 horas más tarde (Azzellini, 2009 c). Después de que el 29 de septiembre de 1963 el FALN, en un ataque a una línea férrea turística, matara a algunos miembros de la Guardia Nacional, el presidente Betancourt ordenó la detención de los

diputados del MIR y del PCV. En enero de 1964, el MIR y el PCV definían la lucha armada como la tarea central de la izquierda en Venezuela (Heydra, 1980: 174). En ese momento eran más de 1.000 los guerrilleros activos en los diferentes frentes. El 30 de octubre de 1966 fue sofocado, en sus inicios, el último alzamiento militar –hasta el 1992–, con la detención de aproximadamente 100 soldados de la Guardia Nacional, en la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Ramo Verde, en Los Teques, ciudad a las afueras de Caracas.

En esta fase, las FFAA asumieron tareas de desarrollo nacional –aunque en un grado limitado–. Construyeron escuelas, centros de salud, caminos y pistas de vuelo y realizaron pequeñas campañas de alfabetización y vacunación. Con estas tareas intentaban escapar a la imagen pública (y al rol) represivo que tomaron durante la dictadura (Ochoa/Rodríguez, 2003: 120). Las FFAA se presentaban como fuerzas defensoras de la constitucionalidad y la democracia, del sistema capitalista y de la democracia representativa, ante el peligro de un golpe de Estado, tanto de derecha como de izquierda, y las crecientes actividades de la guerrillera (Jacomé, 1998). Con la multiplicidad de rebeliones, intentos de golpe e insubordinaciones, Decarli (2006) califica la supuesta defensa de la democracia como un mito burgués.

En octubre de 1964, en un informe sobre la situación político-militar elaborado por Douglas Bravo y Elías Manuitt, aprobado por el FALN y el comando general del frente guerrillero José Leonardo Chirinos, se conceptualizó, por primera vez, el acercamiento entre sectores revolucionarios de las FFAA y la guerrilla. A corto plazo, la infiltración de las FFAA debería

servir para la obtención de información para la guerrilla. A largo plazo se trataba de reunir, en las filas militares, las fuerzas para una rebelión (Bravo/Manuitt, 1964). A finales de 1965, desde la prisión, una parte de la dirección del PCV (sobre todo Teodoro Petkoff, Guillermo García Ponce y Pompeyo Márquez) criticaban la lucha armada como un error que había conducido a un aislamiento de la izquierda. Parte del MIR apoyaba esta crítica. En el PCV-FALN se levantaron las protestas. Ya entre 1964-1965, el frente bajo la conducción de Douglas Bravo había publicado documentos en que los que diseñaron un camino, específicamente venezolano, hacia el socialismo, rompiendo con posiciones esquemáticas y ortodoxas, que fueron contemplados críticamente por el comité central del PCV (Bravo/Manuitt, 1964; Bravo, 1965). Bravo y otros fueron excluidos del partido. El PCV se dividió y, el 23 de abril 1966, surgió el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). El PRV postulaba el “bolivarianismo revolucionario y emancipador”, haciendo referencia a Bolívar, Rodríguez, Zamora, la herencia indígena y africana de Venezuela, así como la unidad cívico-militar-religiosa, la confluencia de organizaciones de base, militares revolucionarios y cristianos revolucionarios (I-GF, 2006; véase cap. 1.3). Los frentes guerrilleros en Falcón y Lara, entre otros activistas, decidieron continuar la lucha armada como PRV-FALN, bajo la dirección de Douglas Bravo. El PRV-FALN reinició la penetración estratégica de las FFAA logrando organizar a militares importantes que, en la mayoría de los casos, permanecieron en la institución sin ser descubiertos durante toda su carrera. Es poco lo que se sabe sobre las conexiones entre guerrilla y militares en esta fase temprana.

El 24 de julio de 1966 llegaba a la costa de Falcón un barco proveniente de Cuba, con guerrilleros venezolanos formados en la isla y con armamento. En diciembre de 1966 se realizó la primera conferencia del FLN-FALN en la que se reorganizaron y coordinaron las estructuras militares restantes del PRV-FALN y los sectores armados que quedaban del MIR. Las figuras más conocidas de la dirección del PRV eran Douglas Bravo, Francisco Prada, Argelia Josefina Melet, Armando Daza, Diego Salazar y Kléber Ramírez. Ramírez sería, más adelante, uno de los ideólogos centrales del MBR-200. El FALN del PCV cesó sus operaciones en 1966, disolviéndose de manera oficial en febrero de 1969 (Azzellini, 2009 c). El quiebre definitivo del PCV con la lucha armada y con Cuba se consumó en 1967. En 1968, el PCV participó en las elecciones bajo el nombre de UPA (véase cap. 1.1).

El MIR se dividió en dos corrientes: la del MIR “blando” y la del MIR “duro” (Azzellini, 2009 c). La corriente principal del MIR “blando” conservó el nombre de MIR, abandonó la lucha armada y apoyó al MAS en las elecciones de 1973. Poco después se disolvió incorporándose al MAS. En 1968, el MIR “duro”, que continuó con la lucha armada, se dividió en el Frente Guerrillero Antonio José de Sucre (FGAJS), que seguía como guerrilla, y el MIR que se convirtió en partido legal, al que pertenecían los jefes históricos Moisés Moleiro y Américo Martín. Después de varias divisiones más, el último resto del MIR se disolvió en el MAS a finales de los años ochenta. En 1970, el FGAJS se dividió en dos grandes corrientes. Una formaba la guerrilla Bandera

Roja (BR)³², de orientación maoísta-estalinista; la otra formó la guerrilla urbana Organización de Revolucionarios (OR) y, en 1973, la organización política legal Liga Socialista (LS)³³, persiguiendo una combinación de lucha armada y acción política legal (Azzellini, 2009 b).

El PRV-FALN permaneció activo hasta comienzos de la década de los ochenta. Principalmente en la primera mitad de los años setenta realizó numerosas acciones armadas; algunas de ellas a través de la Unidad Móvil Urbana, fundada a finales de los años sesenta. Esta unidad existió hasta los años ochenta, concentrándose finalmente en acciones de financiamiento (por ejemplo, asaltos de banco). Fue dirigida por Armando Daza, el último de los guerrilleros de los años sesenta que depuso las

32 En 1976, el frente guerrillero de BR y su dirección se separaban de BR y fundaban la BR Marxista-Leninista (BR-ML), que se disolvió poco tiempo después tras golpes represivos. Los cuadros restantes reconstruyeron las estructuras militares, las cuales en agosto de 1977 liberaron diversos miembros detenidos y empezaron a desarrollar intensas actividades militares, incluyendo ocupaciones de localidades y victoriosos enfrentamientos con las FFAA. En octubre de 1982 tiene lugar la masacre de Cantaura. Gran parte de los combatientes de BR se habían reunido, desarmados, en un campamento en el estado Anzoátegui. El ejército los bombardeó desde el aire y tendió, con 1.500 militares y guardias nacionales, emboscadas, asesinando a 23 guerrilleros. Tras este hecho, BR declaraba una tregua unilateral y no realizó ninguna acción armada más hasta la entrega oficial de las armas en 1994. En 1992 BR apoyó los levantamientos cívico-militares. Gran parte de las organizaciones cercanas a BR se disolvieron en organizaciones bolivarianas. BR rechazó a Chávez como “falso socialista”, participó en la alianza opositora Coordinadora Democrática con AD y Copei, apoyó el golpe de abril de 2002 y el paro empresarial 2002/2003 y es ya un grupo reducido.

33 La Liga Socialista se definía como marxista-leninista-maoísta, adoptando paulatinamente un marxismo menos dogmático. En la década de 1970 ejercía sobre todo influencia en el sector estudiantil. Tras el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehaus en 1976, a quien los Grupos de Comandos Revolucionarios (GCR) -una escisión de la OR- acusaban de trabajar para la CIA, las fuerzas represivas desataron una brutal campaña contra LS y OR. Fueron asesinados el fundador de la LS, Jorge Rodríguez (padre de Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas desde 2009), y otros cuadros del partido. La LS, que durante la época anterior al secuestro había ganado bastante fuerza, fue debilitada. Para OR la represión llevó a la disolución en los años siguientes. En 1983 y 1988 la LS participó con poco éxito en las elecciones; en 1998 apoyó la candidatura de Chávez. En 2007 se disolvió para integrarse al PSUV.

armas. En 1983, después de un asalto de banco, Daza se exilió en Cuba, volviendo a Caracas en 1999 (Azzellini, 2009 b).

Para entonces ya estaba muy extendida la idea de una liberación continental, como herencia de Simón Bolívar, en la izquierda venezolana. A pesar del cese de la lucha armada se formaba la Brigada Internacionalista Simón Bolívar que, a finales de la década de 1970, apoyó militarmente la lucha de liberación en Nicaragua (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 67). Hubo mucha solidaridad armada internacional –sobre todo del PRV– con movimientos de otros países latinoamericanos, además de Nicaragua, en El Salvador y Colombia.

1.2.2 Del boom petrolero a la crisis

Con la toma de poder de Rafael Caldera (Copei) en 1969, terminó el auge de la lucha guerrillera. Alrededor de trescientos combatientes, principalmente del PCV y del MIR, aceptaron las ofertas de una remisión de la pena o del exilio y se retiraban de la lucha armada. El PCV y el MIR volvieron a ser legalizados como partidos. Con esto también cambiaba el rol de los militares³⁴. Caldera acentuaba la colaboración de los militares en el desarrollo nacional y la profesionalización de las FFAA. Debido a la estructura económica venezolana, con una gran proporción de empresas estatales, la participación de los militares en el desarrollo nacional significaba formarlos para que asumieran funciones en ellas (Ochoa/Rodríguez, 2003: 121; Trinkunas, 2005: 148-155).

34 Para más detalles sobre el rol de los militares, véase: Müller Rojas, 1992; Otaiza, 2003; Trinkunas, 2005.

En 1971, con el Plan Andrés Bello, la escuela militar, que poseía el rango de escuela secundaria, adquirió el rango universitario y pasó a ser academia militar (Medina, 2003: 106-107). Los militares visitaban seminarios en universidades públicas y muchos de los graduados, al finalizar la academia militar, complementaban sus estudios en ciclos de maestría y doctorado en universidades públicas (Harnecker, 2003 b: 3). Las posibilidades de estudio de los militares, así como los contenidos de sus planes de formación, se ampliaron con contenidos teóricos, económicos, sociopolíticos y geoestratégicos. Los militares eran formados en una perspectiva con la que pudieran interpretar la realidad del país y participar en la labor de su desarrollo. Con el *boom* petrolero, a partir de 1973, se invirtió aún más en la formación de los militares. Surgieron numerosos centros de formación y academias militares y, adicionalmente, se formaban militares en todas las universidades públicas. En 1978, la mitad de los estudiantes en la Maestría sobre Empresas Públicas en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública del Ministerio de Finanzas eran miembros de las FFAA (Ochoa/Rodríguez, 2003: 122).

Este desarrollo marcó una diferencia importante entre los militares venezolanos y la mayor parte de los militares del continente latinoamericano: los militares venezolanos no eran enviados a instalaciones de formación militar estadounidenses, salvo excepciones (Hellinger, 2003: 60; López Maya, 2003 a: 101) y, sobre todo, no se los enviaba más a la tristemente célebre School of Americas (Harnecker, 2002: 9; 2003 b: 3), por la cual han pasado casi todos los dictadores, torturadores y jefes de escuadrones de la muerte de Latinoamérica.

El *boom* petrolero, a partir de 1973, puso fin a la orientación de la sustitución de importaciones de la política económica y fomentó un modelo de acumulación basado en las empresas del Estado y orientado hacia el mercado internacional (Ochoa/Rodríguez, 2003: 121). En esta fase, los nexos entre las élites políticas, económicas y militares se volvieron aún más estrechos. El aumento de la corrupción y las relaciones clientelares entre las élites de los partidos y de las FFAA que acompañaban el modelo del petrodólar, causaba una creciente distancia entre élites y la base, tanto en la sociedad en general como en las FFAA en particular. Esto se expresaba en la aparición de dos diferentes fracciones dentro de las FFAA: por un lado, los militares de alto rango, por el otro, los oficiales de rango medio. Los ascensos dentro de las FFAA —a cargo de la Comisión Parlamentaria de Defensa controlada por AD y Copei— ocurrían a partir de lineamientos de lealtad política partidista y de criterios clientelar-financieros. A partir de 1979, estas redes clientelares, que representaban verdaderas mafias, eran de un peso determinante en las FFAA (Manrique, 2001: 7; Müller Rojas, 1992: 70-71).

Las capas media y alta, disponiendo de aumentos en el ingreso por el *boom* petrolero, enviaban sus hijos a universidades privadas o directamente al extranjero, particularmente a EE.UU. Esta tendencia fue reforzada por la reforma en la formación militar. La academia militar ya no garantizaba más una formación de élites como esperaban las clases altas y el estudio en una universidad pública no correspondía a su estatus. A mediano plazo, este desarrollo también cambió la composición social de los militares y condujo a otra diferencia

fundamental con las FFAA de otros países de Latinoamérica: excepto la Marina, gran parte de los miembros de las FFAA venezolanas que entraron en funciones a partir de 1971 pertenecen, incluso en los rangos más altos, a las capas más bajas de la sociedad (Harnecker 2003 a: 4; Zago 1998: 40-41).

Chávez se presentó al servicio militar para poder ingresar a los estudios universitarios. En 1975 terminó un estudio de Ingeniería; de 1980 a 1985 asumió diferentes tareas en la academia militar –director del departamento de cultura, entre otras– y hasta 1990 cursó estudios de Maestría en Ciencias Políticas. Él y sus compañeros del MBR-200 pertenecen a la primera generación de oficiales que estudiaron de 1971 a 1975 en la academia militar reformada (Hellinger, 2003: 60; Ochoa/Rodríguez, 2003: 125). La apertura de la academia y el contacto con el mundo académico causaban una impresión duradera. Los aspirantes a oficiales compartían con los demás estudiantes la atmósfera rebelde en las universidades. Ahora, los jóvenes graduados de las FFAA estaban mejor formados, eran más profesionales y más críticos que sus superiores (Parker, 2001: 8).

La derrota política y militar de la lucha armada y los conflictos en el campo del “socialismo real” (Vietnam-Cambodia, URSS-China y otros) condujo a que gran parte de la izquierda venezolana, de finales de los años sesenta y principios de los setenta, cuestionara el dogmatismo, la falta de un anclaje en las luchas populares cotidianas, los modelos importados, el concepto de “foco” y el dogmatismo y autoritarismo de los partidos comunistas. Las organizaciones que seguían en la lucha armada (PRV, OR, BR) también ponían el acento en la organización y el apoyo de huelgas y luchas sociales. La

mayoría de los cuadros no actuaban militarmente, sino en la organización política, acompañando a los movimientos populares (el PRV con *Ruptura*, la OR con la LS, BR con los Comités de Luchas Populares) (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 45, 70).

La concepción más influyente fue la del PRV que, en 1974, había fundado la revista *Ruptura* y una editorial del mismo nombre, en torno a la cual creció un amplio movimiento. A *Ruptura* se unieron muchos excomunistas que rompieron con el PCV y que en parte provenían del antiguo PRV, el precursor del PCV. También participaban muchos artistas e intelectuales. *Ruptura* logró transformarse en un punto de referencia importante en el sector cultural. Desarrolló un amplio trabajo de base en los barrios y construyó “frentes” de campesinos, obreros y estudiantes. Al mismo tiempo continuó con las actividades guerrilleras del PRV, como la fuga de 23 prisioneros políticos del Cuartel de San Carlos, en Caracas, el 18 de enero de 1975 (Azzellini, 2009 b).

En lo político, *Ruptura* acometía contra una simple adopción de conceptos marxista-leninistas de otros países y, en continuidad con el PRV, buscaba su orientación en Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Proclamando un “marxismo bolivariano herético” (Farías, 2006: 154), postulando una ruptura con los modelos de izquierda existentes y la civilización capitalista, basándose en la democracia directa y la autogestión (discutiendo, entre otros, los textos del comunista consejista holandés Anton Pannekoek). Con el tiempo se mostró como una virtud de *Ruptura* lo que los comunistas tradicionales habían criticado como falacia: la ausencia de una noción exacta en cuanto al Estado por construir. La idea de que

el nuevo Estado se debe definir en un proceso desde abajo es inaugural para el amplio marco de referencia del bolivarianismo. *Ruptura* propagó con ahínco la rebelión cívico-militar como concepción revolucionaria, retomando, a partir de 1977, la penetración de las FFAA como una estrategia central. El PRV se concentró en la labor de convencer a los militares activos para integrarlos en la organización de una rebelión cívico-militar (Azzellini, 2009 b). Entre los militares que se unieron al PRV también estaba Chávez (véase cap. 1.3).

El exitoso trabajo de base de *Ruptura* condujo a una gran expansión de los movimientos, lo que, de 1978 a 1979, encendió un intenso debate dentro del PRV: en vista de esta expansión, algunos activistas de los movimientos cuestionaban la existencia del aparato militar. Se produjo una división. Una parte del PRV, cercana a Alí Rodríguez, abandonó *Ruptura* para fundar la organización política legal Tendencia Revolucionaria (TR). Previamente se habían sostenido conversaciones para una amnistía y legalización con el presidente Luis Herrera. TR se unía a la LCR (hasta ese momento pequeña). La afluencia de cuadros de TR, políticamente formados y con un anclaje en el trabajo de base, sentó el fundamento para los éxitos electorales de LCR en los años siguientes. En el PRV se quedó la corriente cercana a Douglas Bravo. En 1979, en el marco de la crisis del PRV, se desintegró *Ruptura*. Algunos frentes y redes alrededor de la cuestión de la construcción comunitaria subsistieron.

1.2.3 Crisis y organización cívico-militar

La crisis política, social y económica manifestada a principios de la década de los ochenta, también deterioró la calidad de vida de los miembros de las FFAA. Entre las cuatro fuerzas que las componían (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional) se desató una pelea por los escasos recursos. Sumado a la insatisfacción por la desbordante corrupción y el clientelismo, así como por el cambio del rol de los militares, esto condujo a una crisis en las FFAA y la concepción que estas tenían de sí mismas. Esta crisis se traducía en la aparición de un proyecto político propio en un sector de las FFAA (Ochoa/Rodríguez, 2003: 122).

Entre los enlaces del PRV en las FFAA figuraba, desde la década de los setenta, William Izarra, miembro de la Aviación y uno de los ideólogos del movimiento bolivariano. Al principio Izarra fundó Revolución 83 (R-83), y más tarde la Alianza Revolucionaria de Militares Activos (ARMA). Otro grupo se formó con Francisco Arias Cárdenas. Finalmente, un grupo de jóvenes oficiales de rango medio –Jesús Urdaneta Hernández, Felipe Acosta Carles, Raúl Isaías Baduel y Hugo Chávez– fundaron, el 17 de diciembre de 1982 (aniversario de la muerte de Bolívar), el Ejército Bolivariano 2000 (EB-2000) o Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR), como célula clandestina en las FFAA (Díaz Rangel, 2006: 51). Después del Caracazo la organización adoptaba el nombre de MBR-200 (Harnecker, 2002: 12). Las ideas políticas eran de izquierda y de orientación nacionalista. El EBR tenía un concepto clásico de la toma de poder,

planeado para el año 1999 (Azzellini/Wilpert, 2009 a; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 78).

En el transcurso de la década de los ochenta, la organización adquiriría un carácter cívico-militar. Se intensificaban los contactos con exguerrilleros y guerrilleras, sobre todo del PRV, y se entablaban contactos con numerosos intelectuales y activistas no organizados políticamente (López Maya, 2003 a: 100-101). Tras la consolidación de estas estructuras en las FFAA, la dirección de la iniciativa de alianza cívico-militar pasó de los exguerrilleros Douglas Bravo y Kléber Ramírez al MBR-200 (Azzellini/Wilpert, 2009 a). Así, el rol central de los militares en el gobierno de Chávez tiene su origen en el desarrollo del proyecto político dentro de las FFAA y no en su origen militar.

La nueva orientación de las FFAA en Latinoamérica a partir de los años ochenta, que surte efecto también en Venezuela, profundiza las contradicciones que se han transformado en un proyecto político: por un lado, la militarización de la lucha anti-droga significa el envío de tropas a regiones distantes, sobre todo fronterizas, y hace de cada civil un enemigo potencial; por otro lado, las FFAA son usadas para imponer militarmente las políticas neoliberales a la población.

A principios de la década de 1980, ya se habían fusionado los Grupos de Comandos Revolucionarios (GCR), dirigidos por Carlos Lanz³⁵, con las corrientes guevaristas en torno a José Pinto, del barrio 23 de Enero, en Caracas, y habían formado el

35 Carlos Lanz pertenecía antiguamente a la OR.

Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT)³⁶. Ni la duración, ni la capacidad de organización del MRT fueron de gran importancia. No obstante, en las décadas siguientes, su base teórica se transformó en un punto de partida importante para una multiplicidad de grupos e iniciativas (Azzellini, 2009 b). El MRT se refería a Bolívar, Martí, Miranda, la resistencia indígena y afrovenezolana y adoptaba la concepción de la alianza cívico-militar así como de la revolución continental del PRV. El MRT no se consideraba vanguardia, hacía referencia a las prácticas de contracultura, y declaraba la necesidad de trabajar de manera intensa en una alianza entre las diferentes formas de resistencia y contradicciones (género, minorías sexuales, derechos humanos, racismo y otros). En ruptura con el leninismo, se estudiaba a Luxemburgo, Trotski, las concepciones consejistas y las experiencias de autogestión para desarrollar un socialismo libertario. Criticaban la concepción leninista de centralismo democrático y postulaban la necesidad de organizaciones horizontales. En lugar de trabajar con sindicatos y representaciones estudiantiles oficiales, trabajaban con consejos obreros y con los Consejos Estudiantiles Revolucionarios (CER). No postulaban una legalidad plena ni una clandestinidad absoluta. Basándose en el análisis específico del capitalismo en Venezuela, y de los diferentes conceptos de la lucha armada, el desarrollo comenzaba en el plano teórico y práctico de la línea político-militar de masas. Según este concepto, era el poder combativo del pueblo organizado el que

36 A partir de las estructuras armadas del MRT se formaría luego el Movimiento Revolucionario Tupamaro, también conocido como Tupamaros. Desde el barrio 23 de Enero, en Caracas, la organización se expandió a todo el país. Desde 2004 se presenta a las elecciones como partido, parte de las alianzas en apoyo a Chávez, recibiendo menos de un 1%.

conducía a la revolución social y, conforme a esto, el combate cotidiano no se limitaba a la violencia armada. Se postulaba la construcción de milicias urbanas móviles que habían de asumir tanto tareas pacífico-legales, como también violenta-clandestinas (Azzellini, 2009 b; Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 67-72).

En los años ochenta, la situación social y la creciente represión condujeron a un renacimiento de los grupos armados. Surgían en los barrios populares, como forma comunitaria de organización, para la autodefensa contra los abusos de la policía o de la guardia nacional y para combatir la economía de la droga que, frecuentemente, trabajaba mano en mano con la policía³⁷ (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 72). El PRV, por su parte, se disolvió en 1983. De la corriente de Douglas Bravo surgió, en 1985, el PRV-Tercer Camino como organización política legal y con trabajo de base en barrios, fábricas y universidades, aunque también disponía de estructuras clandestinas (entrarían en acción en las rebeliones cívico-militares de 1992).

En 1986, eran fundadas –esencialmente, como guerrilla rural– las Fuerzas Bolivarianas de Liberación-Ejército Libertador (FBL-EL). Su objetivo no era la toma de poder, sino la construcción del poder popular. Su existencia saldría a la luz hasta 1992. Al momento de su fundación, las FBL-EL no disponían de contactos con guerrilleros de las décadas los sesenta y setenta, y en 1992 tampoco tenían contacto con los militares

37 Aún en 2003, cuando en Caracas la Policía Metropolitana estaba bajo el mando de la oposición, pude observar cómo en el 23 de Enero el microtráfico se realizaba con mayor tranquilidad en torno a los módulos de la PM.

rebeldes³⁸. Hasta el día de hoy, las FBL-EL continúan existiendo como organización guerrillera. Oficialmente, no actúan militarmente y apoyan a Chávez y al proceso bolivariano; sin embargo, postulan la necesidad de una organización popular armada, de carácter independiente.

1.2.4 *Las rebeliones cívico-militares de 1992*

Dentro de las FFAA creció el descontento después del Caracazo. Era la primera vez que los militares venezolanos habían participado en una masacre de la población. Los ejecutores habían sido básicamente los rangos medios y, en palabras de Chávez, lo cometido fue “como un *boomerang* para la mayoría de ellos, que sintieron vergüenza de lo que habían hecho” (Blanco, 1998: 183). Era grande el rechazo a la acción como fuerza represiva. Frente a la situación de una población hambrienta, que saqueaba supermercados, algunos militares se dieron a la tarea de introducir orden en la situación para permitir una distribución más uniforme de los alimentos (Harnecker, 2003 b: 4). La afluencia del MBR-200 era enorme.

La insatisfacción en las FFAA desembocó en dos fallidos intentos de levantamientos cívico-militares bolivarianos, en febrero y noviembre de 1992. La experiencia del Caracazo y la presión de organizaciones civiles, condujo a que el MBR-200 adelantara, en 1992, la rebelión que originalmente había sido planeada para el año 2000. El intento se realizó el 4 de febrero, fracasando militarmente, pues no lograron tomar preso al

38 Entrevista con el comandante Jerónimo Paz, de las FBL-EL. 1/2/2005. En: <http://www.cedema.org/ver.php?id=16>; versión en Internet: 1/12/2006.

presidente, ni conquistar posiciones militares importantes en Caracas. Gracias a la delación de un capitán de la academia militar, el gobierno ya sabía de los planes rebeldes (Díaz Rangel, 2006: 17). En otros estados tuvieron más éxito. Bajo la dirección de Francisco Arias Cárdenas, tomaron el control de Maracaibo (capital del estado Zulia), del gobierno regional, los campos petroleros y el aeropuerto central. Militares levantados lograron tomar la base aérea La Carlota, al centro de Caracas, y los cuarteles de Aragua y Valencia. En Valencia, estado Carabobo, incluso se repartieron armas entre la población civil. Sin embargo, en muchos otros sitios, estratégicamente importantes, los rebeldes tuvieron que rendirse tras enfrentamientos armados, relativamente breves, con las tropas leales. Fueron detenidos más de 1.000 militares que habían participado en el alzamiento. Catorce militares murieron, fusilados la mayoría, después de haberse rendido (Azzellini/Wilpert, 2009 a; López Maya, 2003 a: 104).³⁹

Chávez logró ocupar el Museo Histórico Militar en Caracas, que debía fungir como central de comunicaciones del alzamiento. Sin embargo, inesperadamente, no encontraron allí el equipo técnico necesario. Cuando se hacía evidente que el golpe de Estado estaba condenado a fracasar, Chávez propuso negociar su rendición. Como condición pedía recibir la posibilidad de llamar a sus compañeros de armas a seguir su ejemplo, por medio de un breve discurso televisivo. Habló setenta y tres segundos, agradeciendo a los soldados que participaron en la sublevación se responsabilizó del movimiento militar

39 Sobre el alzamiento cívico-militar del 4 de febrero véase Ramírez Rojas, 2006 y Zago, 1998.

bolivariano y su fracaso y declaró que los objetivos a los cuales se aspiraba no se habían logrado “por ahora”. Era tiempo de reflexionar y deponer las armas (Azzellini/Wilpert, 2009 a; Díaz Rangel, 2006: 17).

La rebelión había sido organizada como alzamiento cívico-militar, en asociación con movimientos de base y organizaciones políticas. Más allá de sectores provenientes de la lucha armada, participaron también el MEP y una parte de LCR (Medina, 1999: 41-45). Sin que fueran necesarias más explicaciones, el intento rebelde encontró una inmensa simpatía entre los movimientos populares y en la población empobrecida (Müller Rojas, 1992: 11-12). Los que estaban a la cabeza del alzamiento eran oficiales jóvenes; al igual que en el Caracazo, la base se rebelaba con toda su fuerza contra una dirección deslegitimada, haciendo visible un antagonismo. Chávez y los demás pertenecían a las clases sociales bajas. Además, su discurso no circulaba alrededor del orden, sino de la libertad. Asumiendo la responsabilidad del levantamiento fracasado, en un país en el que, durante décadas, nadie había asumido públicamente responsabilidad alguna, y además sin desviarse del proyecto político proclamado (la expresión “por ahora”, con referencia a los objetivos no logrados, despertaba la amplia esperanza de que la lucha apenas había comenzado), Chávez se convertía en una indiscutible figura de liderazgo y de orientación para gran parte de la población y los movimientos populares (Denis, 2001: 31; Hellinger, 2003: 49). Sin embargo, ya que entre los rebeldes reinaba mucha confusión respecto a cómo se debería actuar, una vez finalizado el alzamiento, la coyuntura

política favorable tras el intento no fue aprovechada (Ramírez Rojas, 2006: 32-33).

El 27 de noviembre de 1992 fracasó otro alzamiento cívico-militar, dirigido por militares de alto rango; especialmente, el almirante Hernán Grueber Odreman (Marina) y el general Francisco Visconti (Aviación). Nuevamente, la insurgencia fue descubierta con anticipación. Apenas llegó el mediodía y ya había sido sofocada. Pero los enfrentamientos fueron más intensos y tuvieron un saldo de trescientos muertos (Azzellini/Wilpert, 2009 a; Medina, 1999: 130-131). Fue también mucho mayor la participación de las milicias de los barrios.

Con la llegada de Caldera a la presidencia y la amnistía decretada por él para los militares que participaron en el alzamiento de 1994, comenzó la construcción del MBR-200, como organización de masas de estructuras horizontales, en todo el país. A nivel local se formaron Círculos Bolivarianos, donde se realizaban asambleas frecuentes para discutir alternativas sociales concretas. En el terreno local, los resultados eran recolectados por la Coordinadora Bolivariana de Municipios. Existían además coordinaciones regionales, la Coordinadora Nacional y la Dirección Nacional. Los resultados de las discusiones en los círculos formaron la base del Proyecto Nacional Simón Bolívar, el proyecto de sociedad del MBR-200 (López Maya, 1996: 147). En 1996 ya existían en todo el país estas organizaciones locales y regionales. Las decisiones se tomaban en consenso (como la decisión de no participar en las elecciones regionales de 1995). En un Congreso Nacional, en abril de 1997, el MBR-200 decidió participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1998, pues se consideraban con un

significado crucial para la organización y que de no participar se debilitaría (López Maya, 2003 a: 109; Parker, 2001: 13). Para esto se fundó la alianza MVR (Movimiento V República), debido a que está prohibido presentarse a las elecciones usando el nombre de Bolívar.

1.3 *El bolivarianismo*

Una de las características singulares de la Revolución Bolivariana (...) es que no existe propiamente una vanguardia que lleve adelante la gestión política revolucionaria, sino un amplio frente social integrado por diversos movimientos, unos organizados como partidos políticos y otros como un sistema de colectivos comunitarios nucleados alrededor de los Círculos Bolivarianos y de las diversas misiones y planes sociales, los cuales agrupan por lo menos a 60% de los venezolanos. Ello permite que el proceso de reforma que comienza a estimular los cambios cualitativos pueda llevarse a cabo dentro de un contexto democrático dinamizado por la participación protagónica de los diferentes colectivos.

SANOJA/VARGAS-ÁRENAS, 2004

El bolivarianismo no posee un marco teórico o un programa claramente definido. Tiene que ser considerado como un *trabajo en progreso*, una filosofía de la práctica nunca terminada, en la que juegan un rol central valores como la libertad, la igualdad social, la solidaridad, la autonomía y el antiimperialismo. Es un proyecto político, ideológico, estratégico y social, que se encuentra en permanente transformación y que, por tanto, no puede ser fijado como una doctrina (Lander, 2009).

Precisamente, en este cambio y desarrollo constantes radica uno de los pilares fuertes: la apertura del proyecto⁴⁰. Incluso el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Minci, 2007) contiene más orientaciones de tipo ético que certezas ideológicas. La Nueva Ética Socialista propone una “refundación de la nación venezolana” que encuentra su referente en “la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar” (Minci, 2007: 5).

Al principio del gobierno de Chávez aún se postulaba una “tercera vía”, aunque siempre existió cierta vaguedad en cuanto a su contenido. A veces parecía ser una “tercera vía” a lo Tony Blair (Díaz Rangel, 2006: 202), y otras veces parecía una vía distinta a los modelos tradicionales del socialismo real o la democracia liberal, que abre otra opción basada en las raíces culturales y experiencias específicas de Venezuela, y también de Latinoamérica (I-EL, 2007). La extraordinaria movilización de masas de los movimientos de base durante el golpe de Estado de 2002 y durante el *lockout* empresarial 2002/2003 radicalizaron, desde abajo, el proceso de transformación (I-EL, 2007) que, en lo sucesivo, se situaría cada vez más en un contexto socialista.

40 La apertura del proyecto político hace posible que retorne a él gente que durante un tiempo se encontraba en la oposición. Este es el caso de Arias Cárdenas, que se presentó a las elecciones presidenciales del 2000 como rival de Chávez. Arias Cárdenas venía de las filas del MBR-200, participó junto a Chávez en el alzamiento, rompiendo las relaciones durante las elecciones presidenciales de 1998. En 2006 volvió con su partido a una alianza con Chávez, siendo nombrado como embajador de Venezuela ante la ONU.

Bonilla-Molina y El Troudi nombran al total de las fuerzas que alimentan el proceso como *corriente histórica por el cambio* (2004: 104); a la que pertenecen los diversos enfoques emancipadores de las décadas pasadas. La confluencia de las diferentes corrientes ocurrió a finales de los años ochenta y principios de los noventa, alrededor de la idea de la revolución como proceso, expresada en la concepción del poder constituyente (véase cap. 2.3). A partir del I Encuentro de la Corriente Histórica en el año 1989, tomaba forma una concepción de *participación integral*, a la que se llamó *democracia de la calle*, para distinguirla de la democracia representativa y formal (Lanz Rodríguez, 2007: 20). Su referente estaba en la consolidación de la *soberanía popular* y el poder constituyente. Se trataba de reforzar la “participación integral en los asuntos públicos, elaborando, planificando, ejecutando y evaluando propuestas”. Los puntos angulares para la caracterización de la *democracia de la calle* eran los siguientes: “elección directa de todos los cargos, rendición de cuenta, mandatos revocables, delegación funcional, rotación de cargos, libre juego de las ideas (investigación y debate se asumen como diálogo de saberes, reconociendo las diferencias como normales, lo que requiere crear una nueva cultura del debate y de una comunicación libre), democracia del saber (libre acceso al conocimiento)”. Lanz constata que existe una amplia concordancia con la Constitución elaborada en 1999 (Lanz Rodríguez, 2007 a: 21-22). También en los primeros documentos del MBR-200 era uno de los dos ejes centrales la lucha por una *democracia popular*, en los planos económico, social y político, imponiendo el protagonismo popular (Parker, 2001: 13).

Básicamente, la idea del bolivarianismo consiste en tomar como puntos de partida las diversas experiencias de luchas emancipadoras locales, regionales, nacionales, continentales y la propia historia de resistencia. Un elemento central está representado en el concepto del “árbol de las tres raíces” (Chávez, 2007 c; Díaz Rangel, 2006: 54), en referencia a Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora (aunque el término es utilizado por primera vez en el círculo fundacional del EBR, a mediados de los años ochenta). Esta referencia, en su interpretación progresista y revolucionaria, surge a mediados de la década de 1960, en la que se sustentaron organizaciones como el PRV. Paulatinamente, el concepto también es adoptado por movimientos sociales y organizaciones políticas, así como por las corrientes progresistas dentro de las FFAA. Kléber Ramírez, del PRV, se convierte en ideólogo central del MBR-200 (Garrido, 2002: 5). Con el tiempo, MBR-200 desarrolló detalladas bases ideológicas y programáticas, orientaciones organizativas, tácticas y estratégicas, así como posiciones respecto a los más diversos temas (López Maya, 1996: 145). El trabajo programático-ideológico del MBR-200 corresponde a uno de los pilares más importantes del bolivarianismo.

Otro elemento central en el bolivarianismo es la “unidad cívico-militar” o “la insurrección combinada” –como se nombra por primera vez al concepto en dos textos (Bravo/Manuitt, 1964; Bravo, 1965) de las fracciones del PCV-FLN, que más tarde se convertirían en PRV-FALN. El segundo de estos textos también postulaba por primera vez la penetración de las FFAA como estrategia a seguir (Bravo, 1965).

Simón Rodríguez (1769-1854), filósofo y maestro del luchador anticolonial y héroe nacional venezolano Simón Bolívar, representa la búsqueda de formas de organización social y política propias: “La América española es original; originales han de ser sus instituciones y su gobierno: Y originales sus medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos” (Rodríguez, según Contreras, 1999: 112). Rodríguez consideraba fundamental la participación de los indígenas y de los (ex) esclavos afrodescendientes en las sociedades latinoamericanas futuras. Simón Rodríguez simboliza además la importancia de la formación, puesto que, sin él, Simón Bolívar habría tomado posiblemente otro camino. Rodríguez, frecuentemente catalogado como socialista temprano, postulaba a comienzos del siglo XIX, que el sistema educativo tenía que ser nacional y estatal y que debía ser accesible, independientemente de la solvencia de los alumnos y de la posición social de sus padres (Contreras, 1999: 26).

Simón Bolívar (1783-1830), simboliza la importancia de la independencia y soberanía así como la lucha por ellas. Fue el más sobresaliente luchador por la independencia de Latinoamérica. En sus escrituras filosóficas, defendió la democracia como un sistema político que debía otorgarle la “mayor suma de felicidad posible” a la población. Luchó por la abolición de la esclavitud⁴¹ y le adjudicó gran importancia a las capas bajas, sin que por ello propagara la lucha de clases. También sostuvo que un ejército jamás debería volver sus armas contra

41 Aunque efectivamente fuera abolida hasta 1854. Hasta 1828, Bolívar mismo realizó diversos intentos por imponer la abolición de la esclavitud en la república, pero fracasó en el grueso de sus iniciativas.

el pueblo. Propagó la liberación continental y el proceso de integración de los países del continente. Solo así, Latinoamérica se podía enfrentar con éxito a los EE.UU. y Europa.

Ezequiel Zamora (1817-1860), general campesino durante la Guerra Federal venezolana⁴², es la figura que, tras la Independencia, simboliza la lucha por una sociedad más justa y más democrática y por un posicionamiento antioligárquico. Bajo el lema “tierras y hombres libres”, “elección popular” y “horror a la oligarquía”, Zamora dirigió varias rebeliones campesinas (López Maya, 1996: 146). El ejército campesino de Zamora era conocido por incendiar grandes haciendas, incluidos sus propietarios, repartiendo inmediatamente sus tierras.

La referencia a Rodríguez, Bolívar y Zamora es complementada con la resistencia indígena y negra en contra de la colonización y la esclavitud. Fundamentándose en determinados elementos históricos, se emprende una interpretación revolucionaria de Bolívar. Tras la primera derrota contra Tomás Boves, (en el bando realista y siguiendo su propia agenda política, dirigía un ejército formado por negros, indios, campesinos y gente de las clases populares), en 1814⁴³, Bolívar comprendió que tenía que incluir claramente las clases subalternas en su proyecto. La abolición de la esclavitud a la que aspiraba tuvo tan poco éxito como el objetivo de unidad latinoamericana, o siquiera de la Gran Colombia. Traicionado y desterrado, Bolívar murió en condiciones de pobreza, habiendo invertido la completa riqueza de su familia en la guerra de libe-

42 La llamada Guerra Federal (1859-1863) es considerada usualmente como una guerra en la que las capas inferiores, por medio de las armas, reclamaron el cumplimiento de las promesas de la república: libertad e igualdad.

43 Véase Uslar Pietri, 2007.

ración. Ante su muerte, y en vista a la nueva oligarquía que se había instalado en el poder, declaró haber pasado su vida arando en el mar.

La interpretación de Bolívar como revolucionario es sumamente controvertida, y no pocos historiadores la definen como tergiversación de la historia. Sin embargo, ignoran que la historia siempre es controvertida y está supeditada a los diferentes intentos de alcanzar la hegemonía de interpretación. No se trata de la “verdad” –que de todos modos no existe como “objetiva”–, sino de la imposición de una interpretación hegemónica del pasado, sobre la que puede ser construido un proyecto futuro:

Las políticas de historia de la izquierda no solo consistían y consisten en luchar por la memoria y el no olvido de experiencias represivas, criminales y traumáticas o bien por el reconocimiento a través de las instituciones oficiales y estatales. Aun cuando tales objetivos jugaron un rol fundamental en algunos lugares y en algunos momentos, miradas desde una perspectiva histórica, las políticas de historia de la izquierda dejan entrever otros objetivos y funciones: historia como recurso para un luchar (jamás absolutamente finalizado, abierto); intervenciones que no aspiran al reconocimiento, sino –como objetivo máximo– a la contrahegemonía; así como una política de historia que es menos constituyente y funcional al estatus de la víctima y más funcional a una práctica del activismo (Mayer, 2009: 144).

La perspectiva del bolivarianismo revolucionario y la representación de la historia de Venezuela como una larga lucha por

la liberación y emancipación desde abajo, en que se concatenan las guerras de los indígenas contra los colonizadores españoles, las rebeliones de los esclavos, las luchas anticoloniales por la república, las rebeliones antioligárquicas, la guerrilla de las décadas de los sesenta y setenta, el Caracazo y las rebeliones cívico-militares a principios de los años noventa, pudo imponer su hegemonía, en el transcurso de los años, en casi toda la izquierda y, principalmente, en los movimientos populares y de estos hasta en las capas bajas que conforman la mayoría de la población. Por tanto, ya en sus orígenes, el núcleo del consenso ideológico del bolivarianismo hace referencia a la soberanía nacional y es de carácter histórico-democrático, antiimperialista y antioligárquico.

1.3.1 Las influencias políticas, sociales y culturales del bolivarianismo

La derrota política y militar de la guerrilla y los acontecimientos en los países socialistas, ocasionaron un amplio debate entre las corrientes que abandonaban la lucha armada y las que la continuaban, a finales de los años sesenta y mediados de los setenta. Todas ellas se orientaban con más intensidad en los movimientos populares. La mayor parte lo hizo bajo el reconocimiento de la autonomía de los movimientos. Una exposición sistemática y detallada de las influencias sobre el bolivarianismo la efectúa Denis (2007 a)⁴⁴, dividiéndolas, grosso modo, en tres categorías:

44 Aunque, como lo constata el mismo Denis, dicha exposición se puede continuar enriqueciendo.

1. Las “corrientes histórico-sociales”, bajo las que agrupa las corrientes del marxismo crítico, como el “guevarismo, el mariáteguismo, el consejismo, historicismo y autonomismo europeo (Pannekoek-Gramsci-Negri, etc.)”, “los movimientos autónomos de base”, la teología de la liberación, los movimientos de liberación nacional (y sus orígenes), la Revolución cubana, la Revolución sandinista y la resistencia indígena y afroamericana.
2. Las experiencias insurreccionales colectivas como la “Rebelión estudiantil del 87”, el Caracazo y las rebeliones militares de 1992.
3. Las experiencias proféticas, con referencia a Walter Benjamin, “los acontecimientos políticos-sociales que quiebran la historia dominante y a la vez prefiguran los procesos históricos de liberación”; las experiencias de los movimientos guerrilleros de los años sesenta y setenta, el Congreso Cultural en Cabimas en 1973, los sindicatos revolucionarios de base de los años ochenta y sus intentos de formar consejos obreros, el Congreso Nacional Estudiantil en Mérida en 1985, el “renacimiento del movimiento campesino: tomas de tierra en Yaracuy 1987”, la democracia directa de la Asamblea de Barrios (Caracas 1991-1993), el movimiento de pedagogía libertaria en los años noventa y la Constituyente Educativa (2000-2001), el desarrollo del poder popular y del poder constituyente desde el 1995, la campaña y la victoria electoral de Chávez en 1998, la Asamblea Nacional Constituyente en 1999.

Entre las corrientes que se califican como parte del bolivarianismo, sigue vigente la contradicción entre dos concepciones básicas diferentes, sobre el proyecto político a desarrollar: una orientación tradicional-estadocentrista y una antisistémica (I-AA, 2008). Esta gran heterogeneidad ideológica estimuló el surgimiento de la llamada *boliburguesía* (a veces también denominada “chavismo sin socialismo”), constituida por personas supuestamente cercanas al proceso y al gobierno, pero que usan su influencia, sus posiciones y sus contactos para llevar adelante una acumulación privada de capital a costa del Estado, al tiempo que mantienen un discurso “bolivariano” (I-SV, 2007; Monedero, 2007: 15). Hecho que, durante mucho tiempo, no ha sido afrontado efectivamente (ni por el gobierno, ni por la base) y que representa uno de los factores más fuertes para el descrédito del proceso de transformación (Lander, 2009).

1.3.2 Chávez, el MBR-200 y los pilares ideológico-programáticos del proyecto político

En la academia militar reformada en 1971, los jóvenes soldados son confrontados por primera vez con las Ciencias Sociales. A los diecisiete años de edad, Chávez pertenece a la primera generación con nuevos contenidos de formación. Como sus influencias más importantes nombra a Bolívar, Mao, Claude Heller (sobre todo el libro *El ejército como agente de cambio social*). La comprensión de Chávez con respecto al rol de las FFAA encuentra referencias positivas en el nacionalista peruano de izquierda Velasco Alvarado y en el presidente

de Panamá, Omar Torrijos. El golpe de Estado contra Allende en Chile, 1973, lo espanta y suscita cuestionamientos fundamentales sobre el rol de las FFAA. A partir de 1980, Chávez y otros militares de izquierda se convierten en instructores de la academia militar y ejercen influencia sobre miles de jóvenes reclutas (Harnecker, 2002: 9-10; Parker, 2001: 9-11).

De 1975 a 1980, Chávez fue asignado a actividades militares contrainsurgentes. Como él mismo cuenta (Blanco, 1998), durante aquella experiencia conoció la enorme pobreza en la que vivían los campesinos, con los que la guerrilla intentaba construir su base, y fue testigo de la brutal represión en su contra⁴⁵. Para anticipar las acciones de la guerrilla, los militares tuvieron que estudiar escritos revolucionarios. Chávez y los militares nacionalistas entran “en contacto con los textos de Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Torres, Marx, Engels, Mariátegui, entre otros” (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 57). Los textos corresponden a la realidad descrita por la guerrilla, que habla de una población con muchas necesidades y de una clase política sin voluntad de actuar, indicando la decadencia moral de los gobernantes y de la mayoría de los militares de alto rango.

La relación de Chávez con la guerrilla y en lo esencial con el PRV, no ha sido esclarecida del todo. El mismo Chávez afirmó que su hermano mayor, Adán Chávez, en aquella época miembro del PRV, solo ejerció una influencia indirecta sobre su formación política (Harnecker, 2002: 8). Pero más tarde, a

45 Las experiencias de Chávez ejemplifican la vivencia de muchos militares. Pero, por razones obvias, son las que mejor han sido biográficamente documentadas. Respecto a la vida de Chávez, véase: Bilbao, 2002; Chávez/Guevara, 2005; Díaz Rangel, 2006; Elizalde/Báez, 2004; Gott 2005; Harnecker, 2002; Twickel, 2006.

través de su hermano, Hugo Chávez obtuvo acceso a documentos internos de la organización, referidos ante todo a la unidad cívico-militar postulada por el PRV y al bolivarianismo revolucionario. También conoció a Douglas Bravo por su hermano, en 1978, sin convencerle particularmente. Ese mismo año también se encontró –por primera y única vez– con el exguerrillero y miembro de la dirección histórica de LCR, Alfredo Maneiro. Chávez dice haber tenido más interés en el trabajo de base de LCR, que en la guerrilla (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 57-58; Harnecker, 2002: 12). Sin embargo, en 2007, Chávez dio a conocer –por única vez– una versión distinta: perteneció al grupo del PRV dentro de las FFAA y finalmente, de 1978 a 1979, fue miembro de la dirección clandestina de PRV-Ruptura.⁴⁶

Tras su fundación, en diciembre de 1982, el EBR (a partir del Caracazo MBR-200) comenzó a trabajar en el desarrollo de un proyecto de sociedad alternativo. Las críticas iniciales se dirigían contra el sistema político, la corrupción y la injusticia social. Junto a Bolívar, Zamora y Rodríguez, también exponía un fuerte punto de referencia Jean-Jacques Rousseau –sobre todo su enfoque democrático-radical– (Bilbao, 2002: 34). Como estructura organizativa de base se formaron Comandos de Áreas Revolucionarias (CAR), grupos cívico-militares que llevaban nombres indígenas. Estaba proyectado construirlos en todo el país, pero, cuando se tornó evidente que esto era imposible, el curso se reorientó hacia un concepto que concentraba la organización a lo largo de determinados ejes territoriales (Díaz Rangel, 2006: 56-57; Harnecker, 2002: 12).

46 *Aló Presidente* 288, 27/7/2007.

El movimiento se expandió entre los oficiales jóvenes al interior de las FFAA. Esto se debía al profundo arraigo de la orientación bolivariana en las filas militares, en el acento puesto a la lucha contra la corrupción y en un discurso políticamente amplio, que denunciaba la distancia cada vez mayor entre lo que decía la Constitución y la vida real (Parker, 2001: 10).

Para el levantamiento cívico-militar de 1992 se tejieron intensos contactos con movimientos políticos y sociales, organizaciones e individuos. Con los intentos de golpe de Estado, el MBR-200 pasó de ser un grupo clandestino a una organización públicamente conocida (Harnecker, 2002: 19). Es por su clara decisión que encuentra simpatía sobre todo en la población pobre y entre los izquierdistas revolucionarios.

Después de recibir amnistía del presidente Caldera, en 1994, cuatro de los cinco militares de la dirección colectiva del MBR-200 aceptaron los cargos públicos que les ofrecieron. Solo Chávez, el más radical entre los militares rebeldes, se negó y constituyó el MBR-200 como organización de base. En esta fase se consolida el liderazgo de Chávez. El ingreso de William Izarra, teniente coronel de la Aviación, de orientación marxista, que participó en la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992, y el ingreso de numerosos civiles, sobre todo, provenientes de la izquierda, radicalizaba aún más el MBR-200 (Parker, 2001: 12).

Según Chávez, el MBR-200 se entendía como “un proceso, como un ente profundamente dinámico, con diversas fuerzas liberadas y en movimiento” (Zago, 1998: 39). Los movimientos y las diferentes formas de organización de base eran vistos como fuerzas independientes irrenunciables para el proyecto

político de MBR-200. Debían formar, junto con MBR-200, un gran Frente Bolivariano (Bonilla-Molina/El Troudi 2004, 78). La insistencia en el carácter cívico-militar de MBR-200 complicaba las condiciones de su acción, pues, hasta 1999, los miembros de las FFAA no poseían derechos políticos.

El MBR-200 rechazaba el fortalecimiento y la consolidación de la propia organización mediante la participación en elecciones y como consecuencia de una colaboración con la institucionalidad⁴⁷. No rechazaba absolutamente las elecciones, pero –para decirlo usando una imagen frecuente en los textos de MBR-200– seguía el principio de “aprovechar la cresta de una ola” y tomar el poder de una sola vez para realizar modificaciones (López Maya, 1996: 146-151).

De 1994 a 1996, la exigencia de una Asamblea Constituyente junto a la construcción de estructuras de base era la estrategia política del MBR-200 (Parker, 2001: 13). Tan solo en 1994, el MBR-200 elaboró siete documentos referentes a la Asamblea Constituyente y un proyecto de Constitución, subrayando la necesidad de una extensa transformación de todas las estructuras sociales para construir una sociedad “originaria” y “solidaria”. Se postulaba una “democracia popular”, directa, en la cual el pueblo es el protagonista de las decisiones. Finalmente, en la Agenda Alternativa Bolivariana (Chávez, 1996), se encuentra una representación sistematizada del rol para el

47 El rechazo condujo a divisiones. Francisco Arias Cárdenas, segunda figura carismática del MBR-200, abandonaba la organización en 1993. Otros militares seguían su ejemplo. En los años siguientes, algunos de ellos se presentaban como candidatos de LCR en las elecciones para cargos públicos (López Maya, 1996: 146). En 1995, Arias Cárdenas, apoyado por LCR, fue electo como gobernador del estado Zulia. El año 2000 se presentó a las elecciones presidenciales como rival de Chávez. Algunos años más tarde volvió a acercarse al gobierno y, en 2006, fue nombrado embajador de Venezuela ante la ONU.

Estado en la economía. Según esta, las industrias básicas y las estratégicamente importantes –incluyendo el petróleo y la minería– deberían encontrarse en propiedad del Estado, mientras que, para otros cuatro sectores descritos, se prevé una forma mixta entre propiedad estatal/privada, bajo regulación y control estatal.

La influencia que algunos autores (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004: 123; Decarli, 2006: 23; Ramírez Roa, 2003: 150; De Venanzi, 2006: 54) le adjudican a Norberto Ceresole –sociólogo argentino y peronista de derecha, cuya posición tiene que ser calificada como autoritaria, militarista y antisemita– no es confirmable. Chávez tuvo contacto con Ceresole respecto al trabajo de este sobre el rol de los militares. Ceresole viajó antes y después del triunfo electoral de Chávez a Venezuela, pero nunca fue su consejero o mentor (Díaz Rangel, 2006: 98) y Chávez tampoco siguió sus consejos y propuestas (Ochoa/Rodríguez, 2003: 130).

Ceresole postulaba un modelo posdemocrático en el cual las FFAA y el pueblo, como masa amorfa, forman un partido militar bajo la dirección de un caudillo (Ceresole, 1999). Decepcionado, Ceresole se alejó de Chávez, criticándolo tras la toma de posesión, expulsado de Venezuela en 1999. Durante los primeros años, las tendencias militaristas fueron excluidas del movimiento bolivariano o lo abandonaron por sí mismas. Además, no es posible unificar el ideario de Ceresole con la característica de la base bolivariana, sumamente crítica frente a sus propios dirigentes, y sin apoyar incondicionalmente a Chávez (Ellner, 2006 a: 90; Wainwright, 2006: 30-31).

En sus discursos, Chávez se refiere a una amplia gama de influencias, que van desde Jesús, pasando por Bolívar, Gramsci, Trotski, Mao, hasta el filósofo italiano Antonio Negri (Chávez, 2007 a: 2-7; Harnecker, 2002: 18). Lo que a simple vista pareciera una mezcla ideológica confusa, es, en realidad, la variedad de aproximaciones políticas, sociales, culturales y religiosas de las cuales se nutre el bolivarianismo. La tarea que asume Chávez es la inauguración de un marco político, sin fijar una línea política a seguir. Con el tiempo, algunas orientaciones han quedado fuera del marco del bolivarianismo, orientado cada vez más hacia la izquierda y, a partir de 2005, se definió como socialista. Esto ha ocurrido con las posiciones nacionalistas anticomunistas (sobre todo entre los militares; véase: Briceño, 2006) así como socialdemócratas (MAS, Miquelena, Por la Democracia Social-Podemos).

Para evitar una confrontación, durante los primeros años se intentó no reaccionar a las provocaciones del gobierno de EE.UU. Después del golpe de Estado, se denunció la “injerencia internacional”, sin acusar directamente a EE.UU. A partir del 2004, Chávez y el proceso bolivariano comienzan a definirse como antiimperialistas (Díaz Rangel, 2006: 197). El socialismo apareció en el discurso de Chávez, por primera vez, en enero de 2005, en el Foro Social Mundial (FSM). En su intervención, Chávez declaraba que el capitalismo solo se puede superar mediante el socialismo (Díaz Rangel, 2006: 201). Así, el socialismo se convierte en una constante en su discurso: “en el marco del modelo capitalista es imposible solucionar el drama de la pobreza, es imposible solucionar el drama de la miseria, de la desigualdad” (Chávez, 2005). Hace énfasis en la

necesidad de inventar un nuevo socialismo y define al “socialismo del siglo XXI”, en contraposición del socialismo de Estado soviético. El socialismo del siglo XXI, aún en desarrollo, tiene que ser democrático y participativo. Es un concepto abierto, sujeto a una discusión y cambio constantes, e ideológicamente no preestablecido.

1.4 El proceso constituyente y la nueva Constitución

La Constitución Bolivariana constituye una expresión, si se quiere, de “avanzada”, de una institucionalidad democrática de corte presidencialista, con un articulado sumamente actualizado de defensa de los derechos humanos y civiles y con amplias provisiones diseñadas para estimular la participación popular más allá del simple acto electoral.

PARKER, 2001: 16-17

En 1999 se elaboró una nueva Constitución en Venezuela, aprobada en un referéndum el 15 de diciembre de 1999 con un 71,78% de los votos y una participación electoral de un 55,63%⁴⁸, entrando en vigor el 30 de diciembre de 1999. En el año 2000, en elecciones conformes a la nueva Constitución, Chávez fue reelegido como presidente con un 59,76%.⁴⁹

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya había sido la demanda central de los movimientos populares en 1992, y era uno de los pilares del programa

48 Todos los resultados electorales de este capítulo: CNE: <http://www.cne.gov.ve/>. En el registro electoral estaban inscritas 10.940.596 personas.

49 Participación electoral: 56,31%, inscritos en el registro electoral: 11.720.660.

del MBR-200 (véase cap. 1.3.2). Estaba contenida, tanto en el programa electoral del MVR para las elecciones parlamentarias, como en el programa electoral de Chávez para las elecciones presidenciales de 1998 (Fernández Toro, 2005: 307; Parker, 2001: 14).

1.4.1 El proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente y el camino hacia la nueva Constitución

A pesar de la avasalladora victoria de Chávez en las elecciones presidenciales, las fuerzas políticas del PPF controlaban el Congreso y las instituciones, rechazando por completo la elección de una ANC. El rechazo se debía al carácter del proceso constituyente, en ruptura con el viejo el sistema, propagado por el Polo Patriótico, alianza electoral en apoyo a Chávez:

Nuestro proceso de constituyente es un proceso que no tiene nada que ver con las élites, viene desde abajo, desde el mismo pueblo. Es un proceso revolucionario para destruir este sistema, no para rehacerlo, como procuran otros proyectos (Blanco, 1998: 287).

En la década de los noventa, las fuerzas burguesas se pronunciaron en contra de una nueva Constitución. Incluso en 1997 se pronunciaron contra una reforma constitucional patrocinada por el presidente Caldera. Pero, en la nueva situación, se oponían con todas sus fuerzas a la convocatoria de una ANC y promovían una reforma de la Constitución de 1961 a través del Congreso que controlaban (Van Der Velde, 2005:

13-35). Aun así, Chávez y las fuerzas del Polo Patriótico persistieron en la convocatoria de una ANC. El 2 de febrero de 1999, día de la toma de posesión de la presidencia y apoyándose en la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, Chávez dictó un decreto que convocaba a un referéndum en el cual la población estaría llamada a decidir la convocatoria de elecciones para una ANC (Fernández Toro, 2005: 307; Parker, 2001: 15). El decreto se fundamentaba en la crisis del sistema político, la deslegitimación de las instituciones y el bloqueo de parte de los “beneficiarios del régimen”. La única solución democrática estaría en “la convocatoria del Poder Constituyente Originario” y la construcción de la base para el ejercicio de una democracia social y participativa a través del referendo (Decreto N° 3, 1999).

El Congreso rechazó una ANC “originaria y soberana”. Si no se podía evitar la ANC, los partidos tradicionales querían por lo menos someterla a la aún vigente Constitución de 1961 para, de este modo, evitar modificaciones fundamentales (Van Der Velde, 2005: 81-84). Conforme a la Constitución de 1961, correspondía a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la legalidad de la convocatoria al referéndum y su contenido; la prensa burguesa y las fuerzas políticas tradicionales esperaban que emitiera un fallo negativo. Pero la Corte Suprema (introduciendo modificaciones insignificantes a la cuestión) aprobó la convocatoria y, más tarde, también falló a favor de facultades originarias y soberanas (Parker, 2001: 15). En una sentencia del 21 de julio de 1999, el Tribunal Superior incluso constataba:

Lo novedoso –y por ello extraordinario– del proceso constituyente venezolano actual, es que el mismo no surgió como consecuencia de un suceso fáctico (guerra civil, golpe de Estado, revolución, etc.) sino que, por lo contrario, fue concebido como un “Proceso Constituyente de Iure”, esto es, que se trata de un proceso enmarcado dentro del sistema jurídico venezolano (según Rincón/Fernández, 2006: 100).

La facultad de la Asamblea Constituyente para poder tomar decisiones sin someterse a instituciones y leyes existentes, o a la Constitución de 1961 (sino solo a los acuerdos internacionales firmados por Venezuela), fue una condición para que el intento de una transformación fundamental tuviera, en general, una perspectiva de éxito. La decisión del Tribunal Superior causó sorpresa, pues se lo consideraba esencia y símbolo de la corrupción de la vieja IV República (Sanz, 2000: 51-52).

Algunas fuerzas socialistas y organizaciones populares criticaron que no hubo participación directa de la población en la elaboración de la nueva Constitución (por ejemplo, mediante asambleas con resoluciones de carácter vinculante), contrario al concepto original del Proceso Popular Constituyente (ver cap. 2.2) y a la promesa electoral del Polo Patriótico (Van Der Velde, 2005: 116). Aunque en septiembre de 1999, el Tribunal Superior rechazó definitivamente esta opción.

El 25 de abril, una mayoría de más del 80% (con una participación electoral del 37,65%) aprobó, vía referéndum, la propuesta del sufragio para una ANC⁵⁰. La Asamblea

50 Hay que partir del supuesto de que muchos de los adversarios de una nueva Constitución no participaron en el referéndum.

Constituyente fue elegida el 25 de julio. La ANC se componía de 131 constituyentes, de los cuales 128 habían sido elegidos en elecciones generales y con mayoría simple⁵¹, y 3 eran constituyentes de las comunidades indígenas electos en las circunscripciones correspondientes, en un proceso que debía tomar en cuenta “sus costumbres y prácticas ancestrales”⁵². En las elecciones para la Asamblea Constituyente del 25 de julio de 1999 había participado un 46,2% de la población electoral y se instaló el 3 de agosto. Se declaró “originaria y soberana, no sometida a los Poderes Constituidos” (Fernández Toro, 2005: 307).

En lo esencial, los candidatos de la coalición oficialista provenían de los partidos MVR, PPT y MAS, pero algunos de ellos participaban activamente, al mismo tiempo, en movimientos (sobre todo por los derechos humanos y sindicales) y se presentaron en una plataforma común. En cambio, los de la oposición provenían de una multiplicidad de viejos así como nuevos partidos y organizaciones sociales y, en la mayoría de los casos, se presentaron como candidatos independientes. Algunos de ellos –sobre todo los exmiembros de los desacreditados partidos AD y Copei– rivalizaban entre sí. Aquí se reflejaba el derrumbe del viejo paisaje partidario y el desacuerdo programático, pero sobre todo personal, de la oposición.

51 Veinticuatro en una circunscripción nacional y 104 en 24 circunscripciones regionales coincidentes con los estados y el Distrito Federal. De acuerdo a lo dispuesto en las *Bases comiciales para el referéndum consultivo sobre la convocatoria de la ANC*, los electores disponían “de tantos votos como constituyentes (...) a elegir en la circunscripción” a la que pertenecían. Cfr. www.minci.gob.ve/doc/basescomicialesreferendumconsultivo.doc; versión en Internet: 5/4/2010.

52 En: www.minci.gob.ve/doc/basescomicialesreferendumconsultivo.doc; versión en Internet: 5/4/2010.

A causa del sistema electoral mayoritario y uninominal y por el alto número de candidatos de oposición (1047) en comparación con los candidatos del Polo Patriótico (124), las fuerzas cercanas a Chávez obtuvieron, con un 62,1% de los votos, 124 constituyentes (94,5%), mientras que la oposición, con un 34,5% de los votos, recibió solo siete escaños (García-Guadilla / Hurtado, 2000: 19-21). De manera que la composición de la ANC no era muy representativa.

Parker (2001: 16) critica el mecanismo del escrutinio por listas y la estrategia del Polo Patriótico como adaptación de uno de los procedimientos del puntofijismo más criticados en el pasado. Sin embargo, el mecanismo también pudo ser adoptado por la oposición, y que de hecho lo hizo en las elecciones locales y regionales del año 2000, acordando candidatos comunes y, de este modo, ganando en muchos casos a pesar de que la suma daba una mayoría de los partidos del Polo Patriótico, que se habían presentado por separado (véase cap. 1.1).

García-Guadilla y Hurtado (2000: 23) plantean que el éxito de los candidatos de Chávez condujo a una subrepresentación de los nuevos actores sociopolíticos emergentes (ONG, asociaciones civiles, fundaciones sociales) en la ANC. Por su parte, Van Der Velde (2005: 108) critica que la formación de listas electorales y la negociación de los candidatos entre los partidos del Polo Patriótico habría reducido a un mínimo una participación directa *desde abajo*, de dirigentes de las bases y de los sindicatos, preparando de este modo el camino para:

... la entrada de una fuerte corriente de oportunistas y escaladores a la ANC, se debilitaron las bases de una constituyente

original, facilitándose la penetración de fuerzas totalmente extrañas al proceso: algunas figuras del puntofijismo y patriotas de dudosa procedencia, pero políticamente más expertos (Van Der Velde, 2005: 109).

Efectivamente, en el curso de los siguientes meses y años, muchos de los constituyentes del Polo Patriótico se deslindaron de Chávez y del proceso de transformación, y hoy se encuentran en las filas de la oposición⁵³. Sin embargo, candidaturas fragmentadas de fuerzas populares pudieran haber llevado a que la dispersión de los votos bolivarianos fuera tan grande que hubiese tenido una minoría de constituyentes a pesar de una mayoría en los votos.

La ANC se instaló el 3 de agosto de 1999. Estaba previsto que en los siguientes seis meses presentara un proyecto de Constitución. Se presentaron al menos cinco diferentes propuestas completas para una nueva Constitución. Entre ellas se hallaba una de la red Sinergia, compuesta por sesenta organizaciones sociales, aproximadamente, y una de la organización de derecha Primero Justicia (que más adelante se convertiría en partido). Pero, como base primaria de discusión se usó la propuesta del palacio presidencial.

El debate se llevó a cabo en tres bloques. En el primero se trató la relación entre la ANC y el poder constituido. En pos de una transición lo más pacífica posible se acordó que el poder constituido continuaría existiendo, pero subordinado a los

53 Entre ellos están quien fuera en ese entonces el presidente de la ANC, Luis Miquilena, así como Alfredo Peña, Ángela Zago, Edmundo Chirinos, Hermann Escarrá, Marisabel de Chávez, Jorge Olavarría, entre otros.

dictados de la ANC. En algunos ámbitos (el del Poder Judicial, por ejemplo) se declaró una situación de “emergencia nacional” para permitir la toma inmediata de medidas. El debate constitucional se desarrolló en el segundo bloque; y, en el tercero, se discutió la transición a la nueva Constitución (Sanz, 2000: 51).

Es necesario remarcar la amplia y dinámica participación de las organizaciones populares en el proceso que dio origen a la Constitución. Julio César Fernández Toro, de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, constata: “El proceso constituyente de 1999 fue el más participativo en la historia de Venezuela. La ANC impulsó una consulta para que los distintos sectores sociales organizados y las personas presentaran propuestas para redactar la Constitución” (2005: 309). Las ONG, organizaciones sociales, y personas independientes, podían participar directamente en la ANC por medio de la Oficina de Atención al Ciudadano de la segunda vicepresidencia, la Comisión de Participación Ciudadana y las comisiones de la ANC. Coordinándose a través de redes, discutían en mesas redondas las proposiciones para luego presentarlas. Las comisiones temáticas ofrecían amplio espacio para la discusión. En ellas participaban organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de medio ambiente, indígenas, de base, de barrio, y muchas más. Aproximadamente, la mitad de las 644 proposiciones de 201 organizaciones sociales, presentadas a través de Sinergia, fueron acogidas en la nueva Constitución (García-Guadilla, 2003: 240). También, cincuenta diferentes organizaciones de mujeres, entre ellas el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, grupos de mujeres afrovenezolanas, de mujeres de los barrios pobres y

de sindicatos independientes, formaron la Coordinadora de ONG de Mujeres, participando en la ANC con relativo éxito. Las proposiciones de organizaciones que mostraban una mayor afinidad al proyecto bolivariano y que además disponían de una entidad transmisora para sus demandas en la ANC (organizaciones de derechos humanos, de las mujeres o indígenas, por ejemplo), eran las que, generalmente, registraban mayor éxito en cuanto a su admisión (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 24).⁵⁴

El primer borrador estuvo listo el 12 de octubre, y el texto definitivo el 15 de noviembre de 1999. Según García-Guadilla y Hurtado (2000: 23), esto radica en que la inmensa mayoría de la ANC estaba constituida por partidarios de Chávez. Pero este argumento deja de lado la gran heterogeneidad dentro de las fuerzas bolivarianas, que condujo a una multiplicidad de posiciones, controvertidas incluso en las cuestiones más fundamentales. Por ejemplo, hubo un grupo, cercano a los constituyentes del Polo Patriótico, Alfredo Peña y Antonio Rodríguez, que defendía una orientación económica liberal, que abogaban por “libertades” comerciales y empresariales, lo más amplias posibles, calificando la privatización parcial del sector petrolero como un paso irreversible y a favor de un control estatal de los monopolios, no en contra de su existencia (Sanz, 2000: 53-71). El MAS, que en ese entonces formaba el ala derecha del Polo Patriótico, se resistió infructuosamente a la

54 El mayor éxito lo registraron las organizaciones de derechos humanos, que consiguieron la admisión de un 64,9% de sus propuestas en la nueva Constitución (Guillen/García-Guadilla, 2006: 89). Aproximadamente un tercio de las propuestas de la Coordinadora de ONG de Mujeres se incluyeron, con leves modificaciones, en el proyecto de constitución (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 25).

prohibición, contenida en el artículo 303, de vender partes de la empresa estatal petrolera Pdvsa. En el Polo Patriótico también se desataron conflictos parecidos en lo referente a la legalización del aborto, el control estatal del sistema de seguro social y la reintroducción de un pago de indemnización en caso de despido. En estos tres temas intervino Chávez con formulaciones abiertas, cuya interpretación le competía a los tribunales (Ellner, 2000). La preocupación de muchos de los veintiséis miembros de las FFAA, elegidos como constituyentes del Polo Patriótico para la ANC, estaba en torno a intereses de los militares y al estatus particular de las comunidades indígenas en los territorios fronterizos. En cambio, el ala izquierda del Polo Patriótico no logró la introducción de un riguroso control estatal y regulación del capital financiero (Sanz, 2000: 73-74). Las fuerzas bolivarianas le concedieron una amplia participación a la oposición en los procedimientos en la ANC (Coppedge, 2002: 30). Así, el debate sobre el texto constitucional estuvo marcado por un clima mucho más pluralista que el esperado (Parker, 2001: 16).

Al finalizar el primer bloque de discusiones, era claro que no sería posible cumplir el plan cronológico previsto si constantemente, y para toda la Constitución, se sostenía el debate público en la ANC. Las confrontaciones y la presión de los factores de poder, tanto externos como internos (principalmente de la Iglesia católica, del empresariado y de la embajada de los EE.UU.), eran demasiado grandes como para lograr, efectivamente, desmontar los viejos poderes y elaborar una nueva Constitución. Se decidió entonces desplazar la discusión del segundo bloque –el debate constitucional– a las comisiones

temáticas. La ausencia de una discusión sobre el conjunto del texto constitucional en las comisiones y la interrupción de los debates públicos en la ANC permitió al proceso constituyente avanzar más rápido, pero limitó la posibilidad de una contemplación global de la nueva Constitución a los actores directos (Sanz, 2000: 52-53).

Después de que las comisiones terminaran su trabajo y empezaran a reunir las propuestas, se movilizaron muchos de los sectores cuyas propuestas no habían sido tomadas (suficientemente) en cuenta. A estos pertenecían: diversos políticos locales y regionales que proponían una descentralización más profunda; la Iglesia católica que, en cuanto al derecho a la vida, pedía que se incluyera la frase “desde el momento de la concepción”⁵⁵; los medios, exacerbados por un derecho a la información “veraz, oportuna e imparcial”, fijado en la Constitución, y los militares, que continuaban defendiendo una extensión de los derechos políticos a los miembros de las FFAA (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 24).

La discusión sobre el segundo bloque, por iniciativa de Chávez, se llevó a cabo a un ritmo acelerado. Fue objeto de crítica de parte de diferentes actores que, en la fase final, algunas propuestas fueran agregadas o eliminadas de la Constitución por el mismo Chávez, sin debate y proceso de decisión democrático. Esas propuestas fueron: el cambio de nombre de la República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela (iniciativa de Chávez que originalmente había

55 Si bien no se fijó un derecho a la interrupción del embarazo, sí se eligió justamente una formulación que hace posible el establecimiento de leyes que regulen tales cuestiones (Ellner, 2000).

sido rechazada por la ANC) y a los derechos políticos de los miembros de las FFAA, reintroducidos (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 24; Parker, 2001: 16). La Iglesia católica y las asociaciones de empresarios defendían abiertamente un “No” a la nueva Constitución (Ellner, 2000).⁵⁶

La impresión de que Chávez impuso todos sus deseos es engañosa. Por ejemplo: Chávez se había pronunciado a favor de una mayor centralización, mientras la Constitución apoya la descentralización (Coppedge, 2002: 30). Y en muchos otros pasajes, algunos centrales, los constituyentes de la ANC cambiaron las propuestas de Chávez. Por ejemplo, entre los constituyentes existía gran consenso respecto a que, en general, las afirmaciones sobre el régimen económico contenidas en el proyecto constitucional presentado por Chávez eran de un carácter demasiado confuso y global y sus definiciones inutilizables, por lo que fueron reemplazadas (Sanz, 2000: 55). Así se puede decir que el proceso constituyente significó una apertura pero no fue tan participativo como se lo percibe frecuentemente —a excepción de la labor en las comisiones—. La base pudo presentar sus exigencias y propuestas directamente a la ANC, pero no decidió sobre ellas. De modo que se trató más bien de “participación de palabra y la representación de hecho” (Van Der Velde, 2005: 150). A pesar de esto el proceso constituyente evidenció una amplia y diferenciada organización de base y “contribuyó a transformar organizaciones sociales en actores políticos” (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 27-28).

⁵⁶ Un obispo afirmó incluso públicamente que los deslaves en el estado Vargas, ocurridos el día del referéndum, que produjeron la pérdida de más de diez mil vidas humanas, habrían sido un castigo divino (Coppedge, 2002: 19).

1.4.2 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En la nueva Constitución se define “el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”. La nueva Constitución le otorga a Venezuela un sistema de gobierno presidencialista. Se amplió el poder del presidente (el mandato se alargó de cinco a seis años, se introdujo la posibilidad de reelección por una sola vez así como la victoria electoral por mayoría simple en la primera ronda electoral) y se sustituyó el Congreso Nacional bicameral (Senado y Cámara de Diputados) por la Asamblea Nacional. El Estado se define como “federal y descentralizado”; a los municipios y estados se les atribuyeron posibilidades limitadas de cobro de impuestos, siendo que la gran parte de las finanzas y la decisión de la repartición a estados y municipios quedan en manos del gobierno central (Coppedge, 2002: 38). Se establece el marco para la construcción de un nuevo sistema jurídico, se indica una nueva orientación económica solidaria, se concede derecho a voto a los militares y se fijan extensas posibilidades de participación. Partiendo de la crítica a los límites de la democracia representativa y a la experiencia concreta en Venezuela, se introducen numerosos elementos participativos sin que sustituyan las estructuras representativas ni a las instituciones. Se conservan los parámetros liberales, como la garantía de los derechos de propiedad y que la tarea de protegerlos recaea sobre el Estado (art. 112, 115 y 116). La división territorial del

país permanece intacta y se conserva la separación de poderes clásica liberal (Lander, 2007 a: 69; 2009).

Es decir, la Constitución permanece en el marco de una sociedad capitalista –y, hasta cierto punto, liberal–, aun cuando postula la profundización de la participación social, democrática y el cumplimiento de promesas sociales, de corte socialdemócrata (Lander, 2009).

El fundamento de la nueva “Constitución Bolivariana” es –marcando la diferencia con la democracia representativa– la “democracia participativa y protagónica” (RBV, 1999); es decir, que al Estado se lo considera como espacio participativo en el cual la población, mediante diversos instrumentos, participa en la construcción de la vida pública y controla sus instituciones (Burchardt, 2004). Pero, aún cuando en el discurso público se confronta a la democracia representativa con la participativa, en el texto constitucional no se las define en una exclusión mutua, sino como complementarias, para fomentar una profundización de la democracia.

A los tres poderes tradicionales se suman dos nuevos poderes: el Poder Ciudadano, de carácter ético moral, ejercido por el Consejo Moral Republicano⁵⁷, y el –autónomo– Poder Electoral, constituido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En lo que se refiere a los mecanismos de democracia directa, la Constitución de Venezuela pertenece a las más progresistas del mundo (Madroñal, 2005: 15). En ella se encuentran numerosos elementos plebiscitarios. “Las materias de especial

57 Lo integran: el defensor del pueblo, el fiscal general de la república y el contralor general de la república, y se ocupa de la “la ética pública y la moral administrativa”, así como de cuestiones referentes a la educación y formación.

trascendencia nacional” pueden “ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente (...) por acuerdo de la Asamblea Nacional (...) o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras”. A esto se agrega la posibilidad de referendos en el ámbito municipal, parroquial y estatal (art. 71). También pueden ser sometidos a referendo “los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales” (art. 73). Por su parte, el artículo 74 hace posible someter a referendo las leyes, para que sean abrogadas total o parcialmente. Adicionalmente, en el artículo 72, se crea la posibilidad de revocar “todos los cargos y magistraturas de elección popular”, vía referendo, “transcurrida la mitad del período” previsto para dichos cargos y magistraturas.⁵⁸

Con el artículo 62, la Constitución fija la “obligación del Estado” de “facilitar la generación de las condiciones más favorables” para la “participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública”. En el artículo 70, junto a las elecciones, referendos, consultas populares, revocatoria de mandatos, iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, cabildos abiertos y asambleas ciudadanas con decisiones de carácter vinculante, enumera “en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas”, así como otras organizaciones colectivas. Luego, en el artículo 184, se especifican los sectores en los que es necesario crear mecanismos legislativos “para que los estados y los municipios

58 Sobre los diferentes mecanismos de democracia directa mediante referendos, véase Lummis (1996 b: 16).

descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionan, previa demostración de su capacidad para prestarlos”.

Principalmente fija los derechos ciudadanos sociales y la igualdad social como objetivos del orden social y define al Estado como garante de estos derechos (Burchardt, 2004: 201; López Maya, 2003 b: 222). En una ampliación y superación normativa de la comprensión liberal, los derechos ciudadanos definidos en la Constitución no solo garantizan derechos individuales, sociales y económicos sino también derechos culturales y colectivos (los que Hanna Arendt define como derechos de “la cuarta generación”) para grupos específicos (por ejemplo, niños, mujeres, indígenas, ancianos, discapacitados y otros).

Así, la Constitución define el derecho de la población indígena “sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan”, colectiva e inalienablemente, y el reconocimiento de sus propias formas de organización social, política y económica (art. 119), así como la prohibición del registro de patentes sobre los recursos materiales, tradiciones orales, conocimientos y prácticas simbólicas del conocimiento ancestral indígena (art. 124). También extiende los derechos ciudadanos, en plenitud, a las comunidades indígenas del país, estableciendo el derecho a participar en la “Planificación y Coordinación de Políticas Públicas” (art. 166). Esto tuvo el efecto, inmediatamente visible, en la presencia de indígenas en la administración política. En los comicios regionales del año 2000, y por primera vez en la historia de Venezuela, Liborio Guarrulla, un indígena baniba, asumió el puesto de gobernador en el estado Amazonas.

En lo que se refiere a los derechos específicos de las mujeres, la nueva Constitución –redactada usando la forma gramatical tanto femenina como masculina– determina la igualdad legal de hombres y mujeres (art. 21), así como el derecho de las mujeres a la participación política activa (art. 62 y 70). Al definir “la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco” como forma básica para la relación entre los integrantes de la familia, se determina el carácter anticonstitucional de la violencia intrafamiliar (art. 75). También se establece la protección de la maternidad y paternidad, el derecho de la pareja a decidir libremente el número de hijos y a “disponer de la información y de los medios” necesarios para ello, asegurando el Estado servicios de planificación familiar (art. 76); se define la igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges y de hombre y mujer en “uniones estables de hecho” (art. 77); niños y jóvenes son reconocidos como sujetos plenos de derecho (art. 78); se fija el derecho de “todo trabajador o trabajadora” a recibir “igual salario por igual trabajo” (art. 91). Uno de los artículos que más lejos va en este sentido es el 88, el cual reconoce “el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social” y el correspondiente derecho a la seguridad social en este mismo contexto. Esta es la razón por la cual Kron (2004: 61) identifica en el art. 88 “una arremetida contra la ‘naturaleza’ de la división de género del trabajo”.

El reconocimiento de grupos específicos, en su variedad y en admisión e integración de la desigualdad real de los mismos, “abre paso a la ciudadanía diferenciada y compleja como base

de la ciudadanía activa, puesto que la Constitución de 1999 concibe el disfrute paralelo de todos los derechos” (Guillén/García-Guadilla, 2006: 89). La realización de los derechos y posibilidades de participación sociales contenidos en la Constitución le concierne a los programas de gobierno y leyes correspondientes. La ampliación de medidas sociales, posibilidades de formación y capacitación gratuitas, microcréditos, la *distribución* equitativa de las *tierras* y otros programas apuntan a la difusión de una participación social y económica igualitaria en las capas marginalizadas.

La Constitución introduce una visión compleja y actual de los derechos humanos:

... la constitucionalización de los tratados sobre derechos humanos; la exclusión de la justicia militar para juzgar delitos de derechos humanos; la imprescriptibilidad de los delitos graves de violación de los derechos humanos; la prohibición del indulto o la amnistía a personas que hubieran violado los derechos humanos; la obligación estatal de investigar y sancionar los delitos de derechos humanos; el reconocimiento de la legitimidad de denunciar al Estado ante instancias internacionales de derechos humanos y la obligación del Estado de darle cumplimiento a las decisiones de esas instancias; la obligación del Estado de reparar los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos; la prohibición expresa de la desaparición forzada de personas (...) (Guillén/García-Guadilla, 2006: 90).

También contiene numerosos puntos que están en contradicción con los parámetros neoliberales, entre ellos: la prohibición

de “bases militares extranjeras o instalaciones que tengan (...) propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias” (art. 13); el compromiso del Estado de construir y financiar un sistema de salud público gratuito que no puede ser privatizado (art. 84 y 85); el compromiso del Estado en la construcción de un sistema de seguridad social solidario (art. 86); amplios derechos laborales (art. 87-97); la educación escolar pública gratuita (art. 103); el compromiso del Estado a garantizar “servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática” (art. 108); la prohibición de monopolios económicos privados (art. 113); la prohibición del patentado del genoma de seres vivos (art. 127); la obligación de someter toda actividad susceptible “de generar daños a los ecosistemas” a previos “estudios de impacto ambiental y sociocultural” (art. 129); la prohibición al Ejecutivo Nacional de “otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido” (art. 156); la prohibición de otorgarle a la inversión extranjera “regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales” (art. 301); la permanencia del núcleo de Pdvs en control estatal (art. 303); la definición de “todas las aguas” como “bienes de dominio público de la Nación” (art. 304); la calificación del “régimen latifundista” como “contrario al interés social” (art. 307).

En la nueva Constitución se formuló una nueva relación entre Estado, movimientos y organizaciones sociales. Esto hizo posible que, en los años siguientes a su promulgación, los movimientos y organizaciones pudieran presentar y realizar numerosos proyectos, así como participar en los debates públicos sobre los cambios sociales. De este modo, se transformaron de

actores sociales en actores político-sociales (García-Guadilla, 2003: 233).

1.4.3 Crítica a la Constitución de 1999

Los elementos participativos introducidos han sido criticados como “elementos plebiscitarios” que, desde el punto de vista teórico-democrático, serían problemáticos y útiles a las “intenciones populistas” (Zimmerling, 2005: 40). La mayor parte de los investigadores liberal-demócratas centran su crítica en la ampliación del poder presidencial (Krennerich, 2003; Reul, 2003: 63-65; Röder/Rösch, 2001; Welsch/Carrasquero, 2001; Welsch/Werz, 2000; Zimmerling, 2005: 40), la que identifican como una reducción de la democracia. En cambio Coppedge (2002: 16) —que tampoco tiene simpatía alguna por Chávez— subraya que la Constitución permanece en el marco de las prácticas constitucionales de las democracias occidentales. La prolongación del *período* presidencial de cinco a seis años y la introducción de la posibilidad de dos períodos presidenciales consecutivos, no son algo fuera de lo normal: la mayor parte de las democracias liberales no disponen de ningún tipo de limitación para los períodos consecutivos de sus jefes de Estado.

Desde la izquierda se criticó que fuerzas neoliberales y oportunistas, dentro y fuera de la ANC y del gobierno, hayan impedido el “cambio revolucionario históricamente planteado” y “dejado intacto lo estructural” (Van Der Velde, 2005: 14). Sin duda, es correcto que la Constitución, a pesar de todos los elementos participativos y progresistas, sigue siendo un híbrido entre democracia participativa y representativa y no es

una Constitución socialista o anticapitalista. No obstante, hay que cuestionar la seguridad con la que Van Der Velde postula el “cambio revolucionario históricamente planteado”. En el año 1999 no existían mayorías sociales para un proyecto anticapitalista o socialista en Venezuela. La Constitución respondió a un momento histórico del país (I-RI, 2006).

Además, la crítica de Van Der Velde ignora el rol emancipador –a pesar de todas sus limitaciones– de la nueva Constitución. El amplio debate social profundizó la comprensión política, la capacidad de discurso y la participación activa en los procesos sociales, así como la identificación: “¿Por qué la gente está dispuesta a morir por la Constitución, por qué la defiende como su hija propia? Porque la parió” (I-AA, 2008). Y, mientras que la interpretación liberal ve en la ANC y en la Constitución el “comienzo y final del cambio requerido” (Van Der Velde, 2005: 23), en los movimientos y en las clases subalternas movilizadas prevalece una comprensión programática antes que una comprensión normativa de la Constitución.

Una fuerte crítica liberal-democrática señala el hecho de que la ANC, más allá de la discusión y redacción del proyecto de una nueva Constitución, nombrara una Comisión Legislativa Nacional de 21 miembros (a la que se denominara Congresillo) para salvar el tiempo hasta la renovación de los órganos representativos conforme a la nueva Constitución, donde se disolvieron los antiguos órganos (Coppedge 2002: 18)⁵⁹. La ANC continuó en funciones hasta fines de enero y disolvió el

59 Las elecciones estaban previstas para marzo del 2000, pero fueron postergadas debido a los devastadores deslaves en el estado Vargas, ocurridos el día del referéndum constitucional; finalmente fueron realizadas el 30 de julio.

Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia (las instituciones más desprestigiadas del antiguo régimen), nombrando provisionalmente un Tribunal Supremo, un nuevo contralor general, un fiscal general y un defensor del pueblo.⁶⁰

Este nombramiento indujo a que la oposición acusara de tendencias autoritarias a Chávez y al Polo Patriótico, pues supuestamente habían sido cooptadas instituciones que, conforme a la nueva Constitución, deberían ser independientes. También Coppedge (2002: 32) critica que el Tribunal Supremo no sea independiente del Poder Ejecutivo. Si bien admite que la mayoría de los jueces destituidos por la llamada Comisión de Emergencia Judicial tenían conexiones con los dos partidos tradicionales, y que el sistema jurídico estuvo infiltrado por “tribus familiares” haciendo necesario un cambio drástico, según él se encuentran pocos motivos para creer que los nuevos jueces puedan ser mejores. La sospecha de Coppedge se habría de confirmar en una dirección completamente distinta: a pesar de su nombramiento por la mayoría bolivariana, muchos de los jueces continuaban, efectivamente, vinculados a las élites tradicionales.

1.4.4 *La fallida reforma constitucional de 2007*

A diferencia del carácter normativo de las constituciones europeas, la Constitución del año 1999 tiene un carácter claramente programático. Este es, por cierto, un rasgo típico

60 Compárese la Asamblea Constituyente del 23 de diciembre de 1999. En: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=14185&Itemid=184; versión en Internet: 18/9/2008.

de las constituciones latinoamericanas surgidas de situaciones revolucionarias o procesos de transformación profundos (por ejemplo, la mexicana). Esto incluye, implícitamente, el cambio o reforma de la Constitución si cambia el contexto social. También en la Constitución de la República francesa del 24 de junio de 1793 –que en todo caso no llegó a ser aplicada⁶¹– se formulaba en el artículo 28: “Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras⁶²”. Así se puede explicar que en 2007 surgiera una nueva iniciativa para modificación constitucional: en los ocho años transcurridos, había cambiado el proyecto de transformación formulado por la sociedad.

La intención era adaptar la Constitución al debate en curso y al nuevo objetivo social para transitar a un sistema socialista. La iniciativa concreta surgía del propio Chávez. Bajo el efecto de la avasallante victoria en los comicios presidenciales de 2006, supuso que aquel sería un momento favorable para realizar una reforma constitucional. Así, presentó un proyecto de reforma en el que deberían ser modificados 33 artículos de la Constitución. La Asamblea Nacional discutió el proyecto, revisó y reelaboró las 33 propuestas y propuso además modificaciones a otros 36 artículos. Fueron jornadas

61 La Constitución volvía a ser suspendida por la Convención Nacional el 13 de agosto de 1793, supuestamente, hasta el restablecimiento de la paz con las fuerzas externas. La Convención Nacional ponía en función el “Comité de Salvación Pública” y se disolvía. El Comité de Salvación Pública, bajo la dirección de Maximilian de Robespierre, gobernó hasta su caída. El 23 de junio de 1795 la Convención Nacional aprobaba una nueva Constitución.

62 Acta constitucional del 24 de junio de 1793-Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; versión en Internet: 25/3/2010. En: http://www.der.uva.es/constitucional/verdu-go/constitucion_fr_1793.html.

de debates controvertidos. Algunas de las modificaciones y nuevas propuestas se realizaron debido a la presión de la base. Hubo diversos grupos sociales (como el de los buhoneros, los vendedores ambulantes) que se movilizaron promoviendo sus propias propuestas para la Asamblea Nacional.

El proyecto de reforma hubiera introducido numerosas mejoras, por ejemplo: un servicio de seguro social para trabajadores del sector informal, la consolidación de las estructuras consejistas, la prohibición de la discriminación por la orientación sexual, una reorganización territorial, la paridad de voto de profesores, estudiantes y empleados en gremios universitarios (hasta el día de hoy, el voto de un profesor equivale a cuarenta votos estudiantiles) y otras más; pero también habría reforzado el poder presidencial y estatal (Azzellini, 2007 d). En la versión de la oposición, la propuesta de revocar la limitación a dos mandatos para la presidencia contenida en la actual Constitución, permitiendo una nueva candidatura también tras dos períodos presidenciales consecutivos, fue expuesta como “presidencia eterna”. Críticos conservadores como Banko expresaron que, a través de esta modificación, el principio de alternabilidad solo quedaría en entredicho (2008: 179). Sin embargo, la crítica no es válida pues, al igual que todo candidato, Chávez tendría que ser elegido para poder gobernar. Equivocada fue también la interpretación de medios y analistas internacionales que vieron en este punto una causa principal para la derrota de la reforma. En el debate público en Venezuela la cuestión no tuvo mucha importancia y, en febrero de 2009, las fuerzas de gobierno ganaron el referéndum para

revocar la limitación a dos mandatos para la presidencia, gobernadores y alcaldes con un 55%.

Finalmente, a principios de diciembre de 2007, se realizó el referéndum para la reforma constitucional, rechazada por escaso margen. Con una participación electoral de un 55,89% y una votación en dos bloques, votaron en el bloque A, que contenía las 33 preguntas de Chávez: 50,70% por el No (4.504.354 votos) y un 49,29% por el Sí (4.379.392 votos); en el bloque B, votaron: 51,05% por el No (4.522.332 votos) y 48,94% por el Sí (4.335.136 votos). En comparación con las elecciones presidenciales del año anterior, la cifra de la oposición crecía en solo unos 200.000 votos; mientras que las fuerzas bolivarianas perdían casi tres millones de votos (Azzellini, 2007 d). Pero estos últimos no habían votado por el “No”, sino que simplemente no concurrieron a las urnas. La derrota fue porque la propia base no estaba convencida del proyecto.

Antes del referéndum, la oposición, con el apoyo de los medios y el financiamiento nacional e internacional, desató una extensa campaña de propaganda contra la reforma constitucional. Por ejemplo, el derecho a un cupo en guardería infantil se difamó como la intención del Estado para quitarle los niños a las familias. De la introducción de diferentes formas estatales, colectivas e individuales de propiedad, la oposición hizo la amenaza de una ola de expropiaciones. En el curso del debate también se separaron del proceso las antiguas fuerzas socialdemócratas, como Podemos o el general Baduel, sumándose a la oposición. Indudablemente, todo esto costó votos a la reforma constitucional (Azzellini, 2007 d). Pero, la razón principal debe ser buscada en los propios errores que, en los debates

posteriores, serían interpretados como cruciales para la débil movilización.

Entre estas están: una base que no estaba integrada en las estructuras organizativas ni había participado en las discusiones, un lapso demasiado corto para explicar los contenidos de la reforma constitucional; la difundida corrupción e ineficiencia en la administración pública y, dentro del bolivarianismo, una fuerte corriente oculta que trabajaba por el “No”, a las que pertenecían alcaldes y gobernadores que –con buena razón– temían perder influencia como consecuencia de una reorganización territorial y un mayor traspaso del poder a las estructuras consejistas (Azzellini, 2007 d).

También hay que criticar que la Asamblea Nacional recolectara las propuestas de la base por medio de un mecanismo muy poco transparente y en muy poco tiempo; eso redujo la participación. Una población como la venezolana, que durante los últimos años hizo suyo un alto grado de participación, no se deja arrollar por un procedimiento acelerado. Pero si se entiende la democracia no como un estado, sino como un proceso, el debate sobre la reforma constitucional fue, aun así, positivo. Porque, aunque no todos, fueron cientos de miles los que en las organizaciones de base discutieron de un modo intenso y controvertido. Se criticaba, de manera central, la vigencia de antiguas instancias administrativas y su relación con las nuevas estructuras consejistas, el concepto lineal de desarrollo que manejaban algunos artículos, la falta de una idea de desarrollo sostenible y un poder popular que seguía siendo percibido como demasiado limitado. Aun así, la base bolivariana consideraba la reforma como un primer paso

hacia la superación de estos problemas (Azzellini, 2007 d). Y también el hecho de que más de 4,3 millones de personas votaran por una Constitución socialista representa –como dijo Chávez la noche después del referéndum– un gran triunfo.

Nadie contaba con la derrota de la reforma constitucional, ni siquiera la misma oposición, que en semanas previas al referéndum se había dedicado a desacreditar a Chávez y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aún no finalizados los escrutinios, activó una campaña contra un supuesto fraude de la consulta. Pero apenas publicados los resultados, Chávez reconocía la derrota y el CNE demostraba su modo de trabajar efectivo y correcto –lo cual, sobre todo en el contexto internacional, fortalecía la posición del gobierno–. El debate sobre la reforma constitucional y el referéndum condujeron, además, a que por motivos táctico-electorales la oposición reconociera y defendiera la vigente Constitución de 1999, a la que poco tiempo atrás había combatido (Azzellini, 2007 d).

2. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y PUEBLO SOBERANO

La emancipación política es al mismo tiempo la disolución de la vieja sociedad en la cual descansa el Estado enajenado del pueblo, el poder del soberano. La revolución de la sociedad civil. ¿Cuál era el carácter de la vieja sociedad? Una palabra lo caracteriza: el feudalismo. La antigua sociedad civil tenía un carácter político inmediato, es decir, los elementos de la vida civil, como por ejemplo la propiedad, o la familia, o la forma y el modo de trabajar, eran elevados a elementos de la vida del Estado en forma de dominio territorial, de clase y de corporación. Determinaban, así, la relación del individuo particular en el todo del Estado, es decir, su relación política, es decir su relación en la separación y en la exclusión de los demás elementos de la sociedad. Porque esta organización de la vida popular no elevaba la propiedad y el trabajo a la categoría de elementos sociales; más bien completaba su separación del conjunto del Estado y los constituía en sociedades particulares en la sociedad. Pero, así, las funciones vitales y las condiciones vitales de la sociedad civil eran para siempre políticas, aunque políticas en el sentido de la feudalidad; es decir, separaban al individuo del conjunto del Estado, transformaban la relación particular de su corporación con el conjunto del Estado, en su propia relación general con la vida del pueblo, así como convertían sus determinadas actividades y situaciones civiles en su actividad y situación generales. Como consecuencia de esta organización,

aparece necesariamente la unidad del Estado, así como la conciencia, la voluntad y la actividad de la unidad del Estado, el poder político general, igualmente como asunto particular de un soberano separado, con sus servidores del pueblo.

MARX, 1974: 52-54

En este capítulo están contenidos los conceptos cruciales para el entendimiento del proceso de transformación venezolano, que forman el marco teórico de la investigación. En la primera parte se esclarecen los conceptos de *democracia*, *sociedad civil* y *populismo* (2.1). Se presentan y someten a una crítica los debates sobre democracia en las Ciencias Sociales, especialmente sobre Latinoamérica, sometiéndolos a una crítica conceptual (2.1.1), junto a un análisis de su valor para la aplicación en el caso venezolano (2.1.2). Se mencionan las principales críticas al sistema venezolano, contrastándolas con la autoevaluación de la población venezolana con respecto a la democracia. Se aborda también el concepto de sociedad civil (central en los debates sobre democracia durante los últimos años) y el rol que ha tenido en el contexto venezolano (2.1.3). Por último, se analiza la acusación permanente que se le hace a Chávez de populista. El concepto es sacado de un aura negativa y se discute la complejidad y contradictoriedad del papel de Chávez (2.1.4).

El capítulo 2.2 se concentra en el concepto de democracia del proceso de transformación venezolano. Los conceptos de *participación*, *democracia directa* y *democracia radical* son debatidos de manera crítica. Se abordan las ideas del *poder constituyente*, y *democracia participativa* y *protagónica*,

centrales para Venezuela como orientación normativa (2.2.2). Sigue un análisis de las ideas de *poder popular* conectadas con el concepto específico de democracia y con la forma del “Estado comunal” que se busca (2.2.3).

En el análisis crítico de los conceptos de *clase*, *multitud* y *pueblo soberano* se identifica el portador del proceso de transformación (2.3), de los movimientos y la autoorganización. Se aborda además la limitación del concepto *movimientos sociales*, y cómo diferentes movimientos y organizaciones populares se mueven en la insólita *construcción de dos lados* (2.4).

2.1 Democracia, sociedad civil y populismo

Los debates sobre la democracia se encuentran hoy en el centro de las batallas ideológicas, teóricas, discursivas y simbólicas. Casi todo el espectro político-ideológico argumenta en nombre de la democracia. También las discusiones en la izquierda crítica tratan, en esencia, de democracia: que sea directa, socialista, radical, participativa o de base.

A principios del siglo XXI, casi todos los Estados del mundo se califican ellos mismos como democráticos. Democracia es entonces obviamente un término impreciso (Lander, 2006: 100; Lanz, 2001: 105; Saage, 2005: 25; Wallerstein, 2001). En el discurso científico domina el concepto liberal de democracia, mientras en el discurso político la democracia liberal es usada como sinónimo de democracia. El triunfalismo de los que califican la democracia liberal como el mejor de todos los sistemas políticos y la única democracia posible ha tenido su máxima expresión con el libro de Francis Fukuyama, *El fin de*

*la historia*⁶³. Sin embargo, pensar la democracia solamente en una reducida forma liberal-democrática, representa una limitación inaceptable (Hirsch, 2008; Lander, 2006: 100).⁶⁴

No existe ni un nexo inherente entre liberalismo y democracia. Hasta la mitad del siglo XIX los conceptos estuvieron en conflicto. Los adeptos al liberalismo económico rechazaban profundamente la idea de la democracia (Mouffe, 1999: 28). Construyendo lo político como esfera separada de lo social y deslindándose de la cuestión de la desigualdad social, la democracia liberal se transformó en la expresión política del nuevo modelo de producción y de la sociedad de mercado (Figueroa Ibarra, 2006: 18), asumiendo una forma que hoy en día haría difícil definirla como democracia⁶⁵. Las libertades y los derechos ciudadanos fueron conquistados en duras y largas luchas, a partir del siglo XIX, después de que se había impuesto brutalmente el nuevo modelo de producción y de que la burguesía consideró consolidado su poder (Demirovic, 2005 b; Lander, 2006: 101). A principios del siglo XX, el austromarxista Otto Bauer escribió:

La democracia parlamentaria busca asegurar el acuerdo común entre los gobernantes y los gobernados a través de las elecciones.

63 Frente al derrumbe de los regímenes de carácter soviético, Fukuyama llega a formular la tesis de que la democracia liberal, a causa de continuos cambios, llegó a una forma en la cual las relaciones sociales son integradas en las relaciones capitalistas, así que ya no hay alternativa histórica a ella (Fukuyama, 1992).

64 Con respecto a la crítica de las democracias liberales, véase: Agnoli/Brücker, 1968; Mapherson, 1964; 1977; Marcuse/Moore/Wolff, 1966.

65 Klaus Offe y Philippe C. Smithers (1995) hasta predicen un futuro incierto para la democracia liberal a causa de las fuertes demandas sociales a las cuales está expuesta.

Ella cree de asegurar este acuerdo, si solo se llama a la totalidad del pueblo cada tres o cuatro años a las elecciones del parlamento, que decide sobre la conformación del gobierno y controla su funcionamiento. La clase obrera en todos lados ha hecho la experiencia de que esa creencia es una ilusión; que el poder de la burguesía sobre la prensa, sobre el púlpito, sobre el aparato electoral, le hace posible decidir el resultado de las elecciones de tal manera que el gobierno que surge de las elecciones generales populares se vuelve un gobierno de la clase burguesa, el gobierno de una minoría del pueblo. Por eso la lucha de la clase obrera, en contra de una democracia solamente parlamentaria, atraviesa todo el movimiento revolucionario que la gran guerra ha hecho nacer (Bauer, 1923: 187).

Demirovic (2005 b) hace notar que es difícil creer que las deficiencias estructurales “no estén conectadas sistemáticamente con la forma conocida de democracia política”, y sean solo apariciones contingentes, que serán corregidas con el paso del tiempo. El desarrollo de la democracia liberal, desde los tiempos de oro del keynesianismo, confirma esa duda.

En un mundo globalizado, en el que las decisiones son tomadas más y más por gremios supranacionales no electos y en el cual la influencia de los mercados financieros y empresas transnacionales socavan el sistema del parlamentarismo y las funciones del Estado, el ideal liberal se encuentra frente a grandes dificultades de legitimización, incluso en los países occidentales que lo originaron (Demirovic, 2009; Hirsch, 2003; Wainwright, 2003: 188). La tensión histórica y su fundamental y contradictoria mediación entre los derechos del capital y los

derechos de los seres humanos, se inclina a favor del capital. Los logros sociales de las últimas décadas son desmantelados (Lander, 2006: 103). La democracia liberal, que un día fue el lugar de la ampliación de los derechos –aunque siempre limitados a una compatibilidad con el capital–, se volvió el lugar de la reducción y, en el mejor de los casos, de la defensa de viejos derechos. En el marco del neoliberalismo y su discurso de eficiencia, la democracia, desde los años ochenta, ha sido entendida principalmente como la planteaban Joseph Alois Schumpeter (1975) y Karl Mannheim (1951) y como se consolidó en Europa Oeste, EE.UU. y Canadá en la posguerra⁶⁶ (Méndez, 2004: 11; Santos, 2004 b: 9-10): “un método de generación de orden estatal” (Saage, 2005: 294). La idea de democracia como mecanismo para evitar conflictos, llevó las ciencias a la elaboración de una “teoría de la democracia sin democracia”, en la que los criterios de definición “han sido transferidos del momento de la participación al momento de la calidad de los resultados políticos; es decir, del *input* al *output*” (Jörke, 2006: 253).

En términos generales, con el principio de la representación, se construye lo político como esfera separada de la sociedad⁶⁷. Con el triunfo del neoliberalismo, esta separación ha crecido más. Frente a la falta de posibilidades de participación y de

66 El concepto de Schumpeter es, en sus rasgos más fundamentales, elitista y opuesto a cualquier idea ulterior de participación: “Los electores situados fuera del parlamento tienen que respetar la división de trabajo entre ellos mismos y los políticos que eligen (...) deben comprender que, una vez que han elegido a un individuo, la política le corresponde a él, y no a los electores” (Schumpeter, 1983: 374). Schumpeter (1983) y Norberto Bobbio (1988) crearon el marco reglamentario para la democracia elitista procesual (Santos, 2004 b: 15).

67 Macpherson (1964; 1977), entre otros, formuló la crítica a los partidos, describiendo cómo el sistema partidista finalmente sometió a la democracia de manera efectiva a un control elitista de las decisiones; mientras que, al interior, los partidos funcionan, en su mayoría, con mecanismos no democráticos.

una influencia real, la participación en las “estructuras liberal-democráticas, ya desde hace mucho reducidas a una mera formalidad” (Hirsch, 2008) ha disminuido enormemente. Eso preocupa a los adeptos de las teorías liberales. Sartori, defensor de un “dominio democrático de élites”, afirma:

Una forma segura de generalizar indirectamente es decir que la apatía o la despolitización está muy extendida, que el ciudadano medio muestra escaso interés por la política, que la participación ciudadana no es mínima sino inframínima y que, en muchos aspectos e instancias el público no tiene opinión, sino, más bien, sentimientos inarticulados en los que se mezclan estados de ánimo e impulsos (1990: 141).

Eso es también sostenido con frecuencia con respecto a América Latina. Por otro lado, hasta el instituto chileno, “Latinobarómetro”, más bien conservador, consta que el continente está movilizado “como nunca antes”, nada más que los indicadores que han sido diseñados para medir sociedades anglosajonas y del hemisferio norte, no logran medir la participación no convencional, que no sigue los canales regulares establecidos y por eso muestran una declinación de participación (Latinobarómetro, 2008: 75). No se trata entonces de una crisis de la participación, como lo sugiere el discurso de la apatía (Cansino/Sermeño, 1997: 558; Rivas Leone, 2002: 11; Sartori, 1992:114), sino de una crisis de la representación de lo “político” en el sentido liberal-democrático (Negri, 1998: 68)⁶⁸.

68 El principio de la representación llegó a su cúspide en el Renacimiento y en la Ilustración. En ciencias, política, sociedad, economía, arte y cultura, se trataba de sintetizar lo individual

Así que se trata de una crisis mucho más estructural de lo que quieren admitir grandes partes de las ciencias.

El rechazo al principio de la representación es una orientación normativa central en el proceso de transformación venezolano. La “democracia participativa y protagónica” postula la superación de modelos liberales de democracia. Sin embargo, dado que la crítica liberal se concentra en tachar a Venezuela como no democrática, se abordan también los debates sobre democracia en América Latina y la crítica liberal-democrática hacia el sistema democrático venezolano. Lo anterior cobra mayor importancia cuando se comprende que la clasificación de países y sistemas políticos no es una cuestión meramente académica, sino que es una clasificación moral con implicaciones políticas de gran alcance (O’Donnell, 2001: 8). Queda demostrado con las varias intervenciones militares, para las cuales el argumento de una supuesta falta o deficiencia democrática jugó un papel importante para un forzado cambio de régimen.

2.1.1 Democracia en América Latina

Hace aproximadamente treinta años comenzó un proceso de transformación, en América Latina, que fue festejado internacionalmente, incluyendo las ciencias, como la “tercera ola” de la democratización (Ecuador 1979, Perú 1980). Las

o lo particular debajo de algo “universal” que lo represente, pretendiendo representar todas las particularidades. “Representación” tiene dos sentidos: sustitución (*Vertretung*) y hacer visible (*Darstellung*) (Marx); representación en su primer sentido pero es también siempre “hacer visibles” a los “sustituidos”, un aporte a la construcción de identidad del grupo sustituido. Así, la “crisis de la representación” es finalmente la crisis de lo “político” (tradicional). Para un cuadro general sobre democracia véase Saage, 2005; Santos, 2004 b: 9-50.

diferentes dictaduras y los regímenes autoritarios cedieron, especialmente en el transcurso de los años ochenta, una tras otra, el paso a sistemas formalmente democráticos. El último país en hacerlo, hasta el momento, ha sido México, donde el relevo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país bajo diferentes nombres desde la Revolución mexicana, por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) en el 2000, es identificado como punto de partida hacia un desarrollo democrático. En algunos países hubo una recaída a sistemas autoritarios no liberales (Haití: gobierno golpista 1991-1994 y 2004-2006; Perú: régimen de Fujimori 1992-2000); pero, generalmente, la tendencia hacia democracias electorales ha sido característica para América Latina durante las últimas tres décadas.

En los debates sobre democracia en América Latina es posible identificar una gran variedad de perspectivas. En los análisis científicos no hay unanimidad sobre la cantidad, características o denominaciones que deben existir⁶⁹. Sin embargo, se pueden identificar, por lo menos, cuatro corrientes: neoliberal, transición/institucionalista/neosocialdemócrata⁷⁰, posmoderna, y pensamiento crítico.

69 Edgardo Lander diferencia dos líneas tradicionales básicas. Una, conectada con un peso en lo comunitario y holístico de la tradición ibérica, y una segunda influenciada por el individualismo, que es característico para la tradición protestante anglosajona (1996 b: 24). En los años noventa, conceptos liberales, neoliberales y posmodernos tuvieron una fuerte influencia en los debates sobre democracia. Al mismo tiempo, propuestas holísticas y comunitarias empezaron a romper la hegemonía liberal-democrática. Méndez (2004: 11-13) diferencia entre democracias directas, representativas, constitucionales y sociales/económicas.

70 Méndez (2004: 13-27) adjudica a la mayoría de los teóricos de la transición un entendimiento procesual de democracia (que termina en el neoliberalismo). Entre ellos no incluye a O'Donnell, y a otros que también hacen referencia a indicadores sociales. Los (neo) socialdemócratas para ella no están en la misma categoría. En los presentes análisis teóricos de

En esta lucha conceptual, la gran ofensiva neoliberal comenzó en 1986, con la publicación del libro *Por una democracia sin adjetivos* del mexicano Enrique Krauze. Para él, como partidario de una democracia de élites, marcado por un espíritu eurocéntrico y colonial (incluyendo estereotipos racistas, como el atraso ancestral que representarían los indígenas, Krauze, 2003: 60), la democracia liberal occidental es la cura contra todas las supuestas amenazas históricas en América Latina: militarismo, marxismo revolucionario, populismo y economía estatizada. Estas, según Krauze, se presentan con un nuevo disfraz: el populismo militar de Chávez o como movimientos revolucionarios milenaristas etnoindigenistas, como el de Morales (2003: 58-60). Krauze deplora la falta de una “moderna vanguardia intelectual” en América Latina, compuesta por personas “independientes” al estilo de “Havel, Sajarov, Michnik” (2003: 60).

Entre los autores que siguieron el camino de Krauze, con publicaciones similares, se encuentra también el peruano Mario Vargas Llosa, que en *Desafíos a la libertad* (1993), y en el *Manual del perfecto idiota latinoamericano* (1996), publicado junto a Plinio A. Mendoza y Carlos Alberto Montaner, aboga en favor de un modelo neoliberal al estilo de Thatcher en Gran Bretaña, donde el Estado se mantiene casi totalmente alejado de cualquier función social o económica y deja esos campos al libre mercado. Vargas Llosa combina este planteamiento con una crítica neoliberal al socialismo y la socialdemocracia.

la transición, institucionalistas y neosocialdemócratas son puestos en la misma categoría. La ampliación de sus criterios no cambia el enfoque (véase también Burchardt, 2008). Otros autores diferencian también entre institucionalistas y neosocialdemócratas; sin embargo, esas diferencias son tan mínimas que parece difícil argumentar a favor de categorías propias.

Desde finales de los años ochenta, hasta principio de los noventa, predominó en el debate académico la teoría de la transición. Esta se basa en el supuesto de que elecciones libres y un marco institucional liberal-democrático llevan, casi automáticamente, a la ampliación de los derechos sociales (López Maya, 2005: 201). Gran parte de los actores políticos e investigadores, suponía que la transición a regímenes de democracia formal resolvería los problemas fundamentales de la región. La democracia fue considerada aislada del Estado y su modelo de acumulación (Oliver, 2005: 51-52)⁷¹, como “un tipo de régimen y no un tipo de sociedad” (Garretón, 1991 b: 285-286).

Así, el anterior foco del debate académico, subdesarrollo y dependencia, fue reemplazado por una revalorización de la democracia formal y del papel del Estado, formulándose la necesidad de una democracia política (Castañeda, 1993; Cavarozzi, 1991; Garretón, 1991 a, 1991 b; Lechner, 1995; O’Donnell, 1994, 2001; Torres-Rivas, 2002). Las posturas recorren, desde concepciones procesuales muy reducidas de democracia, hasta algunas que incluyen componentes sociales. Sin embargo, todas comparten la necesidad de un Estado que garantice el libre mercado capitalista y, simultáneamente, una democracia social y política (Linz, 1990; Linz/Stepan, 1996; Lechner, 1995)⁷². Gran parte de la literatura comparte la asunción de la existencia de “un cuerpo consistente y suficientemente claro de teoría democrática”, que se pueda usar,

71 Sobre el papel del Estado en América Latina y los cambios en el debate de los años noventa, véase: Oliver, 2005 y Castro/Mussali/Oliver, 2005.

72 Para un cuadro crítico general, con respecto al debate sobre democracia en América Latina, véase: Borón, 1997 y Lander, 1996 b.

con pequeñas modificaciones, para analizar las democracias emergentes. La primera presuposición es falsa, y la segunda por ende impracticable (O'Donnell, 2001: 7-8).

El modelo de análisis de la teoría de transformación, que llegó a ser dominante en las Ciencias Sociales, es el *regime analysis approach*⁷³. En el centro de este enfoque, orientado hacia democracias liberales de corte europeo-occidental, está el análisis de las instituciones y del sistema electoral (Burchardt, 2008: 80; López Maya, 2005: 201)⁷⁴. Este concepto de “democracia” se rige según las ideas elitistas y reduccionistas de Schumpeter (1983) y el modelo poliárquico de Dahl (1971). Los actores políticos relevantes son entonces los funcionarios, representantes de la democracia liberal (de partidos y gobierno), y las élites. Así las ciencias crearon un modelo simple que hizo más fácil los estudios comparativos, pero que no logra captar lo complejo de la realidad.

La democratización política no se logró como consecuencia de la introducción de sistemas liberales. Las democracias formales en Latinoamérica siguieron, en su mayoría, siendo regímenes autoritarios que no resolvieron los problemas más urgentes de la población (Parker, 2006: 90-91). Según criterios liberales, América Latina es la región más democrática

73 Para un cuadro general de la ciencia de la transición y su crítica, véase: Burchardt, 2008.

74 Este enfoque de las corrientes dominantes en las Ciencias Sociales lleva también a curiosidades alejadas de la realidad política de la región. A mediados de los años ochenta, Juan Linz empezó un debate sobre riesgos y desventajas del presidencialismo, al cual adhirieron muchos autores (entre otros Linz/Valenzuela, 1994; Nolte 1999; 2004. En el debate dominaron los partidarios de democracias parlamentarias, consideradas como más exitosas que las presidenciales (Nolte, 2004: 56-57). El criterio central para medir el “éxito” en estos casos es la “estabilidad” de los gobiernos, analizada desde la diferencia entre las democracias presidencialistas y las parlamentarias, prescindiendo de las políticas que implementan los gobiernos.

del mundo, después de Europa, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, es también la región con las desigualdades más profundas, no solo con respecto a los ingresos, sino también en el acceso a bienes y servicios básicos como salud, educación y agua potable, entre otros (Cepal, 2007; Figueroa, 2006). Hasta las ideologías y políticas más reaccionarias del continente se sirven del mantel de la democracia, para ocultar y rechazar la cuestión social (Lanz, 2005: 101).

Alrededor del final del milenio la crítica a los paradigmas de la teoría de la transición empezó a hacerse más fuerte. Los partidarios de la misma, sin embargo, no repensaron sus presuposiciones, sino que se limitaron a defender el enfoque, argumentando que el conjunto institucional que debería llevar a una mejora de la situación no había sido construido todavía, y que se necesitaban más reformas para conseguirlo, y otros se dedicaron a refinar los criterios empleados (Burchardt, 2008: 81):

Guillermo O'Donnell, que defiende a democracias “consolidadas” frente a “democracias delegativas” (1994), subraya que una teoría de uso apropiado debe reconocer que la conformación de la democracia tiene características específicas dependiendo del contexto (2001: 8). Las democracias deben ser evaluadas en su contexto social y no por el régimen del Estado (O'Donnell, 2001: 26). La existencia de ciertos derechos políticos no es suficiente si no son garantizados los derechos civiles. Entre estos cuenta la discriminación fuerte de mujeres o minorías, la violación regular de los derechos de los pobres o minorías de parte de la policía o grupos criminales, el acceso desigual al derecho y otros (O'Donnell, 2001: 27). En muchos de estos Estados democráticos no hay un alcance territorial

completo en materia de leyes y justicia. En esas “zonas marrones”, regiones con poca o reducida presencia institucional, mandan otras fuerzas y las leyes nacionales no tienen validez (O’Donnell, 2001: 28). Para O’Donnell, la ampliación de la democracia y los derechos civiles, sociales y políticos son inseparables (O’Donnell, 2001: 28). La realización deficiente de los derechos civiles en las nuevas democracias llevaría a una *ciudadanía de baja intensidad*. Entre los institucionalistas, la postura de O’Donnell ha llegado a ser una de las más complejas. En los últimos años ha incluido más criterios a su concepto de democracia. Sin embargo, le agrega solamente una dimensión social al instrumentario metodológico de la teoría de la transición, sin cuestionarlo. Deja de lado la “democracia económica” y sigue alabando el modelo liberal-occidental como tipo ideal de democracia.⁷⁵

Las líneas fundamentales de este enfoque son compartidas tanto por conservadores liberales como por seguidores de orientaciones más sociales o neosocialdemócratas. Uno de ellos, el mexicano Jorge Germán Castañeda (1993), que abogó por un proyecto de gobierno antineoliberal, de una alianza de centro-izquierda, que –en los límites puestos por la globalización– debería hacer posible un “mercado libre”, justicia social y una política nacional soberana. Entre los representantes más conocidos de la neosocialdemocracia se encuentra el investigador guatemalteco Edelberto Torres-Rivas (1996;

75 Su concepción es también la orientación principal para el reporte del PNUD 2004 a; que sigue basando su análisis en el *regime analysis approach*. Otro ejemplo, aunque con una ampliación menor de criterios, es el Índice de Transformación de la ultraconservadora Fundación Bertelsmann (BTI, 2008).

2002), que enfatiza la necesidad de una reforma del Estado (2002: 232).

Los partidarios de la teoría de la transición y los institucionalistas –sin importar su orientación–, no tienen respuesta a la pregunta fundamental de cómo el “libre mercado” y el modelo democrático liberal pueden llegar a facilitar los cambios deseados en el contexto latinoamericano; menos aún cuando las condiciones generales, desde el comienzo del debate, han empeorado. Así la mayoría de los partidarios de estos enfoques terminan apoyando el neoliberalismo en la práctica. Es ejemplar el caso de Castañeda en México, que entró en el año 2000 como ministro en el gobierno de Vicente Fox y apoyó una política neoliberal clásica (Ellner, 2006 b: 75). Un camino muy parecido tomó Teodoro Petkoff en Venezuela (Ellner, 2006 b: 83-84; cap. 2.1.4). Y en las ciencias, los enfoques con criterios más refinados tampoco han llevado a distintos e innovadores resultados⁷⁶. No ofrecen otra solución que el regreso al modelo democrático liberal, cuando su fracaso fue el origen de la búsqueda de otros modelos. Así, los partidarios de la teoría de la transición no pueden explicar el fracaso de la democracia liberal, ni aportar una posible solución. El filósofo venezolano Rigoberto Lanz hace notar correctamente que:

Casi nada podría esperarse de las escuelas de Ciencias Políticas y del pensamiento que la *partidocracia* o la élite política enuncia, porque está condenado de antemano por el lugar donde se insti-

⁷⁶ En el BTI, por ejemplo, Venezuela está en el puesto 118 de 125 países, entre la costa de Avorio y Eritrea; Ecuador está en el puesto 103, entre la República del Congo y Togo. Colombia, en cambio, un país de terrorismo de Estado donde cada año desaparecen y son asesinados miles de opositores, ocupa un respetable puesto 58 de la clasificación (BTI, 2008).

tuye, por la lógica que lo gobierna, y por las categorías anacrónicas que lo habitan (Lanz, 2001: 104).

El problema es mucho más estructural de lo que los teóricos de la transición, institucionalistas, socialdemócratas y otros apologetas de la democracia liberal quieren reconocer. El liberalismo en América Latina, a diferencia de la constelación histórica en Europa, no tocó las diferentes relaciones de explotación, exclusión y de propiedad coloniales. Los diferentes modelos económicos no correspondían, y no corresponden, a la realidad de los países latinoamericanos; en primer lugar, justifican la extracción de recursos para alimentar a los centros de poder colonial (López Maya, 2005: 199; Monedero, 2007). Las sociedades, cultural y étnicamente heterogéneas, fueron obligadas a adaptarse a un modelo eurocéntrico, liberal y homogéneo, en el cual solamente la clase alta, blanca y masculina, goza de plenos derechos civiles (Lander, 2006: 103; De Sousa, 2007: 13). Un segundo grupo es tratado como ciudadanos de segunda clase, y un tercero (comúnmente indígenas) son tratados incluso como no ciudadanos (López Maya, 2005: 199). Por eso, este modelo democrático, desarrollado principalmente en los EE.UU., Inglaterra, Alemania, Francia e Italia no ha producido los mismos resultados en América Latina.

Las teorías hegemónicas de democracia, transición y transformación vienen de los países del norte, mientras que las prácticas de transformación se dan al sur del mundo. Los grandes teóricos de la democracia no hablan ni castellano ni portugués y ese es uno de varios motivos por los que no perciben las prácticas de transformación del sur y las marginalizan (De Sousa,

2007: 13), y, por motivos políticos, buscan no difundirlas. En América Latina los aportes teóricos más importantes superaron este esquema limitado. Las diferentes corrientes latinoamericanas que trabajan en la elaboración de nuevos esquemas democráticos, se sitúan más allá de los enfoques liberal-democráticos, basados en la representación y la procesualidad (Lanz, 2005). Son parte de estas corrientes las posturas posmodernas de izquierda y las relacionadas al “pensamiento crítico”.

La influencia del pensamiento posmoderno en los debates sobre democracia en América Latina tuvo su auge en los años noventa. Bajo esa perspectiva se encuentran las más disparatadas orientaciones políticas. Por un lado, a partir del discurso posmoderno sobre el fin de la razón, la crisis del discurso y de la ciencia, se construye una justificación para propuestas neoliberales, poniendo en el centro el individualismo y la autoreferencialidad (Lander, 1996 b: 27). Con frecuencia asumen la forma de discursos comunitaristas y neocomunitaristas. Por otro lado, también hay posturas posmodernas que rechazan cualquier interpretación conservadora o de derecha. A menudo se hace referencia a ellos como posmarxistas. A ese ámbito pertenecen autores como Ernesto Laclau (1977;1978; 2002), Chantal Mouffe (1992; 2001; 2005), Laclau/Mouffe (1991) o Rigoberto Lanz (2001; 2005; 2007). Ellos rechazan la simple transferencia de criterios democráticos liberales a todos los países y los critican como deficientes en las áreas de la ciudadanía y del derecho. Laclau y Mouffe postulan una democracia radical (véase cap. 2.2) y Rigoberto Lanz un “comunitarismo antiliberal” (Lanz, 2001: 105).

Otra corriente es la que se puede llamar de pensamiento crítico o concepción democrática holística (Lander, 1996 b). En ella están los enfoques que rechazan reducir la democracia a definiciones jurídicas y subrayan que cualquier definición lleva consigo, implícitamente, posturas políticas e ideológicas (Roitman, 1995: 60). La democracia procesual (Bobbio, 1988; Dahl, 1971; Schumpeter, 1975) en la realidad latinoamericana es analizada como democracia restrictiva (Gallardo, 2007: 26). Democracia, en cambio, es entendida como un conjunto de factores políticos, sociales y económicos (Borón, 1993; 1997; Gónzalez Casanova, 1995; Roitman, 1995; De Sousa 2001; 2004 a; 2004 b; 2007).

Con diferencia a una izquierda autoritaria, los derechos civiles y políticos son vistos como elementos necesarios para la democracia (Borón, 1993: 124; Gónzalez Casanova, 1995: 30). El campo de autores y autoras que pueden ser sumados a este debate es amplio y, no obstante, todas las diferencias —especialmente en relación al Estado, cómo se entiende y qué papel se le adjudica— hay unanimidad sobre la necesidad de una participación popular (política, social y económica). Y la práctica de la transformación en América Latina está también fuertemente influenciada por conceptos alternativos de democracia, que están orientados hacia una *co-* y *autogestión*. Entre los más conocidos se encuentran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, el Movimiento de los Sin Tierra y el presupuesto participativo en Brasil, y las experiencias en Venezuela y Bolivia.

El agotamiento histórico del modelo de producción y consumo de los países del norte, así como la forma política de

la democracia liberal, obligan a pensar el futuro del continente latinoamericano de manera diferente (Lander, 2006: 107).

2.1.2 *Venezuela: democracia vs. democracia*

Las cuestiones sobre democracia y democratización atraviesan todo este trabajo. En el siguiente capítulo nos concentraremos en algunas de las críticas liberales frecuentes: la democracia delegativa, la crítica al sistema judicial y a los procesos electorales. A estos se contraponen la autoevaluación que hace la población venezolana. Además se discute la cuestión de la *antipolítica* y del rechazo de la representación.

Basándose en el *regime analysis approach* varios investigadores llegan a conclusiones como que la democracia en Venezuela se encuentra amenazada, que Chávez la está destruyendo a ella y a sus instituciones, que creó una “democracia no liberal” y que es antidemocrático (De Venanzi, 2006: 64). Gutiérrez (2005) se limita a un análisis de partidos, ya que en el funcionamiento de estos, como mediación entre los ciudadanos y el Estado, se puede ver qué tan bien funciona una democracia (2005: 162). En este contexto el papel preponderante lo tienen los partidos tradicionales. Desde este punto de vista, la salud de la democracia en Venezuela solo puede ser muy mala: “el proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos venezolano, en general, y de los partidos políticos tradicionales, en particular, hace que la gobernabilidad democrática esté en vilo” (Gutiérrez, 2005: 170). Otros críticos emplean la definición de O’Donnell de los componentes filosóficos de una democracia moderna: el liberalismo como respeto a las libertades

individuales y políticas; el elemento republicano, en lo que concierne al equilibrio institucional de poderes; la *horizontal accountability* y el componente democrático de elecciones libres y periódicas, clasificando así a la Venezuela actual como más democrática que durante el régimen puntofijista, pero menos republicana y liberal (Coppedge, 2002; Luna, 2006: 3).

Estos críticos omiten que en Venezuela –contrario a otros países de la región– nunca se dio una institucionalización en el sentido de Max Weber, pues, el “Estado mágico”, un mecanismo clientelar de distribución de las riquezas petroleras, la corrupción y su ineficiencia, la hicieron imposible (Burchardt, 2005: 117; Coronil, 2002). La atención para las supuestas condiciones antidemocráticas de Venezuela es de origen ideológico-político. Así, por ejemplo, México o Colombia, países donde el ejército, el narcotráfico, las élites e instituciones de gobierno forman una densa red criminal, son considerados democráticos. En Venezuela, en cambio, los partidarios del discurso democrático-liberal, sean actores políticos, partidos o medios de comunicación, y que fungen como referencia internacional, son los mismos que durante los últimos años lanzaron múltiples llamados a desconocer la Constitución, las leyes y que organizaron o apoyaron varios intentos de golpe, disolvieron todos los órganos electos y cerraron televisoras estatales y medios comunitarios durante el golpe del 2002 (Fernández Liria/Alegre Zahonero, 2006: 68-70).

A nivel internacional domina la imagen contraria, y se le acusa al gobierno de Chávez de limitar la libertad de prensa (Reul, 2003: 53-57), a pesar de que la libertad de prensa en Venezuela está absolutamente garantizada. Más bien se ha

fomentado la libre expresión y democratizado el acceso a los medios con un enorme apoyo y fortalecimiento de los medios locales, comunitarios, alternativos y producciones independientes⁷⁷. En la prensa internacional se mezcla (debido a las relaciones de propiedad y del direccionamiento de flujos informativos internacionales) el derecho a la libertad de prensa con la postulación de un derecho inexistente a frecuencias de emisión para medios comerciales⁷⁸. Gran parte de la información sobre los supuestos ataques a la libertad de información en Venezuela proviene de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asociación de propietarios de los medios y no de periodistas.⁷⁹

Con frecuencia es criticada la polarización de la sociedad venezolana, atribuyendo esta responsabilidad al discurso de Chávez (Boeckh/Graf, 2003; Castañeda, 2006; Gratius, 2007: 8; Krennerich, 2003; Reul, 2003: 36, 69; Welsch/Werz, 2000; Willer, 2003; véase: cap. 2.1.7). La lógica detrás de esta crítica es

77 Véase: Britto (2006); Carmona Ulloa, Ernesto. (2004). *Economía, poder y medios de comunicación en América Latina: los dueños de Venezuela*, Caracas: Fondo Ed. Question; Catalá, José Agustín y Díaz Rangel, Eleazar. (2003). *De la dictadura de Pérez Jiménez a los años de Hugo Chávez: censura y autocensura a medios de comunicación en Venezuela: 1945-2003*, Caracas: Ed. Centauro; Díaz Rangel, Eleazar. (2002). *Chávez y los medios de comunicación social*, Caracas.

78 En el 2007, la licencia vencida del canal de televisión privada RCTV a una frecuencia de antena terrestre no fue renovada por falta de “interés social”. La frecuencia fue pasada a un nuevo canal público. RCTV había participado en el 2001 al golpe en contra de Chávez. Este paso administrativo, común a nivel mundial, tuvo como consecuencia una campaña internacional en contra del “cierre” del canal y el supuesto atropello de la libertad de prensa; mientras, RCTV sigue emitiendo por cable y satélite.

79 En el 2002, Danilo Arbilla era presidente de la SIP. Arbilla, miembro influyente de la SIP, había sido jefe de prensa del hoy en día encarcelado expresidente de la dictadura uruguaya, Juan María Bordaberry (1973-1984). Véase Isidoro H. Duarte (2008), “Coautor de crímenes de la dictadura uruguaya participa en Cumbre de la SIP”; versión en Internet: *YVKE mundial*. En: <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=4537,2/2/2009>.

presentada raras veces. Loyo (2002) declara que uno de los errores más grandes del gobierno de Chávez ha sido el de no haber establecido “nuevos canales alternativos para la resolución pacífica de los conflictos políticos entre los grupos de poder” (Loyo, 2002: 32). Así, la democracia de élites es presentada como proceder correcto, porque, según el punto de vista liberal, la existencia de élites y grupos de poder es prácticamente natural e inalterable. Al parecer, para Loyo es impensable que la conciliación entre élites es indeseada por ser profundamente injusta, y porque la existencia de grupos de poder impide la participación de las mayorías.

El proceso de transformación ha provocado una enorme politización de la sociedad. La mayoría de los marginados y no-representados, ha encontrado en la participación una alternativa a la representación. En Venezuela no se agotó solamente el modelo bipartidista, también el modelo de la democracia parlamentaria y la cultura que va con el mismo (Lanz Rodríguez, 2004 a, 2007 c: 20-21; Silva, 2005). Que el sistema sea todavía un híbrido, mayoritariamente representativo, no minimiza los retos formulados, la orientación normativa y la búsqueda constante de elementos alternativos. La omisión de esto hace imposible a los investigadores, apegados a las categorías liberales de democracia, captar la realidad venezolana.

La supuesta democracia delegativa

La crítica liberal más común afirma que Venezuela se ha convertido en una democracia delegativa (Altmann, 2005: 211; Bozo de Carmona, 2008; Coppedge, 2002: 5; Molina, 2001: 7;

Ramírez Roa, 2003: 151; Reul, 2003: 74, 76). El término proviene de Guillermo O'Donnell, quien lo usa para las democracias latinoamericanas con presidentes que son electos democráticamente, pero no representan. Se les delega el poder y ellos encuentran un arreglo con las élites tradicionales, las cuales –alimentadas por el Estado– ejercen el poder por la vía de instituciones informales (O'Donnell, 1994)⁸⁰. Ya que en Venezuela eso evidentemente no es el caso, los que acusan a Venezuela de ser una democracia delegativa emplean otra argumentación. Chávez disfruta de “apoyo popular para casi cualquier cosa que él o sus seguidores hicieran” (Coppedge, 2002: 1). Pero:

Soberanía popular –quien gobierna debe hacer lo que la mayoría de lo ciudadanos quieren que haga– es la definición más vieja y más literal de democracia, aunque no necesariamente la mejor. Teóricos contemporáneos consideran hoy la soberanía popular ni suficiente, ni estrictamente necesaria para la democracia (Coppedge, 2002: 6).

Chávez y sus seguidores se reconocían como agentes de un proceso revolucionario deliberado y consciente y creían que la conveniencia y la imposición unilateral de nuevas reglas estaban justificadas por la necesidad de un quiebre radical con el pasado (Coppedge, 2002: 1).

80 Como ejemplo de democracias delegativas, O'Donnell nombra a Perú bajo Fujimori. Venezuela en el 2004 es clasificada, junto a Guatemala (donde el ejército formaría un nicho autoritario), como “democracia política condicional”. Como las “democracias políticas” cumplen las características centrales a nivel nacional con “alcance limitado de la legalidad estatal”, “en la actualidad no es claro, aunque por diferentes razones (...) que elecciones limpias hayan sido institucionalizadas” (O'Donnell, 2004: 47). En el caso de Venezuela se hace difícil interpretar los datos a causa de “las incertidumbres generadas por las peculiaridades de su régimen” (O'Donnell, 2004: 48).

Para Coppedge la democracia liberal es la única democracia posible, y toda forma diferente puede solo ser, en el mejor de los casos, una democracia limitada o delegativa. Sin duda, la soberanía popular no puede ser el único criterio para definir democracia. El concepto venezolano de democracia incluye mucho más que los criterios minimalistas que enlista Coppedge: “un Ejecutivo que ejecuta la ley con respeto, mantiene su autonomía frente a la influencia de actores no electos, y aún queda responsable frente a otros actores democráticos como el poder legislativo y una justicia independiente” (Coppedge, 2002: 24)⁸¹. Para Coppedge la legitimación democrática de Chávez se basa, principalmente, en las primeras dos condiciones, derivadas de la lógica de la soberanía, pero que busca evitar el cumplimiento de la tercera condición, que se basa en la lógica de la democracia liberal (Coppedge, 2002: 24); pero nada más lejos del caso de Venezuela. La rendición de cuentas frente a otros actores democráticos no existía antes del gobierno de Chávez (véase cap. 1.1; Ramírez Roa, 2003: 141); así como no existía una justicia independiente. Y mientras la rendición de cuentas existe hoy en día, el problema de la imparcialidad de la justicia sigue vigente, aunque de una manera distinta del planteamiento de Coppedge.

81 El mismo modelo de Coppedge se basa en el incumplimiento de la segunda condición. No se cuestionan los gobiernos influenciados por la industria, actores transnacionales o los intereses de otros Estados. Carl Schmitt dijo que el poder no lo detenía quien lo ejercía, si no quien estaba en la capacidad de sancionar a quien lo ejercía, según cómo lo ejercía.

Algunas observaciones sobre justicia en Venezuela

El sistema judicial venezolano es objeto de crítica, tanto de opositores como de partidarios del proceso bolivariano. Durante el régimen del “Punto Fjio”, el sistema judicial perdió su carácter de impartir justicia, cruzado por redes clientelares que estaban a la orden de los intereses de los partidos en el gobierno y sus sindicatos (Müller Rojas, 1992: 76). El Tribunal Supremo era considerado la máxima expresión de la corrupción en la antigua IV República (Sanz, 2000: 51-52). A pesar de las mejoras que se han alcanzado durante los últimos años, el sistema judicial sigue funcionando de manera deficiente. Mientras la oposición critica a la justicia como “no independiente” del gobierno de Chávez, el gobierno se ve confrontado con el problema de que muchos jueces, fiscales y empleados del sistema judicial siguen siendo leales a las viejas élites políticas, económicas y latifundistas.⁸²

Hasta Coppedge reconoce que un cambio drástico en el sistema judicial y un cambio de los jueces era necesario, ya

82 Una situación parecida se observa con los entes policiales, los cuales están frecuentemente involucrados en conductas delictivas y al servicio de las viejas élites. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reportó que en el 2008 y en el primer cuatrimestre del 2009 la Procuraduría recibió 10.858 denuncias en contra de policías involucrados en violaciones de derechos humanos. En 755 casos se trató de asesinatos. En 253 casos las investigaciones de la Procuraduría habían sido terminadas: 134 policías estaban presos, se habían efectuado 12 condenas, abierto 367 juicios y 384 investigaciones judiciales. De los 10.103 casos restantes fueron resueltas y cerradas 5.641 investigaciones. Fueron comenzadas 942 investigaciones en contra de sospechosos y 741 juicios, 146 expolicías fueron encarcelados y ejecutadas 22 condenas. “FGR: Ministerio Público conoce 10 mil 858 casos de funcionarios por presunta violación de derechos humanos”; versión en Internet 22/5/2009. En: <http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa2205VI.htm>. No obstante, aunque un mejoramiento con respecto a años anteriores se expresa en menor cantidad de asesinatos, menos violaciones de derechos y un aumento de la persecución de crímenes perpetrados por agentes policiales, la situación sigue extremadamente crítica.

que los anteriores respondían a los partidos tradicionales y el sistema judicial estaba permeado por “familias tribales” (2002: 32). La crítica de que el gobierno hace todo lo posible por no dejar la justicia en manos de “enemigos del proceso” (Parker, 2001: 17), está fuera de lugar. Dado que la aplicación de todas las leyes, normas y reglamentos está sujeta a interpretación, es lógico. Aunque parece lógico que un gobierno que persigue un proceso de transformación se preocupe por postular a personas que comparten la nueva estructura de valores. Eso llegaría a ser un problema solo si la interpretación de las leyes se rigiera en contra de las normas judiciales y constitucionales vigentes.

En el aparato judicial se da una confrontación entre jueces y fiscales que representan los intereses de las viejas élites, y los que intentan sustraer el control de la justicia a las viejas élites. Es comprensible que la reestructuración del sistema judicial corrupto no sea fácil y necesite varios años. Los nuevos jueces y fiscales, que se rigen bajo la nueva Constitución, primero tienen que ser capacitados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó que el 84% de los jueces en Venezuela sean provisionales o temporales; aunque señala que esa situación antecede al gobierno de Chávez (CIDH, 2003: punto 539 y 540). Con la reestructuración del sistema judicial, este número pudo ser reducido a un 46,35% para 2007, lo que representa una cantidad mucho menor, comparada con los gobiernos anteriores (CIDH, 2007: punto 287). La Comisión criticó también que la traducción incompleta de la Constitución a normas legales estaría obstaculizando la consolidación plena de un Estado de Derecho.

La Asamblea Nacional ha tardado bastante en la aprobación de leyes, aunque estuvo compuesta casi exclusivamente por partidarios del proceso entre 2006-2010. Las causas de este retraso están tanto en la complejidad del procedimiento⁸³, como en la ineficiencia de la Asamblea Nacional. Aunque la razón principal para los retrasos está en la resistencia al cambio dentro del propio Sistema Judicial, y eso afecta más al proceso de transformación que a las viejas élites. Esto queda evidente, por ejemplo, en que no obstante el asesinato de más de 230 campesinos desde 2002 hasta 2010, perpetrados por encargo de terratenientes, hay un solo culpable en la cárcel.

Haciendo una comparación de los reportes de la CIDH del 2003 al 2007 con los gobiernos anteriores, se puede observar que el acceso a la Corte estaba determinado por el estatus social de los querellantes. En el gobierno de Chávez, el número de querrelas individuales aumentó exponencialmente, a pesar de que la situación general de los derechos humanos ha mejorado bastante. Por su parte, las posturas de la CIDH son contradictorias. Por un lado, formula la preocupación de que los asuntos alrededor del golpe de Estado de abril de 2002 no hayan tenido consecuencias jurídicas para los responsables de la ruptura del hilo constitucional y que las investigaciones sean lentas (CIDH, 2003: punto 533-536). Por otro lado, expresa repetidamente su preocupación por el nombramiento y suspensión de jueces, sin crear ningún nexo entre la impunidad en el caso

83 Propuestas de leyes son elaboradas por comisiones que discuten con grupos de afectados e interesados, y en parte llevan a cabo extensas consultas públicas y debates. Al final las leyes deben ser aprobadas en tres lecturas.

del golpe de Estado y el aparato judicial corrupto, aunque este sea obvio.

A finales del 2002, el Tribunal Supremo decidió que no había motivo para acusar a los militares involucrados en el golpe, argumentando que, cuando el general de más alto rango había declarado la renuncia del presidente, todo el país había tenido “el derecho y el deber” de creerle. Bajo esas circunstancias, los militares anunciaron el nombramiento de un “presidente provisional” (TSJ, 2002). Y aunque los militares no tuvieran ese derecho y aunque el Tribunal Supremo no pudiera “aplaudir” este hecho, habría que reconocer y aceptar la “buena fe” en sus actos, dado que su actuación “estuvo preñada de buenas intenciones” (TSJ, 2002). Esto demuestra quién tenía el poder de la justicia en Venezuela en ese momento y cómo fue usada para romper sistemáticamente el derecho y posibilitar a las viejas élites una actuación impune en contra del gobierno de Chávez.

En consecuencia, los jueces comprometidos con la Constitución y el cambio en curso, emprendieron una serie de investigaciones en contra de los participantes del golpe, acusándolos de delitos específicos. El fiscal Danilo Anderson, que investigaba a personajes poderosos de la economía y la política involucrados en el golpe, fue asesinado el 18 de noviembre de 2004 con una bomba teledirigida, colocada debajo de su carro. El fiscal tenía abierta una investigación en contra de la policía de Caracas (bajo el mando de la oposición) que, durante el golpe del 11 de abril, abrió fuego contra la población, matando a varias personas. Anderson acusó al exalcalde y exjefe de la policía. Tenía abierta también una investigación en contra de Capriles Radonski. Este, alcalde en el 2002 de Baruta, lideró

un intento de asalto a la embajada cubana durante el golpe. Pocas semanas antes de su muerte, Anderson había empezado a citar para audiciones a los 395 firmantes del decreto de autonombramiento del presidente golpista y entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga (Azzellini, 2007 b: 94-99).

Según Fernández Liria y Alegre Zahonero, Venezuela intenta “sentar las bases legislativas para que el derecho no pueda ser secuestrado por la burguesía” (2006: 20-21). Para estos autores, el país se ve expuesto a ataques tan fuertes y tiene que hacer una “revolución” para instalar, por fin, un Estado de Derecho, porque “por primera vez –quién sabe si en toda la historia de la sociedad moderna– la aventura ciudadana del Estado de Derecho está empezando a ser algo más que un estafa” (2006: 23).

Bajo la Constitución de 1961, los derechos fundamentales fueron suspendidos varias veces: durante los levantamientos militares de los años sesenta, durante el Caracazo y durante los levantamientos cívico-militares de 1992. Con el gobierno de Chávez, el uso de la violencia del Estado ha quedado en el marco de la Constitución de 1999. No se ha declarado el estado de emergencia, ni la limitación de derechos, ni en las situaciones más complicadas, como el golpe o el paro petrolero 2002-2003 (Rincón/Fernández, 2006: 101). Sin embargo, la oposición reclamó repetidamente el derecho a la resistencia, incluido en el artículo 350 de la Constitución, para llamar a la rebelión en contra del gobierno (Rincón/Fernández, 2006: 102).

Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) representa el quinto poder, independiente de los otros cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral del Pueblo)⁸⁴. En la literatura se encuentra a menudo la acusación de que el presidente Chávez, el gobierno venezolano y su proceso de cambio, no gozan de legitimidad democrática (Lissidini, 2006 a: 15; Kornblith, 2001: 159). Eso a pesar de que las elecciones en Venezuela, desde el año 2000, están entre las más observadas a nivel mundial (OEA, UE, el Centro Carter) y en ninguna ocasión se pudo encontrar alguna irregularidad relevante⁸⁵.

Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre del 1998, con el 56,2% de los votos; el mejor resultado en Venezuela desde la elección de Rómulo Gallegos en 1947. Muchos medios de comunicación argumentaron que una gran abstención posibilitó la victoria. Sin embargo, el apoyo que obtuvo en porcentaje de todo el electorado fue mucho mayor (33,4%) que su antecesor Rafael Caldera (17,7%)⁸⁶. Además, como indica Coppedge, en encuestas menos influenciadas por la abstención electoral que los resultados de elecciones, Chávez entre 1999 y 2002 también tenía una aprobación entre el 55 y el 71% (2002: 6). Entre 1998 y 2000 el campo de gobierno en elecciones y referendos reci-

84 Una descripción detallada del poder electoral, sus orígenes teóricos y su función se encuentra en Hernández/Lucena, 2003.

85 Para un análisis de procesos electorales específicos (referéndum 2004, elecciones de gobernadores y alcaldes 2004, elecciones locales 2005), véase: Azzellini, 2007 b: 63-82.

86 Calculado con base en CNE: Elecciones presidenciales, cuadro comparativo 1958-2000; versión en Internet: 20/3/2007. En: <http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf>.

bió constantemente entre 3,2 y 3,7 millones de votos. Los votos para el proyecto bolivariano aumentaron constantemente hasta el 2006 (en el referéndum de 2004, 5,8 millones, y en las elecciones de 2006, más de 7 millones). Mientras gran parte de la población marginada en la IV República estuvo excluida del proceso electoral por no estar registrada, a partir de 1998 se dio una ampliación enorme de la población votante. En las entrevistas con voceros y activistas de Consejos Comunales, en los barrios de Caracas, casi todos declararon no haber participado en un proceso electoral antes de 1998.

El sistema electoral aplicado desde las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2000, y reformado en 2009, es parecido al sistema usado, por ejemplo, en Suiza. Dos tercios de los diputados son electos en circunscripciones, según voto mayoritario, y el tercio restante siguiendo el sistema de representación proporcional según D'Hondt. Con la nueva ley del 2009 la relación cambió a 60%-40% y se suprimió la compensación por listas regionales, que existía anteriormente. Los candidatos electos no son automáticamente uno por circunscripción, sino que pueden ser más, si el número de habitantes lo exige. Con el sistema electoral, el margen de ganancia de los chavistas en la representación fue más alto que en porcentaje de votos; sin embargo, como lo admite Coppedge, con los sistemas electorales de EE.UU., Gran Bretaña o Canadá, el resultado habría sido parecido (Coppedge, 2002: 17). La nueva ley de 2009 no arrojó cambios significantes y en las elecciones a la Asamblea Nacional del 2010 la oposición se aprovechó igual de la ley, enviando a la Asamblea Nacional un número desproporcionado

de diputados en las regiones que ganó con mayoría cómoda, como el Zulia.⁸⁷

El 15 de agosto 2004 Chávez derrotó, con el 59,25%, el referéndum revocatorio en su contra promovido por la oposición. Con más de 5,8 millones de votos a su favor y una participación electoral de casi el 70%, el resultado representó otra derrota política para la oposición (Azzellini, 2007 b: 63). El Centro Carter y la OEA fueron los observadores electorales más importantes. La oposición acusó al gobierno de fraude electoral, pero todos los observadores electorales, entre ellos, el expresidente de EE.UU., Jimmy Carter, confirmaron que el proceso electoral había sido justo y transparente. El CNE hasta aceptó examinar 150 máquinas electorales del sistema electoral electrónico, escogidas al azar. El resultado del recuento, supervisado por la OEA y el Centro Carter, arrojó un margen de error por debajo del 0,02% (Azzellini, 2007 b: 71).

En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, Chávez recibió el 62,84% de los votos (7.309.080), contra el 36,9% (4.292.466 votos) de Manuel Rosales, que era candidato para una amplia coalición de oposición. La participación electoral fue de un 74,69%⁸⁸. Más de 1.400 observadores electorales internacionales, entre otros de la OEA, UE, el Centro Carter y del Mercosur, monitorearon el desenvolvimiento y certificaron

87 Azzellini, Dario. (2010). *Keine Niederlage, aber auch kein großartiger Sieg*. En: <http://amerika21.de/analyse/15741/analyse-azzellini>.

88 Chávez consiguió la mayoría en los 24 estados y los mejores resultados en regiones pobres y agrícolas, o con una importante población indígena y afrovenezolana, y en el estado Vargas, que fue devastado en 1999 por un alud. En Delta Amacuro recibió el 78,02%; en Amazonas 77,81%; en Portuguesa 77,06%; en Sucre 73,71%; en Cojedes 73,36%; en Guárico y Aragua un 72% y en Monagas un 71%; en Apure, Trujillo y Vargas más de 69%, y en Bolívar y Barinas más de 68% de los votos. Datos en: <http://www.cne.gov.ve/>.

elecciones limpias (Azzellini, 2007 b: 308). La oposición reconoció por primera vez, públicamente, un resultado electoral.

La primera derrota electoral de Chávez y el proceso bolivariano se dio el 2 de diciembre de 2007, en el referéndum para la reforma constitucional, rechazada con 4.504.354 votos (50,7%). En las elecciones a la Asamblea Nacional, en septiembre de 2010, el PSUV y aliados (principalmente el PCV) recibieron 5.423.324 votos (48,13%) y ganaron 98 de los 167 diputados; la alianza opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) 5.320.364 votos (47,22%) y 65 diputados. El PPT, que había dejado el gobierno a principios de 2010, ganó 353.979 votos (3,14%) y 2 diputados. La participación electoral fue muy alta para una elección parlamentaria (66,45%). En comparación a la enmienda constitucional, las fuerzas de gobierno perdieron 900.000 votos, mientras las fuerzas oponentes (incluyendo el PPT) ganaron unos 470.000 votos más⁸⁹. Desde el 2006 el deterioro del campo bolivariano ha sido constante, aunque con recuperaciones coyunturales.

La oposición no tiene muchas razones para festejar, continúa muy dividida. En varios estados y alcaldías candidatos de la oposición compitieron entre ellos (aunque no tuvieran ni suficientes votos para ganar juntos) y sus gobernadores y alcaldes pertenecen a varios partidos diferentes (Copei, AD, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo) (Azzellini, 2008 a). Pero, también se demostró que Chávez no representa una garantía de éxito y la población no lo sigue a ciegas, como señalan aquellos que

⁸⁹ Azzellini, Dario. (2010). *Keine Niederlage, aber auch kein großartiger Sieg*. En: <http://amerika21.de/analyse/15741/analyse-azzellini>.

lo acusan de populista. Por el contrario, se puede observar un comportamiento electoral muy diferenciado. En comparación a las dos décadas anteriores al gobierno de Chávez, se puede observar un fuerte aumento de la participación electoral, que indica que la población comienza a mirar la participación en las elecciones como un mecanismo con el que se puede influir en las políticas públicas y la toma de decisiones.

Constitución democrática de la población

La pretensión del proceso bolivariano de ser profundamente democrático y democratizador es confirmada por la autoevaluación de la población. Desde 1995, la encuestadora chilena Latinobarómetro produce un informe basado en unas 20.000 entrevistas sobre la evaluación de la población en 18 países latinoamericanos, con respecto al gobierno propio y al de otros países. En la encuesta de 2005, el porcentaje de la población venezolana que considera el propio país como “totalmente democrático”, es más alto que en cualquier otro país de América Latina. En una escala de 1 a 10, Venezuela obtuvo un promedio de 7,6 en la evaluación de su población (2005: 48).⁹⁰

Esa imagen es confirmada por otra investigación en 2006, que además diferencia entre zonas de residencia, lo que permite conclusiones con respecto al estatus social:

90 La pregunta ya no fue hecha de la misma manera en los años siguientes.

T A B L A 1 :
¿ C R E E S Q U E E N
V E N E Z U E L A H A Y D E M O C R A C I A ?

	Residentes de barrios	Residentes de urbanizaciones
Sí	423 (85%)	138 (55%)
No	74 (15%)	112 (45%)
No contesta	53	50

Fuente: Hellinger, 2008.

Las clases medias y altas de Venezuela, que suelen autodenominarse *gente*, tienen, por lo general, un concepto procesual de democracia, que es compatible con un régimen de élites. Para el *pueblo*, los *de abajo*, la democracia, más que supuestos ritos democráticos debe cumplir con los intereses y las necesidades de las grandes mayorías y hacer partícipe al *pueblo* en la definición de las políticas (Parker, 2006: 90). Tomando en cuenta las aspiraciones democráticas actuales en Venezuela, no sorprende que las clases medias y altas sean menos democráticas que las clases bajas. Esta postura se reafirma en las acciones concretas que ha tomado la oposición.

Lo mismo se puede percibir en una encuesta de Latinobarómetro en el 2007, sobre la relación entre la postura democrática y la autclasificación étnica: el 33% de la población venezolana se autodenomina mestiza y 30% blanca (sobre el otro 37% no hay información). Entre los mestizos el porcentaje de los que se consideran demócratas es del 81%, mientras que entre los que se consideran blancos apenas alcanza el 63% (2007: 87). Dado que el estatus social en Venezuela, en muchos casos, sigue

conectado al color de la piel, se puede deducir del resultado que la convicción democrática de las clases bajas es más fuerte que en las clases medias y altas.

Con un 59% de la población que aprueba el funcionamiento de la propia democracia, Venezuela tiene el dato más alto de todo el continente, después de Uruguay (66%), mientras el promedio latinoamericano es apenas de 37% (Latinobarómetro, 2007: 81). Con un 80% de aprobación, Venezuela tiene también el porcentaje más alto de población que piensa que las elecciones son el medio más efectivo para lograr un cambio (Latinobarómetro, 2008: 99). Esto indica que hay posibilidad de elección entre opciones consideradas diferentes y que los mecanismos democráticos de elección funcionan y gozan de cierta confianza. Solo el 6% cree que no es posible ejercer influencia a través del voto, el dato más bajo de toda América Latina (Latinobarómetro, 2008: 101).

En 2007 el “apoyo para la democracia” en Venezuela fue del 67%, ocupando, junto a Bolivia, el tercer lugar después de Costa Rica (83%) y Uruguay (75%), frente a un promedio continental de 54% (Latinobarómetro, 2007: 81). La satisfacción de la población venezolana con la situación y el desarrollo del país, muy arriba del promedio, no se encuentra en las encuestas de Latinobarómetro en años anteriores a la presidencia de Chávez de 1996 a 1998. Mientras no hay resultados para 1999, los datos del año 2000 muestran un salto del 20% en comparación con 1998 (Parker, 2006: 89).

Después de Uruguay (86%), Venezuela se encuentra, junto a Argentina, en el segundo lugar con un 83% de la población que considera que la democracia, no obstante los errores, es

el mejor sistema. El 70% de los venezolanos, el dato más alto de América Latina, está convencido de que el gobierno busca el bienestar de toda la población (Latinobarómetro, 2007: 81). La afirmación: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos” es apoyada solo por un 39% en Venezuela, junto a Bolivia; es el dato más bajo en el continente después de Uruguay (31%), y en 10 de los 18 países se encuentra una mayoría que comparte la afirmación, mientras el promedio está en 53% (Latinobarómetro, 2008: 85).

¿Cuáles son las características más importantes de la democracia? En Venezuela las libertades civiles obtienen la aprobación más alta de toda América Latina con un 69%. También se encuentra el porcentaje más bajo (40% frente a un promedio continental de 55%) de personas que declara que “la política es tan complicada que no se entiende” (2005: 37). La cultura cívica en Venezuela es especialmente fuerte. Un 44% conoce la propia constitución (2005: 14). El 78% de la población apoya que “la democracia es el único sistema con el que [el país] puede llegar a ser desarrollado”. Latinobarómetro llega a la conclusión de que Venezuela, junto a Uruguay, tiene la cultura cívica más desarrollada de Latinoamérica (2005: 17).

Con respecto a cuáles son las características más importantes de la democracia, las afirmaciones de las clases medias y altas no difieren mucho de las afirmaciones de las clases bajas. La única diferencia se nota en lo que concierne a la libertad de prensa. Eso es probablemente debido a que en los barrios hay una fuerte aversión a la continua propaganda de los medios privados en contra del gobierno y el proceso.

Si la población venezolana le adjudica a los valores democráticos una importancia muy alta en comparación al resto del continente y además tiene la cultura cívica más desarrollada, ¿por qué entonces aprobaría el supuesto desmontaje de las instituciones liberal-democráticas? Sorprende el hecho de que casi ningún investigador llegue a la conclusión lógica de que es justo la experiencia, de la mayoría de la población venezolana, con la democracia liberal la que lleva a considerarla antidemocrática. Eso no debe hacer desistir de emprender un análisis crítico de los hechos; pero el contexto y los conceptos de la crítica deben ser obligatoriamente otros que los liberal-democráticos.

¿Antipolítica o rechazo a la representación?

El éxito de Chávez ha sido relacionado frecuentemente con el avance de la *antipolítica* y del surgimiento de nuevos actores políticos (Burchardt, 2005: 102; López Sánchez, 2001; Ramírez Roa, 2003; Ramos Jiménez, 2002: 3; Reul, 2003: 71-63; Rivas Leone, 2002; Röder/Rösch, 2001). Se entiende por *antipolítica* el rechazo a las prácticas políticas tradicionales (Rivas Leone, 2002: 8), llevando al “desarraigo, desorientación, apatía y confusión” (Rivas, 2002: 11), de la que se aprovechan los actores con un discurso “antipolítico”. La tesis de la antipolítica y de la apatía política es, desde su origen, profundamente ideológica. Acompañó al neoliberalismo de manera funcional: la distancia entre “sociedad” y “política” fue ampliada ulteriormente, se cultivó el individualismo y se fortaleció la idea de la sociedad

como terreno neutral, en el que las ONG, lejos de la política, asumen la responsabilidad para lo social (Medina, 1999: 88).

La tesis de la antipolítica se basa en el nexo inseparable de la “democracia moderna” con la representación estructurada en la forma del partido (Rivas Leone, 2002: 12). La crisis de la forma partido es una anomalía, una disfunción de “una de las principales agencias de socialización, representación y participación” (Rivas Leone, 2002: 4). Entonces, el rechazo a la representación y al sistema de partidos es igual al rechazo de la “política”. Solo desde esta perspectiva se puede hablar de despolitización y apatía política en la América Latina de los años noventa. Para los seguidores de la democracia liberal, la mejor respuesta al avance de la antipolítica y “otras tendencias” (Rivas Leone, 2002: 16) está en fortalecer el sistema de partidos y profundizar la separación entre lo social y lo político. Estas, sin embargo, son también las razones centrales de la crisis democrática. La experiencia del poder de élites en democracias liberales no es imaginaria y se perpetúa: “Representantes electos tienden a actuar en gran parte en nombre de algunos segmentos organizados de la sociedad que tienen un monto desproporcionado de capital material e ideológico (dinero, educación, un partido político, recursos clientelares, y acceso a los medios de difusión masiva)” (García-Guadilla/Hurtado, 2000: 3-4). A eso se junta la experiencia de que los líderes políticos suelen actuar de otra manera distinta a la que prometieron antes de las elecciones.

Además, el modelo de la representación no está a la altura de sociedades multiétnicas ni sociedades en las que hay grandes diferencias de intereses con las élites económicas, dado

que siguen sin resolverse las cuestiones de la representación de identidades múltiples y la rendición de cuentas (De Sousa, 2004 b: 19).

En la mayoría de los países con un historial más largo de democracia representativa, la participación electoral ha bajado constantemente desde los años ochenta; mientras, es cada vez menor el número de personas que se organiza en partidos y sindicatos (Wainwright, 2003). Un lazo fuerte de los electores con ciertos partidos cada vez existe menos. Partidos tradicionales pueden perder o ganar hasta un 20% de los votos de una elección a la otra. Partidos con décadas de tradición política pueden llegar de repente a la insignificancia, como en el caso de Italia y Venezuela⁹¹. A esto se junta el peso creciente de empresas (transnacionales), e instituciones internacionales y supranacionales en la representación. Aquí la “crisis de la representación” es aún mayor. Esta crisis no se debe solamente al carácter no democrático de tales actores, sino también a que la “representación disminuye con la distancia hacia los representados” (Negri/Hardt, 2002 a: 301). Esta crisis es reforzada por el “pensamiento único”, la jaula discursiva del neoliberalismo. Los medios de comunicación y la política responden a supuestas obligaciones materiales y estructurales que resultan de relaciones sociales “naturalizadas” y que representan cada vez más, de manera concentrada, los intereses de élites económicas y políticas.⁹²

91 Sobre la crisis de la representación y el aumento de la brecha entre representados y representantes en Venezuela en los ochenta y noventa véase: Carvallo, 2005.

92 Aunque hay que constatar que “el pensamiento único”, en los últimos años, logra dominar cada vez menos el debate público.

Los movimientos emancipadores y de izquierda en América Latina comparten el rechazo de la lógica de la representación, observándose un regreso al protagonismo en primera persona. La “autonomía” en Chiapas, el “que se vayan todos” en Argentina, la lucha de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, o Venezuela con su “democracia participativa y protagónica” (Azzellini, 1999; 2004; Colectivo Situaciones, 2002), no han sido, ni son, antipolíticos o antidemocráticos, si no rechazan el principio de la representación, que han vivido como antidemocrático. Esto es una indicación de que la democracia liberal no solo ya no funciona, si no que ya no es aceptada por sectores crecientes de la sociedad. Sin embargo, no significa que de ello derive automáticamente una alternativa, como muestra el caso de Argentina (Monedero, 2007: 11), donde los levantamientos populares alrededor del cambio de milenio sacaron a presidentes y gobiernos de sus cargos, pero no pudieron ni crear ni forzar una política interna realmente diferente.

2.1.3 *Sociedad civil*

Pocos términos han sido usados de manera tan inflacionaria y arbitraria durante los últimos años como el de *sociedad civil*⁹³. Desde los años ochenta indica, en el debate público, una gran cantidad de fenómenos y constelaciones de sectores sociales (Brand, 1997: 154). Aunque no exista ninguna definición común y compartida, todos piensan conocer el significado

93 En nombre de la “sociedad civil” se han conducido guerras, reducido los gastos sociales, exteriorizado responsabilidad institucional y empresarial a individuos, defendido los intereses de entes corporativos, empresas transnacionales e imperios mediáticos, consolidándose las desigualdades.

del término, que originalmente proviene del filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937).

En teorías liberal-conservadoras Estado y sociedad civil están separados uno del otro, son opuestos e independientes. Durante las últimas dos décadas, en algunos conceptos se adjuntó el mercado como tercera esfera. A la sociedad civil se le adjudica ser la portadora de las pretensiones morales y de los valores éticos más altos, y por eso es el actor privilegiado de la participación (Bresser/Cunill/Grau, 1998: 4; Cunill, 1991). Así, modelos neoliberales de sociedad festejan a la sociedad civil, refiriéndose a todo lo que no pertenece directamente ni al mercado ni al Estado y que debe asumir responsabilidades que han sido exteriorizadas por estos.

Uno de los logros, contradictorios como sabemos, de dicho proceso hegemónico (consignado como avance o profundización de la democracia liberal) fue el advenimiento de una “nueva sociedad civil” donde la ciudadanía aparecía liberada de la carga de clase y de la historia (Tischler, 2004: 107).

El término *sociedad civil* ha servido también para oscurecer y marginalizar cualquier pedido de democratización. En lugar de ejercer una influencia directa sobre decisiones del poder, constituido en general, y del gobierno, en especial, (lo que significaría que la toma de decisiones se da de manera democrática o sería, por lo menos, legitimada democráticamente), la población debe ejercer su influencia en la “opinión pública” y mediante la sociedad civil, quedando así reducidos los dos ámbitos a meros portadores de la crítica sin ser objeto

de crítica, ni de manera específica ni de manera estructural. Y si partimos del hecho de que la sociedad civil es parte del Estado integral, entonces la transformación radical se vuelve imposible. Quien acepta la separación entre sociedad civil y sociedad política como inalterable puede operar únicamente cambios que pueden ser integrados en las modalidades capitalistas de funcionamiento, o que, por lo menos, no las obstaculizan. Algunos izquierdistas, en el marco de los discursos comunitaristas y algunas variantes del fortalecimiento de la responsabilidad común para asumir servicios sociales, cayeron en esta trampa.⁹⁴

Una interpretación emancipadora del término *sociedad civil* surgió en la historia de luchas en contra de las dictaduras latinoamericanas y en algunos regímenes burocrático-autoritarios de Europa del Este (Lummis, 1996: 30). En tiempos más recientes, el movimiento Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en México, propagó una interpretación positiva de sociedad civil (antes de que se refiriera de manera más clara a fuerzas anticapitalistas). De manera operativa el EZLN utilizaba *sociedad civil* como sinónimo de *pueblo soberano*, organizado fuera de las estructuras estatales, siendo actores independientes y sinceros, contrapuestos a los actores de las estructuras del Estado y su cultura de la corrupción, la estafa, el robo y el asesinato. El papel de la *sociedad civil* en el Estado queda sin aclaración en este concepto. A causa del importante papel de las ONG en México en la lucha por una sociedad más democrática, en el concepto del EZLN, se convirtieron en la

94 Para una crítica véase: Lummis, 1996: 30-37.

punta de lanza de la sociedad civil, desarrollándose una problemática equiparación de las ONG con la voluntad del pueblo soberano. Generalmente, el término *sociedad civil*, en su uso positivo, queda poco concreto.

Según Gramsci el Estado moderno representa una unidad entre una *sociedad civil* y una *sociedad política*. Gramsci creó este concepto para analizar el por qué de la revolución victoriosa en Rusia y el fracaso de las revoluciones en Europa occidental, no obstante los movimientos revolucionarios de gran magnitud. Identificó la diferencia fundamental entre la Europa occidental “moderna” y la Rusia zarista en la organización del Estado. Mientras Rusia era un Estado centralizado con un pequeño centro de poder, Gramsci categorizó a las sociedades de Europa occidental como Estados integrales.

La sociedad civil es el “conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’ (Gramsci, 1984: tomo V, cuaderno 12, §1: 357) en el cual se lucha por la hegemonía y se organiza el consenso de los dominados. Es el campo en el cual se mantienen y reproducen las relaciones de dominio. Gramsci compara a estos organismos privados, que conforman a la sociedad civil (asociaciones, iglesia, medios, universidades, partidos etc.), con “trincheras” del sistema. En la sociedad política, en cambio, el dominio es impuesto directamente y asegura “la disciplina de aquellos grupos que no ‘consienten’ ni activa ni pasivamente” (Gramsci, 1984: tomo V, cuaderno 12, §1, 357).

Así, el *dominio moderno* se basa no solo en la fuerza (en las funciones represivas del Estado). El fundamento del régimen parlamentario está en la combinación de la fuerza y el

consenso. Y no es la obligación la que predomina, es decisivo el “consenso de la mayoría” (Gramsci, 1984: tomo I, cuaderno 1, §48, 124). Este se construye en la opinión pública, que a su vez está “estrechamente vinculado con la hegemonía política, o sea que es el punto de contacto entre la ‘sociedad civil’ y la ‘sociedad política’, entre el consenso y la fuerza” (Gramsci, 1984: tomo III, cuaderno 7, §83, p. 196).

El Estado entonces “es todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci, 1984: tomo V, cuaderno 15, §10, p. 186). La sociedad civil es entonces la “base del Estado entendido estrictamente como aparato gubernativo-coercitivo” (Gramsci, 1984: tomo III, cuaderno 6, §136, p. 104). Para las estrategias revolucionarias, esto significó que hay que entender la revolución como una larga lucha en diferentes ámbitos sociales, en vez de verla como ataque al centro de poder, como asalto al Palacio de Invierno. Para eso hay que luchar también por la hegemonía en la sociedad civil, ya que las clases dirigentes oprimen con su hegemonía la energía potencial de los oprimidos.

El rol del término sociedad civil en Venezuela

Numerosos investigadores liberales critican un supuesto arrinconamiento de los actores de la sociedad civil en Venezuela (Coppedge, 2002; González de Pacheco, 2003; Reul, 2003; Röder/Rösch, 2001; Welsch/Werz, 1999; 2000; 2002). Las malas relaciones entre sociedad civil y Estado serían la

causa principal del deterioro de la gobernabilidad. La crítica radica en el presupuesto de que mantener la separación entre sociedad política y civil es importante y correcto. Surge la pregunta: ¿qué es lo que entienden los autores con sociedad civil y quién es parte de ella? La mayoría de la población, que apoya el proceso, obviamente no es parte de la sociedad civil, mientras al mismo tiempo se le niega el derecho de transformar la sociedad, sin pedirle permiso anteriormente a las élites gobernantes. El entramado de grupos, organizaciones y redes sociales, políticas y culturales no es digno de mención alguna. Para Coppedge existe solamente una masa amorfa de “seguidores de Chávez” (igual que para González de Pacheco, 2003; Reul, 2003; Röder/Rösch, 2001; Welsch/Werz, 1999; 2000; 2002). Como grandes actores de la sociedad civil, el autor nombra a la Iglesia, las asociaciones empresariales y la CTV (Coppedge, 2002: 17-18).

El discurso sobre la “sociedad civil”, en Venezuela, sirvió en los años ochenta y noventa como mecanismo de exclusión para las mayorías de la población y fue usado para la representación de intereses de la clase media y alta (Denis, 2001: 63-65; García-Guadilla, 2003; I-AA, 2008; Lander, 1996 a; Medina, 2003). En el debate público, la sociedad civil estaba acompañada de un discurso neoliberal antipolítico y antipartidista, construyendo una contradicción entre un Estado ineficiente y corrupto, y una mítica sociedad civil llena de fantasía y creatividad, sincera y participativa. El reto era una sociedad libre de ideología, que asumiera las tareas del Estado bajo la propia responsabilidad, y en la cual existen solamente “ciudadanos”,

mientras la economía está a salvo de cualquier pedido en nombre de la democracia (Lander, 2007 b: 24).

En los años ochenta, la apertura del Estado hacia la sociedad civil consistía en reformas mínimas y una descentralización de las estructuras administrativas. El sistema político ilegítimo intentó integrar al modelo de dominación a las élites no políticas para consolidarse. Se integró un grupo reducido de redes de inmigrantes europeos, pequeños y medianos empresarios, que, a través de educación o créditos, habían subido de estatus en la estructura social (Denis, 2001: 63-65). En su función eso corresponde a la interpretación de Gramsci. Sin embargo, con la pauperización progresiva, el consenso en Venezuela solo existía dentro a una minoría.

Las medidas que se tomaron correspondían a las demandas principales de las asociaciones de vecinos de clase media. En el curso de la polarización social en los años ochenta, la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos se había dividido en dos organizaciones: una de clase media y otra de pobres (Roberts, 2003: 87). Las asociaciones de clase media y alta lograron cierta autonomía, dado que no chocaban con los intereses del poder. Se concentraban en problemas de aseo y de la defensa de la propiedad privada (Buxton, 2003: 150; Lander, 1996 a: 55-56; 2007 b: 24). Aunque, al igual que el sistema político, estos actores no estaban en condiciones para producir un consenso, en el sentido de Gramsci. Con la marginalización de las mayorías en el modelo de apertura hacia la sociedad civil, la pérdida de legitimidad del Estado se aceleró, expresándose en un aumento de la represión y, posteriormente, en el Caracazo. Por eso el término sociedad civil, que con frecuencia tiene una

connotación más bien positiva, en Venezuela solo se utiliza en las clases medias y altas.

Las demandas de los sectores marginados y excluidos no buscaban a una apertura hacia la sociedad civil sino el protagonismo directo del pueblo y el poder constituyente. Las organizaciones de la “sociedad civil” de clase media y alta, bajo la impresión del Caracazo, se concentraron en la defensa de los propios privilegios, que vieron amenazados por la movilización de los subalternos. Su respuesta a la crisis correspondió, en los años noventa, sin compromiso a sus intereses de clase. “Defendieron su propiedad privada y sus urbanizaciones con estrategias casi militares violentas, excluyentes y antidemocráticas” (García-Guadilla, 2006: 45).

Durante los años noventa, especialmente bajo el mandato del presidente Caldera, el Estado externó gran parte de su política social hacia la “sociedad civil”. Una red de ONG asumió, con subvenciones del Estado, las antiguas funciones estatales en el sector social. Cuando Chávez llegó a la presidencia hubo una redefinición de la relación entre el Estado y la población. La relación ya no era mediada por las ONG, sino que era directa con las comunidades (I-AA, 2008). Las movilizaciones callejeras de la clase media y alta, que comenzaron a finales de 2001, fueron lideradas por grupos y organizaciones de la oposición que –igual que los medios privados de difusión masiva, que asumen el papel central en la articulación de los intereses y en la movilización– se autodenominan “sociedad civil” (López Maya, 2003 b: 218; Medina, 2001: 44).

Con el aumento de la confrontación entre oposición y gobierno, a partir de inicios de 2002, creció otra vez la

importancia de la representación de intereses corporativos como la CTV, Fedecámaras y los partidos opositores⁹⁵. A partir de mediados de 2004, la oposición se presentó de nuevo como sociedad civil; y en el 2008 como “estudiantes”. En las manifestaciones estudiantiles participaban los políticos y activistas opositores, y los líderes estudiantiles más importantes se anotaron en las listas opositoras en las elecciones locales y regionales en noviembre del 2008. Los medios de comunicación, que tuvieron una participación relevante en el golpe de abril 2002, siguen jugando un papel central hasta el día de hoy con su puesta en escena.

Desde 1999 en Venezuela las trincheras de avanzada del sistema, según Gramsci, y los niveles de construcción del consenso social, se encuentran ocupados por fuerzas favorables al proceso de transformación social o por fuerzas opuestas. En la lucha por la hegemonía las fuerzas bolivarianas pudieron conseguir logros importantes, como por ejemplo la hegemonía de definición de acontecimientos históricos, especialmente respecto a la IV República; la legitimidad de la participación y la política social, y de la Constitución de 1999. Hasta los candidatos opositores suelen prometer la continuación y el mejoramiento de los programas sociales. Aunque eso no se pueda tomar en serio, demuestra, sin embargo, un claro cambio de discurso. Eso se puede ver también en el aumento del consenso para un modelo socialista de sociedad. Pero ningún campo puede construir un consenso social, pues los intereses son

95 En torno al golpe en abril del 2002 y el paro petrolero en 2002/2003, las expectativas de un cambio de régimen eran grandes y los actores corporativos intentaron posicionarse para una eventual repartición de poder.

totalmente contrarios. Los actores que se presentan hoy como “sociedad civil” son antidemocráticos, representan las viejas élites dominantes, el capital transnacional y pequeños sectores de burguesía nacional. Rechazan cualquier mediación con el Estado y buscan la destrucción del proceso de transformación.

Es verdad que la sociedad civil, como se entiende en la democracia liberal, ha sido acorralada o ha desaparecido: ha sido desplazada por la lucha de clases. Las redes que apoyan el proceso no quieren ser sociedad civil ni dejarse reducir a una simple actuación en lo social. El término sociedad civil implica también aceptar la existencia de una sociedad externa al Estado y a este como instrumento de mediación de la sociedad (Barreto, 2007 a: 47-49). Chávez se refiere a la sociedad civil como un concepto que hay que superar, ya que pertenece al Estado burgués. El “Estado socialista” por construir tiene que ser sometido al *poder popular*, en sustitución de la sociedad civil (véase cap. 2.2.3).⁹⁶

Con respecto a este tema se puede ver también la renuncia a una transformación radical de la sociedad por parte de muchos conceptos radical-democráticos, que pierden de vista el antagonismo entre capital y trabajo (véase cap. 2.2.1). García-Guadilla lamenta que la actual sociedad civil venezolana perdiera el pluralismo ideológico y el pluriclasismo que tuvo en la elaboración de la nueva Constitución, y que ahora está dividida siguiendo criterios de clase. La autora concluye que lo más importante actualmente es reconstruir una “sociedad civil ética”, un movimiento ciudadano interclasista (2006:

96 *Aló Presidente* 290, 19/8/2007. En: Chávez, 2008: 67.

58-59). Pide, por último, una “reconceptualización de lo político” y “regresar a los objetivos e identidades propias de los actores a manera de definir el rol que les corresponde jugar” (2006: 59).

2.1.4 Populismo: seducción o movilización potencialmente revolucionaria

El pueblo venezolano encontró una identidad colectiva y se constituyó como sujeto político a través de las acciones de Hugo Chávez y del Movimiento Bolivariano; hablar de uno sin el otro no tiene sentido en la actual fase histórica.

RABY, 2006: 62

Uno de los señalamientos más frecuentes en contra de Chávez es el de ser “populista” (Boeckh/Graf, 2003; Castañeda, 2006; De Venanzi, 2006: 63; Gratius, 2007; Krennerich, 2003; Welsch/Werz, 2000) o “neopopulista” (López Sánchez, 2001; Ramírez Roa, 2003; Ramos Jiménez, 2002; Reul, 2003; Rivas Leone, 2002; Röder/Rösch, 2001). Ambas calificaciones son rechazadas por varios investigadores sociales latinoamericanos (Ellner, 2003 c; Vilas, 2003). Especialmente el término de *neopopulismo* no tiene ningún fundamento científico, surgió originalmente de instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial, que lo usaron para describir un liderazgo político personalizado y semidictatorial.⁹⁷

97 Algunos autores tachan de neopopulistas a gobiernos latinoamericanos con un liderazgo político fuertemente personalizado, que en varios países de América Latina realizaron reformas macroeconómicas y sociales de corte neoliberal en los años noventa. Con el neopopulismo fueron conectados especialmente Alberto Fujimori, en Perú; Carlos Menem, en Argentina y Carlos Salinas de Gortari, en México (Ellner, 2003 c: 12; Vilas, 2003: 13; 19; 25; Raby, 2006:

La acusación de populismo no suele ser explicada. La argumentación se basa en una lectura eurocéntrica, que parte de Europa occidental como referencia histórica, y que corresponde a la visión de quienes detentan el poder y de los intelectuales a su servicio, para los que lo “popular” o “plebiscitario” es negativo (Quijano, 1998: 176). Debido a esta connotación hegemónica, negativa y clasista, el efecto político deseado con el uso del término *populista* se da aun sin explicación⁹⁸. Cuando la crítica es presentada en detalle suele referirse a un estilo político personalizado, una movilización masiva de los estratos más bajos, a los programas sociales⁹⁹ y al discurso de Chávez.

Pero si el estilo del discurso, las calidades de liderazgo, las masas y la manipulación de los estratos bajos de la población son los criterios para la definición de populismo, entonces el asunto se vuelve ahistórico, porque es un fenómeno que conocemos de todas las formaciones sociales de la historia (Quijano,

70). Lo nuevo en el neopopulismo sería la aceptación entusiasta por parte de las esferas más altas de la sociedad. Así que los sectores sociales más ricos fueron juntados a los más pobres, lo que de por sí tiene que ver poco o nada con la movilización electoral del populismo (Vilas, 2003: 28). Además, las políticas sociales y macroeconómicas de los supuestos neopopulistas son diametralmente opuestas a las de los populistas históricos (Vilas, 2003). El neopopulismo es demagógico, ya que no cumple lo que promete. Al final, se trata de democracia delegativa (Vilas, 2003).

98 Schamis (2006: 21) cuestiona el uso del término en el contexto latinoamericano: “... políticas progresistas en América Latina se nutrirán, inevitablemente, de los legados históricos del socialismo y del populismo. La manera precaria, inorgánica y amorfa con la cual estos legados encuentran su expresión, sin embargo, sugiere que difícilmente pueden representar categorías analíticas de algún uso hoy en día”.

99 Es interesante notar que Manuel Rosales, candidato presidencial de la oposición en 2006, declaró que, si ganaba, mantendría todos los programas sociales y pagaría a todos los habitantes de Venezuela unos 400 dólares por mes. Eso se simbolizó durante la campaña electoral con una tarjeta negra (“Mi Negra”), con la cual todos los habitantes iban a recibir el dinero a partir del triunfo de Rosales. En las cuñas electorales se veían mujeres que sacaban dinero del banco con la tarjeta o la usaban para pagar sus compras.

1998: 177). Esta visión deja también de lado a las relaciones de poder y los intereses sociales y las políticas más diferentes llegan a ser populismo. En el caso de Venezuela, este enfoque lleva a que muchos autores responsabilicen a Chávez de la polarización (Boeckh/Graf, 2003; Castañeda, 2006; Krennerich, 2003; Reul, 2003: 36, 69; Welsch/Werz, 2000; Willer, 2003). Pero la polarización social ya existía antes de la victoria electoral de Chávez, solamente encontró una expresión política. Además, las razones del conflicto social no están en el estilo del controvertido discurso del presidente sino en la política económica, social, exterior y de petróleo (Ellner, 2003 c: 12; Márquez, 2003; Parker, 2001; Raby, 2006; Roberts, 2003).

La mayoría de los intelectuales y académicos latinoamericanos tienen dificultades con el análisis del populismo y el papel de los militares porque cultivan un doble rechazo hacia ellos. El populismo es demasiado grueso para su sensibilidad y los militares son situados lejos del valor de la libertad de pensamiento, solo por el carácter jerárquico-disciplinado de la institución misma. Así el análisis se limita a su papel represivo y su tendencia hacia el autoritarismo (Parker, 2001: 4-5). Cuando Chávez apareció en el campo político gran parte de los intelectuales y de la izquierda internacional se mantuvo escéptica y en el rechazo. La imagen de los militares en América Latina, en general, está marcada de manera negativa; especialmente por las muchas dictaduras y los regímenes autoritarios. Sin embargo, también existe históricamente la participación de militares en gobiernos populistas en América Latina, encontrándose también muchos ejemplos de movimientos rebeldes provenientes del mismo ejército (Luis Carlos Prestes en Brasil,

Augusto César Sandino en Nicaragua y Marmaduke Grove en Chile).

Entre los primeros regímenes clasificados como populistas se encuentra el caso de México con un general: Lázaro Cárdenas, y Argentina con un coronel: Juan Domingo Perón. Los EE.UU. derrocaron en 1954 al gobierno progresista del coronel Arbenz, y en 1968 las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno en Panamá y en Perú con proyectos nacionalistas y revolucionarios (Parker, 2001: 5). Richard Gott (2005: 81-87) ubica a Chávez en esta tradición. Méndez caracteriza a la política de Chávez como populismo de izquierda, con reminiscencias del populismo clásico (2004: 104). Pero, también hay una diferencia importante que vuelve sin sentido la comparación de Chávez con Cárdenas, Perón y otros. Los viejos proyectos populistas de transformación se apoyaron en alianzas sociales que incluían también partes de la oligarquía exportadora y de las clases altas. Debido a la transnacionalización de la economía hoy en día, eso ya no es posible. Es por esto que el proceso de transformación venezolano está obligado a apoyarse en los estratos sociales bajos (Figuerola, 2006: 201).

Los análisis sobre qué se entiende por *populismo* (forma política o de Estado, discurso, técnica de movilización, movimiento reformista, período, etc.) son múltiples. Rey comparte la visión eurocéntrica y describe el populismo como “un movimiento demagógico, oportunista, manipulativo, corrupto, retórico e ineficaz” (Rey, 1976: 137). Por otra parte, numerosos investigadores rechazan la connotación negativa del término (Cammack, 2000; Castro/ Mussali/Oliver, 2005; Ellner, 2003 a; 2003 c; 2006 a; Laclau, 1978; 2006 a; 2006 b; Méndez, 2004:

89-107; Parker, 2001; Quijano, 1998; Raby, 2006; Vilas, 2003). Así, el populismo, en el marco de un proyecto de modernización, amplió derechos sociales y económicos de grupos sociales anteriormente excluidos. Tales derechos y sus logros ayudaron en la transformación de un “pueblo de clientes o de súbditos en pueblo de ciudadanos” (Vilas, 2003: 26).

Sin embargo, Vilas hace notar que, según la definición de la mayoría de los investigadores sociales latinoamericanos, una característica inseparable del populismo es fomentar una amplia diversificación económica capitalista (2003: 14), con lo cual el populismo latinoamericano “correspondió a un momento determinado del desarrollo capitalista” (Vilas, 2003: 15). Fue la “forma democrática de integración social de las clases populares y de refiguración de la relación entre economía y Estado después de la crisis capitalista de 1929” (Acha, 2007: 17).

El populismo histórico fue un proyecto sociopolítico que, aunque demagógico y manipulador en su discurso, desarrolló políticas concretas de industrialización (Castro/Mussali/Oliver, 2005: 25). Eso diferencia fundamentalmente al populismo latinoamericano del europeo. El modelo nacional-popular latinoamericano no es de los sectores industriales capitalistas débiles que se vuelven la referencia central de la acción colectiva, sino que es el Estado populista el que asume el papel central de la articulación de la sociedad civil en un proceso modernizador de recuperación, frente a un movimiento sindical pequeño, débilmente organizado, y la migración de la población rural a las ciudades que son receptivas al discurso populista (Castro/Mussali/Oliver, 2005: 33).

La ubicación del populismo como perteneciente a una época y un modelo económico específico es rechazada por Ellner (2003 b, 2003 c, 2006 a), Laclau (2006 a, 2006 b), Raby (2006) y Parker (2001). Según Ellner (2003 c: 20) la clasificación de Chávez como populista está mal, ya que los populistas clásicos fueron expertos en establecer partidos disciplinados y estructurados verticalmente, con fuertes lazos con los sindicatos y otras instituciones, mientras sus enemigos contaban con el apoyo del ejército. Chávez, en cambio, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras los sectores sindicales del MVR no tuvieron un papel activo en las decisiones del partido. Muchas movilizaciones del chavismo (como la toma de tierras o de fábricas durante el paro empresarial 2002-2003) se realizaron por iniciativas propias de la población. (Ellner, 2003 c: 20; 2006 a: 90).

Aunque hay semejanzas importantes entre el gobierno de Chávez y los regímenes populistas de los años treinta y cuarenta, la política social y económica desafía importantes intereses económicos, como nunca lo hicieron los gobiernos populistas y reformistas de aquellos años. Un ejemplo de estas políticas es el rechazo de la propiedad privada como derecho absoluto¹⁰⁰. También el discurso clasista de Chávez y la priorización de lo social está en contraste con el populismo histórico, que intentó cerrar una alianza entre obreros y empresarios (Ellner, 2006 b: 87). De manera similar argumenta Marta Harnecker (2003 c), que llega a la conclusión de que la

100 Al mismo tiempo, la aceptación de la propiedad privada de medios de producción, si tienen un uso productivo respetando las leyes, contrasta con otros procesos socialistas hasta ahora (Ellner, 2006: 87).

diferencia entre una política populista y una popular está principalmente en que en la primera el gobierno es *para el pueblo* y en la última es *con el pueblo*. Un líder populista abusa del pueblo para sus metas personales, con un estilo paternalista y asistencialista; en cambio, Chávez busca la autoorganización del pueblo (2003 c). En este contexto hay que destacar que Chávez, después de haber llamado durante años, con poco éxito, a políticos e instituciones de no usar su imagen, en noviembre de 2010 prohibió por decreto presidencial la utilización de su nombre, imagen y figura para identificar obras de infraestructura de cualquier naturaleza y de bienes muebles o inmuebles gestionados por los diversos órganos de la Administración Pública Nacional, así como de organizaciones, programas y campañas publicitarias o propaganda.¹⁰¹

Laclau (1978; 2006 a), Parker (2001) y Raby (2006) definen a Chávez como populista en un sentido positivo. Ubican el surgimiento del populismo en la crisis hegemónica y lo ven marcado por un liderazgo carismático y un discurso radical antioligárquico o *antiestablishment*. La crisis de legitimidad de sistemas democrático-representativos, o sea, en los que los caminos institucionales han perdido su efectividad y legitimidad para la canalización de demandas sociales, es una condición para la ruptura populista (Cammack, 2000: 154; Laclau, 2006 a: 56; 2006 b: 115-116; Raby, 2006: 68). La crisis hegemónica es profundizada con el surgimiento del populismo (Cammack, 2000: 154; Raby, 2006: 68). Otra condición es “que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se

101 Decreto presidencial número 7.836, Gaceta Oficial número 39.556, de fecha 19/11/2010.

vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados” (Laclau, 2006 a: 56). “El pueblo” es entonces construido como actor colectivo. Se interpela a “los de abajo” en oposición frontal al sistema dominante (Laclau, 2006 a: 56).

Mientras Laclau ubica al populismo como multclasista o más allá de clases (1978; 2006 a), para Parker se trata de un discurso político, “que se distingue por interpelar y calar profundamente entre los sectores populares, a la vez que logra estimular un entusiasmo y un potencial de movilización entre estos mismos sectores que abre perspectivas de profundos cambios en la sociedad” (2001: 11). Laclau rechaza la tesis de que las masas marginalizadas son manipuladas por sus líderes populistas quedando sin influencia en el quehacer político. La crítica al populismo sería originada por defensores del statu quo, que no temen nada más que la “politización de las demandas sociales” (Laclau, 2006 a: 58).

En el caso de Venezuela la transición a una sociedad más justa y más democrática necesitaba un cambio de régimen, una ruptura radical con las élites corruptas y su desplazamiento. Por ello, la formación de un nuevo actor colectivo de carácter popular era necesaria, no habiendo otra posibilidad que una ruptura populista. Sin duda, cualquier populismo corre el riesgo de llegar a una limitación de la participación si el liderazgo predomina, pero eso no está sujeto a ningún automatismo (Laclau, 2006 a: 61).

En realidad, la relación es muy compleja. “Hay una deuda mutua: los sectores populares ven en Chávez una oportunidad de realizar su programa y Chávez no habría podido llegar a ningún lado sin los sectores populares” (I-AA, 2008). Chávez

propone nuevas iniciativas de organización, la mayoría de las veces toma iniciativas originadas desde abajo y les da visibilidad. Asume el rol de altavoz y procura una fuerte atención pública a prácticas de la base poco conocidas. Su papel central lleva simultáneamente una fuerte concentración en su persona, que frena la autoorganización. Incluso el papel de altavoz es contradictorio. Por un lado, fortalece iniciativas de la base y posibilita una adaptación y un desenvolvimiento amplio de experiencias, y, por otro lado, puede llevar a que se dificulte el crecimiento orgánico de las iniciativas, porque alcaldes, gobernadores y algunas instituciones con su lógica inherente, se preocupan más de crear y apoyar a dichas iniciativas de manera artificial, que de hacer posible un proceso orgánico desde abajo.

Gran parte de los marxistas ven al marxismo y al populismo como dos tradiciones política y teóricamente opuestas. Eso no concierne solamente a marxistas ortodoxos, sino también a corrientes críticas. Mazzeo y Stratta, por ejemplo, ubican al populismo o a las políticas populistas en oposición a las *políticas populares*. Ambos “parten de la identificación de dicotomías”, pero el populismo trataría de “resolver las contradicciones sustantivas en función de los intereses estratégicos y de largo plazo de las clases dominantes (...) Para el populismo, pueblo es la fórmula que conjura la lucha de clases” (Mazzeo/Stratta, 2007: 8-9). Para Laclau, por el contrario un “populismo socialista” es la forma más avanzada de ideología de clase obrera (Laclau, 1977: 174): “La dialéctica entre ‘el pueblo’ y las clases encuentra aquí el momento final de su unidad: no hay

socialismo sin populismo, y la forma más elevada de populismo solo puede ser socialista” (Laclau, 1978: 231).

Ya que el populismo es una técnica de movilización desligada políticamente, Laclau asume que el análisis del discurso ideológico es central para clasificar la orientación política de los populismos (1978: 201; 2006 a). Esa concentración en el discurso es criticada por otros autores (Cammack, 2000: 154; Parker, 2001: 2; Raby, 2006: 67; Vilas, 2003: 18). Hasta los autores que comparten las tesis de Laclau en sus afirmaciones básicas, destacan que las tendencias a largo plazo de populismos no son un resultado de discursos, si no de estructuras de clase, organización interna y de las políticas y acciones concretas, lo que a su vez determinaría el apoyo de clase (Parker, 2001: 2; Raby, 2006: 67).

Raby y Parker diferencian entre un populismo demagógico y uno auténtico (Parker, 2001: 3). El carisma y el prestigio de los auténticos populistas no son resultado solo del discurso y la capacidad oradora, sino de acciones “que demuestran su identificación con la causa popular y su capacidad de liderazgo” (Raby, 2006: 69), lo que significa que demuestran que tienen una respuesta a las expectativas creadas (Parker, 2001: 3). Así, el apoyo de las clases bajas para Perón en 1945 en Argentina, en 1936 para Lázaro Cárdenas en México o en 1945-1948 para Gaitán en Colombia, no estuvo motivado solo por su discurso apasionado, si no por la experiencia de cambios reales y el esfuerzo visible realizado (reforma agraria, leyes sociales, etc.). Eso corresponde con las experiencias del proceso bolivariano: “Aquí el poder no es solamente que nosotros tenemos a Chávez en la presidencia, que es un tipo que se parece a nosotros (...) la prioridad aquí es que tú

tengas efectivamente acceso a todos los servicios que el Estado venezolano está obligado a prestarte” (I-RI, 2006).

Raby (2006: 70) observa que el surgimiento de todos los “populistas auténticos”, como líderes políticos, remite a un acto heroico de gran fuerza simbólica, que contribuye a la creación del aura carismática: el arresto y la liberación de Perón 1945; la expulsión del expresidente corrupto Plutarco Elías Calles por parte de Lázaro Cárdenas en México, 1936; la defensa de los trabajadores bananeros por Gaitán en Colombia, en 1928; el asalto a la Moncada de Castro, 1953, y el levantamiento cívico-militar de Chávez, 1992.

El discurso y la capacidad apasionada de hablar largamente, con un lenguaje que comunica con el pueblo, que reconoce sus sentimientos y pensamientos íntimos, son de importancia central. Sin embargo, el liderazgo populista surge a través del liderazgo político-práctico y el diálogo con el pueblo, mediante la asimilación de la voluntad general y su expresión con más fuerza y coherencia (Raby, 2006: 68): “... para Chávez simplemente es posible comunicarse con la gente, y la gente capta inmediatamente las orientaciones que da Chávez y viceversa (...) Chávez tiene una habilidad para captar el malestar en la calle” (I-RI, 2006).

El análisis del discurso de Laclau tiene algunas omisiones. Además del contenido, la puesta en escena y los gestos del locutor, hay que incluir también el público y su comportamiento. Los “líderes populistas auténticos” no se dirigen hacia el pueblo solo en ciertas ocasiones o a través de los medios de comunicación, sino que buscan el diálogo con el trabajador individual y pequeños grupos. Esta comunicación contribuye

a la construcción de una identidad colectiva y a la educación y formación ideológica y personal del líder populista (Raby, 2006: 69). Así que hay siempre más claridad sobre lo que se rechaza actualmente, que sobre la construcción del futuro (Parker, 2003: 3). Con las respectivas limitaciones, se puede afirmar esto para el proceso bolivariano que, a pesar de tener un camino de construcción más claro, impulsado por los programas sociales como las Misiones, el Plan Nacional Simón Bolívar, la democratización de administración de los medios de producción y diferentes modelos de participación local, el proceso sigue siendo una búsqueda de formas y métodos.

Chávez y el movimiento bolivariano se formaron en un diálogo de más de 20 años con todos los sectores de la izquierda venezolana y no como consecuencia de una “antipolítica”. Muchos seguidores de Chávez tienen una “visión política racional” (Raby, 2006: 65). Los pobres se pueden identificar con el carisma de Chávez, pero entienden también que se trata de una alternativa real y radical. Eso no tiene nada que ver con la búsqueda ciega de un mesías, como frecuentemente se dice. La búsqueda ciega surge “cuando ya no hay esperanza racional de cambio”. De esta manera, los críticos están negando la posibilidad de una revolución (Raby, 2006: 65).

Chávez logra comunicarse con las masas dispersas, que debido a la fragmentación e individualización fomentada por el neoliberalismo, no está organizada. Al mismo tiempo integra a todas las organizaciones y a los movimientos partícipes del proceso, garantizando la continua inclusión de los movimientos populares, ya que es el contrapeso a las prácticas tradicionales de muchas fuerzas políticas en el gobierno. “Si hay algo

que Chávez ha sabido hacer bien es el parecerse en persona y palabra a ese movimiento de ruptura, de allí su permanencia como símbolo central del mismo” (Denis, 2009). Hasta el golpe de 2002, fue la comunicación entre Chávez y las masas, y las varias organizaciones populares que tenían una capacidad movilizadora real, mientras los partidos y las organizaciones bolivarianas no la tenían. Solo después de la experiencia vivida en el golpe empezó un proceso masivo de organización.

Es importante subrayar que el “populista” no existe aislado “del movimiento popular, y que en gran parte es producto de este” (Raby, 2006: 70). Su discurso y su acción contribuyen de manera decisiva para transformar a los campesinos, a los trabajadores y a los subalternos en sujetos colectivos, pero siempre hay varios discursos para escoger, así que también la predisposición del público para un discurso específico es decisiva. El pueblo tampoco estaría tan atomizado como muchos sostienen, si no dispone de una consciencia colectiva latente. Los tiempos antes de Perón, Castro y Chávez estaban ya caracterizados por luchas sociales en búsqueda de cambios fundamentales y que la izquierda tradicional no pudo canalizar. En los tres casos el papel de liderazgo fue decisivo. La oportunidad y posibilidad existió a causa de una crisis hegemónica y la disponibilidad revolucionaria latente de los subalternos. En este contexto el caso de Argentina es muy instructivo, como sostiene Raby (2006: 71): “el líder solo puede llevar el movimiento popular adonde está dispuesto a ir”, y eso no es casual, si no está inscrito “en la estructura de clases preexistente y en la herencia cultural del movimiento”.

Para Raby (2006: 68) y Parker (2001: 19) el populismo, bajo ciertas circunstancias, es potencialmente revolucionario. Más allá de Castro y Chávez otro ejemplo es el de Jorge Eliécer Gaitán (23/1/1903-9/4/1948) en Colombia (Parker, 2001: 2; Raby, 2006: 70). Por ese potencial revolucionario, los populistas de derecha tienen la difícil tarea de controlar y limitar el desborde del movimiento que ellos mismos ayudaron a crear, mientras que los populistas de izquierda solo sobreviven políticamente si se identifican cada vez más con el movimiento revolucionario y si hay realmente condiciones revolucionarias. Si esto se clasifica simplemente como política revolucionaria se ignora la importancia de analizar el papel del liderazgo carismático (Raby, 2006: 72).

Aunque la tesis del populismo potencialmente revolucionario parece una paradoja, según Raby (2006) es la única hipótesis que puede explicar los procesos revolucionarios totalmente heterodoxos de Cuba y Venezuela. Raby (2006) llega a la conclusión de que su éxito es debido –sin que eso disminuya la importancia del apoyo popular masivo– al actuar de sus dos figuras centrales: Fidel Castro y Hugo Chávez. Los dos han adaptado más elementos del populismo latinoamericano que de la ortodoxia comunista, creando así la conexión con las masas. En Cuba la orientación socialista surgió por la sinergia entre el populista Fidel Castro y la energía espontánea del pueblo. Castro asumió la cultura popular e hizo posible tal efecto en una relación dialéctica. El Partido Comunista, en cambio, con su visión dogmática ignoró la cultura popular y no pudo hacerlo (2006: 62).

Parker (2001: 2) indica la capacidad sorprendente de Cuba para sobrevivir al derrumbe de la Unión Soviética, al contrario de los Estados del este europeo. La explicación está en un origen realmente popular y populista de la revolución cubana. Raby y Parker se conectan aquí –aunque no de manera expresa– con Simon Clarke. Para Clarke los talentos de Lenin estaban en su determinación revolucionaria y su gran efectividad como propagandista y organizador político. Para eso Lenin “integró los principios políticos y organizacionales del populismo revolucionario al marxismo” (Clarke, 2002: 71-72).

Quizás porque Chávez nunca se pone arriba de los demás, y siempre pone al *pueblo* en el centro de su discurso, su figura empieza a transformarse en la de un *Caudillo*. Pero también es seguro que el movimiento de transformación sin Chávez no hubiera desarrollado ni la fuerza ni las dimensiones que tiene. En eso coinciden tanto críticos como simpatizantes. Logró integrar a las masas empobrecidas en un proyecto político de transformación, lo que la izquierda nunca había logrado. Así, la categoría del *populismo revolucionario* nos puede ser útil para explicar las dinámicas específicas venezolanas y el papel sobresaliente de Chávez.

2.2 Democracia participativa y protagónica

Democracia algún día era una palabra del pueblo, una palabra crítica, una palabra revolucionaria. Ha sido robada por los que gobiernan a la gente, para añadir legitimidad a su dominio. Es tiempo de retomarla, de restaurar su poder radical. Democracia no es todo, sino algo.

LUMMIS, 1996: 15

La democracia participativa y protagónica no es un concepto acabado, sino en constante desarrollo. Tiene influencia de debates sobre participación, democracia radical y democracia directa¹⁰², y especialmente de prácticas concretas desarrolladas en América Latina, guiadas por experiencias históricas, bajo las ideas de autonomía y poder popular.

2.2.1 Participación, democracia directa y radical

Participación: una aclaración necesaria

El concepto de *participación* ha tenido interpretaciones muy diversas. La participación puede estar conectada con representación, pero surge de un principio diametralmente opuesto: a la participación política se suman los actos que cualquiera pudiera ejercer, que no son delegados. Cualquiera puede participar en asambleas, elecciones, manifestaciones etc., pero, por la lógica del principio, no cualquiera puede representar (Phillips, 1995: 33). La cuestión se pone controvertida cuando se intentan definir los ámbitos de la participación, especialmente, de la participación política directa en la toma de decisiones. En los conceptos liberal-democráticos, que sirvieron de orientación para las democracias modernas, no tiene lugar la participación ciudadana, individual o colectiva, en la esfera política (construida aparte); intencionalmente confinada a la “esfera de la sociedad civil” y reducida al acto periódico

102 Tematizada entre otros por Etienne Balibar, Alex Demirovic, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Rigoberto Lanz, Claude Lefort, C. Douglas Lummis, Chantal Mouffe y Jacques Rancière. Para un cuadro general véase: Heil/Hetzl, 2006.

de elegir representantes, para no estorbar la eficiencia de los procesos democráticos y para que la democracia no se sobrecargue con demandas sociales, que pongan en peligro la primicia de la acumulación de capital frente a la distribución social de la riqueza y el trabajo (De Sousa, 2004 b: 28).

En la década de los sesenta y setenta, los conceptos de participación política tomaron mayor importancia social (Macpherson, 1983: 110), y también en el ámbito científico. Sidney Verba y Norman H. Nie, en su clásico de la investigación de la participación (1972), criticaron que la mayoría de las investigaciones no prestaban atención a posibilidades alternativas de participación, ocupándose de ella solamente en el marco de políticas electorales (Verba/Nie, 1987). Sin embargo, tampoco fueron mucho más allá de eso, apenas considerando a las actividades que acompañan las elecciones o campañas electorales, el diálogo individual y personal con representantes políticos y la organización con otros para influenciar la actuación del gobierno (1987: 46).

Aunque se pretende tener un concepto amplio de participación, todavía sigue vigente la estricta escisión entre la esfera social y la esfera política, con la limitación de la toma de decisiones, que corresponde exclusivamente a los representantes. La escisión estricta se caracteriza también al entendimiento científico de participación en el marco de las ideas neoliberales. A partir de los años ochenta, la usurpación del concepto de participación por el discurso hegemónico se usa para exteriorizar, a nivel individual, las responsabilidades del Estado y fortalecer lógicas de mercado.

Las investigaciones del *mainstream* científico sobre participación (la mayoría provenientes del norte del mundo o basadas en sus conceptos) no tienen mucho que aportar al tema. Tal concepto limitado de participación se rechaza en la presente investigación. Lo mismo que un concepto que solo mire la simple integración de los marginados:

Los excluidos no deben ser *incluidos* (sería como introducir al Otro en lo Mismo) en el *antiguo* sistema, sino que deben participar como iguales en un *nuevo momento institucional* (el *nuevo* orden político). No se lucha por la *inclusión* sino por la *transformación* –contra Iris Young, J. Habermas y tantos otros que hablan de “inclusión”– (Dussel, 2006: 106).

Como bien resume Marta Harnecker, se habla de participación cuando la gente participa en reuniones, manifestaciones, elecciones, campañas específicas (de alfabetización, por ejemplo) y cuando opina en reuniones públicas. La principal forma “es la participación en la toma de decisiones y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas” (Harnecker, 2003 b).

Muchos procesos de liberación y democratización al sur del mundo comparten una amplia participación de diversos actores sociales en los procesos de toma de decisiones, o que abre las posibilidades de cambio (De Sousa, 2004 b: 28). Y la *participación popular* no puede ser reducida tampoco a ciertos sectores o determinadas formas:

La política de tierra quemada en la que desembocó el neoliberalismo, generó anticuerpos sociales integrales, de manera que las respuestas lo son en todos los ámbitos de lo social (económico, político, normativo e identitario y cultural). La principal característica de los cambios políticos en América Latina tiene que ver con esa renovada participación (Monedero, 2007: 5).

Democracia directa y radical

Frente a las posibilidades de consulta o referéndum introducidas en diferentes Constituciones latinoamericanas en las últimas dos décadas, varios autores se ocuparon de la supuesta democracia directa en el continente. Por lo general, sus análisis se refieren solo a elecciones y referendos más allá de la estructura básica de las democracias liberales; es decir, de la elección de representantes (Altman, 2005; Barczak, 2001; Lissidini, 2006 a; 2006 b; Madroñal, 2005; Zovatto, 2004)¹⁰³. En tales acercamientos la democracia directa es solamente complementaria a la democracia representativa y no un concepto propio (Esteva, 2009).

La democracia radical y directa no se atribuye a teóricos centrales, aunque la idea de la democracia es mucho más antigua que muchas otras teorizadas ampliamente. Se encuentran algunas afirmaciones sobre una democracia total en John Locke, Jean Jacques Rousseau, Thomas Jefferson, Tom Paine y

103 Según Lissidini, los elementos de democracia directa no fueron introducidos para fortalecer la participación, sino para fortalecer al Ejecutivo y llegar a modelos más delegativos (2006 b: 22). Esta tesis es rechazada por Altman después de haber analizado todos los referendos iniciados por gobiernos en América Latina durante las últimas décadas, ya que de haber sido así, la cuota de éxito tendría que ser más alta del 50% averiguado (2005: 225).

Karl Marx¹⁰⁴. Sin embargo, el tema de una democracia no limitada ha sido evitado por los teóricos en general (Lummis, 1996: 27).

Demirovic clasifica los conceptos radical-democráticos modernos en deliberativos (Habermas, Benhabib, Bohman), asociativos (Hirst, Cohen, Rogers), basados en la sociedad civil (Arato/Cohen, Frankenberg, Rödel), democracia hegemónica (Laclau, Mouffe) o democracia por venir (Derrida) (2005 b: 1). Sobre los primeros no queremos profundizar ya que no tienen mucho de radical: “en ellos las instituciones democráticas son entendidas como revolución duradera en el tiempo” (Demirovic, 2005 a).

Derrida (2003) habla de la democracia como “por venir”, colocando la dimensión normativa de la promesa al centro; el carácter de apertura es para el constituyente, para la democracia misma (2003: 13). Pero tampoco especifica qué entiende por democracia, ya que cada definición, según él, “impone un sentido” (2003: 104). Así, se perfila el problema básico de la mayoría de las teorías radical-democráticas: “la falta de consideración de las experiencias cotidianas concretas y como la insuficiencia en conectarse con prácticas comunes” (Jörke, 2006: 258).

Entre los teóricos de la democracia radical más conocidos se encuentran Chantal Mouffe y Ernesto Laclau (Laclau/Mouffe, 1991). Ellos entienden su enfoque posestructuralista como ampliación y actualización no economicista y posmarxista

104 En su *Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel* (Marx, 2005: 55), Marx defiende a la democracia frente a la monarquía y hace algunas declaraciones fundamentales, aunque después ya no se ocupó de la cuestión de la democracia.

del concepto de hegemonía de Gramsci. Al mismo tiempo, ven a la democracia siempre incompleta: “incompleción y preliminaridad pertenecen a la esencia de la democracia” (Laclau, 2002: 41). La inclusión de muchos postulados anteriormente socialistas a la orientación normativa de la democracia liberal (derechos humanos, igualdad y otros), creó un nuevo punto de partida para la crítica de izquierda, que en gran parte pasó de la petición de la introducción de principios democráticos a la petición de profundizarlos (Demirovic, 2005).

Laclau y Mouffe argumentan a favor de una democracia radical y plural. Lo primero se refiere a la radicalización de la revolución democrática a través de la ampliación de los espacios políticos, mediante la extensión de los ideales de la libertad e igualdad a más espacios sociales, en los cuales existen relaciones de dominación (Laclau/Mouffe, 1991). Se trata también de una igualdad bajo el reconocimiento de la diferencia, lo que no existe en la democracia liberal. Aquí reconocimiento no es lo mismo que “tolerancia”, sino confrontarse con el otro. Y con democracia plural se entiende la autonomía relativa y el reconocimiento mutuo de diferentes grupos y demandas, en la construcción de un proyecto emancipador común (Demirovic, 2005 b). La meta es la construcción de una identidad política colectiva articulada por los principios de la equivalencia democrática. Para eso, es necesario articular las diferentes demandas democráticas: mujeres, afrodescendientes, homosexuales, ambientalista y otros “nuevos movimientos sociales” (Mouffe, 1999: 121).

Debe ser subrayado que tal relación de *equivalencia* no elimina las *diferencias*; lo contrario sería simple identidad. Es solo en la medida en que las diferencias democráticas se oponen a las fuerzas o discursos que niegan a todas ellas, que esas diferencias serán sustituibles entre sí (Mouffe, 1999: 121).

En Venezuela se pueden identificar tanto la democracia radical como la plural. El proceso bolivariano declara, exactamente, la misma meta que la democracia radical: la profundización de la revolución democrática empezada hace 200 años. Los ideales de la libertad, igualdad, justicia, democracia y –debido a la situación periférica– también la independencia y soberanía, son considerados incumplidos siendo actualizados y definidos nuevamente. La diversidad de los diferentes grupos, movimientos e individuos partícipes del proceso puede ser valorada como democracia plural.

La mayoría de los conceptos radical-democráticos más comunes, no obstante sus elementos progresistas, se revelan como insuficientes por sus fuertes limitaciones¹⁰⁵. La crítica correcta de Jörke señala que realizan “una discusión filosófica que se presenta con un gesto supuestamente radical, pero quedan más que vagos con respecto a la aplicación concreta de sus teorías” (2006: 264). Otras problemáticas se basan en la suposición de un desarrollo social lineal (Demirovic, 2005 b)¹⁰⁶ y, de manera

105 Una excepción es Lummis, que nombra su concepto también democracia radical, pero resume: “Democracia no significa que la gente sea bendita con unos gobernantes amables o justos. Significa que gobiernan sobre sí mismos” (1996: 16).

106 Así la mayoría de los conceptos radical-democráticos comparten características con los conceptos que supuestamente quieren superar: con las teorías liberal-democráticas y con tendencias marxistas histórico-deterministas.

más general, en la limitación de la participación democrática en la esfera de la política pública. Los antagonismos entonces ya no conciernen a la producción y a los medios de producción. La liberación del economicismo se transformó en la aceptación de la escisión de la esfera económica (capitalista). Esta orientación, puramente discursiva, deja de lado que los privilegiados, en la mayoría de los casos, no cederán sus privilegios de manera voluntaria y que, poco impresionados por mayorías sociales, se necesitan movilizaciones masivas y el desarrollo de presión (y la relación es aún más complicada si se trata de mayorías que defienden sus privilegios frente a minorías).

El pluralismo formulado corre el peligro de transformarse en arbitrariedad (Demirovic, 2005 a), ya que, supuestamente, el debate público debe estar siempre abierto a todas las opiniones sin que se formulen criterios con respecto a la veracidad de las posturas. Un ejemplo de eso es García-Guadilla (2006). Ella describe una imagen exagerada de la segregación territorial en Caracas, en la que ningún partidario de uno de los dos campos, en los que estaría dividido el país (si apoyan o no a Chávez y según el estatus socioeconómico), puede pisar otra parte de la ciudad. Siguiendo los criterios de la ocupación del espacio público y el argumento de prácticas violentas y excluyentes, se construyen dos bloques –oposición y partidarios del proceso– antidemocráticos. Y no se diferencia en absoluto que mientras unos están defendiendo sus privilegios, los otros piden igualdad de derechos.

En conceptos radical-democráticos, el capital y el trabajo se confrontan discursiva y éticamente como iguales y “hasta la apropiación privada de la cooperación social es peleada en

el enfrentamiento público de opiniones” (Demirovic, 2005 b). Como Demirovic hacer notar:

Desde el interior de la teoría democrática, también de la radical, se pueden desarrollar los que están a favor del mantenimiento y la profundización de la propiedad de capital y la apropiación privada de los medios de producción sociales. Lo mismo se puede decir del caso de la discriminación racista de individuos, la reconstitución de relaciones heterosexuales o la reintroducción de Dios a la cotidianidad secular de las sociedades democráticas. Hay que temer que la democracia radical es un proyecto que, por no decir lo que quiere, además de democracia, contribuye a la prolongación de todas esas luchas hasta la eternidad. Ya que quiere esos conflictos y esas luchas. La alternativa a eso se llama, en la tradición del pensamiento crítico: paz, conciliación, asociación de individuos libres (Demirovic, 2005 b).

2.2.2 Poder constituyente y contrapoder

Toda la historia moderna ha estado caracterizada por indistinguibilidad de lo social y lo político en el ejercicio del poder constituyente por parte de las clases subordinadas. Ni un solo episodio de la rebelión que por algunos siglos a opuesto capital y clase proletaria ha salido indemne de este común proceso de lo social y lo político que la clase proletaria ha impuesto. Con una violencia adecuada a la importancia de la puesta en juego. ¿Qué otra cosa es si no la hegemonía definitiva del poder constituyente, del trabajo libre creativo, que es la extinción de lo político como categoría separada? El poder constituyente no elimina lo político, lo hace vivir como categoría de la interacción

social allí donde el vivir, en la integridad de las relaciones sociales de los hombres, en la densidad de la cooperación (...) La categoría de lo político, como independencia o "relativa autonomía", es levantada solo para bloquear, ordenar, dominar la omnipotencia del trabajo vivo: la categoría de lo político forma parte del poder constituido.

NEGRI 1994: 325-326

El poder constituyente representa un concepto central para la orientación normativa del proceso bolivariano. Se desarrolló en Venezuela, a finales de los ochenta, como idea de transformación social mediante un proceso constituyente continuo. En el transcurso de los años noventa llegó a ser de importancia central para los movimientos y se encuentra en concordancia con el concepto presentado por Antonio Negri en *El poder constituyente* (Denis, 2001: 143-144)¹⁰⁷. Chávez cita con frecuencia el libro y declaró haberlo leído en la cárcel, teniendo un papel fundamental para el desarrollo del proyecto bolivariano (Chávez, 2007: 2; 2008: 47; Harnecker, 2002: 18). Debido a la falta de un desarrollo teórico del concepto venezolano, se presenta primero el concepto de poder constituyente de Negri, por su referencia directa, y luego su génesis venezolano.

107 Hay que destacar que el tema del poder constituyente no aparece en las investigaciones académicas de la época. Eso muestra qué tan lejos estaban las ciencias de la realidad y por qué han sido sorprendidas por los acontecimientos al igual que la política institucional. Así como el poder constituyente es entendido desde abajo, en los años noventa lo mencionan solo los mismos actores. Hasta en los análisis científicos más actuales el concepto del poder constituyente casi no aparece. Una excepción la representa Vargas-Arenas (2007: 287-295), que aplica el concepto al proceso venezolano haciendo referencia a Negri y el operaísmo italiano.

Poder constituyente

El concepto de Antonio Negri

“Hablar de poder constituyente es hablar de democracia” (Negri, 1994: 17), afirma Negri en el primer capítulo de *El poder constituyente*. Comúnmente con poder constituyente se hace referencia a la fuerza creadora colectiva legítima que reside en los seres humanos, la *potentia*, esa capacidad de emanar, diseñar, moldear algo nuevo, sin tener que deducirlo o someterlo a lo existente. Para Negri, el poder constituyente es omnipotente porque es la revolución misma (1994: 19). Surge entonces el cuestionamiento: ¿cómo puede ser encendido ese excepcional motor de la historia y qué es lo que lo frena, neutraliza o somete? Para eso, primero es necesario analizar cómo ha sido entendido el poder constituyente. En los debates sobre democracia de los siglos pasados, el poder constituyente era considerado como la fuente omnipotente y expansiva que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico, pero que también está sujeto a esa producción (Negri, 1994: 17). El poder constituyente omnipotente ha sido limitado temporalmente y en su alcance, reducido a categorías jurídicas y forzado en una estructura administrativa (Negri, 1994: 18-19).

La definición constitucional y jurídica del papel de *sujeto del poder constituyente* contradice su misma naturaleza, ya que su espíritu rebelde se contrapone a la integración de un sistema estandarizado y jerárquico (Negri, 1994: 18). A pesar de esto no puede ser desaparecido con una definición jurídica, pues la legitimidad democrática y el sentido y justificación del sistema jurídico se basan en él.

Desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho hubo tres enfoques. La postura tradicional considera al poder constituyente como trascendente frente al poder constituido, y aunque sea antecedente del poder constituido siempre queda externo. La autonomía del orden jurídico constituido es absoluta. Este entendimiento corresponde a la postura de la escuela alemana de derecho público de mitades del siglo xix y hasta principios del siglo xx. Del poder constituido no queda mucho (Negri, 1994: 21). El segundo enfoque ve al poder constituyente como inmanente al poder constituido, negando y anulando lo originario y creativo del poder constituyente. Este enfoque es compartido por posiciones que conciben al poder constituyente importante solo durante el acto de creación de una nueva Constitución, para después ser absorbido y sometido por el poder constituido; postura de posiciones cercanas al movimiento obrero, como las de Ferdinand Lassalle y Hermann Heller, que veían en la inmanencia del poder constituyente absorbido por la Constitución “la forma de una evolución natural” del Estado (Negri, 1994: 24-25). Para el tercer enfoque el poder constituyente no es ni trascendente ni inmanente, está integrado al poder constituido y se expande con él, negando la “cualidad originaria y libertadora” del poder constituyente. En este marco se sitúan las grandes escuelas del institucionalismo del siglo xx (Negri, 1994: 26-27).

Enrique Dussel (2006) intentó otra definición del poder constituyente. Diferencia también entre *potentia* y *potestas*, y pretende hacer una distinción parecida a Spinoza y Negri e, incluso, ir más allá (2006: 30). Dussel explica:

Cuando el poder indiferenciado (*potentia*) decide organizarse institucionalmente, el ejercicio delegado del poder se determina (...) en primer lugar como poder instituido (*potestas*) que, con respecto a una posible Constitución, se *pone* a sí mismo como poder constituyente (...). La Constitución (que debe positivizar los derechos humanos) establece (...) por su parte necesariamente un órgano que deberá dictar las leyes (2006: 64).

Al final, esta definición reduce el poder constituyente a su papel y forma tradicional en el contexto liberal-democrático: aparece solo en forma de una institución constituyente, que luego entrega su poder al poder constituido.

Resumiendo la interpretación filosófico-jurídica, se puede decir que:

En general, el poder constituyente es visto como el poder que justifica un sistema y con eso termina. Entre las fuentes de derecho inmanentes al sistema no se encuentra el poder constituyente, como tal es considerado un elemento fuera del derecho. Tiene que hacerle espacio al poder constituido (Negri, 2008: 10).

El poder constituyente como “el signo de una expresión radical de la voluntad democrática”, se encuentra en contradicción con el constitucionalismo que es siempre “la mediación de la y en la desigualdad”, teniendo así su base en un paradigma no democrático. El poder constituyente “está ligado a la idea de la democracia como poder absoluto”, es una fuerza expansiva que descompone todo equilibrio existente y consume una ruptura. Solo el futuro puede explicar el presente. El poder

constituyente se forma y reforma en todas partes, constantemente.

En la historia del poder constituyente se pueden encontrar dos líneas de continuidad. La más conocida sigue el principio revolucionario del renacimiento, de la constitución del orden político de nuevas sociedades. Es visible en las grandes revoluciones, que fueron una respuesta a la racionalización del poder, la crisis que surge de la relación entre la productividad potencial de la sociedad y la legitimación del Estado. Las constituciones republicanas, demócratas y socialistas fallaron en la solución de esta contradicción (Negri, 1994: 369). Si las definiciones jurídicas y político-constitucionales del poder constituyente lo han limitado o neutralizado, sin poder resolverse en las Constituciones el dualismo entre poder constituyente y poder constituido en una síntesis, entonces el poder constituyente es un concepto de crisis, y su esencia está en esa negatividad (Negri, 1994: 30). Para seguir desarrollando el concepto, Negri se apoya en la segunda línea de continuidad del poder constituyente: la continuidad de la pasión constituyente de la *multitudo* (multitud), como la llama en referencia a Spinoza. Esta se encuentra al interior de la primera línea de continuidad y es la causa del proceso de constitucionalización y su crisis (Negri, 1994: 370).

Negri encuentra una elaboración metafísica de la segunda línea en Maquiavelo, Spinoza y Marx. Para Maquiavelo, el poder constituyente es la pasión de la multitud, la capacidad de organizar de manera dinámica las fuerzas y crear una forma. El esfuerzo creador para él es el don del nuevo hombre. El poder constituyente se mueve en una crisis permanente, que también lo acciona. Para Spinoza, que retoma el concepto de Maquiavelo,

el poder constituyente es una fuerza creadora que despliega su potencialidad completa. Se basa en su deseo progresivo y omnipotente de constituirse como fuerza socialmente determinante. Las contradicciones y los conflictos son su motor y parte del proceso. Para Marx, la fuerza del poder constituyente crea el poder de la producción y con eso la segunda naturaleza artificial del mundo (Negri, 1994: 372).

Para Marx el poder constituyente es creación que junta, inseparablemente, a la *potentia* y la multitud. El principio constituyente es el de la modernidad, que al mismo tiempo concluye con ella, ya que la estructura de la producción moderna regresa al sujeto de la producción, que es responsable de la producción y su sentido. La democracia como forma absoluta de gobierno, en Maquiavelo y Spinoza no es solamente una variación filosófica, se vuelve así posibilidad real, proyecto político. El proyecto ya no es construir la correspondencia entre lo político y lo social, sino incluir la producción de lo político en la creación de lo social (Negri, 1994: 373).

Toda emancipación es la reconducción del mundo humano, de sus relaciones, al hombre mismo. (...) solo cuando el real hombre individual recoge en sí al ciudadano abstracto, y como hombre individual se convierte en ser social en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre reconoce y organiza como fuerzas sociales sus *forces propres* y por eso no se separa más la fuerza social en forma de fuerza política, solo entonces se cumple la emancipación humana (Marx, 1974: 58-59).

Sin embargo, Maquiavelo, Spinoza y Marx no logran liberarse de los lastres culturales de la tradición creacionista judeocristiana. Su perspectiva de unificación bloquea a la multitud, que tiene su fuerza justo en la muchedumbre no unificadora (Negri, 1994: 374). La otra limitación emana de la tradición del derecho natural que sigue viva en el racionalismo moderno, y concierne a la potencialidad de la multitud. Existe el peligro de que la fuerza creadora del poder constituyente sea entendida como mera expresión de una precondition del derecho natural (Negri, 1994: 377) y sea forzada dentro de un esquema preestablecido. Las dos limitaciones bloquean la relación abierta entre multitud y *potentia*, que es concepto y praxis del poder constituyente.

De la historia del poder constituyente, siguiendo a Negri, se pueden entonces sacar tres conclusiones. Primero: como principio creador, el poder constituyente no se puede neutralizar. Los obstáculos fundamentales reaparecen cada vez que se vuelve poder constituido. Segundo: el poder constituyente, mientras permanezca como potencialidad, representa una dimensión del tiempo que está abierta hacia el futuro. Y tercero: las contradicciones siguen siempre vigentes, ya que el poder constituyente no consigue liberarse del concepto de progreso y del racionalismo de la modernidad. El afán de superar esos límites:

Lleva al poder constituyente del liberalismo a la democracia y de allí al socialismo, pero cada vez fracasa frente a la imposibilidad de poner ella misma el límite como absoluto. El Estado, el poder constituido, la soberanía en el sentido tradicional, reaparecen

cada vez y logran acabar con el proceso constituyente (Negri, 1994: 380).

El poder constituyente es sometido a la división social del trabajo y absorbido por el sistema representativo. La modernidad produce la escisión de lo social y lo político, para escindir la *potentia*, la potencialidad social, del poder político y así neutralizar el poder constituyente (Negri, 1994: 396). Esta primero la racionalización de la “esfera política”, consecuencia de las revoluciones inglesas y americanas del siglo XVII y XVIII. En un espacio estructurado por la representación, el poder constituyente se presenta como instancia central de mediación. La representación, en el caso ideal, es horizontal; la mediación siempre vertical. El poder constituyente desaparece. Existe ya solo de manera formal y mediada en las instituciones representativas y los órganos legitimados por ellas (Negri, 1994: cap. III y IV).

En las revoluciones rusa y francesa se estableció la organización racional del tiempo (Negri, 1994: cap. V y VI). El poder constituyente, en las dinámicas constituyentes, es visto como forma de la fuerza productiva de la sociedad (Negri, 1994), como trabajo vivo; pero la creatividad colectiva, a través de la constitucionalización, es sometida a la racionalidad instrumental del modo de producción capitalista y al comando del poder constituido. Así se reafirma el racionalismo de la modernidad con su tiempo lineal y la tendencia a anular la variedad viva del mundo. La aceleración del tiempo con la que el poder constituyente quiere eliminar obstáculos, lleva al terror.

La fuerza histórica del poder constituyente es interrumpida constantemente por el poder constituido. Se encuentra

permanentemente en una crisis que, sin embargo, no es insuperable frente a la fuerza de la multitud, sino solamente un obstáculo. La crisis no representa una desventaja, por el contrario, es el motor del poder constituyente. Esa imposibilidad de alcanzar la síntesis positiva hace que la potencialidad de la multitud regrese una y otra vez en busca de otra salida. El poder constituyente no tiene relación alguna con la progresiva racionalidad lineal de la modernidad y, según Negri, tampoco con la utopía. El poder constituyente es crisis y distopía.

La utopía como un borrador prefigurado no tiene nada en común con el poder constituyente. Sin embargo, hay que objetar que el poder constituyente tiene orientaciones utópicas a partir de las experiencias históricas y derrotas, valores basados en cogniciones, experiencias y sentimientos que se expresan a través de mitos, de cultura popular, etc., y son visibles en el afán de superar la racionalidad de la modernidad. Todo esto existe en la memoria colectiva de la multitud y no tiene un orden lineal, pero es constituyente para los movimientos. Negri denomina a eso la filosofía histórica del poder constituyente, los trasfondos ontológicos. Para obtener efecto tienen que existir anteriormente, aunque sea de forma oculta y dormida. Esta es la memoria colectiva, que no produce continuidad, sino que florece en ciertas coyunturas y momentos del poder constituyente para fortalecerlo.

La distopía, la forma política del poder constituyente, es una democracia que se nutre radicalmente solo de la propia potencialidad y no está determinada, ni en lo más mínimo, desde afuera. El poder constituyente sigue una racionalidad propia que lleva más allá de la modernidad. La nueva

racionalidad es movimiento constante, una construcción desde abajo, que no está sometida a ninguna regla anterior o externa, sino que significa una continua renegociación en el camino. La acción creadora avanza a todos los ámbitos, capta lo social y lo político, el derecho y las instituciones. La soberanía no es ni cedida ni traspasada y los procesos desarrollan mecanismos de control internos propios. No existen *checks and balances* externos (Negri, 1994: 402). En consecuencia, no puede haber privilegios. La igualdad es condición material, ya que sin ella la multitud se encontraría despojada de su fundamento y no podría erigirse como fuerza.

También la relación entre potencialidad y multitud puede ser solamente de igualdad, ya que cualquier privilegio sería un bloqueo del proceso. No hay que confundir la igualdad con uniformidad. La fuerza creadora del poder constituyente surge de la conexión y cooperación entre las singularidades, justo porque no están reducidas a una unidad. La cooperación es la “categoría central de la nueva racionalidad” (Negri, 1994: 403), en contraposición al comando, representado por el poder constituido, que se basa en la enajenación de la multitud y la expropiación de su creatividad y cooperación.

Lo político es entonces la “potencialidad ontológica de una multitud de singularidades cooperando” (Negri, 1994: 403-404). Sin el poder constituyente, lo político se degrada a medida administrativa y ejercicio despótico del poder (Negri, 1994: 405). Por su ruptura con el racionalismo de la modernidad, el poder constituyente representa otro tiempo y otro espacio, y puede abrir otros espacios y tiempos (Negri, 1994: 396). A través de la expansión de la efectividad del poder

constituyente, este se refuerza y modera al mismo tiempo. Ya no tiene que hacer todo lo más rápido posible. Amplía la definición de lo político y lo entiende como terreno del cambio de las relaciones sociales, al que siempre puede regresar y reaparecer.

Para liberar esta fuerza enorme del poder constituyente y usarla como motor social, debe ser pensado como un poder constituyente que no produce constituciones que le son externas, sino que se autoconstituye como continuación de un proceso colectivo. Este proceso no puede ser uno de “unidad”, sino uno de muchedumbre, que mantiene la diversidad productiva. La forma de la “República constituyente”, pensada por Negri, es entonces una “República que surge antes del Estado, afuera del Estado. Es la paradoja de la República constituyente: que el proceso de Constitución nunca será acabado y que la revolución no termina” (Negri, 1998: 80); revolución como proceso. Traducido a la práctica, eso significa “ver en la institución una realidad que se tendría que abrir constantemente, para incluir al poder constituyente en vez de excluirlo: una institución en génesis continua (...) El poder constituyente puede ser un elemento del derecho, o sea una institución que tiene que emanar en continuación nuevas instituciones” (Negri, 2008: 10).

La idea del poder constituyente en Venezuela

El concepto del poder constituyente en Venezuela hace su camino a partir de los años ochenta. En contraposición al discurso oficialista neoliberal de participación, los movimientos populares empiezan a pedir el protagonismo directo de los pobres y excluidos en la construcción de un orden no representativo. El lema central de la Asamblea de Barrios es “No queremos ser gobierno.

Queremos gobernar” (Twickel, 2006: 93). El concepto, radicalizado progresivamente, llega a ser el horizonte de transformación revolucionaria (Denis, 2001: 65). Paralelamente a los movimientos crecientes, el discurso del poder constituyente en los años noventa llega a ser hegemónico en el debate político-ideológico en la *corriente histórica por el cambio* o *corriente histórico-social* (Denis, 2001: 140; 2007 a). Las organizaciones políticas tradicionales y gran parte de los militares de rango más alto, se vieron enfrentados (sea por convicción o a causa de la relación de fuerza) con el concepto incontrolable del poder constituyente como parte de una estrategia revolucionaria de dos carriles.

Desde el punto de vista de la construcción sociopolítica del proceso revolucionario se desarrolla la propuesta del Proceso Popular Constituyente, visto como proceso de construcción y afirmación del poder constituyente a partir de la acción social organizada y no de su representación constitucionalista. Y desde el punto de vista de los mecanismos estratégicos que sirven para darle forma y cuerpo a la insurgencia popular –punto, en principio, en el que todo el mundo está de acuerdo– se arma la tesis del “Tres en Uno”, es decir, de la insurgencia entendida como interacción estratégica entre las fuerzas militares rebeldes, los núcleos guerrilleros aún organizados y la milicia popular en construcción (Denis, 2001: 140).

Nunca se llegó al desarrollo completo de la tesis del “Tres en Uno”. Mientras Chávez y otros oficiales jóvenes la apoyaron, los sectores más conservadores de los militares rebeldes y muchos izquierdistas más tradicionales, la rechazaron. Sin embargo,

se organizaron algunos grupos de milicia en los círculos de MBR-200 y en los movimientos populares. El concepto del Proceso Popular Constituyente (PPC) se difundía cada vez más. En el 1995 surgió el colectivo Guacamaya, en Caracas, formado por muchos activistas de base (entre ellos también Roland Denis), con el objetivo de trabajar en una metodología y materiales para aumentar la difusión del PPC. Publicó volantes y panfletos con las ideas básicas del PPC y organizó talleres con activistas de los movimientos (especialmente barriales, estudiantiles, profesoriales y culturales) y del MBR-200¹⁰⁸. La iniciativa alcanzó también a organizaciones populares escépticas frente a los militares. Los debates llevaron a un entendimiento de la transformación como proceso constituyente continuo, liderado por el protagonismo desde abajo, que se plantea superar la lógica institucional de representación, al igual que al racionalismo de la izquierda tradicional. El punto de partida de la nueva colectividad que conserva la diversidad fue la experiencia colectiva *desde abajo* del Caracazo (Denis, 2001: 144-145). Otra influencia importante la tuvieron los debates del pensamiento latinoamericano alrededor del *poder popular*, que tienen sus raíces en un pensamiento crítico y orientado hacia las bases (Denis, 2001: 143).

El concepto se difunde rápidamente. En varias partes del país, pero especialmente en Caracas, surgieron, antes y después de las elecciones de 1998, centenares de Círculos Constituyentes y Comités Constituyentes de Base, en los cuales

108 Los talleres y eventos se organizaban con la metodología *Invedecor* (Investigación, Educación, Comunicación y Organización) (Denis, 2001: 144), que está relacionada con la co-investigación operaísta.

se discutían temas específicos (como educación, por ejemplo). En Caracas se lograron instalar asambleas constituyentes en seis parroquias (Denis, 2001: 146). Incluso entre las fuerzas tradicionales de izquierda, el concepto es influyente y provoca conflictos. Durante la fundación del MVR en 1998, William Izarra y otros propusieron llevar a cabo la construcción de la organización y la difusión del programa a través de asambleas locales de base; opción rechazada por el máximo responsable de la construcción del partido, Luis Miquelena (que después se volvió opositor) (Ellner, 2008: 4).

En los años noventa surge un sujeto de cambio radical entre los pobres y marginados: “Donde no había ‘sujeto de emancipación’, a menos que lo impongamos en forma idealista como tanto le ocurrió a las ortodoxias marxistas, ahora empezará a emerger sin pedirle permiso ni a sociólogos ni a revolucionarios” (Denis, 2001: 158). La revolución es entendida como un proceso amplio de construcción, como un acto de creación colectiva e invención, y no como “toma de poder”.

La Revolución Bolivariana no es nada sin esta invención política, sin esta siembra básica y las cosechas que ella misma ha dejado: derechos, nuevos espacios de transformación, libertades, lugares de autoorganización y autogobierno popular, luchas inacabadas pero que ya anuncian nuevos terrenos de liberación (Denis, 2007 a).

El entendimiento de la transformación como un largo proceso constituyente es una herencia, un legado del proceso bolivariano para los movimientos del continente y más allá.

El proceso constituyente de 1999 para la elaboración de una nueva Constitución no correspondió sin embargo a las ideas del PPC, sino que era más bien un híbrido. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) era originaria y soberana, pero estaba compuesta de representantes electos con una participación popular solamente proponente y no vinculante. A pesar de eso hubo impulsos muy importantes del poder constituyente que entraron a formar parte de la nueva Constitución. Junto a una cantidad de mecanismos de participación se encuentran también las Asambleas de Ciudadanos y las Asambleas Constituyentes, que pueden tomar decisiones vinculantes, algo que se acerca mucho a la idea de un poder constituyente que puede actuar en continuación. El entendimiento de la revolución como PPC perdió fuerza y centralidad con la toma de poder y la centralidad de Chávez a partir de 1999 (Denis, 2001: 140), pero para los movimientos siguió siendo central. El concepto del poder constituyente, de una Constitución democrática desde abajo, repetidamente choca y entra en conflicto con las ideas tradicionales de un poder constituyente subordinado.

Las Asambleas de Ciudadanos nunca se constituyeron de manera exitosa. Diferentes fuerzas populares demandaron instalar Asambleas Constituyentes, especialmente para los sectores de educación, educación superior, industria petrolera y movimiento obrero, pero no se logró una aplicación exitosa (Ellner, 2008: 4). En los primeros años, marcados por fuertes enfrentamientos con la oposición, las posibilidades de participación directa (incluidas en la Constitución) prácticamente no se aprovecharon. El liderazgo chavista veía el poder constituyente como un anexo de las estructuras representativas y

no como fuente central de toma de decisiones (Ellner, 2008: 4). Aunque, la automovilización y autoconstitución de la base ha sido y es decisiva para la continuación de todo el proceso, por lo menos dos veces: durante el golpe de 2002 (Azzellini, 2007 b: 35-50; Gollinger, 2005; Wilpert, 2003) y en el paro petrolero 2002/2003 (Azzellini, 2007 b: 51-58). La base siempre ha adelantado a los partidos (I-ED, 2007; I-RI, 2006). Durante y después del paro petrolero también hubo una ola de tomas de empresas por obreros, el gobierno se tardó dos años más para fijar posición y empezar con las expropiaciones. Y los intentos de estudiantes en la UCV de empujar un proceso constituyente universitario fracasaron a causa de la rectoría opositora.

Chávez empieza a hablar de la necesidad de la “revolución en la revolución”, habla de expropiaciones, control obrero, armar al pueblo y otras temáticas conectadas con el enfoque *desde abajo*, con el concepto del PPC. La política concreta busca fomentar una participación desde abajo en las comunidades y en los lugares de trabajo. Eso se hace a través de las Misiones, y con el apoyo a las cooperativas. Empieza un debate sobre cogestión y control obrero. Surge la Constituyente Municipal con la que algunos municipios organizan asambleas constituyentes municipales. El MVR además decidió no interferir en la vida interna de los grupos y organizaciones afines al proceso de cambio (Ellner, 2008: 5).

En realidad el papel del Estado en la organización de la base popular ha sido más importante de lo que muchos defensores de una autonomía total de los movimientos hubiesen querido o pensado, con sus iniciativas se organizaron muchos adeptos al proceso de cambio que no tenían pertenencia partidaria

(Ellner, 2008: 5). Muchas de las organizaciones de base fueron de poca duración, pero el continuo surgimiento de nuevas estructuras organizativas muestra la disponibilidad y la intención de la base de asumir un papel activo y autodeterminado en el proceso de cambio. Mientras la mayoría de los autores potencialmente favorables al proceso ven a partir del 2004 una orientación más fuerte hacia enfoques desde abajo y participación directa, Denis, después del referéndum en contra de Chávez, en agosto de 2004, ve en cambio una derrota y la predominancia de una orientación estatista (Denis, 2008). En realidad la situación es más compleja. La fuerza y la presencia de los movimientos, baja en un primer momento, muchos activistas de base trabajan de manera más estrecha *con* y *en* instituciones. Mientras la movilización popular fue decisiva para la victoria de Chávez en el referéndum revocatorio, los que salieron fortalecidos fueron la burocracia y las instituciones, mientras la organización popular para el referéndum se disolvió en su mayoría después del mismo (Azzellini, 2007 b: 73).

Discurso e instituciones fomentan la organización popular para el mejoramiento de la calidad de vida y de la participación social y política. Mientras más iniciativas surgen a nivel micro, más avanza la participación y el desarrollo del poder constituyente, más conflictos con el poder constituido surgen, especialmente en el ámbito de la producción y con respecto a cuestiones de autonomía y control estatal (Lacabana/Cariola, 2005: 21). La profundización de la transformación social multiplica los puntos en los que las lógicas desde abajo y desde arriba se enfrentan. El fortalecimiento y la extensión de las instituciones y la presencia del Estado lleva, al mismo tiempo, a una

creciente burocratización que opera en contra de la apertura y la transformación y tiende a una administración institucional de procesos sociales. Empieza una relación muy contradictoria entre conflicto y cooperación que sigue vigente desde entonces y ha tenido diferentes fases.

El concepto del poder constituyente quedó vigente como orientación normativa, especialmente desde abajo, pero también desde arriba; como, por ejemplo, en el discurso de Chávez. Preocupado por la burocratización del proceso de transformación, con frecuencia repite que el proceso constituyente no debe terminar nunca (Chávez, 2008: 34). En su discurso de toma de poder para el nuevo mandato, el 10 de enero del 2007, se dedicó ampliamente al concepto del poder constituyente y citó a Negri. Describió a las “microrrevoluciones y microrrebeliones” de los ochenta y noventa como poder constituyente en búsqueda de una salida (Chávez, 2007 a: 4). Y también ha sido el poder constituyente el que revocó el golpe de 2002 (Chávez, 2007 a: 5). Aunque, trata de no romantizar el controvertido poder constituyente:

Es una cosa complicada el poder constituyente, no se trata de que tú lo convocas, él llega, se hizo presente y después tú le dices “ahora te vas”. No, el poder constituyente no puede congelarse, no puede ser congelado por el poder constituido (...) Algunos autores hablan del carácter terrible del poder constituyente. Yo creo que es terrible el poder constituyente, pero así lo necesitamos, terrible, complejo, rebelde (...) el poder constituyente es y debe ser potencia permanente, potencia transformadora (...)

El poder constituyente nos permite (...) romper con el racionalismo modernizante y abrir nuevos espacios y nuevos tiempos, por eso es imprescindible que lo activemos, lo convoquemos (...) rompe la categoría de lo moderno (...) que pretende congelar el tiempo y congelar el espacio detrás de la máscara mortuoria del racionalismo (Chávez, 2007 a: 3-5).

Pero el concepto del poder constituyente es también doblado a veces, hasta que cumple con las necesidades requeridas. Así como Chávez hizo referencia al poder constituyente en su justificación de la reforma constitucional de 2007. La discrepancia entre discurso y realidad en Venezuela es contundente, y con la radicalización de la orientación normativa y la referencia al socialismo se ha remarcado. Esto no es perjudicial si la realidad sigue abierta y rigiéndose con la orientación normativa. La orientación normativa tiene que ser, necesariamente, más avanzada que la realidad, de otra manera no puede surgir debate y perspectiva (Demirovic, 2005). Aunque tampoco puede perder la conexión con la realidad. Los pueblos Potemkin no han hecho progresar a ninguna revolución. En la Constitución, en las leyes y en varias instituciones se puede ver cómo el poder constituyente tiene más espacio que en otros sistemas. Especialmente los CC, que formarían la base para un sistema consejero, tienen el potencial de ser una institución del poder constituyente. Aunque existe también la tendencia contraria. El desarrollo futuro sigue abierto.

Contrapoder: resistencia, insurrección y poder constituyente

El concepto de contrapoder de Hardt y Negri (2002 a) posibilita un acercamiento analítico al proceso bolivariano; aún cuando se mueve en el marco de Estado nacional, mientras el concepto de Hardt y Negri ha sido desarrollado más allá del Estado nacional en el contexto del imperio, ya que la desaparición del Estado-nación como esfera política autónoma anularía las posibilidades de que “el espacio social pueda ser transformado utilizando los instrumentos del Estado” (Hardt/Negri, 2001: 278). Las enormes dificultades para transformar la sociedad en Venezuela están a la vista. Pero la transformación no le compete al Estado, sino al pueblo organizado. Y existe una conciencia sobre las pocas posibilidades de la revolución como proyecto nacional.

El que la Constitución bolivariana asuma el papel de un contrato social y el contrapoder se desarrolla con base en ella, está en contradicción con Hardt y Negri. Sin embargo, el marco nacional y territorial es debido a condicionamientos políticos reales. Contenido y orientación miran conceptualmente más allá. Mientras la soberanía nacional es clave para la posibilidad de desarrollar una política más allá del poder de decisión del imperio, al igual que la orientación hacia una alianza continental y una cooperación Sur-Sur.

Según Negri y Hardt (2002 a: 28), el contrapoder se compone principalmente de tres elementos: resistencia, insurrección y poder constituyente, que en las revoluciones clásicas y en los movimientos de los siglos XIX y XX eran pensados como separados y en orden cronológico. Frente a la soberanía ilimitada del

imperio, hoy cada uno de esos momentos puede y tiene que ser incluido a los demás (Hardt/Negri, 2002 a: 29). En el proceso bolivariano se pueden encontrar los tres elementos de manera simultánea: en la resistencia en contra de la presión política, económica, mediática y en parte militar del imperio; en la resistencia de los movimientos populares en contra de una burocratización o institucionalización del proceso que podría llevar al estancamiento, e incluso, a una regresión del proceso; en la lucha de clases que temporalmente asume dimensiones insurreccionales; y en el poder constituyente, que diseña una nueva sociedad a partir de la participación y autoorganización progresiva. El concepto logra también explicar la característica específica del proceso bolivariano: la transferencia parcial de la lucha de clases al interior del Estado, por lo que, en algunos momentos, el contrapoder emana desde el poder constituido y en otros más bien se dirige en contra del Estado.

Sin embargo, Negri no especifica a dónde tiene que llevar el contrapoder, y en entrevistas da diferentes respuestas reconociendo que su idea de contrapoder es muy leninista, y en cierta manera lo que Trotski y Gramsci nombraron “fase de transición” (Negri, 2001), así que se le puede acusar que el concepto de contrapoder por fin se refiere al doble poder, prolongado hacia la eternidad (Mazzeo, 2007 a: 92). Si se entiende el contrapoder de esa manera, entonces el concepto es apto para sacar una imagen momentánea de la situación en Venezuela, pero no para vislumbrar la direccionalidad de los movimientos. Para eso es más útil el concepto de *poder popular*.

2.2.3 La otra democracia y la otra revolución

Democracia participativa y protagónica en Venezuela

La movilización popular es la clave para cualquiera. Por eso esto solo se puede lograr rompiendo los patrones del capitalismo y la falsa democracia liberal, que no es democracia ni es nada, es la dictadura de las élites, solo el pueblo salva al pueblo

HUGO CHÁVEZ. ACTO CON MOTIVO DEL INICIO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN EN MEDICINA INTEGRAL COMUNITARIA.
TEATRO MUNICIPAL, CARACAS; 3 DE OCTUBRE DE 2005. EN: CHÁVEZ, 2008: 13

En su más simple concepción, la comuna significaba la destrucción preliminar de la vieja maquinaria gubernamental en sus sedes centrales (...) y su reemplazo por un auténtico autogobierno.

MARX, 1978: 256

En la Constitución de 1999, Venezuela se denomina como “democracia participativa y protagónica”. *Participación* significa en forma activa y pasiva; *protagónica* se refiere al actuar en primera persona e indica hacia el poder constituyente. El punto de partida es la crítica de la democracia representativa como no democrática. La crítica no solo se refiere a los procesos y mecanismos, también a la cultura política (Lanz Rodríguez, 2004 a; 2007a; Minci, 2007; Silva, 2005), ya que la cultura venezolana está aún muy marcada por el régimen del PPF, por un Estado paternalista, una estructura representativa corporativa y un fuerte clientelismo (Coronil, 2002; Parker, 2006; Ramírez Roa, 2003). A la nueva cultura política no pertenece

solo la participación, también la lógica zapatista del “mandar obedeciendo” y una nueva visión y práctica de género (Minci, 2007: 33; Silva, 2005). Desde el 2005 el énfasis del debate y de los mecanismos de participación está en el *poder popular*, democracia revolucionaria y consejismo.

La reivindicación de participación surgió a partir de los años ochenta. El concepto de la democracia participativa y protagónica, que alcanzó más popularidad con la campaña de Chávez, en 1997 (I-RI, 2006), retoma esa reivindicación y la traduce en una nueva forma. El fundamento para la superación de la desigualdad y la marginación es que los pobres y marginados ya no sean objetos de medidas, sino agentes de las estrategias para alcanzar la igualdad y justicia en los más diversos ámbitos sociales. La participación protagónica mira a evitar medidas erróneas y transformar a los participantes en sujetos políticos. Esta orientación ha sido confirmada nuevamente para el período 2007-2013 (Minci, 2007). Lander (2004: 220) subraya que:

Las transformaciones en la cultura política y los procesos de inclusión, la incorporación como sujetos de la acción política y organizativa de las mayorías pobres del país que se encontraban excluidas (...) Ha sido esta la más importante conquista en dirección a una sociedad más democrática.

La Constitución de 1999 amplía los derechos políticos anteriormente limitados a los partidos y conecta la economía, lo social y lo político. Hay que entender los derechos sociales y colectivos formulados y su aplicación como participación en

un sentido más amplio, sin la que una participación social o política, especialmente para los pobres, es difícil o imposible (Cuevas, 2006: 108; Dussel, 2006: 67; O'Donnell, 1998: 6). La participación protagónica de la población es precisada en varios artículos de la Constitución y el Estado tiene el deber de fomentar la participación en la toma de decisiones (artículo 62) y transferir funciones y recursos:

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estatales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la población (RBV, 1999).

Los artículos sobre participación tienen a propósito formulaciones abiertas. Una reglamentación jurídica detallada negaría la dialéctica típica de procesos sociales y podría desembocar fácilmente en tendencias autoritarias. Esta apertura hace posible experimentar con diferentes alternativas y es característica del proceso venezolano (I-EL, 2007). La democracia participativa y protagónica quiere, en un primer momento, fortalecer las *comunidades* y fomentar procesos de autoorganización de la población (Parker, 2006: 92). El nivel local es el punto de partida

de cualquier participación, ya que es lo más cercano a los seres humanos (López Valladares/Gamboa, 2001: 79). “En general, democracia depende del localismo: las áreas locales donde la gente vive. Democracia no significa poner poder en otro lugar del que la gente está” (Lummis, 1996: 18). No por nada el término “política” viene de *polis*.

Los mecanismos de participación fomentados por el gobierno están arraigados en el territorio. Se constituyen en y desde los espacios locales de vida de los seres humanos. El punto de partida central para la autoorganización local fue y sigue siendo la demanda y la organización de los servicios básicos (El Troudi/Harnecker/Bonilla-Molina, 2005: 41; López Valladares/Gamboa, 2001: 90). El foco, sin embargo, no debe llevar a la conclusión de que para el pueblo se trata primordial y exclusivamente de la satisfacción de las propias necesidades materiales. Chávez no fue electo por promesas materiales o sociales, sino porque prometió refundar el país con un proceso participativo con el protagonismo de las bases. En las movilizaciones masivas para la defensa del proceso de transformación se pudo ver cómo la participación política, en las palabras de Andrés Antillano, “es una conquista orgánica de la clase. O sea, el problema del poder es tan importante como el problema del ámbito material, el poder recibir, el poder autogobernarse” (I-AA, 2008).

La apropiación del gobierno por los sectores populares durante el golpe y el paro petrolero fue una experiencia extremadamente importante desde el punto de vista de la participación y de la cultura política, convirtió “esa palabra vacía *protagónico* en una experiencia vivida” (I-EL, 2007). A partir de 2003 establece una fuerte dinámica de organización en los

barrios alrededor de las misiones que tocan los problemas más urgentes de los marginalizados y excluidos. En el 2004 se fortalece una coyuntura de autoorganización y de iniciativas para co- y autogestión de empresas apoyada desde arriba. Y aunque algunos mecanismos de participación han fracasado, siguen surgiendo y experimentándose nuevos (Ellner, 2006 a: 89).

Los primeros CC aparecieron en 2005. En 2006 pasaron al centro de la organización popular. Con la reelección de Chávez en diciembre de 2006 inició una nueva fase del proceso de transformación y se habla de construcción del socialismo del siglo XXI. En este marco el *poder popular* es definido como el impulso más poderoso para una transformación hacia el socialismo y se asigna a los CC un papel central (Lander, 2007 a: 79). Chávez los define como el proyecto que transforma la democracia representativa “en una democracia verdadera, a través de la cual marchemos hacia el socialismo” (Chávez, 2008: 32). La idea de un poder constituyente lo más libre posible, no sometido al poder constituido, señala la forma de los consejos (Negri, 1998: 78)¹⁰⁹. Estructuras consejistas, en diferentes sectores de la sociedad, formarían el fundamento del socialismo venezolano, cooperando y confederando a nivel más alto para reemplazar al Estado burgués con un *Estado comunal*. Los diferentes *consejos del poder popular* (CC, consejos de trabajadores, estudiantes, campesinos, mujeres, etc.), la administración democrática de empresas de propiedad social por sus trabajadores y muchas otras instituciones comunales y colectivas pertenecen

109 Se puede notar un resurgimiento de modelos consejeros. Desde las experiencias en Venezuela hasta varios textos de debate en el marco de la crisis económica y financiera, el principio consejero se encuentra muy difundido; véase por ejemplo Esteva (2009) y Roth (2008).

a los nuevos instrumentos de participación que se encuentran en experimentación.

En marzo de 2008, Chávez anunció que el fortalecimiento del poder popular era la tarea primordial (*Aló Presidente*, 16/3/2008). Muchos activistas de base ven a los CC como correspondientes a las estrategias que están siguiendo desde hace años (I-ED, 2007). Como ulteriores niveles de organización desde abajo hay la posibilidad de que varios CC se junten y formen una *comuna*, que puede planificar, decidir y ejecutar en el ámbito que le corresponde. El nivel que sigue es la *ciudad comunal*, como territorio que abarca varias *comunas*.

En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 –conocido también como Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB)–, la democracia que se quiere construir es denominada “democracia protagónica revolucionaria” (Minci, 2007: 29), basada en la organización y colectividad, respetando la autonomía y la libertad. Los espacios públicos y privados son considerados complementarios y no separados e incluso opuestos, como en la ideología liberal (Minci, 2007: 29). El plan pone en el centro una serie de valores: colectividad, igualdad, solidaridad, libertad y soberanía (Minci, 2007: 30), comunes para el proceso bolivariano. Y “dado que la soberanía reside en el pueblo, este puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa o indirecta” (Minci, 2007: 30). De eso deriva también que cualquier cargo electo sea solamente un delegado del poder de los ciudadanos y puede ser revocado por medio de un referéndum (Minci, 2007: 34).

La ética se basa en el valor de la vida humana, su defensa, su preservación y su desarrollo, así como en el bien común (Minci, 2007: 32).

El poder político será utilizado como palanca para garantizar el bienestar social y la igualdad real entre todos los miembros de la sociedad. Por eso, la justicia está por encima del derecho y la ley, aunque los presupone. Se garantizan las condiciones materiales para el ejercicio real de los derechos a la educación, la salud, el trabajo, la recreación, aunque el ciudadano no tenga dinero con qué pagarlos (Minci, 2007: 34).

La democracia y la construcción de poder popular son entendidas como proceso, donde el protagonismo desde abajo es decisivo.

La integración, comunicación y coordinación entre las diversas organizaciones populares conforman un componente determinante para el logro pleno de la democracia protagónica revolucionaria.

El espacio para la participación protagónica debe seguir siendo conquistado y mantenido por las organizaciones populares (Minci, 2007: 35).

Entre los contenidos más importantes de la democracia protagónica revolucionaria y las vías para construirla se encuentran la educación, la comunicación e información. Se plantea fortalecerlas y democratizar más el acceso y su uso (Minci, 2007: 35-40).

Visto que la participación no se puede ni forzar ni decretar, las experiencias son muy desiguales a lo largo del país, dependiendo fundamentalmente de dos factores: de la organización preexistente y de los directamente responsables en política y administración (I-EL, 2007). El proceso bolivariano estuvo marcado desde el principio por dos estrategias diferentes: desde abajo y desde arriba. Los partidarios de una estrategia desde abajo critican a los partidos y la burocracia en las instituciones, acusados de monopolizar las decisiones, tolerar la corrupción por intereses partidistas y fomentar una burocratización con efectos desmovilizadores (APPP, 2005; Denis, 2005: 89-121; Ellner, 2008). Demandan una participación directa del pueblo en todos los procesos de toma de decisión, confirmados por lo concreto, la orientación normativa y la frecuente crítica de Chávez a los partidos (por lo menos hasta el nacimiento del PSUV) y las instituciones, así como en las iniciativas de organización y autogestión que alienta. Así, después del golpe de 2001, Chávez criticó la incapacidad del MVR para conectarse con el impulso del movimiento y llamó a activar movimientos. En el 2004, después de que la coordinadora de la campaña en contra de la recolección de firmas para revocar el mandato, Comando Ayacucho, conformado por representantes de los partidos, fallara por completo, Chávez inició el Comando Maisanta, para la campaña del referéndum, conformado por delegados de diferentes organizaciones de base y chavistas independientes.

Las críticas de los adeptos de estrategias desde arriba se ven alentadas por la importancia que Chávez da, repetidamente, a la función legislativa de la Asamblea Nacional, por la llamada a fundar el PSUV y la falta de elecciones primarias en

el PSUV (hasta las candidaturas regionales de 2008). Según Ellner, la imposibilidad demostrada hasta ahora para que una de las dos estrategias desplace la otra, pone en duda la afirmación común de que una de las dos no sea viable y supone la probabilidad de una síntesis de las dos, superando la desconfianza mutua (2008). Sin embargo, más que desconfianza se trata de dos lógicas opuestas, una vertical y la otra horizontal, que aunque convivan desde hace diez años, producen la dinámica del proceso justo a partir de la contradicción insoluble. Mientras más se desarrolla el poder popular, más chocará con el poder constituido. Un alargamiento en el tiempo de esa simultaneidad sería posible solo si el poder constituido se transforma totalmente.

Partidos y participación

“Los venezolanos pueden sentir un rechazo a los partidos, pero no han encontrado la manera de prescindir de ellos” afirma Hellinger (2008) de manera correcta. El MVR se fundó en 1997 como partido electoral para el apoyo de la candidatura de Chávez, juntando organizaciones y particulares. A causa de su exclusiva orientación electoral, casi no tenía lazos como partido con organizaciones populares. Los intentos de construir frentes ligados al partido fueron abandonados pronto, ya que los chavistas prefirieron organizaciones independientes de partidos. Este modelo ha sido también defendido por algunos líderes del MVR, ya que garantiza la autonomía de los movimientos (Ellner, 2006 a: 78). El MVR y los demás partidos de izquierda no se preocuparon mucho en fomentar la participación como plantea la Constitución, y en ellos se repitieron

más y más los comportamientos de los viejos partidos. Luchas de poder, peleas por puestos, clientelismo y medidas disciplinarias en contra de críticos internos marcaron especialmente el MVR, consolidado como aparato sin democracia interna y participación, en el que se negociaban puestos, se instalaron políticos profesionales y oportunistas y casi no hubo debates políticos o programáticos (Hellinger, 2008; Parker, 2001: 18-19).

Para sorpresa de todos, Chávez propuso en el 2006 crear el PSUV. Al principio lo vislumbró como único partido de gobierno, una idea que él mismo pronto admitió como errónea. La forma partido conlleva muchos peligros¹¹⁰. Sin embargo, hasta hoy, Chávez y el movimiento no han podido seguir sin una organización que en la estructura institucional existente asuma este rol, es decir, que gane elecciones y trabaje en el parlamento (Hellinger, 2008). La situación en el MVR y de muchos partidos de gobierno, fomentaba el clientelismo y no un pluralismo democrático. Con el PSUV se buscaba cambiar eso. Aparte del PPT, PCV, MEP, UPV y los Tupamaros, los demás partidos de gobierno se disolvieron en el PSUV en el 2007, ya que lo más importante a esas alturas era la organización de la maquinaria electoral para la reforma constitucional a finales de 2007 (Hellinger, 2008; Lander, 2009). El PSUV se fundó con círculos de base como fundamento organizativo, pero elecciones dentro del partido se celebraron hasta 2008. El proceso de fundación estuvo fuertemente marcado por intentos de políticos dominantes y grupos de interés por asegurarse posiciones de poder, lo que causó muchas críticas y molestias en la base.

110 Para una crítica al modelo de partido y a la construcción del PSUV, véase: Fernández Colón, 2006 a; 2006 b; Monedero, 2007.

Chávez sigue indicando con frecuencia que debe haber espacios de debate y diferentes corrientes en el partido y que todos los cargos tienen que ser electos por la base (Monedero, 2007: 16); al mismo tiempo, apunta a responsables en el PSUV sin elección.

En abril de 2008, unos 90.000 delegados, electos por toda la membresía del partido, eligieron un directorio de 15 miembros y 15 suplentes y los candidatos para las elecciones municipales y regionales de noviembre fueron electos por todos los miembros del partido a principios de junio. Los candidatos para las elecciones a la Asamblea Nacional, en septiembre de 2010, fueron electos también por toda la base. No obstante que participaron solo unos 1.7 de los 5.2 millones de miembros inscritos, se logró un paso importante con las elecciones primarias de candidatos y elecciones de base para el directorio. En las últimas, candidatos con cargos electorales casi no fueron votados. La votación más alta la recibieron candidatos que se pueden considerar de la izquierda del proceso, o las llamadas “caras nuevas”.

Con las primarias, las primeras desde que Chávez asumió el poder, el PSUV pudo ganar prestigio. Los resultados fueron ambivalentes. Mientras que la base logró imponer sus candidaturas en contra de pesos políticos locales, y hasta contra candidatos apoyados por Chávez, en varias regiones y ciudades, en otros casos la dispersión de la base o el poder político de cargos electos llevó a la recandidatura de carreristas de partido que supieron reciclarse con éxito en el PSUV y tienen mucha influencia en los aparatos partidarios regionales (Azzellini, 2008 b: 63; Lander, 2009). En algunos casos hubo

poco disenso con cargos electos, y fueron reelegidos por la base como candidatos. Las primarias para las candidaturas a la Asamblea Nacional transcurrieron de manera parecida. Pero es de notar que de 116 diputados del PSUV que aspiraron a una nueva candidatura, solo 16 lo lograron.

El PSUV es el partido más grande y más votado del país. Forma alianzas con otros partidos, principalmente con el PPT (hasta el 2009) y el PCV (elecciones 2013). A pesar de esto el PSUV no ha logrado, hasta ahora, ser más que un partido electoral. En abril de 2010 se publicaron los fundamentos programáticos y una declaración de principios del PSUV, resultado de un congreso especial llevado a cabo durante varios fines de semana y en el que participaron 300 delegados electos por la base. Un profundo debate sobre el rumbo del proceso de transformación y del partido mismo no se da. Su futuro es todavía muy incierto. “El PSUV es un campo de tensión: ni representa el ejercicio pleno de la democracia desde la base, ni es un espacio que pueda controlarse completamente desde arriba” (Lander, 2009).

Participación de mujeres

Ser mujer en Venezuela está conectado con la pobreza. Dos tercios del total de la población en pobreza son mujeres, en su mayoría madres solteras. El 71% de los 1.21 millones hogares del país con un adulto son encabezados por mujeres. En los movimientos populares la situación es parecida. Alrededor del 70% de los participantes en las misiones educativas –sean formadores, promotores o estudiantes– son mujeres (Azzellini, 2007 b: 246; Ellner, 2008: 111; Fernandes, 2007: 97). En las protestas en contra del golpe, las mujeres formaron visiblemente la mayoría

protagónica. Pero, en instituciones, especialmente en puestos más altos y en cargos de elección popular, las mujeres –con un cambio positivo notable– siguen teniendo menos presencia que los hombres.

La fuerte participación de mujeres en movimientos de barrio no es atípica para el contexto latinoamericano (Evers/Müller-Plantenberg/Spessart, 1979: 161). Una explicación para la alta participación de mujeres a nivel local, donde asumen también la mayoría de los liderazgos, es que la cercanía a su casa les posibilita combinar las exigencias del activismo con las obligaciones del hogar (El Troudi/Harnecker/Bonilla-Molina, 2005: 43; I-LH, 2007). Eso es visible en la participación menor en los bancos comunales, que incluye una formación de varios días en las afueras de Caracas. Pero también en actividades lejos del espacio de vida directo se pueden observar más mujeres que hombres, como en las asambleas de voceros y voceras de varios CC. El entonces director de la Universidad Bolivariana de Caracas explicó, en el 2007, que el 80% de los estudiantes son mujeres. Existen, por lo menos, dos razones más que relevantes para la participación general más alta de mujeres.

En la estructura social del barrio, las mujeres asumen el rol más importante. Moreno (2005: 212-213) describe la sociedad de barrio venezolana como una convivencia que es totalmente diferente a las estructuras familiares occidentales clásicas. La familia popular es estructuralmente matricéntrica, la división según los roles de género occidentales no se da. Hombres son siempre hijos y mujeres madres, entendido como relación social, no como realidad individual. “Mientras el moderno se practica y define como individuo, el venezolano popular se practica y

define como relación afectiva matricentrada en la convivencia” (Moreno, 2005: 213). Eso tiene sus raíces en la fuerte influencia cultural afrovenezolana y es un fenómeno que puede ser observado en todo el Caribe y en comunidades afroamericanas en EE.UU. La matricentricidad lleva también a un sentimiento “materno” de responsabilidad, que no debe ser confundido con sumisión o pasividad. Partiendo del sentido matricéntrico de responsabilidad, como base de su identidad política, las mujeres se transforman en agentes de la construcción de nuevos espacios de participación democrática de la comunidad (Fernandes, 2007: 122).

En talleres para voceros de CC de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, además de la participación mayoritaria de mujeres, también se pudo observar que tienen mayor continuidad. Una razón podría ser la estructura de trabajo en Venezuela en las últimas décadas, donde un trabajo regular para la población masculina de barrio raras veces pudo garantizar un ingreso familiar, si es que se encontraba. El modelo económico corrupto y clientelar fomentó una cultura de las ocasiones, del “dinero fácil”. Un trabajo continuo no dejaba necesariamente resultados visibles. Las mujeres en su caso son obligadas por el hogar y los hijos a cierto grado de organización de trabajo y regularidad y gozan de una experiencia más amplia.

Los papeles de género también se ven cuestionados en la vida cotidiana (Fernandes, 2007) y los hombres asumen más tareas en el hogar, mientras las mujeres se dedican al activismo político. Jalexí R., una joven mujer colombiana crecida en los barrios de Baruta (parte de Gran Caracas), casada, con dos hijos, vocera de su CC y activista a nivel de coordinación

con otros CC, expresa de manera sarcástica lo que corresponde a la realidad de una parte de las mujeres venezolanas: “Mi esposo trabajando como un burrito mientras yo hago la revolución, ¿qué tal?”. Un papel importante en este contexto lo asume el discurso oficial, antes de todos el de Chávez, que enfatiza repetidamente la igualdad de género, anima a las mujeres y pone en duda papeles tradicionales de género (Ellner, 2008). En las campañas del gobierno se usan a menudo imágenes de mujeres pobres y afrovenezolanas.

Un análisis detallado de la participación social específica de las mujeres en Venezuela no puede llevarse a cabo en esta investigación. Para eso se necesitarían ulteriores y más diferenciados indicadores.

Poder popular como praxis de la construcción del socialismo

Poder popular es un concepto fundamental en el proceso venezolano. Se refiere al ejercicio de la capacidad de la población subalterna y marginada de administrar la propia vida por medio de procesos de organización, formación y coordinación, y así cambiar las relaciones de poder. Poder popular significa la fuerza autónoma propia de las capas populares más allá del Estado, la ideología y las instituciones de la clase dominante (Caviasca, 2007: 41; Denis, 2005: 116; Mazzeo, 2007 a: 61). El “poder popular no es algo distinto del socialismo, aunque alude a una forma singular de concebirlo y construirlo” (Mazzeo, 2007 a: 29). El contenido concreto es entendible solamente en el contexto específico de las condiciones históricas. El poder popular “da cuenta de una historia (como pasado asumido o sufrido), un presente (una situación política, económica y

cultural) y un futuro (observable en una expectativa estratégica)” (Acha, 2007: 22). Es un concepto renovado continuamente, un proceso de constante búsqueda y creación (APPP, 2005) y no tiene un referente central teórico (Mazzeo, 2007 a: 28). El poder popular se nutre de siglos de experiencias, formas de organización y luchas de subalternos (marginados, indígenas, exesclavos, etc.), que durante cierto tiempo asumieron el control de un espacio específico, intentando construir relaciones más igualitarias y democráticas de las que vivían. La construcción de poder popular significa, esencialmente, la construcción de relaciones sociales alternativas, en oposición a las lógicas del capital. Poder popular entonces no es Estado ni utopía desarrollada, que solo hay que aplicar, sino toma la forma de la tendencia existente hacia una sociedad futura (Mazzeo, 2007 a: 61). La construcción de un liderazgo horizontal, siguiendo la lógica zapatista del “mandar obedeciendo”, es al mismo tiempo portador de una nueva sociedad (Mazzeo, 2007 b: 13).

Poder popular remite entonces a la autoorganización, a los CC y la construcción gradual de un sistema consejista. El concepto manejado actualmente en muchos movimientos populares en Venezuela y en América Latina se diferencia de otros ejemplos históricos y está conectado con la centralidad del poder constituyente. Así, se encuentra a menudo la referencia a la Comuna de París. Y también se diferencia de conceptos de doble poder o poder local (zonas liberadas), aunque estos se basan en el poder popular. La idea de poder popular fue revivida en América Latina en los años sesenta y setenta, con referencia a los soviets y las experiencias en Cuba y China (Mazzeo, 2007

a: 78). Doble poder se refiere a la existencia paralela de diferentes estructuras de poder en el curso de luchas revolucionarias o revoluciones.

Tales experiencias se basaban en conceptos de doble poder, en camino a la toma del poder del Estado. El poder popular era considerado como necesidad del proceso revolucionario o nación, en situaciones de colapso del viejo orden, y siempre visto como solución interina hasta la toma del “verdadero” poder: el poder del Estado. Después de eso tenía que someterse al poder constituido, al “Estado revolucionario” y al partido. Así los soviets, que en el ejército ruso existían ya antes de que empezara la guerra civil, eran parte del doble poder. Los bolcheviques conquistaron a los soviets y prolongaron el doble poder en el tiempo. Pero luego de la toma y consolidación del poder del Estado, el Estado llegó a ser la totalidad. Los soviets, consejos de fábrica y demás estructuras del poder popular, fueron absorbidas por el Estado (perdiendo su dinámica y fuerza creadora), o desarticulados violentamente. Otros procesos revolucionarios pasaron por un desarrollo parecido.

En Venezuela, en cambio, poder popular no es entendido como solución interina, sino como camino y meta. Ese entendimiento fue propuesto por primera vez por la Asamblea de Barrios en Caracas, a principios de los noventa, alcanzando hegemonía en los enfoques desde abajo. Durante los primeros años del gobierno de Chávez, el concepto tenía un papel muy secundario y fue integrado al discurso oficial hasta el 2005. Desde el 2007, poder popular está en el centro del discurso desde arriba y desde abajo. A diferencia de otros procesos revolucionarios, en Venezuela no hubo una destrucción o colapso

de las viejas estructuras, que fomentara el surgimiento y la extensión de estructuras de poder popular. Y, por propia lógica, el poder popular no puede ser “otorgado” desde arriba. No puede ser pensado desde el Estado, pero tampoco sin él.

La consolidación del poder popular requiere resolver la cuestión del poder del Estado. Ya que el Estado es parte de una totalidad compleja, la lucha de clases se expresa también en el interior del Estado —lo que no hay que confundir con una lucha “desde adentro” (Mazzeo, 2007 b: 12). Es la cuestión de la soberanía (por ejemplo, respecto al control de los recursos), que obliga a integrar la cuestión del Estado al poder popular, aun cuando el Estado lleva toda la carga histórica de representación, nacionalismo, exclusión, centralismo, política institucional, escisión de las esferas, etc. Además, la posición de la soberanía suele pensarse sin la necesidad de autonomía (erróneamente, como ha demostrado la historia), que es expresión histórica de la comuna, del liderazgo colectivo y de la estrategia. En una parte del gobierno venezolano hay claridad sobre la necesidad de fortalecer el poder popular (en contraste al gobierno de Allende, en Chile, que confió sustancialmente en los procesos institucionales).

El gobierno de Chávez se apoya fuertemente en la dinámica de los movimientos e intenta fomentarlos para acumular fuerzas, ampliar la base y transformar al pueblo en actor político, sin limitar el papel de actores políticos al gobierno y los partidos. Muchas iniciativas del gobierno contrastan con las políticas de la izquierda tradicional en América Latina: “El gobierno popular de Chávez no se asume como la expresión consumada de una dualidad de poderes (...) y desarrolla iniciativas que

tratan de construirla” (Mazzeo, 2007 a: 141-142). Carlos Luis Rivero, viceministro del Minep, en el momento de la entrevista, explica:

Nosotros como Estado no nos asumimos representantes de la gente. Esta es una sociedad que debe ser construida y protagonizada por sus ciudadanos, en donde el Estado debe ser promotor de ese proceso de participación solamente. Pero el Estado no es el elemento transformador. Tiene que construirse instancias dentro del pueblo que permitan efectivamente transformar la realidad que tenemos, la realidad política, la realidad económica, la realidad cultural, la realidad social... De allí estriba el tema de la participación. No puede haber transformación sin participación del pueblo (I-CLR, 2006).

Para fomentar la construcción de poder popular hay miles de promotores en todo el país. Pertenecen a organizaciones de base, trabajan para instituciones que se dedican a acompañar el poder popular (Fondemi, alcaldías, Sunacoop y muchas más) o están organizados en cooperativas, que son contratadas por instituciones para ciertas tareas (por ejemplo, formación o acompañamiento de proyectos productivos). En el 2005, un encuentro de más de mil promotores, durante tres días, formuló un manifiesto en el que se puede leer:

Poder popular es la participación protagónica del pueblo en ejercicio de su derecho a gobernar, a través de la cogestión y corresponsabilidad. Pero es también el ejercicio de la toma de de-

cisiones en todos los órganos y ramas del poder público. El poder público es uno solo y es el poder popular (APPP, 2005).

Los funcionarios públicos electos deben asumirse servidores y voceros del poder popular, no representantes. Deben seguir las decisiones populares y facilitar la toma de decisiones con mecanismos de información y participación. Además, el poder popular debe consolidarse en las estructuras del poder constituido, para poder nombrar y revocar empleados públicos. El ejercicio más importante del poder popular está en la *contraloría social*, “es hacer seguimiento, evaluación y control del ejercicio del poder público por parte de sus representantes en todos los órganos, ramas y niveles del poder público” (APPP, 2005). Se trata de eliminar la burocracia fortaleciendo los CC.

Los partidos políticos no deben ser los lugares de decisiones políticas, estas tienen que ser tomadas por el pueblo organizado, donde los partidos solo son una forma de organización entre muchas. Ni las cúpulas de los partidos de gobierno ni las de los partidos de oposición están interesadas en un proceso constituyente del poder popular. Hablando de comunidad e integración para conformar estructuras de poder popular se hace referencia a todos, incluyendo a opositores, ya que la experiencia de cambio los llevaría a adherir al proceso de transformación.

El “socialismo” y la socialización de los medios de producción en manos y al servicio del poder popular, son una necesidad. La lucha por el poder popular es, por tanto, una lucha en contra del capitalismo. Para eso, según la declaración de los promotores, es necesario reformar la Constitución, pensada en

el marco del capitalismo (APPP, 2005). Algunas de las orientaciones ya se cumplieron hasta el 2010; otras, como la reforma constitucional, fracasaron. Otras más se pueden encontrar entre las orientaciones normativas del PNSB o son parte de las demandas incumplidas. La reforma constitucional pretendía integrar a la Constitución el poder popular como poder adicional, que:

No nace del sufragio ni elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. El poder popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los Consejos Comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros que señale la ley (ANdRBV, 2007: artículo 136).

El artículo 184 iba a ser reformado obligando a la creación de mecanismos para que el Estado central, los gobiernos regionales y los municipios, tengan que transferir servicios a las comunidades organizadas, los CC, las comunas y demás órganos del poder popular, que demostraron la capacidad de administrar. Esa orientación normativa sigue vigente a pesar de la derrota en el referéndum. Sin embargo, es apoyada y fomentada por diferentes actores del proceso de transformación con diferente intensidad dependiendo de coyunturas políticas e intereses sociales.

Las fuerzas desde abajo deben formar redes del poder popular. Hasta ahora no se logran canalizar todos los problemas, las propuestas y decisiones de las organizaciones de base hacia

las instituciones correspondientes. Hay diferentes modelos de redes que han sido introducidos al debate (IMU, 2007). Pero, como ha demostrado el desarrollo hasta ahora, estas surgirán de la praxis desde abajo. Del poder popular y las redes se deduce la idea del *Estado comunal*. Este se encuentra en una fase de definición y experimentación que se da primordialmente en la práctica y con la necesidad declarada de la destrucción del Estado actual. En su base están los CC, que asumen el papel de entidad que potencia el *poder popular*.

Peligros y problemas en la construcción de poder popular

Es claro que la asimetría de poder entre el Estado y desde abajo puede llevar fácilmente a que las iniciativas desde abajo sean influenciadas por instituciones o cargos del Estado, y no al revés, existiendo el riesgo de cooptación (Goldfrank, 2001; Schönwälder, 1997). Las iniciativas desde abajo ya no serían el semillero y la antelación de la futura nueva sociedad, sino un apéndice del poder constituido. Es palpable el riesgo de que la meta de una sociedad igualitaria y libre lleve a una cantidad de normas y reglas con efectos represivos y paralizantes, y que ahoguen a los procesos sociales desde abajo (Mazzeo, 2007 a: 60). También que la función crítica y el derecho a la crítica sean reducidos a un pequeño círculo, una supuesta élite ética (que deduce la legitimación de su liderazgo en el Estado o partido y legitima su papel de liderazgo con la superioridad ética). Por eso, los defensores del poder popular enfatizan la centralidad de la autonomía y la importancia del debate crítico desde abajo.

En la nueva institucionalidad, que surge frecuentemente como institucionalidad paralela, así como en las misiones o los CC, persiste el peligro de reproducir lógicas del poder constituido y enfoques tradicionales, como jerarquías, mecanismos representativos; escisión entre gobernantes y gobernados, líderes y liderados, y burocratización. Ese peligro es fortalecido por el hecho de que para responder a los derechos sociales el Estado venezolano, anteriormente ineficiente, tiene que ser fortalecido, con la posibilidad de caer, aún más, en prácticas corruptas, corporativas o burocráticas, en vez de superar las existentes.

Estado comunal: ¿Estado o no-Estado?

No existe una idea definida sobre la forma y el papel que debería tener el Estado. El contenido y la orientación del proceso de transformación han estado en constante cambio durante los últimos 10 años. Eso implica, de modo discursivo y también práctico, un cambio en la manera de concebir el papel del Estado y su forma. La mayoría de los cambios no fueron resultado de un modelo trazado antes o de una estrategia específica, sino consecuencia de decisiones prácticas para adecuar al Estado a los requerimientos y necesidades de la política declarada; ya que el gobierno enfrentó, en todos los niveles, grandes dificultades para reorientar las políticas públicas por medio del aparato administrativo existente (Lander, 2007 a: 65-67).

El papel del Estado, así como la relación entre el Estado y la sociedad, han sufrido fuertes cambios. Según Chávez, ya

se consumó el pasaje de un Estado capitalista dominado por EE.UU. y bajo el control de la burguesía nacional, a un Estado en transformación; aunque todavía en un marco capitalista. El Estado burgués, con su estructura, sin embargo, sigue “vivito y coleando” y debe ser desmantelado progresivamente, mientras se construye, de manera paralela, el Estado socialista y comunal. A mediano plazo, se trata de la transformación en un Estado socialista con mercado regulado y después de un “sistema socialista de Estado comunal (...) donde predomine la propiedad social tanto indirecta como directa, y componente importante de la propiedad social debe ser la propiedad comunal”.¹¹¹

Es necesario determinar qué forma tendrá el Estado comunal en un proceso abierto que se da a través de la construcción de consejos en diferentes ámbitos y territorios. El sistema consejero territorial hasta ahora tiene tres niveles: Consejos Comunales, comunas y ciudades comunales. La estrategia corresponde a un enfoque desde abajo. La organización política de sociedades socialistas del siglo XXI, como confederación horizontal de comunidades o como redes de organizaciones sociales (Fernández Colón, 2006), ha sido formulada de manera parecida –sin referencia a Venezuela– por Gustavo Esteva en Oaxaca (México). Esteva destaca el “ímpetu comunitario” originario del socialismo antes de que se convirtiera en “colectivismo, burocracia y autodestrucción”. “Las comunidades aparecen como alternativa porque en ellas se restablece la unión entre la política y el lugar y el pueblo adquiere una forma en que puede

111 Juramentación de los nuevos integrantes del Gabinete Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Teatro Teresa Carreño, 8 de enero de 2007. En: Chávez, 2008: 38.

ejercer su poder, sin necesidad de rendirlo al Estado” (Esteva, 2009). De manera parecida a los conceptos de Poder Popular y del Estado comunal, se abre la posibilidad de entender “Estado” como ciertas funciones limitadas y democráticamente legitimadas, que pueden coexistir con la autonomía de las comunidades (Esteva, 2009).

Estos conceptos crean un nexo con experiencias indígenas, afroamericanas y con la tradición socialista comunera, hegemónica antes de que apareciera el socialismo de Estado. Así Marx, después de un profundo análisis de la Comuna de París, concluyó “la clase obrera no puede contentarse con tomar simplemente la máquina estatal ya hecha y hacerla funcionar para sus propios propósitos. El instrumento político de su esclavizamiento no puede servir como instrumento político de su emancipación” (Marx, 1978: 251). Y en la descripción de la estructura de la Comuna de París se encuentran muchas semejanzas con Venezuela:

La comuna [estaba] compuesta por los concejales municipales de los diferentes *arrondissements* (...), escogidos por medio del sufragio de todos los ciudadanos, siendo responsables y revocables en todo momento (...) Había de ser un cuerpo de trabajo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo, y no un organismo parlamentario (...) Los agentes de policía, en vez de ser agentes de un gobierno central, debían ser servidores de la comuna, y, al igual que los funcionarios de todos los departamentos administrativos, debían ser nombrados por la comuna, y en cualquier momento esta podía revocar su nombramiento (...) En una palabra, todas las funciones públicas, aun las pocas que habrían

pertenecido al gobierno central, debían ser ejecutadas por los agentes de la comuna y, en consecuencia, estarían bajo su control. (Marx, 1978: 256).

La superación del Estado, una necesidad mencionada hasta por Chávez, no significa la ausencia de estructuras de organización social, política y económica. Chávez pone el peso de manera consciente en un “sistema socialista” y un “Estado comunal”, no al revés. ¿Es el Estado comunal un Estado? ¿O más bien un no-Estado? Más allá del nombre, será fundamental si la futura estructura del Estado comunal y el camino hacia él reproducirán dominación y con eso explotación, o si, en su tendencia, remiten a una superación estructural de la dominación. En los pasados “Estados socialistas” el problema no se resolvió; por el contrario, ya que no había tampoco sociedad civil burguesa, el Estado terminó siendo todo y se convirtió en un aparato burocrático y represivo de administración. El futuro Estado socialista y el Estado comunal deben someterse al poder popular (AN-DGIDL, 2007), que, a su vez, sustituye la vieja sociedad civil burguesa (Chávez, 2008: 67). Así, se quiere evitar la escisión de esferas y la centralidad y absolutismo del Estado como en el socialismo real.

2.3 Clase, multitud y pueblo soberano

La insurgencia popular del 27 de febrero de 1989 no fue organizada ni dirigida ni protagonizada por el sujeto revolucionario por excelencia: el proletariado (...). Si no fue la clase obrera la protagonista de aquellos hechos, ¿por qué concluir que no actuó sujeto político alguno? ¿Esta

imposibilidad de percibir la impronta de una subjetividad política distinta de la clase obrera, no constituye una severa reducción de la esfera de lo político?

ITURRIZA, 2007: 1

La realidad venezolana no se puede descifrar con un análisis de clase tradicional. Para iniciar un análisis de clase renovado hay que revisar de manera crítica algunos conceptos relevantes, como clase y lucha de clases, multitud y pueblo. La categoría “clase” es importante por varias razones. Indica la unidad que está en la base de la rica diversidad de la lucha, sin jerarquías. Al contrario de las categorías basadas en identidades, clase se basa en el hacer. De esta manera cuestiona más a los sujetos, señala más la capacidad de cambiar el mundo y expresa la lucha del hacer en contra del trabajo (Holloway, 2004a: 15). Partiendo del hecho de que el carácter y la orientación de un movimiento dependen, fundamentalmente, del trasfondo social de los participantes y los intereses derivados de este, la definición del proceso en Venezuela como lucha de clases significa que el carácter de la lucha es tendencialmente el de una lucha por sistemas diferentes.

2.3.1 Clase y lucha de clases: una interpretación marxista

El acercamiento a un nuevo concepto de clase se lleva inscrito en una lectura del marxismo crítico. Marx no elaboró ningún concepto de clase terminado, solo se refirió

repetidamente a la clase y dio algunas explicaciones¹¹². Más allá de las referencias directas a Marx sobre clase, la aclaración del concepto se basa en el análisis de clase que forma el fundamento para *El Capital*, y en las ideas de Dos Santos (2006) y Gunn (2004). Se trata claramente de una sola relación de clase: capital y trabajo (Gunn, 2004: 23).

Según Marx, la economía política analiza relaciones sociales creadas por humanos, relaciones entre humanos que aparecen ante estos como relaciones con y entre cosas. Las clases, al igual que el capital, son una relación social (Gunn, 2004: 19). Eso significa que la relación entre las clases no se puede derivar de los intereses contrapuestos de explotados y explotadores (lo que supondría grupos casi naturalizados), sino que es la relación entre explotados y explotadores que crea intereses antagónicos. Las clases son la expresión de tales relaciones y, por este motivo, el concepto de clase se constituye teóricamente dentro del concepto de la lucha de clases (Dos Santos, 2006: 31). La clase es entonces una relación de lucha, “la lucha de clases es la premisa fundamental de la clase. Aun mejor: la lucha de clases es la propia clase” (Gunn, 2004: 20).

La lucha se da inseparablemente en dos niveles: entre las clases constituidas y en contra de la clase y la clasificación, ya que clase no es un concepto afirmativo. La condición para

112 En el *Manifiesto del Partido Comunista* las clases son dos “grandes campos enemigos”, en los que está dividida la sociedad: “burguesía y proletariado”. Eso suena diferente en la cita de *El Capital* reportada más abajo. Algunos críticos acusan Marx por esa contradicción. Dos Santos atribuye la crítica a una falta de comprensión dialéctica (2006: 11, 30). No se trata de conceptos de clase de diferentes interpretaciones sobrepuestas (sociológica, política y económica), sino de una interpretación dialéctica en la que el concepto de clase es adaptado al nivel de abstracción (2006: 30). La cita del *Manifiesto* describe una situación histórica revolucionaria concreta en donde la formación de los grupos es resultado de la lucha de clases como tendencia, no como realidad absoluta.

la liberación de la clase obrera es la abolición o superación de las clases (Bonefeld, 2008: 117; Dos Santos, 2006: 31; Holloway, 2004 a: 13; 2004 b: 78). Porque “ser obrero productivo no es precisamente una dicha sino una desgracia” (Marx, 1983: 426). El antagonismo entre capital y trabajo se expresa en que las clases no luchan en el marco de un sistema, sino que hay una tendencia hacia una lucha por sistemas diferentes (Bonefeld, 2008: 128; Dos Santos, 2006: 30). La lucha de clases tiene como meta la superación, la destrucción y desmantelamiento de un sistema (o su defensa). Que el conflicto revolucionario tome la forma de un conflicto entre grupos, es resultado de la lucha de clases (Gunn, 2004: 26).

Marx habla explícitamente de clase en un capítulo que no terminó de escribir al final del tercer tomo de *El Capital*, que ha sido publicado por Engels con base en manuscritos:

Los propietarios de mera fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y la renta de la tierra, esto es, asalariados, capitalistas y terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, que se funda en el modo capitalista de producción (Marx, 2006: 1123).

Es importante mirar esa cita en su contexto. Marx denomina de manera abstracta tres categorías económicas centrales de cierto régimen de producción. También destaca que la pureza de la abstracción teórica no existe en la praxis¹¹³, dado

113 Lo que no tenía importancia para su investigación, ya que la tendencia del capital de transformar el trabajo progresivamente en trabajo asalariado es lo central.

que ningún régimen de producción se da históricamente como único y de forma pura, y las líneas de distinción son ofuscadas por formas intermedias. Marx rechaza la idea de que las clases son constituidas por la forma de ingreso (o “situación de mercado”, como argumentaba Max Weber sociológicamente). El sueldo, la ganancia o la renta por la tierra, es decir, la explotación de la fuerza de trabajo, del capital o de la tenencia de tierra, constituyen las clases solo a primera vista. De otra manera se podría justificar una gran cantidad de clases según el tipo de ingreso.

Aunque los escritos de Marx terminan justo aquí, queda claro que Marx no entendió a las clases como lugares o grupos, como lo hacen conceptos de clase empíricos, estructuralistas o sociológicos, sino como relación social. No tiene sentido inventar un sinnúmero de clases para poder clasificar a todos los individuos (Gunn, 2004: 19, 22, 23)¹¹⁴. Un enfoque marxista dialéctico, que entiende a la clase y la lucha de clases como relación social, puede captar cómo los individuos son atravesados de diferente manera, intensidad y alcance por la contradicción capital-trabajo.

Argumentando en contra de cualquier determinismo económico, Gunn destaca una diferencia central entre la interpretación marxista y la sociológica y cita al joven Lukács: “Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia burguesa no es la tesis del predominio de los motivos económicos en la explicación de la historia, sino el punto de vista de la totalidad”

114 Una interpretación sociológica no ayuda entender la clase o lucha de clases, por eso la diferenciación. Sin embargo, una clasificación de grupos o estratos puede ser muy útil para un análisis de la sociedad.

(Lukács, 1969). El enfoque de la totalidad va acompañado por el rechazo a la escisión entre sociedad política y sociedad civil: “Según el punto de vista marxista, la categoría de ‘política’ se hace tan amplia como las formas que la lucha de clases (y de allí la propia clase) asume imprevisiblemente” (Gunn, 2004: 29-30). Así que la clase es absolutamente variada y diversa, no es reductible a un sujeto con cierta posición en el proceso de producción y la lucha no tiene que asumir formas preestablecidas. La lucha de clases se compone con muchas luchas y lo colectivo no es la abstracción, sino la “forma ideal de existencia que se produce como ‘instante’ de negación/superación” de las escisiones del capital (Tischler, 2004: 113).

2.3.2 *¿Multitud como clase?*

Los conceptos de multitud se presentan como conceptos de clase renovados que rompen con la visión limitada de lo político y quieren abarcar la variedad y diversidad de la clase sin homogenizar. En ellos encontramos características importantes para una definición actual de clase, pero también presupuestos y derivaciones problemáticas. La multitud se constituye en las luchas, rechaza la representación y homogenización por su misma esencia y no se limita a una determinada posición en el proceso de producción. Los conceptos de multitud más elaborados y conocidos son de Hardt/Negri (2004) y Virno (2005) y se basan en Spinoza. En contraposición a Hobbes, este veía a la multitud, en el siglo XVII, como el fundamento de los derechos civiles, ya que en su muchedumbre y acción colectiva no se vuelve uno como pueblo (Virno, 2005: 25).

Las definiciones de Virno (2005) y Hardt/Negri (2004) se parecen, pero también tienen diferencias. La multitud es un “conjunto de singularidades”, entendiendo por singularidad “un sujeto social cuya diferencia no puede reducirse a uniformidad: una diferencia que sigue siendo diferente” (Hardt/Negri, 2004: 127). Las diferencias de multitud se vuelven socialmente enriquecedoras a través de la comunicación y la acción común (Hardt/Negri, 2004: 117, 230). La multitud se organiza en red, tiene márgenes abiertos y no tiene centro (Hardt/Negri, 2004: 11, 75; Virno, 2005: 53).

Hardt y Negri contraponen multitud a *clase obrera*, que significa una división en pobres, no asalariados, etc.; mientras que multitud es un concepto abierto. La multitud no se definiría a partir de identidad o unidad, como el pueblo, sino a partir de lo común, de lo compartido (Hardt/Negri, 2004: 138-139), que ya no es la ubicación en el proceso productivo, como para la clase obrera tradicional, sino la forma de valoración posfordista: “hoy todas las formas de trabajo son socialmente productivas, producen en común, y comparten también el potencial común de oponer resistencia a la dominación del capital” (Hardt/Negri, 2004: 135). Para Virno, en cambio, multitud no significa el fin de la clase obrera, sino que esta asumió actualmente características de multitud y no de pueblo (Virno, 2005: 59). La multitud no se define a través de cualidades como el pueblo, sino a través de capacidades. Es el modo de ser que corresponde al posfordismo y al *general intellect*: un punto de partida, inevitable pero ambivalente (Virno, 2003: 19).

La multitud posfordista, debido a su “modo de ser”, llevaría la búsqueda de formas democráticas no representativas y

al derrumbe de la representación en su interior, ya que la falta de homogeneidad excluiría que pueda delegar algo a un soberano (Virno, 2005: 54-56). La multitud no quiere tomar el poder y tampoco construir un nuevo Estado, quiere anular ambos (Virno, 2003: 133)¹¹⁵. “La multitud es el único sujeto social capaz de realizar la democracia, es decir, el gobierno de todos por todos” (Hardt/Negri, 2004: 128).

Pero, si la multitud es el “modo de ser” que le corresponde al posfordismo, entonces las capacidades que definen a la multitud son derivadas del régimen de producción capitalista actual y no de las luchas que deberían estar en el centro. Aquí reside una de las contradicciones básicas de los conceptos de multitud (Tischler, 2007: 126-127).

Virno (2003: 19) y Hardt/Negri diferencian *multitud* de *masa* y contraponen las “singularidades plurales” de la multitud a la “unidad indiferenciada” de pueblo (2004 a:117). Aunque la masa tampoco es reductible a una unidad, no se puede hablar de sujetos sociales diferentes, ya que las diferencias tienden a desaparecer en las masas (Hardt/Negri, 2004: 10). Y masa (gente, etc.) está compuesta por sujetos sociales básicamente pasivos, que no pueden actuar solos y necesitarían liderazgo (Hardt/Negri, 2004: 138). *Pueblo*, a su vez, estaría conectado en todas sus variantes históricas con un “adentro” conocido y un “afuera” desconocido y enemigo, mientras la multitud representa el derrumbe de estas escisiones (Virno, 2005: 38).

115 Virno ve aquí la semejanza más grande con la multitud del siglo xvii. Tampoco en esta se trataba de la toma de poder, sino de “experiencias plurales, formas de democracia no representativa, usos y costumbres no estatales” (Virno, 2003: 43). Eso parece muy forzado; frecuentemente se trata de la defensa de ciertos derechos sin que esto signifique una aceptación de la pluralidad.

Virno asume de Hobbes la contraposición excluyente: “Si existe multitud, no hay pueblo; si existe pueblo, no hay multitud”, y pueblo converge en Estado (Virno, 2003: 19)¹¹⁶. Así, se termina aceptando la definición de pueblo de los constructores del Estado-nación como válida¹¹⁷. Aquí reside otro problema de los conceptos de multitud: su enfoque eurocéntrico ignora que, en América Latina, *pueblo* puede tener una interpretación totalmente diferente.¹¹⁸

Virno rechaza un enfoque posmoderno de multitud. Una unidad sigue siendo necesaria, pero que ya no reside, como en el caso del pueblo, en el Estado, sino en “el lenguaje, el intelecto, las facultades comunes del género humano” (2003: 24-25). Es importante destacar que la unidad no puede estar en el Estado, ya que si es un producto de relaciones capitalistas, su superación es también una condición para la superación del capitalismo. Virno no saca consecuencias concretas de su análisis. Pero la unidad debe converger en un proyecto político que abarque la totalidad de la sociedad, “un mundo en el que quepan muchos mundos”, como dicen los zapatistas. Para eso se necesita un momento de articulación política, que el término de multitud

116 También se diferencia claramente del apologeta del Estado Hobbes y de su interpretación negativa de la multitud antiestatal. No obstante eso, las referencias al siglo XVII son contradictorias, ya que Virno deduce la multitud del posfordismo.

117 Llega a ser casi un concepto existencialista. *Pueblo* no se forma a través de experiencias históricas, luchas y memoria colectiva, y es por eso también diverso en sus metas, flexible y capaz de transformación, sino se mueve entre una definición republicana (homogenización para construcción nacional) y una existencialista (tarea histórica de construcción de nación).

118 Además de los diferentes significados de la palabra *pueblo*, también hay conceptos muy diversos, como el de los “pueblos indígenas”, que no conllevan ninguna idea de fundar un Estado propio.

no abarca. Hablar de los muchos mundos no debe hacer perder de vista el mundo en el que pueden haber muchos mundos.

2.3.3 Clase y pueblo soberano

A continuación queremos analizar la realidad venezolana basándonos en los enfoques discutidos¹¹⁹. Las luchas en Venezuela son plurales. En el proceso de transformación participan juntos y con organizaciones propias habitantes de barrio, trabajadores, mujeres, migrantes, indígenas, afro-venezolanos, campesinos, ecologistas, GLBT y muchos más. El amplio rechazo a formas tradicionales de organización en Venezuela se debe a que estas no corresponden a la realidad de las luchas. Los movimientos crearon un espacio para una redefinición de lo colectivo, una crítica a lo existente apropiándose del *principio esperanza* (Bloch, 1973) y una actualización de la cuestión de la clase y de la lucha de clases:

La clase se puede pensar, entonces, como una comunidad de luchas, diversos modos de resistencia colectiva. Esa posición va contra la idea de la clase como una forma social homogénea y sintética. La unidad de la mónada no es la homogeneidad, sino, se podría decir, la comunidad concreta. Entonces, la *comunidad concreta* es la irrupción del *tiempo mesiánico* en el *continuum* de la comunidad abstracta (Tischler, 2007: 112).

119 Las categorías teóricas marxistas son derivadas de la realidad histórica y, como tal, no son categorías universales eternamente válidas: una sociedad históricamente dada de manera concreta no puede corresponder de forma directa a las categorías abstractas. El marxismo no usa la abstracción de manera formal, sino que elabora el concepto de manera abstracta y lo niega inmediatamente, mostrando los límites del mismo (Dos Santos, 2006).

El *tiempo mesiánico* no tiene aquí ninguna dimensión religiosa, se refiere al concepto de Walter Benjamin que simboliza una sociedad sin clases, y por eso es un tiempo colectivo y no individual. La irrupción del *tiempo mesiánico* en el *continuum* significa la antelación concreta en el presente de elementos de la sociedad sin clases a la que se aspira o que puedan dar una idea de qué puede ser ella. Benjamin llama a este presente *Jetztzeit* (ahora-tiempo), para diferenciarlo del concepto temporal burgués, que postula un tiempo vacío, homogéneo, constante y lineal (Benjamin, 1973). El ahora-tiempo es un tiempo de antelación y densificación de posibilidades y peligros para la emancipación. Esta no es transferida al futuro, como en un concepto religioso (como con el Juicio Final o la muerte), y es un tipo de modelo del *tiempo mesiánico*, que representa de forma resumida a toda la historia de la humanidad; es decir, todo es posible e imaginable (pero por eso no automáticamente con un desarrollo positivo). Además se encuentra también en la memoria viva, en tradiciones y prácticas, en las cuales se refleja la experiencia y praxis de generaciones pasadas. La comunidad concreta, que puede dar una idea de la sociedad sin clases, es la clase como comunidad de la diversidad y pluralidad construida en la lucha, en lugar de la idea tradicional de la síntesis y la homogenización.

El reconocimiento y la acentuación de la multiplicidad de las luchas en Venezuela son históricos. Varias corrientes que marcaron el movimiento bolivariano desarrollaron, ya en los setenta y ochenta, un análisis de clase divergente de conceptos tradicionales. Organizaciones como el PRV, o más tarde el MRT, hacían referencia a una gran diversidad de luchas. El PRV en

los setenta hablaba de “muchedumbre”, de la diversidad en su comunidad (Twickel, 2006: 51). Lo que Tischler (2007) analiza para los zapatistas en Chiapas, “no promueven una política de homogenización y de centralización de la acción política, es decir, no se proponen ser una síntesis”, es válido también para el movimiento de transformación en Venezuela. “De esta multiplicidad deriva el extraordinario potencial revolucionario del chavismo”, afirma Iturriza.

Porque la multiplicidad de sujetos implica la multiplicación de los frentes de lucha, la diversidad de estrategias puestas en marcha para luchar por la democratización radical de la sociedad venezolana, y su capacidad de movilización para defender el proceso revolucionario cuando este ha estado en peligro (Iturriza, 2007: 6).

Esas características llevan a Denis a usar un concepto de multitud. Sin embargo, critica la contraposición multitud-pueblo y la tesis de Negri/Hardt sobre la desaparición de Estados nacionales (Denis, 2005: 72).

Chávez rehúsa el término *masa* y habla, sino es de pueblo, de multitud (Chávez, 2008: 66). Andrés Antillano, por el contrario, considera el concepto de multitud no apto en el contexto venezolano (I-AA, 2008) y usa una interpretación positiva del término despectivo *horda*¹²⁰, destacando el conflicto fundamental entre poder constituyente y poder constituido y la ambivalencia de la

120 Esta reinterpretación se hizo también en el contexto de los movimientos revolucionarios de los años sesenta y setenta en Italia, que han sido nombrados “horda de oro”. Véase: Bailestrini, Nanni/Moroni, Primo. (1994). *Die goldene Horde. Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien*, Berlín.

horda. Esta es turbulenta, pero sin déficit de liderazgo político. Sabe liderarse ella misma, posee inteligencia política y estrategia. Pero, debido a su carácter de multitud, es también más fácil para el Estado frenarla y administrarla (I-AA, 2008). Antillano hace notar que no es un proceso organizado y consciente por parte del Estado, sino consecuencia de sus mecanismos inmanentes, que hacen la construcción de dos lados conflictiva, difícil y problemática.

Desde 1998 el discurso oficial se dirige al *pueblo soberano*, y con eso se refiere a la mayoría empobrecida de la población (García-Guadilla, 2003: 247). Las continuas afirmaciones de Chávez sobre la importancia del apoyo a los pobres por sobre los demás sectores de la población, muestran una orientación de clase y representan una novedad en la historia de los jefes de Estado venezolanos (Ellner, 2006 a: 87). Haciendo referencia a Negri, Laclau y Slavoj Žižek, Barreto (2007 a) argumenta la necesidad de la construcción de los sujetos políticos y propone el término *pueblo*, que se apoya en la diferencia, muchedumbre y multitud. Eso corresponde al uso del término *pueblo* en Venezuela. Las clases medias y altas no se ven a sí mismas como parte de él, se autodenominan *gente*, *gente bien* o *gente decente*, y no *pueblo*, que supone estar formado por los estratos bajos (Moreno, 1999; 2005; Parker, 2006: 90). Por ejemplo, los administradores y especialistas botados de Pdvsa, después del sabotaje petrolero en 2002-2003, se organizaron como *gente del petróleo*.

Además, Chávez se dirige a partes específicas del pueblo de manera directa, en un discurso que incluye la amplitud de las diferentes luchas y organizaciones. Aquí, lo contrario

de pueblo es *oligarquía*. El pueblo se conforma por los pobres, desempleados, trabajadores, estudiantes, jubilados, etc., que son tomados en cuenta en su diversidad y los que, según Chávez, fueron agentes de cientos de “microrrevoluciones” en los años ochenta y noventa (Chávez, 2007 a: 4). E incluye también a indígenas y afrovenezolanos, que miran atrás a siglos de opresión y lucha. Mientras la oposición y sus medios construyen demarcaciones racistas y clasistas, fundadas en la tradición colonial eurocéntrica, Chávez no habla por ellos sino que se suma a ellos. Frente a la acusación de que él y sus seguidores son una chusma, contestó: “Sí, somos la misma ‘chusma’ que siguió a Bolívar” (Herrera Salas, 2004: 124). Con su constante referencia positiva a la herencia indígena y africana de Venezuela, Chávez contribuye de manera central al empoderamiento de la población en causa.¹²¹

Con una creciente orientación socialista, las declaraciones del gobierno tuvieron también mayor carácter de clase. A finales de noviembre de 2008, Chávez, haciendo referencia a Marx, declaró: “Yo creo firmemente que nuestra batalla es una expresión de la lucha de clases. El pueblo, las clases populares y los pobres contra los ricos. Y los ricos contra los pobres. Así, visto grosso modo, con sus matices y sus escalas intermedias, que hay que saber apreciar bien”¹²². Aquí, pueblo tiene un evidente carácter de clase. Es el pueblo de los oprimidos. La forma

121 Sobre racismo en la sociedad venezolana y en la oposición véase: Herrera Salas, 2004 y 2005.

122 YVKE Mundial: Chávez lee nueva lista de ataques a misiones: “Aquí hay una lucha de clases”. En: <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?1553>; versión en Internet: 30/11/2008.

actual de *Les Misérables* de Víctor Hugo¹²³, de *Los de abajo* de la novela de la revolución del mexicano Mariano Azuela, múltiple y diverso. Es también contradictorio y se constituye como relación de lucha, como proyecto de sociedad. La polarización tiende a manifestarse en la lucha de clases (García-Guadilla, 2003: 235), fundamentalmente como lucha entre acomodados y marginados (Medina, 2001: 124). Pero no son los pobres u oprimidos como grupo predeterminado:

Para el socialismo, pueblo es la fórmula que articula pluralidades subalternas; el hilván de luchas, construcciones y resistencias de los de abajo; el nombre de un sujeto revolucionario autoconstituido en la lucha de clases. La significación universal viene de una particularidad de base organizada y se erige en contrahegemónica. La construcción del horizonte es colectiva (Mazzeo/Stratta, 2007: 10).

El pueblo en Venezuela tiene mucho en común con la multitud de Hardt/Negri y Virno. No tiene una posición determinada en el proceso de producción y se constituye como relación de lucha. Está organizado en forma de red sin centro. Este pueblo-multitud no busca la unidad en el Estado, sino en la construcción de “un mundo en el que quepan muchos mundos”. Sin embargo, “sella pactos” para alcanzar mejor sus metas y consolidar mejor los logros. Con eso la multitud no delega ni entrega su soberanía, más bien intenta crear un marco para conseguir más soberanía. Transformación solo se puede entender como

123 Chávez hizo referencia muchas veces a la obra y también ha sido distribuida gratis por el Estado con un tiraje de medio millón de ejemplares.

proceso no lineal y lleno de rupturas. Aunque eso no represente ninguna garantía de éxito, es el camino de la construcción de dos lados. El cumplimiento de los “pactos” y las condiciones de cumplimiento son constantemente redefinidas en una relación de conflicto y cooperación.

Aún así, todo pueblo sigue siendo una categoría ambivalente que tiene que ser analizada en el contexto específico en el cual se conformó. Una interpretación positiva generalizada es tan inviable como lo es una oposición universal entre pueblo y multitud. Más allá de la referencia a pueblo, en sentido de un término positivo de lucha, existe una gran variedad de usos discursivos para ocultar contradicciones de clase. La tentación de concurrir en un proyecto nacional que no rompe con las clases dominantes sino que las transforma en parte del pueblo en contra de un enemigo externo (sea imaginario o real), está siempre presente de manera latente en el concepto de pueblo (Acha, 2007: 21).

Entonces pueblo no es un grupo predeterminado (ni por nacionalidad, ni por estatus social u otra categoría). No son “los pobres” o “los oprimidos” como tal, sino la constitución de los mismos en relaciones de lucha específicas y en una lucha por un proyecto de sociedad en el que todas las luchas tienen un lugar (Acha, 2007: 19). Pueblo es “una categoría ético-política y dialéctica, y por lo tanto es praxis constitutiva” (Mazzeo, 2007 a: 41):

Decimos que las “masas”, las “multitudes”, se transforman en pueblos (...) cuando se constituyen en organizaciones colectivas de base, movimientos sociales, movimientos políticos de liberación; que el pueblo es la forma a través de la cual se comienza a

realizar el proyecto colectivo de los explotados; que es la voluntad y la utopía de los subalternos que conjura algunas contradicciones y paradojas pero no todas. Esta noción de pueblo no subsume ninguna escisión, refiere más a la articulación de los distintos fragmentos de las clases subalternas (Mazzeo, 2007: a 41-42).

Una comprensión parecida de pueblo se encuentra en la mayor parte de los participantes activos del proceso de transformación en Venezuela. Se trata de una categoría abierta, constituida en la lucha, a la cual pertenecen también los que se suman. El pueblo, dijo así Chávez en 1993 desde la cárcel, “es el protagonista de las grandes transformaciones de la historia. A veces el pueblo desaparece, pero otras emerge cuando se comparten costumbres y se da una comunicación intensa. Entonces, las multitudes se asocian liberándose la ‘solidaridad metafísica’”¹²⁴. Pueblo es compuesto siempre por diferentes partes, que mantienen su diversidad y se juntan en un proyecto de sociedad. Es una comunidad construida a partir de la heterogeneidad. Por supuesto, una comunidad imaginada, como cualquier comunidad que va más allá de los contactos directos (Anderson, 1988).

La centralidad del territorio: barrio y comunidad como nivel de identificación

En las zonas urbanas de Venezuela el barrio es el patrón de identificación y organización colectiva más importante. Que

124 Chávez Frías, Hugo. (1993). *Pueblo, sufragio y democracia*, N° 2, Yare: Ediciones MBR-200, 12pp. En: según López Maya, 2002: 121.

sea también el sostén más importante y estable del proceso de transformación (Denis, 2005: 31; I-AA, 2008), no es insólito en el contexto latinoamericano. Durante el gobierno de Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende, la movilización y organización más avanzada se podía encontrar en los cinturones industriales alrededor de Santiago de Chile, donde se cruzaban luchas locales y de fábrica.

Después de Uruguay, Venezuela es el país más urbanizado de América Latina, con un 87% de población urbana. Alrededor de 14,3 de los aproximadamente 27 millones de habitantes de Venezuela viven en barrios, es decir, en zonas urbanas con infraestructura precaria. Estos ocupan en total unas 170.000 hectáreas (I-AA, 2008; Colau, 2008: 1). La mayoría se formaron a través de la ocupación de terreno privado o público, ya que las ciudades no ofrecían espacio para los recién llegados.

A la negación material le acompaña la negación simbólica: los barrios no son representados en las imágenes de la ciudad, no aparecen en sus mapas, no son registrados en los catastros y censos, no se cuentan en sus crónicas, no son considerados a la hora de inventariar su patrimonio. Los barrios no existen en la retórica de la ciudad, salvo como peligro o anomalía (Antillano, 2005: 206).

A principios de los noventa se formaron los Comités de Agua, y en menor medida, organizaciones para mejorar el abastecimiento con gas, los servicios de salud y organizar la compra colectiva de víveres y hasta milicias armadas de auto-defensa. Además de asociaciones deportivas y, especialmente,

grupos culturales. Fiestas, baile y música tienen un papel muy importante en la sociedad venezolana y existe una gran cantidad de grupos culturales locales que se activan en el barrio para ciertas fechas. Los grupos culturales frecuentemente se dedican a fortalecer tradiciones musicales regionales y fomentan el sentido de pertenencia comunitaria y la conciencia de la propia historia.

La centralidad territorial de las luchas en Venezuela está en contraste con la centralidad de la fábrica o la metrópolis, que ha sido identificada tradicionalmente para los “viejos” y “nuevos” movimientos sociales. El trabajo fabril-industrial no corresponde a la realidad de vida de la mayoría de la gente. Trabajadores industriales eran frecuentemente privilegiados y su representación más cooptada por el sistema político.

La clase no se encuentra en la fábrica sino en el territorio, se organiza en el territorio. Es una clase muy precarizada, del sector servicios, que entra y sale de la economía informal y mayoritariamente no sindicalizada. Las luchas territoriales, barriales, han tenido desde siempre una importancia muy fuerte, más que las luchas obreras y cuantitativamente, este sector es también una gran mayoría (Antillano, 2006 b).

Así que no hay que confundir la identificación territorial con un localismo nostálgico, sino que a causa de la segregación territorial va de la mano con la dimensión de clase. En Venezuela se encuentran en el mismo espacio geográfico y político dos realidades de vida totalmente diferentes. La clase media y alta, que tradicionalmente eran los únicos con

influencia en el poder político, y la de los estratos bajos del pueblo.

Compartir la vida cotidiana de la dimensión colectiva y precaria del barrio o de la comunidad para la mayoría de la población, los estratos bajos, representa una identificación fundamental. Frente a las condiciones de vida es una dimensión marcada por la lucha, la solidaridad y una red relacional. No es un lugar, ni tampoco una comunidad dada, sino un entramado vivido de relaciones sociales. Moreno lo llama *convivencia*, subraya que no tiene que ser armónico, puede ser también conflictivo sin dejar de ser una convivencia (2005: 213). La convivencia, sin embargo, tiene que ser construida y mantenida en un proceso constante. Muchos de los barrios miran atrás hacia una historia larga de luchas, han tenido que defenderse durante décadas en contra de desalojos, luchar por servicios y desarrollar mecanismos colectivos de ayuda mutua (Antillano, 2005: 200). Por eso son resultado de la marginación urbana, igual que de la resistencia en contra de la segregación, y como tal portadores de valores alternativos (I-AA, 2008).

2.4 “Movimientos sociales” y autoorganización

El primero de estos desafíos, que incluye a todos los movimientos en los países con gobiernos de signo popular, se refiere a las relaciones que mantendrán con gobiernos surgidos de los propios movimientos o de coyunturas creadas por ellos (...) Los nuevos escenarios deberían ser comprendidos como el resultado de una construcción en la cual participaron tanto los movimientos a través de sus resistencias y movilizaciones, como las fuerzas políticas y equipos que hoy integran

los gobiernos. Esa creación “a dos bandas” no significa eludir las responsabilidades que les caben a los gobernantes progresistas (...)
Pero parece necesario huir de las simplificaciones, ya que muchos dirigentes y movimientos están lejos de haber sido cooptados o “comprados”, y su apoyo a los gobiernos de ese signo se debe a sólidas y profundas convicciones, avaladas por un conjunto de cambios reales en curso y las dificultades también reales, de romper sin más con el modelo vigente.

ZIBECHI, 2006: 226-227

2.4.1 Movimientos sociales como actores políticos y autoorganización: nuevos parámetros y estrategias

En las Ciencias Sociales tradicionales los *movimientos sociales* son considerados indicadores del mal funcionamiento de sistemas políticos (Rucht/Koopmans/Neidhardt, 1998). Eran vistos como indicio de problemas de legitimación de los sistemas en los cuales se desarrollaron (Habermas, 1973), o como indicadores de las crecientes diferenciaciones en sociedades modernas (Luhmann, 1991). El fuerte surgimiento de movimientos sociales, más allá del movimiento obrero tradicional a partir de los sesenta, llevó a la investigación de protesta y movimientos a hablar de Nuevos Movimientos Sociales (NMS), que fueron definidos en oposición al “viejo” movimiento obrero (Rucht, 1994).

Los NMS tendrían en común un funcionamiento interno más horizontal y democrático que el movimiento obrero y su estructura jerárquica, y no dispondrían de una estructura organizativa vinculante; la autonomía de los individuos,

grupos y organizaciones que forman parte de ellos es mayor, pero la planificación estratégica es más difícil (Rucht/Neidhardt, 2001: 541; Della Porta/Diani 1999: 14). Actúan en ámbitos sociales específicos y no tienen, como el movimiento obrero anteriormente, el horizonte claro de una sociedad socialista. En el debate en las Ciencias Sociales eso llevó a la clasificación de los NMS como basados en identidades construidas (Castells, 1997).

Movimientos sociales son entonces “(1) redes informales, basadas en (2) convicciones compartidas y solidaridad, que (3) movilizan alrededor de cuestiones conflictivas, a través (4) del uso constante de diferentes formas de protesta” (Della Porta/Diani, 1999: 16). En otra definición son “estructuras sociales de personas, grupos y organizaciones en red, que expresan protesta con acciones colectivas, para cambiar la realidad social o política y oponerse a cambios que se dan” (Rucht/Neidhardt, 2001: 540). De manera parecida, Dieter Boris (1998: 9) ve a los movimientos sociales como grupos de protesta constituidos de manera más o menos duradera, que actúan más allá de la política partidista y se dirigen en contra de malas situaciones consideradas una amenaza. A partir de su manera de organización y función se adjudica a los NMS cierto efecto democratizador: crean atención pública para temáticas que son marginadas o ignoradas por parte de la política institucionalizada y la sociedad mayoritaria, formulan intereses colectivos de ciertos grupos y desarrollan prácticas colectivas, los activistas son informados y se practican formas políticas alternativas (Nolte, 2002; Kaltmeier/Kastner/Tuider, 2004). Las Ciencias Sociales críticas veían en los NMS un “núcleo de una

democracia más participativa” debido a eso (Müller-Plantenberg, 2001: 26).

Más allá de que varias características de los nuevos movimientos son captadas correctamente y su papel democratizador es evidente, el problema fundamental de estos enfoques está en que no cuestionan la escisión de la esfera política y la social y reducen los movimientos a la esfera social. Además, son contruidos generalmente en oposición a lo existente, o sea que un papel como en Venezuela, Bolivia o Ecuador, de ser parte activa de la construcción de algo nuevo, portador de lo nuevo, no tiene lugar en esta definición. Así que los movimientos son inmanentes al sistema. Eso puede ser el caso para algunos movimientos y respecto a la apariencia, sin embargo, no es legítimo deducir su carácter a partir de la apariencia. Justo en el contexto venezolano es más útil un enfoque que parte de que los movimientos han sido formados por la condiciones y relaciones sociales en las cuales nacieron como también forman a estas (Tarrow, 1998; Thompson, 1991). En Venezuela los movimientos son el portador fundamental del proceso de cambio y de la construcción de dos lados. Y frente a las posibilidades de construcción social, gran parte de ellos se constituyó en organizaciones de base.

En las luchas sociales en América Latina, la tradición y el mito tienen una función permanente (Mazzeo, 2007 a: 56): Lo que Walter Benjamin llamó “una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos” (1973: 79)¹²⁵. Durante siglos, elementos de luchas y movimientos pasados en contra del orden social establecido se volvieron banderas de las luchas

125 Benjamin, Walter. (1973). “Tesis de la filosofía de la historia”. En: *Discursos interrumpidos* I. p. 178. Madrid.

actuales¹²⁶. Eso no hay que confundirlo con nostalgia o folclore, y requiere cada vez de una actualización. Es la “cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra” (1973: 178). Y “Cada actualización contribuye a una composición colectiva e histórica de la utopía que, de este modo, presenta pliegues y estratos superpuestos” (Mazzeo, 2007 a: 57).

Como indica Benjamin, la consciencia sobre las generaciones pasadas es fundamental:

El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate. En Marx aparece como la última esclavizada, como la clase vengadora, que lleva a su fin la obra de la liberación en nombre de tantas generaciones de vencidos. Esta consciencia (...) se ha contentado con asignar a la clase trabajadora el papel de redentora de las generaciones *futuras*, cortando así el nervio de su mejor fuerza. En esta escuela, la clase desaprendió lo mismo el odio que la voluntad de sacrificio. Pues ambos se nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados (Benjamin, 2007: 33).

Aparte del recurso al pasado, es también la esperanza y la imaginación de un futuro distinto posible la que constituye el “todavía no” de Bloch. Una praxis crítica de liberación tiene la esperanza de un futuro alcanzable como fundamento necesario. O como escribe Marx en una carta a Arnold Ruge, en 1843, reivindicando la utopía como necesaria:

126 Para solo nombrar algunos ejemplos: Túpac Amaru, José Martí, Farabundo Martí, Augusto César Sandino, Emiliano Zapata, Pancho Villa, etc.

Luego será evidente que el mundo ha estado soñando por mucho tiempo con la posesión de una cosa de la cual, para poseerla realmente, debe tener consciencia. Será evidente que no se trata de trazar una línea mental entre el pasado y el presente, sino de materializar los pensamientos del pasado. Finalmente, será evidente que la humanidad no está comenzando una nueva tarea, sino que está llevando a cabo de manera consciente su vieja tarea (Marx, 2008).¹²⁷

Bonilla-Molina y El Troudi definen a las fuerzas del proceso de transformación como *corriente histórica por el cambio* (2004: 104). Para que se haya constituido como tal necesitó algunos acontecimientos históricos y “rupturas del *continuum*”, como, por ejemplo, el Caracazo, los levantamientos cívico-militares de 1992 y la victoria electoral de Chávez. La *corriente histórica por el cambio* no es caracterización cerrada, hermética o definitiva.

El término “movimientos populares” es así el más adecuado para analizar la realidad de los movimientos sociales en Venezuela. Su lucha ha sido una lucha política desde los años ochenta, conectada con el tema general de la participación. Los movimientos ya no pedían respuesta a demandas puntuales, sino la participación en la reformulación de todas las políticas y la refundación de la república. La victoria electoral de Chávez se fundamentó en la promesa de la ruptura y de posibilitar la participación de las bases en la formulación de lo venidero.

127 *Marxists Internet Archive*, abril de 2008; versión en Internet 29/12/2010. En: <http://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/mo9-43.htm>

Movimientos y organizaciones populares en un nuevo ambiente

El marco de condiciones para los movimientos sociales en América Latina ha cambiado profundamente durante los últimos años.

A partir de los cambios registrados, los movimientos sociales no podrán seguir operando como hasta ahora, muy en particular en el conjunto de países donde la presencia de gobiernos de izquierda y progresistas les impone afinar tácticas y discutir estrategias para enfrentar situaciones inéditas. Los desafíos que suponen estos cambios vienen siendo debatidos desde hace algún tiempo, y no solo son de carácter político sino también teóricos o conceptuales, ya que las anteriores formas de analizar y comprender la realidad se están mostrando, a menudo, incapaces de dar cuenta de las nuevas situaciones (Zibechi, 2006: 226).

Eso es válido especialmente en el caso de Venezuela, donde los movimientos populares y organizaciones encuentran una gran apertura por parte del gobierno. Esta “construcción a dos bandas” (Zibechi, 2006: 227) no es fácil, y los movimientos y organizaciones populares en Venezuela tienen una relación compleja de apoyo, conflicto y cooperación con el Estado y sus instituciones. La estructura institucional sigue siendo burguesa y no es apta para el proceso de transformación planteado. Además, las prácticas paternalistas y asistencialistas, igual que las relaciones políticas personalizadas, siguen siendo comunes.

No siempre los movimientos lograron captar el alcance de las transformaciones en acto y ubicarse en los escenarios nuevos, complejos y contradictorios (Zibechi, 2006: 222). Con el gobierno bolivariano numerosos activistas de los movimientos han entrado a trabajar en instituciones, lo que ha debilitado en parte a algunos movimientos (Ellner, 2006 a: 82). Otros, en cambio, han sido fortalecidos considerablemente a través de la actuación de las instituciones. El movimiento indígena ha podido integrar muchas de sus demandas a la Constitución del 2000, fortaleciéndose. Los indígenas pudieron lograr más que en cualquier otro país latinoamericano en esa época, aunque en Venezuela son solo alrededor del 2,1% de la población (Van Cott, 2002: 43).

El movimiento de mujeres pudo lograr también la inclusión de muchas de sus demandas a la Constitución, pero ha sido debilitado como tal cuando fue fundado el Movimiento Bolivariano de Mujeres (MBM), siguiendo una iniciativa de la presidencia y activistas de la Comisión Nacional de la Mujer, que anteriormente había pertenecido a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Mujer. Algunas de las activistas centrales de la Coordinadora se sumaron también a la MBM. Mientras la Coordinadora trabajaba con un enfoque “feminista y femenino” en los campos de la igualdad jurídica, familia, niños y pobreza, la MBM se concentró más en la resolución concreta de problemas de mujeres, niños, pobreza, familia, formación y otros; mientras el aspecto de género retrocedió a un segundo plano (García-Guadilla, 2003: 245). La ruptura de una colaboración interpartidaria siguiendo solo intereses específicos de mujeres era inevitable, ya que las de oposición

querían acabar con el proceso mientras las otras ven el marco del proceso bolivariano como el mejor para lograr avances. Así, gran parte del viejo movimiento de mujeres está integrado institucionalmente, sea con instituciones específicas de mujeres o en otras.

En cambio se trata ahora de un trabajo de masas con mujeres de los estratos más pobres. El Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer y la Misión Madres del Barrio, dedicada a madres solteras, son las instituciones fundamentales que apoyan a más de 300.000 mujeres de manera financiera; las organizan y las forman laboral y políticamente (Kron, 2004: 63). Los procesos de autoorganización fomentados son semi-institucionales o conectados a instituciones. El trabajo feminista del viejo movimiento de mujeres estaba más orientado hacia trabajo de *lobby* y sus iniciativas raras veces movilizaban a más de algunos centenares de mujeres, principalmente de clase media. Aunque la falta de una estructura organizativa y de discusión autónoma lleva a que ciertos aspectos más conflictivos sean relegados a segundo plano y sometidos a coyunturas nacionales¹²⁸. Eso, junto con la falta de metas feministas claramente definidas, llevó a que algunas autoras afirmen que no hay conexión entre las mujeres de los movimientos populares bolivarianos de mujeres y el feminismo “auténtico”. Las mujeres recién politizadas de los barrios “no

128 Ese es, por ejemplo, el caso respecto a la cuestión de la legalización del aborto. Esa demanda es expresada de parte de sectores de la base, algunas diputadas y también representantes de instituciones estatales de la mujer; sin embargo, hasta ahora no se logró ni movilizar para la demanda, ni ponerla de otra manera en la agenda política actual. Una legalización del aborto no es rechazada solamente por la Iglesia y la oposición, sino también por una parte de las fuerzas bolivarianas.

tienen entendimiento de la historia de la lucha de mujeres en Venezuela” (Rakowski, 2003: 400). Fernandes descarta esa crítica haciendo notar que hay diferencias entre las mujeres politizadas hace mucho tiempo y las recién politizadas. Sin embargo, la literatura no indica en qué luchas con orientación de género hayan sido activas mujeres de barrio, y que “la organización popular de mujeres tiene su propia historia única, sus luchas y trayectorias, que no pueden ser reducidas a la historia del feminismo en Venezuela” (Fernandes, 2007: 99). Muchas de las metas del movimiento feminista se reflejan además en el proceso de transformación, aunque de manera menos específica (Ellner, 2008).

El movimiento campesino, con su orientación de clase preexistente, ha crecido mucho en el nuevo marco. Especialmente el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), organización campesina más grande y activa, ha desarrollado una estrategia exitosa. El FNCEZ se define como marxista, apoya a Chávez y el proceso a vida y muerte, pero pide una profundización de la transformación revolucionaria. Trabaja de manera estrecha con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Tierras (INTI), ocupando varios cargos institucionales a nivel regional. También organiza ocupaciones de tierra o instituciones que trabajan mal. En 2005, cuando fue expropiada la hacienda La Marqueseña y transformada en una empresa del Estado, el FNCEZ ocupó una parte y pidió tierra para campesinos de la región. Después de que los militares intentaron al principio intimidar a los campesinos, el FNCEZ consiguió recibir adjudicado 500 hectáreas, maquinaria y

financiamiento. El Ejército fue el encargado de apoyar y salvar a los campesinos.

El movimiento sindical, a pesar de su debilidad, mantiene una clara autonomía frente a los partidos de gobierno y el Estado. La UNT fue fundada como central sindical independiente, y no asociada al partido o al Estado como en muchos otros procesos revolucionarios. Marea Socialista, corriente de izquierda en la UNT, forma una corriente propia dentro del PSUV. La UNT asumió en muchas cuestiones posiciones más radicales que el gobierno. “El hecho de que esos sindicalistas se autopercibieran como una vanguardia dentro del chavismo refuerza la noción de autonomía del movimiento social que es piedra angular del ‘enfoque desde abajo’” (Ellner, 2006 a: 82).

Debido a las prácticas clientelares difundidas y de la débil cultura de participación, también se encuentran varios movimientos y organizaciones con un grado bajo de autonomía. Este hecho no es atípico para el contexto latinoamericano. El enfoque *desde abajo* refuerza la autonomía (Ellner, 2006 a: 83). Durante los procesos electorales, los movimientos y el gobierno actúan mucho más como un bloque, mientras que fuera de las coyunturas electorales los movimientos formulan más posiciones propias, son más críticos frente al gobierno y lo presionan con acciones.

¿Autoorganización desde arriba?

Para el proceso de transformación planteado es fundamental una amplia autoorganización popular. Esta, sin embargo, no puede ser decretada desde arriba, aunque el Estado la apoye

y acompañe. Debe conformarse desde la población misma. Aunque en Venezuela exista una amplia experiencia de luchas sociales –desde el Caracazo– en comparación a muchos otros países latinoamericanos, la experiencia en organización popular y local independiente es más bien limitada (Lander, 2009; Parker, 2006: 92). Y la izquierda tradicional era bastante burocrática. Andrés Antillano describe el dilema: “en La Vega, en mi calle, hacíamos asambleas cada 15 días donde llegaban 100, 150 personas y deliberábamos los distintos problemas. No había organización formal. Seguramente debíamos haber resuelto esa tensión adentro de una organización que es un mecanismo de administración. Teníamos organización que no moviliza y una movilización que no se organiza. ¿Cómo lográbamos la solución a esa tensión?” (I-AA, 2008).

Por estas razones, una de las tareas primordiales de Chávez como presidente era aportar a la creación de nuevas estructuras institucionales y organizativas (Ellner, 2003 c: 22). El gobierno direccionó las políticas públicas a la ampliación, el fomento y el fortalecimiento de la organización popular (Lander, 2009). En este contexto se favorece la autoorganización desde abajo y muchas misiones se basan en la organización popular local. Las políticas, especialmente en los sectores educación, salud y producción, miran a fortalecer la construcción de redes sociales y organización comunitaria. El programa de salud Misión Barrio Adentro lo demostró de manera ejemplar: el doctor y la población organizada se complementan y la Misión no habría funcionado sin uno de los dos elementos.

La otra cara de la moneda son las dificultades de muchos movimientos de moverse con estos parámetros nuevos y

no dejarse cooptar. De hecho, los diferentes movimientos y organizaciones populares hacen referencia a Chávez sin ser controlados por él o por el gobierno (Ellner, 2003 c: 20). Sin embargo, la centralidad del Estado y sus enormes recursos financieros favorecen un proceso de autolimitación de movimientos, también fomentado por la cultura clientelar. El papel del Estado es profundamente ambivalente, ya que por otro lado el discurso chavista también fortaleció la autoconfianza de las organizaciones populares y en especial de los movimientos de mujeres, afrovenezolanos e indígenas. El Estado ha jugado un papel importante en el cambio de consciencia que, a largo plazo, contribuye a un cambio cultural y al alcance de autonomía organizativa (Ellner, 2008).

Se trata entonces de cómo el Estado pueda fomentar, acompañar y fortalecer los movimientos y la autoorganización, sin cooptarlos o pasar por encima de ellos. Y, en cambio, que los movimientos puedan mantener su autonomía y tener una influencia fundamental en el proceso de transformación, sin perder la iniciativa al Estado o reproducir sus formas y estructuras. Solo así se da la posibilidad de superar la forma conocida de Estado y crear algo completamente nuevo. Qué tan importante es la autonomía de los movimientos se ha demostrado varias veces; entre otras, durante el golpe en abril de 2002 y durante la huelga petrolera.

Un problema en la activación de la autoorganización está en la estructura clientelar, asistencialista y paternalista fomentada por el modelo económico rentista y dominante durante décadas. Muchos venezolanos durante mucho tiempo no se vieron como actores de un cambio (Márquez, 2003: 270). Hay

una fuerte actitud de expectación frente a la solución de problemas personales por medio de “representantes” (Azzellini/Ressler, 2004). Aquí está también la razón por la que el marco jurídico de participación, durante mucho tiempo, no ha sido aprovechado, por lo menos de lo que hubiese sido posible. Así Chávez y varios activistas relanzaron, a mitades de 2001, los Círculos Bolivarianos, que habían sido la base organizativa del MBR-200, “para que el pueblo, ‘el soberano’, dejara de ser una masa desorganizada y sin ideología ligada a su líder carismático (Chávez) de forma individualizada mediante prácticas y expectativas clientelares y populistas” (García-Guadilla, 2003: 247).

Los Círculos Bolivarianos eran básicamente un tipo de organización comunitaria, que asumía un trabajo social y cultural a nivel local. No estaban ligados a ningún partido, ni al gobierno, sino que eran una forma de autoorganización (Ellner, 2008). No fueron fundados desde arriba. Un mínimo de siete personas podía organizar en cualquier momento y lugar un Círculo, si las metas y los métodos de trabajo correspondían con los estatutos. Los Círculos formados eran simplemente reportados a la Coordinación Nacional, que no tenía ninguna capacidad de mandar (RBV, 2003). Según información de la Coordinación, en el 2003 había unas 2.5 millones de personas organizadas en Círculos Bolivarianos. La oposición acusó al gobierno de financiar los Círculos, mientras el gobierno afirmó financiar solamente a proyectos de base de los Círculos (Medina, 2001: 80). A partir de 2005, los Círculos prácticamente dejaron de existir. Lo mismo pasó con otras nuevas organizaciones bolivarianas.

A partir de 2004, las Misiones desplegaron una enorme fuerza organizadora. Centenares de miles de voluntarios (en parte, con una pequeña indemnización) están organizados alrededor de las misiones o en las organizaciones populares que las llevan a cabo localmente. Aunque con la creciente institucionalización de las misiones (y de la transformación parcial del activismo indemnizado en relaciones laborales asalariadas) el papel de las misiones como mecanismo de autoorganización y emancipación disminuyó.

En Venezuela hay relativamente poca organización popular consolidada con los años. Está sometida a fuertes oscilaciones coyunturales. Así, antes del referéndum en contra de Chávez, en agosto de 2004, centenares de miles de personas se organizaron en Unidades de Batalla Electoral (UBE), pequeños grupos que movilizaron en contra del revocatorio a Chávez en pláticas de puerta a puerta. Esta campaña ha sido exitosa, no solo con respecto al resultado, sino que también sirvió como una formación para todos los activistas de las UBE. Después del referéndum, las UBE fueron transformadas en UVE (Unidades de Vencedores Electorales) o UBE (Unidades de Batalla Endógena). De estas deberían haber surgido candidatos populares para las próximas elecciones, pero no fue así, ya que las cúpulas de los partidos negociaron la mayoría de las candidaturas entre ellos y las UVE se disolvieron.

Críticos liberales interpretaron el activismo de muchos CTU y de las UBE en el referendo de 2004 a favor de la continuación del mandato de Chávez, no como interés propio, sino que los CTU fueron “penetrados políticamente y movilizandos temporalmente como Unidades de Batalla Electoral; sin

embargo, una vez que terminaron estos procesos, regresaron a sus espacios organizativos” (García-Guadilla, 2008: 135). La organización de derechos humanos Provea, argumenta de manera parecida con respecto al FNCEZ (Provea, 2008: 55). Así, se le está negando cualquier racionalidad a los movimientos populares. No hay ninguna necesidad de estar “infiltrados” para concentrarse en la defensa del marco legal del proceso en ciertas coyunturas. Esto, aunque sea contradictorio, es necesario y en el interés general de los movimientos populares, dado que estos –más allá de toda crítica y problemas– saben que el proceso de transformación solo puede seguir con el actual gobierno, y porque además se ven como parte de un proceso y no observando desde afuera. Organizaciones como los CTU y el FNCEZ le otorgan mucha importancia a la propia autonomía y las campañas en apoyo al gobierno en elecciones son discutidas de manera crítica.





ÍNDICE

VOLUMEN I

Prólogo	9
1. EL CONTEXTO VENEZOLANO: DE LA DEMOCRACIA EXCLUYENTE A LA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA	37
<i>1.1 Nacimiento y caída del sistema tradicional de partidos y surgimiento del “bolivarianismo” en el contexto de la crisis de la democracia representativa</i>	39
<i>1.1.1 Democratización, golpe de Estado democrático y dictadura (1936-1958)</i>	41
<i>1.1.2 El Pacto de Punto Fijo: del pacto al sistema</i>	45
<i>1.1.3 Venezuela Saudita y la izquierda reformista</i>	55
<i>1.1.4 La década de 1980: crisis y protesta</i>	61
<i>1.1.5 La rebelión antineoliberal del Caracazo</i>	65
<i>1.1.6 De la polarización social a la polarización política</i>	69

1.2 Los militares, la izquierda armada y el bolivarianismo	81
1.2.1 <i>De 1958 a 1969: golpes de derecha, rebeliones militares de izquierda y guerrilla. Los militares como defensores de la democracia pactada</i>	82
1.2.2 <i>Del boom petrolero a la crisis</i>	91
1.2.3 <i>Crisis y organización cívico-militar</i>	97
1.2.4 <i>Las rebeliones cívico-militares de 1992</i>	101
1.3 El bolivarianismo	105
1.3.1 <i>Las influencias políticas, sociales y culturales del bolivarianismo</i>	112
1.3.2 <i>Chávez, el MBR-200 y los pilares ideológico-programáticos del proyecto político</i>	114
1.4 El proceso constituyente y la nueva Constitución	121
1.4.1 <i>El proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente y el camino hacia la nueva Constitución</i>	122
1.4.2 <i>La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela</i>	133
1.4.3 <i>Crítica a la Constitución de 1999</i>	140
1.4.4 <i>La fallida reforma constitucional de 2007</i>	142

2. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y PUEBLO SOBERANO	149
<i>2.1 Democracia, sociedad civil y populismo</i>	151
<i>2.1.1 Democracia en América Latina</i>	156
<i>2.1.2 Venezuela: democracia vs. democracia</i>	167
<i>2.1.3 Sociedad civil</i>	189
<i>2.1.4 Populismo: seducción o movilización potencialmente revolucionaria</i>	199
<i>2.2 Democracia participativa y protagónica</i>	213
<i>2.2.1 Participación, democracia directa y radical</i>	214
<i>2.2.2 Poder constituyente y contrapoder</i>	222
<i>2.2.3 La otra democracia y la otra revolución</i>	244
<i>2.3 Clase, multitud y pueblo soberano</i>	270
<i>2.3.1 Clase y lucha de clases: una interpretación marxista</i>	271
<i>2.3.2 ¿Multitud como clase?</i>	275
<i>2.3.3 Clase y pueblo soberano</i>	279
<i>2.4 “Movimientos sociales” y autoorganización</i>	289
<i>2.4.1 Movimientos sociales como actores políticos y autoorganización: nuevos parámetros y estrategias</i>	290

Se terminó de imprimir en
febrero de 2015
en la **FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA**
Guarenas, Venezuela.
LA EDICIÓN CONSTA DE 3.000 EJEMPLARES.



DARÍO AZZELLINI

(Wiesbaden, Alemania; 1967) Doctor en Ciencias Políticas (Goethe-Universität Frankfurt/Main) y doctor en Sociología (BUAP, Puebla/México), investigador y docente del Instituto de Sociología de la Universidad Johannes Kepler en Linz (Austria), autor y documentalista. Trabaja sobre procesos de transformación social, movimientos, planificación democrática, democracia participativa, cogestión y autogestión obrera. Ha publicado varios libros traducidos a diferentes idiomas sobre la privatización de servicios militares, la migración y los movimientos sociales. Recién publicó *El negocio de la guerra. Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado* (Monte Ávila Editores, Venezuela, 2009) y *Ours to master and to own. Workers' Control from the Commune to the Present* (Haymarket, EE.UU., 2011). Realizó varios documentales sobre movimientos en Nicaragua, México, Italia y Venezuela, como último – con Oliver Ressler – el documental *Comuna en construcción* (2010) sobre Consejos Comunales y autogobierno en Venezuela.

Con la presente obra, el autor estudia el proceso de transformación social en Venezuela entre 1999 y 2009. Se propone un análisis sobre la extensión de la participación popular en el Estado y en la sociedad, ubicando la mirada hacia las tensiones y contradicciones que se generan en este proceso “de dos lados” (poder constituido por un lado y poder constituyente por otro) con base en una detenida revisión del desarrollo y práctica de la “democracia participativa y protagónica” a partir del primer estudio empírico a fondo sobre los Consejos Comunales y sus efectos en las comunidades. ¿Qué contradicciones y conflictos se generan de la particularidad del proceso venezolano por seguir caminos y estrategias “desde arriba” y “desde abajo” al mismo tiempo? ¿Es posible abrir una perspectiva emancipadora de esta manera? Con estas preguntas, el estudio del proceso venezolano que se da en este libro no está motivado solamente por un interés académico, sino también por un profundo interés político para buscar y pensar las posibilidades de cambios radicales en la construcción de nuevas formas de gobierno.



Gobierno **Bolivariano**
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Cultura**

